UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
INSTITUTO DE SOCIOLOGÍA Y ESTUDIOS CAMPESINOS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

TESIS DOCTORAL

HACIA UN SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA

DOCTORANDA
MARÍA CARMEN CUÉLLAR PADILLA

DIRECTORES DE TESIS

PROF. DR. EDUARDO SEVILLA GUZMÁN

DR. ERNESTO GANUZA FERNÁNDEZ

CÓRDOBA
2008

Hacia un Sistema Participativo de Garantía para la producción ecológica en Andalucía

Por
Mª Carmen Cuéllar Padilla

Tesis presentada como parte de los requerimientos para optar al grado de Doctora por la Universidad de Córdoba

Programa de Doctorado en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sustentable
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos
Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad de Córdoba
2008

A las personas de las que aprendo a cuestionar el cristal cultural y político a través del que miro y me construyo.
A las personas profundamente originales y rompedoras, que desafían las estructuras homogeneizadoras, convencionales y rancias en las que vivimos.

Por supuesto, a mis padres.

"*Las persecuciones de brujas están relacionadas con otros cambios importantes de conciencia que se produjeron entre los siglos XVI y XVII. La ascensión del profesionalismo en numerosas esferas de la vida implicaba que aquellos servicios que las personas practicaban para ellas mismas, para sus vecinos o sus familias fueron ahora realizados por corporaciones de expertos pagados que tenían una licecia o algún otro medio de reconocimiento de su calidad como guardianes de un corpus de saber reservado y garantizado oficialmente*"

Starhawk

"*I do not separate my scientific inquiry from my life. For me it is really a quest for life, to understand life and to create what I call living knowledge: knowledge which is valid for the people with whom I work and for myself*"

Marja-Liisa Swantz

AGRADECIMIENTOS

Estas páginas no son ni mucho menos un final. Muy al contrario, son el inicio de muchas relaciones y un punto de inflexión en otras tantas. Este documento trata de ser una sistematización y una propuesta de todo un entramado de ellas. Por lo tanto, es una crónica analítica de procesos construidos por personas. Algunas anónimas, militantes, colectivas o voluntarias; otras visibles, remuneradas, egocéntricas o jerárquicas. Todas ellas han ido construyendo lo que aquí se analiza y lo que está pasando en la realidad que se escapa a este documento.

Puestas a agradecer lo que de cada una de estas personas tiene este documento, podemos pensar en una lista inmensa. A nivel de aprendizaje académico, de rigor, de estructuración y organización mental de todo lo que supone un proceso no sólo profesional sino también vital, quiero agradecer profundamente a mis directores de tesis. A Eduardo por todo lo que representa, por su sabiduría asequible, por su apertura y su curiosidad permanentes: por su talla humana y académica. A Ernesto, por ser un compañero de viaje, por abrirme los ojos cuando volaba demasiado ensimismada, por ayudarme a aclarar las ideas y a estructurar: por ser un director compañero. Qué puedo decir sino que tengo el lujo de admirar y querer a mis directores una vez terminada la tesis.

Pensando en el inicio de esta andadura, mi cabeza vuela directamente a Porto Alegre, al Foro Social Mundial del año 2004. Y en él, como puerta de acceso a los Sistemas Participativos de Garantía y a la Red Ecovida, a Laercio Meirelles. Mi más sincero agradecimiento a este compañero por abrir las puertas que me permitieron conocer y profundizar en este mundo, en las personas anónimas, militantes, colectivas y voluntarias que componen la Red Ecovida. De entre estas personas, tres fueron especiales y fundamentales en mi proceso de aprendizaje inicial: Paulo Lendhart, Germano y Marfio, por su acogida, su cariño y su compañía. Fueron unas semanas inolvidables.

De vuelta al sur de la *piel de toro*, nada de todo esto habría ni tan siquiera podido ser imaginable sin la presencia en un puesto de responsabilidad política y de decisión de Manolo González de Molina, y de Esther Ávila en un puesto de decisión técnica en el que lo dio todo con una convicción y unos principios admirables. Mi más profunda admiración por sus visiones políticas, sus iniciativas y sus respuestas en el sector ecológico andaluz, y mi agradecimiento por contar conmigo para este viaje que ha supuesto tratar de buscar alternativas con grupos productores al elitista sistema de certificación por tercera parte.

Y son estos grupos productores el centro de mi trabajo y de mi motivación. Gracias a ellos he conocido la militancia, la colectividad y el trabajo anónimo que requieren construir cambios profundos en lo que la administración pretende hacer del medio rural. Mi más profunda admiración y agradecimiento: en Segura, mi segunda casa, a Tere, Consuelo, Maripaz, Marta y Dani, Joseph y Manuel Pajarón; en Castril, a Jose Mari

Morcillo, Miguel Guirao, Mati, Pozo y Gregorio; y en Ronda, a Josele, Francis, Maripaz, Eli, Esperanza, África, Gonzalo, Anja, Rafael y Ana. De ellos he aprendido el sentido del campesinado en nuestra tierra. Junto a este equipazo humano, las personas del equipo técnico contratado para ejecutar el proyecto, compañeros de viaje de los que tanto he aprendido: Juanjo y Rocío, que han sabido dinamizar sus grupos diluyéndose como un productor y una consumidora más, militantes y anónimos; a César por su profesionalidad y a Eva por lidiar entre lo institucional y lo público y los protagonistas reales, militantes y anónimos.

De las experiencias extranjeras que he tenido la oportunidad de conocer, que me han abierto las puertas de su hospitalidad y de las que tanto he aprendido, quiero agradecer en especial su apoyo y cariño a algunas personas. Del segundo viaje a Brasil: a Canrobert, por facilitar toda la cuestión burocrática de la estancia, por su apoyo y su escucha activa; por supuesto a Caporal, otra de mis grandes puertas a toda la realidad agroecológica brasileña, por todos sus contactos y su inestimable apoyo; a Valter por su amistad, Eduardo y Joao, por meterme en la vida carioca de Lapa, Virginia, Fernanda, Marcos, Socorro, Leo, por acogerme en su caos y orientarme de forma tan valiosa, Maristela y Arcelindo, por su acogida y su cariño, Rosemary, Tonino, Lucie, Alcides y Ari y familia, entre otras cosas por esa barbacoa tan estupenda. De la experiencia francesa, quiero agradecer en especial a Julia, por abrirme las puertas de la que sería, sin saberlo, su futura casa, y Lionel, por su transparencia y humildad; Phillippe y familia, por su acogida y su calor, y la asamblea de Lozère, por su cariño, su apertura y su militancia.

En la fase final de sistematización, análisis y escritura, todo hubiera sido mucho más difícil sin mis compañeros del ISEC. Muy en especial Mª Ángeles, por su apoyo, su sonrisa, su compañía y su paciencia; a Ángel, por representar una pieza de un equipo que cualquiera querría construir; a Paquita, por estar siempre ahí y por su calor; a Dani, por su curiosidad constante, su calor y sus dudas; a Marta Soler, por todo su apoyo, por ser tan curranta y tan sincera; a Miguel Escalona y a Mario, por los momentos compartidos, por tanto cariño y tanto apoyo; a David, por su cariño. De fuera del ISEC, quiero agradecer a Elvira sus orientaciones tan prácticas y valiosas y a Martin por la información tan valiosa que me facilitó, con esa sonrisa.

Y como no podría ser de otro modo, un viaje profesional de este tipo no tiene sentido sin los pilares que en la vida nos hacen fuertes y felices, y nos dan energía para seguir luchando y trabajando. Por supuesto mi familia, *la Isia*, por orientarme y ayudarme en este mundo académico y estar ahí siempre; mi hermana la artista, luchadora y rompe moldes; mi hermano, con la palabra oportuna para provocar una sonrisa en cualquier momento, por sus cuidados; y mis padres, mis referentes, mis bastiones, mi lugar de descanso, mi refugio. Y mi familia elegida, entre las que destaco las que más me cuidan: Mayte, porque sigamos trabajando y creyendo juntas en lo que hacemos; Leti, porque sigas rompiéndome esquemas y abriéndome puertas; Carmen, por tu calor; Jimmy, con intermitencias, porque siempre apareces justo cuando lo necesito; Jessy, porque siento tu calor hasta a 8000 km de distancia Y los que están ahí: Champi, Víctor, Marga, Francis, Antuán, Rafa.

ÍNDICE

ÍNDICE DE CUADROS 12

ÍNDICE DE FIGURAS 13

ÍNDICE DE GRÁFICAS 13

LISTADO DE ANEXOS 15

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 17

2. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DESDE LA AGROECOLOGÍA 23

PARTE I. Sobre la Agroecología como contexto teórico 24
2.1.1. Las dimensiones de la Agroecología 28
2.1.2. La Participación como elemento central de la investigación agroecológica 41
2.1.3. Los procesos de cambio social agroecológico 46
PARTE II. Los Sistemas de Garantía para las producciones ecológicas desde una perspectiva agroecológica 58
2.2.1. Los sistemas de garantía en las producciones ecológicas 64
2.2.2. Construcción del concepto de garantía desde la Agroecología 76

3. EL CONTEXTO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 85

PARTE I.- El sector de la producción ecológica: de la Unión Europea a los territorios implicados en el proyecto 85
3.1.1. La Agricultura Ecológica en la Unión Europea 85
3.1.2. La Agricultura Ecológica en el Estado español 89
3.1.3. La Agricultura Ecológica en Andalucía 95
3.1.4. Aspectos destacados del sector de la producción ecológica en nuestros contextos 103
3.1.5. Perfil de los territorios piloto implicados en el proyecto de construcción de un SPG para la producción ecológica en Andalucía 104
PARTE II.- Los sistemas de garantía para las producciones ecológicas en la Unión Europea 114
3.2.1. El sistema de garantía para la producción ecológica en Andalucía 114
3.2.2. El sistema de garantía en el nuevo reglamento europeo para la producción ecológica 117
3.2.3. La certificación por tercera parte y el sector. Críticas vertidas 119
3.2.4. Iniciativas de sistemas alternativos de garantía en Europa 123
3.2.5. Otros modelos de gestión colectiva en el medio agrario español: las Comunidades de Regantes 125

4. PROPUESTA METODOLÓGICA 129

4.1. La perspectiva dialéctica de la investigación: el proceso metodológico seguido en la construcción de un Sistema Participativo de Garantía andaluz 130
4.1.1. Las etapas del proceso dialéctico propuesto 133
4.1.2. Los encuentros regionales de cierre – apertura de cada etapa 136
4.2. La perspectiva estructural de la investigación: otras herramientas metodológicas 137
4.2.1. Entrevistas semiestructuradas, individuales y grupales y los grupos de discusión 138
4.2.2. La observación participante 144
4.3. Revisión bibliográfica para la construcción de propuestas conceptuales 145

5. PROCESO ANDALUZ DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 147

5.1. Perfil de las personas implicadas en el proyecto en base a sus características.. 149
5.2. El proceso seguido en la construcción de un Sistema Participativo de Garantía andaluz 151
5.2.1. Descripción de las etapas seguidas 154
5.3. El modelo de Sistema Participativo de Garantía construido en Andalucía 162
5.3.1. Sobre la configuración de la iniciativa 162
5.3.2. Mecanismos de verificación de las normas de producción establecidas 165
5.3.3. Normas de producción y requisitos que se garantizan 168
5.4. Resultados de carácter estructural del proyecto 168
5.4.1. Análisis de las diferencias entre el Sistema Participativo de Garantía andaluz y la certificación oficial 169
5.4.2. Perfil de las personas implicadas en base a su visión de la producción ecológica 171
5.4.3. Motivaciones para implicarse en el proyecto 175
5.4.4. A modo de conclusión 178
5.5. Resultados de carácter dialéctico del proyecto 179
5.5.1. Evolución de la percepción de la garantía y la generación de credibilidad 180
5.5.2. Evolución de la confianza para trabajar mediante procesos colectivos..... 184
5.5.3. Cambios percibidos en el territorio y en el grupo 190
5.5.4. A modo de conclusión 194
5.6. Evaluación participativa de la metodología y los procesos de dinamización seguidos 197
5.6.1. Sobre la metodología general del proceso 198
5.6.2. Sobre el trabajo de dinamización 201

6. SISTEMATIZACIÓN COMPARATIVA DE OTRAS EXPERIENCIAS DE CERTIFICACIÓN ALTERNATIVA EN EL MUNDO 207

6.1. La Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa 210
6.1.1. Motivaciones para la puesta en marcha de la iniciativa 211
6.1.2. Estructura y funcionamiento de la Red 214
6.1.3. El Sistema Participativo de Garantía de la Red Ecovida 217
6.1.4. Discursos en torno a la garantía y la producción ecológica 221
6.1.5. Dificultades y desafíos percibidos 226
6.2. Federación Internacional de Agricultura y de Ecobiología Naturaleza y Progreso (Nature & Progrès) 228

6.2.1. Motivaciones para la defensa de la iniciativa 230
6.2.2. Estructura y funcionamiento de la Federación 231
6.2.3. El Sistema Participativo de Garantía de Naturaleza y Progreso 233
6.2.4. Visión en torno a la garantía y la producción ecológica 238
6.2.5. Dificultades y desafíos percibidos 240

7. ANÁLISIS COMPARADO DE LAS TRES EXPERIENCIAS DE SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA ESTUDIADAS 243

7.1. Las críticas a la certificación por tercera parte desde otros modos de entender la garantía 244
7.2. La garantía participativa como mecanismo de aval coherente con la producción de tipo agroecológico 248
7.3. Sobre la garantía como gestión colectiva de la confianza 250
7.4. Sobre la estructura y el funcionamiento de los SPG estudiados 251
7.5. Sobre el impulso inicial de las experiencias 264
7.6. Sobre las dificultades y los retos percibidos 266
7.6.1. Las opciones para la regulación de los Sistemas Participativos de Garantía en Andalucía 268

8. CONCLUSIONES 271

9. BIBLIOGRAFÍA 285

10. ANEXOS .....(En CD adjunto)

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.- Premisas dominantes de la ciencia moderna y de la Agroecología..... 27
Cuadro 2.- Algunos aspectos importantes del sistema social que interactúa en cada nivel de los sistemas alimenticios..... 34
Cuadro 3.- Tipología de la participación..... 43
Cuadro 4.- Ventajas y desventajas de las regulaciones públicas y privadas 68
Cuadro 5.- Sistemas de garantía en función de los actores responsables de avalar la producción 69
Cuadro 6.- Diferencias entre los Sistemas Participativos de Garantía y los sistemas de garantía de tercera parte grupales 76
Cuadro 7.- Número de cabezas bajo manejo ecológico y potencial productivo por tipo de ganado y principales países productores. UE 15. Año 2003 88
Cuadro 8.- Resumen de las características de los territorios implicados en el proyecto de investigación..... 111
Cuadro 9.- Principales asociaciones de agricultura Ecológica a finales de los años 80115
Cuadro 10.- Actividades Centrales de la Investigación-Acción Participativa..... 132
Cuadro 11.- Descripción de las entrevistas realizadas en la primera fase del proyecto140
Cuadro 12.- Descripción de las entrevistas realizadas al final del proyecto 140
Cuadro 13.- Personas entrevistadas en ambos momentos del proyecto 140
Cuadro 14.- Guión de las entrevistas realizadas en el proceso andaluz 141
Cuadro 15.- Detalle de las entrevistas realizadas en las experiencias extranjeras estudiadas 143
Cuadro 16.- Caracterización de las personas implicadas en el proyecto..... 149
Cuadro 17.- Aspectos a considerar en la construcción de un proceso de Garantía Alternativa en Andalucía..... 152
Cuadro 18. Esquema de la Investigación Acción Participativa (IAP) seguida 154
Cuadro 19.- Perfil de las personas contratadas para dinamizar el proceso..... 156
Cuadro 20.- Estructuras operativas del Sistema Participativo de Garantía andaluz..... 163
Cuadro 21.- Principales diferencias entre el Sistema Participativo de Garantía andaluz y el sistema de certificación oficial en la UE 169
Cuadro 22.- Experiencias destacadas de Sistemas Participativos de Garantía en el mundo 209
Cuadro 23.- Proceso de obtención del Sello Ecovida..... 219
Cuadro 24- Cuotas establecidas para los socios/as de N&P..... 236
Cuadro 25.- Alcance geográfico de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados251
Cuadro 26.- Origen y orientación de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados 252
Cuadro 27.- Actores implicados en las tres experiencias de Sistemas Participativos de Garantía estudiadas..... 253
Cuadro 28.- Procedimiento de entrada establecido por los Sistemas Participativos de Garantía estudiados..... 255
Cuadro 29.- Análisis comparativo de las principales estructuras operativas de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados..... 257
Cuadro 30.- Sanciones establecidas en los Sistemas Participativos de Garantía estudiados 258

Cuadro 31.- Elementos comunes a los tres modelos de Sistemas Participativos de Garantía estudiados 261

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.- Comparativa entre el manejo de los recursos naturales concebido desde la "intensificación verde" y la Agroecología..... 33
Figura 2.- Lugar que ocupan los mecanismos de garantía en el proceso de circulación de productos ecológicos..... 69
Figura 3.- Lógica y efectos de la garantía por tercera parte 78
Figura 4.- Fases del proceso de Investigación Acción Participativa propuesto 135
Figura 5.- Procedimiento de entrada de nuevas personas a un grupo del SPG andaluz 164
Figura 6.- Elementos de confiabilidad del Sistema Participativo de Garantía andaluz 165
Figura 7.- Proceso de renovación del identificativo en el Sistema Participativo de Garantía andaluz 166
Figura 8.- Tipo de infracciones y de sanciones en el Sistema Participativo de Garantía andaluz..... 167
Figura 9.- Esquema de funcionamiento de la Red Ecovida..... 216
Figura 10.- Estructura de funcionamiento del Sistema Participativo de Garantía de Naturaleza y Progreso..... 237
Figura 11.- Estudio comparativo de las estructuras de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados..... 253
Figura 12.- Comparativa de los procedimientos de control habituales establecidos en los Sistemas Participativos de Garantía estudiados..... 254

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1.- Porcentaje de explotaciones agrarias bajo manejo ecológico. UE 15. Año 2003 86
Gráfica 2.- % de la SAU bajo manejo ecológico. UE 15. Año 2003 86
Gráfica 3.- Distribución de usos de la superficie ecológica. UE 15. Año 2003..... 87
Gráfica 4.- Evolución de la superficie y número de operadores. España. Periodo 1995 – 2005 89
Gráfica 5.- Distribución de la superficie ecológica por Comunidades Autónomas. España. Año 2005..... 90
Gráfica 6.- Evolución de la superficie calificada en ecológico de las principales comunidades autónomas. España. Periodo 2001 - 2005 90
Gráfica 7.- Número de Operadores por Comunidades Autónomas. España. Año 2005 91
Gráfica 8.- Superficies medias certificadas por operador (ha). Estado español. Año 2005 91

Gráfica 9.- Importancia relativa de los distintos usos de la superficie ecológica. España. Periodo 2001 – 2005 92
Gráfica 10.- Importancia relativa de los diferentes tipos de cultivos predominantes. Estado español. Año 2005 93
Gráfica 11.- Evolución de los principales cultivos ecológicos. España. Periodo 2001 - 2005 93
Gráfica 12.- Evolución del número de explotaciones ganaderas por tipo de ganado. España. Periodo 2001 – 2005 94
Gráfica 13.- Evolución de la carga ganadera media de las unidades productivas. Estado Español. Periodo 2004 – 2005 95
Gráfica 14.- Evolución de la superficie y del número de operadores certificados en ecológico. Andalucía. Periodo 1995 – 2005 96
Gráfica 15.- Evolución de la superficie certificada en ecológico por provincias (ha.). Andalucía. Periodo 2001 – 2005 96
Gráfica 16.- Evolución del número de productores primarios por provincias. Andalucía. Periodo 2001 – 2005 97
Gráfica 17.- Evolución de la superficie media por explotación por provincias. Andalucía. Periodo 2001 – 2005 98
Gráfica 18.- Evolución de los distintos usos de la superficie ecológica. Andalucía, Periodo 2001 – 2005 99
Gráfica 19.- Superficie de Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamiento y provincia (has). Andalucía. Año 2005 99
Gráfica 20.- Evolución de los distintos usos agrícolas. Andalucía. Año 2005 100
Gráfica 21.- Evolución del número de explotaciones ganaderas por especies. Andalucía. Periodo 2001 – 2005 102
Gráfica 22.- Evolución del tamaño medio de las explotaciones (carga ganadera). Andalucía. Años 2004 – 2005 103
Gráfica 23.- Superficies medias de las fincas certificadas en ecológico. Serranía de Ronda. 2005 106
Gráfica 24.- Usos de la superficie declarada en ecológico. Sierra de Segura. Año 200610
Gráfica 25.- Perfil de los operadores certificados en ecológico. Sierra de Segura. Año 2006 107

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO I: ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL PROCESO ANDALUZ DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA

ANEXO I.1: ENTREVISTAS REALIZADAS AL INICIO DEL PROCESO

ANEXO I.2: ENTREVISTAS REALIZADAS AL FINAL DEL PROCESO

ANEXO II: ENTREVISTAS REALIZADAS A LAS EXPERIENCIAS EXTRANJERAS ANALIZADAS

ANEXO III: ACTAS DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO

ANEXO IV: ENCUENTROS INTERTERRITORIALES

ANEXO V: DOCUMENTOS DEL SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA CONSTRUIDO

ANEXO VI: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Perfil de las personas implicadas en el proyecto en base a su visión de la producción ecológica y su comercialización

ANEXO VII: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Motivaciones para implicarse en el proyecto andaluz de construcción de un sistema alternativo de garantía

ANEXO VIII: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Evolución de la percepción de la garantía, la certificación y los Sistemas Participativos de Garantía

ANEXO IX: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Evolución de la confianza en trabajar a través de procesos colectivos

ANEXO X: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Cambios percibidos en los territorios y en los grupos implicados

ANEXO XI: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Percepción de la metodología general del proceso

ANEXO XII: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Percepción del trabajo de dinamización en cada uno de los territorios

ANEXO XIII: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Motivaciones para la puesta en marcha de las iniciativas extranjeras estudiadas

ANEXO XIV: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Trayectoria, estructura y funcionamiento de las experiencias extranjeras trabajadas

ANEXO XV: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Visión en torno a la producción ecológica en las experiencias extranjeras estudiadas

ANEXO XVI: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Visión en torno a la garantía y sus mecanismos en las experiencias extranjeras estudiadas

ANEXO XVII: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Dificultades percibidas en las experiencias extranjeras estudiadas

ANEXO XVIII: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Retos y desafíos percibidos en las experiencias extranjeras estudiadas

ANEXO XIX: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Iniciativas colectivas en las experiencias extranjeras estudiadas

ANEXO XX: CITAS EXTRAÍDAS DE LAS ENTREVISTAS POR CATEGORÍAS

Visión de los procesos colectivos en las experiencias extranjeras estudiadas

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

La garantía en los productos ecológicos es el proceso a través del cual, por un lado la producción puede mostrar que los productos que ofrece han sido obtenidos a través de un manejo definido como ecológico y; por otro lado, las personas consumidoras ganan seguridad en que lo que adquieren responde a estas características en su proceso de producción. Existen diferentes mecanismos que operativizan la garantía, desde la forma más sencilla que representa una relación directa de conocimiento mutuo entre la producción y el consumo a sistemas más complicados donde se implican diferentes actores y se combinan procedimientos de diversa índole. A estos mecanismos que tratan de distinguir un producto diferenciado del *producto patrón* (Medaets, 2003:25) se les llama, de forma genérica, *sistemas de garantía*. El proceso a través del cual lo llevan a cabo consiste, básicamente, en evaluar la conformidad de un determinado modo de manejo con un *cuaderno de normas* y *estándares* de referencia. El identificativo que se obtiene en caso de ser positiva esta evaluación es lo que se conoce como *sello*.

La forma más sencilla de establecer una garantía en lo que se intercambia es a través de las relaciones directas entre la producción y el consumo. Sin embargo, existen una serie de condicionantes que nos llevan a plantear la necesidad de establecer algún sistema de garantía que dé seguridad en lo que se denomina como producto ecológico. Estos condicionantes son, a grandes rasgos: a) los flujos de comercialización, aunque se establezcan de cercanía, suelen abarcar espacios geográficos más amplios que el alcance que pueden tener las relaciones de confianza directa; b) los contextos como la Unión Europea donde la agricultura ecológica es destino de apoyos públicos de diversa índole requieren de mecanismos de garantía que aseguren que el destino de estas ayudas es el adecuado; c) los procesos de transición en cuanto a la comercialización de los productos ecológicos, hacia un acortamiento de las distancias y de los intermediarios, que parten de unas distancias al consumo demasiado grandes como para que éste pueda confiar directamente y; d) los sistemas productivos de monocultivo que plantean su transición hacia una diversificación, pero donde el nivel inicial de producción de determinados alimentos no puede ser absorbido por los mercados más próximos y deben recurrir a mercados lejanos. De esta forma, la presente investigación parte de la premisa de que existe una necesidad de establecer sistemas de garantía para las producciones ecológicas.

La entrada en un sistema de garantía es obligatoria en Andalucía para cualquier productor o productora que quiera comercializar productos con el apelativo de ecológico. Esta obligatoriedad viene establecida desde la Unión Europea, a través del Reglamento RE2092/91 que regula el sector de la producción ecológica desde el año 1992. A través de la Norma Europea DIN EN 45011, del año 1995, se establece como único sistema de garantía reconocido oficialmente la certificación por tercera parte; esto es, un mecanismo en el que son las administraciones públicas o empresas privadas

acreditadas para ello quienes inspeccionan las producciones para dar fe de su naturaleza ecológica. El mecanismo se basa en auditorías técnicas anuales y en un complejo entramado de *entidades acreditadas, autoridades de control* y *autoridades de acreditación*[1].

En el año 2005, la entonces Dirección General de Agricultura Ecológica (DGAE), de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, recibió la petición de parte de diversos grupos productores ecológicos de esta región de solucionar el problema que el mecanismo obligatorio de la certificación por tercera parte les estaba suponiendo. Su planteamiento inicial se basaba en que este sistema legal les generaba una serie de perjuicios que les desanimaban a seguir inscritos como ecológicos o les desincentivaba, directamente, a inscribirse como tales. Los principales problemas planteados eran unos costes excesivos para sus pequeñas producciones y unos niveles de burocracia que hacían muy difícil el procedimiento.

Ante esta denuncia, la DGAE tomó la decisión de impulsar un proceso participativo, a través del cual construir un sistema alternativo de certificación que se adaptara a la realidad de estos grupos[2]. De esta forma y como caso poco frecuente en el ámbito agrario y rural andaluz, se planteaba la solución de un problema a través de un mecanismo distinto al de las subvenciones económicas o el apoyo público directo. Además, el procedimiento propuesto resultaba innovador: una metodología inspirada en la Investigación Acción Participativa, a través de la cual construir un sistema de garantía de tipo participativo.

Para llevar a cabo este proyecto, la DGAE contactó con el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) de la Universidad de Córdoba (con la investigadora que presenta esta tesis doctoral), para proponer una colaboración en su desarrollo. La cuestión de la garantía y los sistemas participativos era muy innovadora en nuestro contexto y, desde el ISEC, ofrecíamos una cierta experiencia al respecto. Entre enero y febrero de 2005 habíamos realizado una inmersión en diversos grupos de la Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa, en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná[3] de Brasil. Esta estancia había permitido elaborar parte de lo que fue la Suficiencia Investigadora presentada en ese año, dentro del Programa de Doctorado "Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sustentable" de la Universidad de Córdoba.

De esta forma surge la presente tesis doctoral. Diseñamos una investigación que planteó y acompañó todo el proceso a través del cual se trató de dar respuesta a la demanda de

[1] Todos estos conceptos se explican detalladamente en la Parte II del capítulo 2, titulada *Los Sistemas de Garantía para las producciones ecológicas desde una perspectiva agroecológica*.

[2] Queremos aprovechar esta oportunidad para señalar que esta decisión y el proceso consiguiente fueron posibles gracias a la presencia, como Director General de Agricultura Ecológica, de Manuel González de Molina Navarro. Ante la problemática detectada y como agroecólogo convencido, optó por promover un proyecto participativo de búsqueda de soluciones. Valoramos y queremos evidenciar la visión de la política pública como promotora de procesos de reflexión colectiva y cambio social subyacente en esta decisión.

[3] Esta estancia fue en parte financiada por el Ayuntamiento de Córdoba, para participar en el V Foro Social Mundial, en Porto Alegre. A partir de aquí se organizó una ruta de visitas que sustentó el trabajo de campo de la investigación.

los grupos productores. Las decisiones metodológicas previas sobre las que diseñamos el proyecto fueron tres: a) implicar a las personas que habían denunciado la problemática en la solución de la misma; b) trabajar a través de una metodología enmarcada en las propuestas de la Investigación Acción Participativa; c) construir una alternativa a la certificación oficial dentro de las propuestas de los sistemas de garantía de tipo participativo. A este proyecto central le sumamos la investigación de dos experiencias de garantía participativa, que nos permitiría construir los referentes necesarios para el desarrollo del proyecto, así como profundizar en el conocimiento de este tipo de propuestas y de las personas protagonistas de las mismas.

Con estos antecedentes, el objetivo amplio que planteamos para la investigación es: "*analizar los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), como mecanismos de generación de credibilidad en los productos ecológicos, en cuanto a su confiabilidad y su adaptabilidad al contexto europeo*". Para alcanzar este objetivo amplio y para responder a la problemática planteada, establecimos seis objetivos de carácter específico, que se detallan a continuación. Cabe señalar que algunos se establecieron al inicio del proceso y otros fueron surgiendo con el desarrollo del mismo.

Primero.- Dada la relativa juventud de los Sistemas de Garantía para las producciones ecológicas, cuya obligatoriedad se impuso en la Unión Europea en el año 1995, así como la escasa bibliografía existente en torno a los mismos, nos planteamos: *Construir un marco conceptual sobre los Sistemas de Garantía desde las propuestas de la Agroecología, analizando las distintas opciones existentes desde una óptica agroecológica.*

Segundo.- La demanda de una alternativa a la certificación oficial surge en Andalucía de parte de algunos grupos productores ecológicos. Para profundizar en esta problemática y la necesidad de alternativas, perseguimos: *Analizar la problemática que el sistema de certificación por tercera parte plantea al sector de la producción ecológica.*

Tercero.- Con el fin de plantear una opción alternativa a la certificación oficial, se planteó construir la solución a través de una metodología basada en las propuestas de la Investigación Acción Participativa. Esta propuesta permitiría generar espacios de reflexividad y creatividad social, lo cual podría generar un proceso de aprendizaje y de cambios de discurso en las personas participantes. En este sentido planteamos un tercer objetivo: *Contrastar la capacidad de la propuesta metodológica de la Investigación Acción Participativa (IAP) para impulsar procesos de garantía participativa en el contexto andaluz y generar cambios sociales agroecológicos.*

Cuarto.- Los Sistemas Participativos de Garantía para producciones ecológicas son iniciativas que se están desarrollando en distintas partes del mundo pero muy poco conocidas. Con el fin de hacer una aportación a la construcción teórica de estas alternativas, se plantea: *Analizar de forma comparada diferentes Sistemas Participativos de Garantía, sistematizando las generalidades y especificidades de cada experiencia y profundizando en las fortalezas y dificultades de este tipo de modelo frente a los sistemas legalmente establecidos de certificación.*

Quinto.- Los *Sistemas Participativos de Garantía* están poco extendidos y son poco conocidos. En relación a sus especificidades, pretendemos comprobar si las personas que se implican en este tipo de mecanismos responden a perfiles concretos. Con este fin, planteamos el objetivo específico quinto: *Analizar si los Sistemas Participativos de Garantía responden a un perfil concreto de productores y de consumidores, en base a su visión de la producción ecológica y de los procesos colectivos.*

Sexto.- Dado que en la Unión Europea sólo se reconoce un sistema de certificación, dejando fuera otros mecanismos (como el de la garantía participativa), planteamos un último objetivo: *Analizar las opciones de regulación de este tipo de iniciativas en un contexto de regulación excluyente como el de la Unión Europea*

El presente documento representa la sistematización de todo el proceso de investigación – acción llevado a cabo, tratando de responder a los objetivos específicos señalados. Para facilitar tanto su elaboración como su comprensión, el documento lo hemos construido en base a un esquema organizado a través de diferentes capítulos.

En primer lugar, se presenta la *aproximación teórica* realizada en torno a aquellas nociones y conceptos sobre las que hemos sustentado el proceso de investigación desarrollado. Estos conceptos se enmarcan en el ámbito de la Agroecología como enfoque científico. Este marco conceptual ha sido la base a partir de la cual se han definido otras nociones utilizadas en el proceso epistemológico: por un lado, el concepto de cambio social agroecológico, el atributo de endógeno o las condiciones para la sustentabilidad; por otro lado, los conceptos que han sustentado la propuesta metodológica, en torno a la participación en los procesos de investigación. De esta forma se han sentado las bases del *cómo* en la propuesta desarrollada, para solucionar el problema planteado y la opción de la garantía participativa como mecanismo alternativo a la certificación oficial para dar confiabilidad a las producciones ecológicas.

Para completar la construcción teórica, hemos estudiado las nociones relacionadas con los procesos de generación de garantía, entre los que se ubica la certificación. Profundizamos, de este modo, en los conceptos barajados desde la oficialidad, así como en otros sobre los que se sustentan los Sistemas Participativos de Garantía. En este campo, cabe señalar que hemos detectado una escasa diversidad de aportaciones y construcciones científicas. Lo que por un lado ha supuesto una dificultad en el desarrollo del marco conceptual, lo hemos incorporado como una oportunidad para aportar nuestro grano de arena a un ámbito que hemos constatado de gran actualidad.

El problema planteado y el proceso de solución propuesto se desarrollan en el contexto de una realidad socioeconómica regulada desde la Unión Europea. En este sentido, analizaremos dos aspectos importantes para el proceso. Por un lado, la evolución y las características del sector de la producción ecológica en nuestra región, enmarcado en el ámbito comunitario y estatal, como contexto en el que se insertan los territorios que se han implicado en el proyecto andaluz. Presentamos, asimismo, una descripción de estos territorios andaluces, con el fin de ubicar la realidad de la que se partía. Por otro lado, se analiza la situación y características de los sistemas de garantía para la producción

ecológica en la Unión Europea. En este ámbito, planteamos las críticas detectadas en torno a los mecanismos impuestos, así como las alternativas que se están proponiendo en otros territorios o por algunos movimientos sociales.

Entrando en profundidad en el proceso desarrollado a lo largo de la investigación - acción, plantearemos la propuesta metodológica desarrollada. De esta forma, detallaremos los instrumentos y herramientas que han operativizado la metodología utilizada. Este capítulo representa una fotografía descriptiva y argumentada de las herramientas y pasos seguidos en el proceso epistemológico desarrollado.

La propuesta metodológica se concreta en el capítulo siguiente, donde describiremos el perfil de las personas implicadas en el proceso de solución de la problemática planteada, así como los pasos seguidos en el mismo y el sistema participativo de garantía construido. Tras esta descripción, se presentan los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación - acción, desde una doble perspectiva: los resultados estructurales y los resultados dialécticos[4].

Para completar la visión del sistema alternativo de garantía construido en este proceso, presentaremos un estudio en profundidad de otras dos experiencias: la Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa, en el sur de Brasil; y la Federación Internacional de Agricultura y de Ecobiología Naturaleza y Progreso, en Francia. El estudio sistematizado de estas experiencias que trabajan sistemas de garantía alternativos de tipo participativo nos permitirá analizar las implicaciones y discursos asociados a ellas. Este estudio responderá al esquema utilizado para analizar los resultados estructurales del proceso andaluz, con el fin de facilitar el estudio comparativo entre ellas, que se presentará a continuación.

El análisis comparado de las tres experiencias analizadas a lo largo de la investigación se ha realizado en base a la sistematización de estos modelos de garantía así como las implicaciones asociadas a ellos. Esto nos permitirá extraer una serie de conclusiones que pueden aportar conocimiento y alguna luz a este ámbito, escasamente trabajado a nivel científico.

[4] Hemos empleado la nomenclatura propuesta por Ibáñez, descrita en detalle en el capítulo de *Propuesta metodológica.*

2. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA A LOS SISTEMAS DE GARANTÍA DESDE LA AGROECOLOGÍA

La solución a la problemática de la certificación planteada la hemos basado en la noción de cambio social asociado al manejo de los recursos naturales; concepto que hemos denominado *cambio social agroecológico*. Consideramos que un problema denunciado desde grupos productores ecológicos puede ser el punto de partida para generar un proceso de este tipo. En este sentido, hemos construido el concepto de cambio social agroecológico desde la perspectiva de la Agroecología, desde donde estableceremos las bases teóricas y conceptuales en torno a las características y dimensiones de un cambio de este tipo. En este marco teórico, profundizaremos en el concepto de participación, desde el que definiremos aquellos mecanismos a través de los cuales se facilitan y construyen los procesos de cambio agroecológico.

La segunda parte del marco teórico la hemos centrado en ubicar la cuestión de la garantía en las producciones ecológicas, como mecanismo de comunicación entre la producción y el consumo. El punto de partida se centra en los sistemas de intercambio o comercialización que se establecen entre la producción y el consumo de los productos ecológicos. Estos mecanismos de intercambio definen y son, a su vez, un reflejo del tipo de relaciones que se establecen entre ambas partes. Considerando la garantía como un elemento de definición más de las relaciones entre producción y consumo, los mecanismos sobre los que se construya condicionarán y a su vez responderán a los canales de comercialización que se establezcan.

En base al desarrollo conceptual de los temas hasta aquí considerados, pretendemos realizar un análisis de los distintos sistemas de garantía (estrechamente relacionados, como hemos visto, con los mecanismos de comercialización). Este análisis se centrará en su capacidad para: a) impulsar procesos de cambio social agroecológico; y b) generar espacios de participación para las personas implicadas.

El objetivo final de este apartado se centra en aportar argumentos para construir una posible visión agroecológica sobre la garantía, en base a los preceptos conceptuales establecidos. Ello servirá de referencia para contrastar la capacidad de generar cambio social, basado en la Agroecología y la Participación, a través de un proceso de construcción de un sistema de garantía participativo.

PARTE I. Sobre la Agroecología como contexto teórico

En las décadas de los años 60 y 70 se empieza a generar un movimiento ambientalista que trata de evidenciar la crisis socioambiental que se estaba viviendo[5]. Una crisis que es interpretada como una consecuencia de la degradación ecosistémica, que a su vez viene generada por la modernización industrializadora del manejo de los recursos naturales. Este proceso de modernización fue lo que generó y extendió la agricultura industrializada, impulsada a través de la *Revolución Verde* en las décadas de los 50 y 60. La visión subyacente redujo la agricultura a una concepción productivista, basada en combustibles fósiles, fitosanitarios, insumos químicos y empresas de servicios externas a los territorios. Su elevada dependencia de insumos externos, de recursos no renovables y de tecnologías importadas dio lugar a un medio rural y a una Agricultura: a) dependientes (de empresas de insumos), b) destructivos (de los recursos y el medio natural en el que desarrollan su actividad), c) desequilibrados (a nivel social, por la inequidad de las relaciones de poder que se fomentan) y d) pasivos (por la adopción de tecnologías externas a través de procesos de extensión agraria verticales).Algunas obras de carácter científico surgieron en estos primeros años en apoyo de los movimientos ambientalistas, donde se muestran los impactos negativos en el Medio Ambiente de este proceso industrializador. Algunos ejemplos de ello los encontramos en Carson (1964), que analiza el efecto de los insecticidas sobre el entorno natural; y Pimentel y Pimentel (1979), quien estudia la ineficiencia energética de la agricultura industrializada.

La crisis ambiental fue reconocida por el discurso oficial en la década de los años 80. Concretamente en el año 1987, el Informe Brudtland[6] planteaba la necesidad de considerar la limitación de los recursos naturales en las actividades productivas. En este sentido, invitaba a las actividades productivas a pensar en la capacidad de regeneración de los mismos. Este discurso se ha ido construyendo a lo largo de las últimas décadas, a través de diversas conferencias internacionales y desde instancias oficiales[7]. Cabe destacar, sin embargo, que las propuestas que aparecen en este discurso mantienen la

[5] La literatura sobre este tema es muy abundante. En el marco español, el primer trabajo sobre el mismo se debe a Pérez Agote (1979), donde plantea el proceso de toma de conciencia del problema ambiental que se venía arrastrando desde la revolución industrial, que dio origen a los llamados movimientos ambientalistas en el Estado español. En el mismo sentido, pero en el contexto de los Estados Unidos de América, podemos destacar el trabajo de Lemkow y Buttel (1983), en el que realizan un análisis del origen de los movimientos ecologistas en este país. Un libro más actual, que hace una recopilación de las luchas y reivindicaciones de los diferentes movimientos ambientalistas en nuestro país, en la segunda mitad del siglo XX, se debe a Joaquín Fernández (1999). Aunque no existe ningún trabajo definitivo sobre el tema, una de las mejores caracterizaciones globales del movimiento ambientalista se debe a Riechmann y Fernández Buey (1994). Un análisis de la dimensión global que toma este movimiento con el paso del tiempo puede verse en Calle (2005).

[6] Informe presentado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Naciones Unidas, en el año 1987.

[7] Son diversos los autores que han desarrollado cronologías de los principales sucesos y conferencias internacionales que han ido construyendo este discurso ecotecnocrático de la sostenibilidad: C.f. Naredo (2006:19-46), Boada y Toledo (2003: 9 – 39).

línea ecotecnocrática de pensamiento que había impulsado la industrialización del manejo de los recursos naturales (Alonso Mielgo y Sevilla Guzmán, 1.995: 91-119), ya que sigue concibiendo este manejo como una simple cuestión técnica. Así, el respeto al Medio Ambiente pasa sólo por considerar la tasa de renovabilidad de los recursos y, en aquellos casos en los que no sea posible, fomentar desarrollos tecnológicos que aumenten la eficiencia de su uso o la búsqueda de alternativas. La implementación de este tipo de políticas ha sido conceptualizada como la *modernización ecológica*[8].

En este sentido, consideramos que el discurso oficial plantea una reconciliación *virtual* entre la economía, que sigue siendo prioritaria, y la ecología. Como plantea Naredo (2006: 41), resulta más fácil a nivel político y empresarial invertir en "imagen verde" que en una transformación en profundidad del metabolismo de la sociedad industrial y sus reglas económicas. Las soluciones que se proponen no son estructurales, ya que siguen incidiendo en la ruptura de los mecanismos de renovabilidad de los recursos naturales. La especie humana y la economía mantienen un lugar privilegiado sobre los ecosistemas (Guzmán et al., 2000: 35). Además, no cuestiona estructuralmente la lógica del desarrollismo, cuyo fracaso debiera resultar evidente tras la constatación de la crisis ambiental y sus causas. Muy al contrario y como critica Leff (2004: 105), pasa a considerar la crisis ambiental como un *efecto de no haber otorgado derechos de propiedad (privada) y asignado valores (de mercado) a los bienes comunales*. De esta forma, no se cuestionan las causas económicas de los problemas ecológicos.

Frente a esto, también en la década de los 80 y desde Latinoamérica surge un discurso transformador: el de la Agroecología[9]. Este nuevo enfoque científico también se nutre de las denuncias realizadas en las décadas de los 60 y los 70. Sin embargo, se construye en base a propuestas de soluciones estructurales, como las que planteaba Schumacher (1973), en torno a la necesidad de nuevas visiones para una sociedad alternativa. La Agroecología trata de dar respuesta a la crisis ecológica y al problema social derivado desde las Ciencias Agropecuarias y Forestales: propone un *redescubrimiento* del manejo ecológico, que determinados pueblos indígenas y grupos campesinos venían desarrollando históricamente (Sevilla y Glez. de Molina, 1993: 24 - 26). La perdurabilidad de los equilibrios ecosistémicos de los territorios donde desarrollan su actividad estos pueblos es muestra de su *incuestionable* sustentabilidad.

De esta forma, se plantea la construcción de un nuevo modo de racionalidad técnica, que incorpora aportes no científicos. La Agroecología construye y busca soluciones a

[8] La primera aproximación a este concepto, entendido como lo hemos planteado en el texto, se debe a Arthur Mol en el año 1997 (traducido al castellano en el año 2002).

[9] La sistematización de contenidos que permiten hablar de producción científica dentro del enfoque de la Agroecología comienza en la segunda mitad de la década de los 70, con los trabajos mexicanos de Zolocotxi, respecto al rescate de las tecnologías tradicionales; y los estudios de los ecólogos buscando el comportamiento de los ecosistemas naturales para el manejo de los agroecosistemas: C.f. Gliessman (1978); una recopilación de todos estos trabajos puede verse en Miguel Altieri (1987). Esta corriente de pensamiento tiene sus raíces históricas en el debate establecido en Rusia entre el marxismo ortodoxo y el populismo o narodnismo, en torno a la cuestión agraria y el papel del campesinado en el proceso histórico de conformación de la misma. Este debate sería retomado, ya en el s. XX, primero por la escuela de la "Vida Rural Americana" confrontada por las corrientes del marxismo heterodoxo y el neopopulismo y, posteriormente, la escuela de la "modernización agraria" confrontada por las *teorías de la dependencia* (Sevilla y Woodgate, 1997: 83).

los problemas relacionados con el manejo de los recursos naturales ayudándose de modos de conocimiento hasta el momento desconsiderados e incluso marginados. Por un lado, los planteamientos y propuestas de los movimientos ambientalistas que denuncian las causas de la crisis ambiental descrita[10]. Y por otro lado, los conocimientos tradicionales campesinos que han probado históricamente la sustentabilidad de sus manejos.

Asimismo, la Agroecología propone incorporar a las disciplinas técnicas agropecuarias y forestales aspectos no naturales. Plantea la idea de que cualquier fenómeno relacionado con los recursos naturales puede estar influenciado por condiciones socioculturales, ambientales o políticas. Estas condiciones extranaturales van a diferir de una realidad a otra y de un momento a otro. Por lo tanto, las leyes que se construyan para explicarlo deben recoger con cautela el contexto en el que se desarrolla (Guzmán et al. 2000). En este sentido, los fenómenos y realidades que se estudian no pueden ser concebidos como elementos aislables. Por el contrario, responden mejor a una tupida red de relaciones, en continua evolución. Además, esta evolución de las relaciones y causas que definen los fenómenos estudiados interactúa con las personas generando identidades socioculturales. Noorgard (1994) lo denominó coevolución entre los sistemas culturales y ambientales[11].

Este enfoque científico no se concibe como una construcción acabada o categórica, sino en continua evolución y discusión. Plantea el conocimiento científico como una escala de grados de acercamiento y exactitud, con errores, incertidumbres y desorden. No se pretende, por lo tanto, establecer un marco de conocimiento superior a otros, sino que se trabaja desde la convicción de la pluralidad disciplinar y epistemológica que subyace en el paradigma ecológico (Garrido Peña, 1993: 4); de esta forma se propone la recuperación del pluralismo de lógicas y las lógicas plurivalentes (Garrido Peña, 1996: 246-261)[12].

Para facilitar la investigación de la realidad así concebida, se propone la construcción de conocimiento en torno al manejo de los recursos naturales a través de distintos ámbitos. Desde el funcionamiento ecológico de los procesos agronómicos, que se corresponden con los aspectos técnico – productivos y donde se enmarcan los trabajos de Gliessmann (1990a y b, 2002), hasta la dimensión histórica de las prácticas agronómicas, que se enmarcan en la diversidad cultural y donde se centran los trabajos de autores como González de Molina (1991, 1993 a y b) y Toledo y Barrera-Bassols (2008). De este modo, este enfoque científico trata de articular las ciencias naturales y las ciencias

[10] El estudio y la sistematización de los movimientos de resistencia que se han ido generando en torno a conflictos ecológicos de tipo distributivo es a lo que se ha denominado la *Ecología Política.* Una aproximación a este concepto y sus implicaciones la podemos encontrar en Leff y Roca Jusmet (2000: 437 – 442).

[11] Para un análisis más actual de este concepto, aplicado a la insostenibilidad diagnosticada a lo largo de la segunda mitad del s. XX sobre el modo de manejo de los recursos naturales, así como las implicaciones políticas de este modo de acercarse al análisis de la realidad: C.f. Noorgard, 2002: 174 – 178.

[12] Garrido Peña expresa esta ruptura con respecto al paradigma científico hegemónico de la siguiente manera: "*rompe con el imperialismo epistemológico de la lógica bivalente –identitaria y admite otras formas de pensar y representar la realidad, dentro de un marco pluralista donde no hay ningún tribunal supremo que siente jurisprudencia sobre la verdad o la falsedad de los distintos tipos de racionalidad y de pensamiento*" (Garrido Peña, 1996:252)

sociales (Sevilla Guzmán y González de Molina, 1993; Guzmán Casado y otros, 2000).

Ante la crisis ambiental de la segunda mitad del s. XX, la respuesta ecotecnocrática oficial y los planteamientos agroecológicos difieren en sus modos de interpretarla, analizarla así como en las soluciones propuestas. La base de estas diferencias se puede ubicar en las premisas desde las que parten ambos enfoques. Noorgard y Sikor (1995) plantean que la Agroecología cambia las premisas en las que se basa la ciencia moderna introduciendo otras alternativas que corrigen las deficiencias epistemológicas de aquella. En el cuadro siguiente reflejamos las premisas de una y otra propuesta con sus definiciones.

Cuadro 1.- Premisas dominantes de la ciencia moderna y de la Agroecología

Premisas dominantes	**Premisas alternativas**
Atomismo: las partes pueden ser entendidas al margen de los sistemas en los que se insertan, y éstos son la suma de las partes	*Holismo*: las partes no pueden comprenderse separadas del todo y éste es diferente a la suma de sus partes
Mecanicismo: las relaciones entre las partes de un sistema no cambian, por lo que la predicción y el control a través de la actuación sobre una de las partes es posible	*No mecanicismo*: los sistemas pueden ser también evolutivos y aunque puedan ser mecánicos o deterministas son difíciles de predecir y controlar
Universalismo: los fenómenos complejos y diversos son el resultado de un número reducido de reducido de principios universales subyacentes, los cuales no cambian en el tiempo y en el espacio	*Contextualismo*: los fenómenos van a depender, en el tiempo y el espacio, de un gran número de factores; fenómenos similares pueden suceder en distintos tiempos y lugares debido a otros factores
Objetivismo: la comprensión de los sistemas puede realizarse al margen de los valores culturales, creencias del investigador,...	*Subjetivismo*: los sistemas sociales y "naturales" sólo pueden comprenderse como parte de nuestros valores actuales y de cómo hemos entendido y actuado sobre estos en el pasado
Monismo: las formas separadas e individuales de entender sistemas complejos, el conocimiento parcial, pueden fusionarse en un todo coherente	*Pluralismo*: los sistemas complejos sólo pueden conocerse mediante patrones múltiples y diferentes de pensamiento, y cada uno es una simplificación de la realidad

Fuente: Adaptado de Noorgard y Sikor (1995:16)

Bajo este paraguas y como respuesta a la crisis ambiental y social comentada, la Agroecología centra sus procesos epistemológicos en aquellos contextos donde se produce un manejo de los recursos naturales. En palabras de Toledo (1993: 202), uno de estos contextos serían las unidades rurales de producción, que se sitúan entre el medio natural más o menos antropizado y la sociedad[13].

La Agroecología plantea la necesidad de encontrar soluciones estructurales a los problemas que afectan a estos espacios, sea cual sea el lugar donde se ubican. Para ello,

[13] La Agroecología ha empezado a centrar su atención, recientemente, en lo que ha denominado la Agricultura Ecológica urbana. En un sentido amplio, la Agroecología propone trabajar en todos aquellos contextos que se relacionan de una u otra forma con los sistemas agroalimentarios. Sin embargo, en el presente desarrollo doctoral, nos hemos centrado en el ámbito rural ya que desde este surgió el planteamiento del problema que da origen a la investigación.

es necesario reconocerles una serie de características que van más allá de su productividad, tales como: su condición de fuentes de salud individual, colectiva y ambiental; ser contextos de recuperación de economías locales al servicio de la sociedad; ser regeneradores de tejido social como fuente de sustentabilidad en lo social, lo económico y lo ambiental; o su potencial de contextos de pedagogía colectiva (Sampeu, 2001: 538).

Las propuestas agroecológicas plantean modos de manejo ecológico de los recursos naturales, que se basan en *formas de acción social colectiva* (Sevilla, 2006a:15). A través de estos modos se permite el despliegue de las *potencialidades endógenas* de los territorios y de los grupos humanos que los habitan. En esta línea, la Agroecología pretende investigar las herramientas y fomentar procesos que permitan desarrollos alternativos en los ámbitos de la producción agropecuaria y forestal y de las relaciones con el contexto social en el que se desarrolla. De esta forma, busca formas de producción y consumo que eviten las causas de la crisis social y ecológica identificada.

2.1.1. Las dimensiones de la Agroecología

Para facilitar la aproximación a cualquier proceso rural y agrario, desde las premisas de la Agroecología, Ottmann y Sevilla Guzmán (2004, 2005, 2006b) proponen incorporar dos dimensiones complementarias entre sí:

a. La *dimensión ecológica y técnico-productiva*, que representa todos aquellos elementos basados en los aspectos agronómicos de la producción, bajo criterios agroecológicos.
b. La *dimensión socioeconómica*, que envuelve todos los elementos relacionados con el acceso a los medios de vida en los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Asimismo, incluye las formas organizativas asociadas a los modos de producción y de circulación de los productos agrarios. Como veremos más adelante, es en este ámbito donde se enmarca el elemento clave de esta investigación.

El funcionamiento de estas dos dimensiones en la realidad está enmarcado por lo que Ottmann (2005: 26-30) llama dimensión *política y cultural*, que contempla las relaciones de poder que se establecen en el contexto sociopolítico donde se desarrolla la actividad agraria. Pone la atención en la capacidad de incidencia de los diferentes actores sobre las relaciones en el entramado social y económico que se establece así como con la naturaleza y el medio natural (Garrido Peña, 1996; Martínez Alier, J. 1998).

Lo que se pretende dilucidar con esta clasificación es la necesidad de incorporar, por ejemplo, en el análisis ecológico de los agroecosistemas la componente antropológica, lo que significa considerar las formas de manejo de los recursos naturales llevadas a cabo desde el conocimiento tradicional en las diferentes culturas, en un agroecosistema determinado. Dicho de otro modo, esta clasificación analítica responde a la consideración del territorio desde el punto de vista de su unidad funcional: el ecosistema que puede considerarse desde una perspectiva natural; cuando ya ha sido artificializado

para obtener el acceso a los medios de vida, como agroecosistema y, en última instancia; con la aparición de la huella de la identidad específica de un grupo humano, como etnoecosistema.

La cuestión cultural y política del manejo de los recursos naturales

La Agroecología parte de la consideración de que toda acción, investigación o decisión, ya sea en el ámbito técnico-productivo o en el económico-social, está influenciada por el contexto político y cultural en el que se desarrollan o desde el que se impulsan. Por esta influencia, la Agroecología plantea promover procesos que respondan a los contextos locales en los que se desarrollan y no supongan una imposición exógena de lógicas o modos. Esto significa facilitar procesos que fomenten la autonomía, el control y las capacidades endógenas de los territorios y colectivos. De esta forma, se construyen mecanismos para definir localmente objetivos y se democratizan los procesos epistemológicos, tanto en su planteamiento como en su desarrollo. Incorporar estas premisas a la ciencia supone: por un lado, desarticular estructuras verticales de poder y facilitar interrelaciones de tipo horizontal, entre los distintos actores que intervienen en un territorio; y por otro lado, la búsqueda de la equidad en los grupos sociales donde se investiga – actúa, para reducir la desigualdad social considerada por Ottmann (2005:28) como *enfermedad ecosistémica.*

Un objetivo central de la Agroecología lo constituye obtener un mayor grado de autonomía local en el funcionamiento de los procesos socioeconómicos y productivos. De esta forma, se persigue minimizar la dependencia de la agricultura respecto de medios de producción externos y maximizar lo localmente accesible. En ocasiones, cuando esta dependencia se encuentra institucionalizada, los procesos agroecológicos pueden suponer una salida de los marcos legales establecidos. En estos casos, requerirán un cambio en los contextos reglamentarios e institucionales en los que se desarrollan[14].

Bromley planteaba (1985, citado en Aguilera, 2001:461) que: "*la política pública no es ni más ni menos la redistribución de las ventajas entre los miembros de la sociedad*". Los valores que subyacen a la política establecida fomentarán un tipo u otro de redistribución de las ventajas de la misma; generando unas relaciones determinadas entre sociedad y naturaleza. En este sentido, una de las principales causas de la crisis ambiental detectada en la segunda mitad del s. XX fueron las relaciones legales institucionalizadas, que dieron cobertura al uso indiscriminado de técnicas de naturaleza industrial dentro del manejo de los recursos naturales (Aguilera, F., 2001: 461). Ello respondía a unos valores donde predominaba la lógica del lucro frente a la regeneración del deterioro causado al artificializar el manejo de los recursos naturales.

En el marco político y cultural que propone la Agroecología es imprescindible denunciar las acciones de la *modernización ecológica*, denominada también como el discurso ecotecnocrático, propuestas desde las políticas públicas en las últimas tres décadas. En estos contextos y en numerosas ocasiones, las formas de acción agroecológica representan un cuestionamiento a las instituciones públicas y al *orden*

[14] El tema central de esta tesis doctoral es un claro ejemplo de esto: el único mecanismo de garantía para la producción ecológica, reconocido a nivel legal en toda la Unión Europea, es un sistema de certificación que excluye otro tipo de propuestas de carácter participativo.

económico imperante (Leff, E. 2002: 47). Se presenta, desde esta perspectiva, la disyuntiva entre actuar sobre la redistribución de las ventajas en la sociedad, incidiendo sobre la propia política pública en sí; o salir de ella para construir procesos fuera del sistema establecido. Esta segunda opción es lo que, en ocasiones y como plantea Ottmann (2005: 29), puede fomentar acciones - propuestas que necesiten romper los marcos de la legalidad.

El cuestionamiento a los órdenes establecidos a nivel institucional puede provenir de dos categorías culturales y sociales diferentes, adoptando la nomenclatura planteada por Toledo (1993: 52-53): los ámbitos *premodernos* y los *postmodernos*[15]. Ambos coinciden en construir alternativas a los marcos públicos y legales establecidos en el ámbito del manejo de los recursos naturales. Sin embargo, ambas posturas llegan a estos posicionamientos desde motivaciones y realidades diferentes.

Los premodernos, a los que podemos identificar con comunidades agrícolas tradicionales, se sitúan en aquellas culturas o grupos donde los valores, prácticas y acciones de la modernidad han penetrado sólo parcialmente. Se caracterizan por basar los procesos productivos en el trabajo familiar y por un grado de autoconsumo importante. En estos contextos, el núcleo familiar es quien decide sobre la comercialización de la producción. Estos ámbitos mantienen unas relaciones de intercambio fuera del mercado que les dan estabilidad y les permiten su reproducción a lo largo del tiempo. Los factores de producción (la tierra, los animales, las herramientas e incluso el trabajo humano, entre otros) representan valores no crematísticos, no mercantilizables. Las relaciones de intercambio se realizan en base a otros valores, más vinculados con aspectos religiosos o sociales, lo que hace que las interacciones de estos grupos estén poco capitalizadas.

Existen diferentes grados de modernización en los grupos que se pueden considerar como tradicionales o premodernos, es decir, diferentes grados de permeabilización a los principios de la economía capitalista. Sin embargo, en todos ellos, los mecanismos de acceso a la tierra, de manejo del trabajo familiar o comunitario, o la mayor o menor dependencia de capital externo son planteados desde concepciones y cosmovisiones centenarias[16].

El rol de la Agroecología, en estos contextos, se centra en el rescate y revalorización del conocimiento de estos grupos. Se persigue, con esto, una doble finalidad: a) proteger los ámbitos premodernos aún existentes; b) promover procesos de recuperación de estas tecnologías y conocimientos, en aquellos territorios donde se esté dando un proceso de desaparición.

El segundo contexto en el que la Agroecología empieza a desarrollarse responde a una

[15] Esta clasificación puede resultar simplista, reduccionista e incluso determinista. Justificamos su utilización en base a lo que Villasante (2006: 152) plantea en torno a las matrices y clasificaciones. Si bien reconocemos que sólo a través de la consideración de un pluralismo de causas podemos entender cualquier fenómeno, defendemos la utilidad de estas clasificaciones como facilitadoras en los procesos epistemológicos.

[16] El interés por preservar y potenciar estos sistemas fue lo que impulsó el surgimiento de la Agroecología como enfoque científico en Latinoamérica, en la década de los 70.

cuestión de rebeldía ideológica y política: es a lo que se denomina los ámbitos postmodernos. Estos ámbitos están integrados por movimientos sociales y *contraculturales* (Toledo, 1993:53). Su estrategia, para resolver la crisis ambiental y social percibida, se traza en base a generar cambios estructurales en las relaciones dentro de la sociedad y con la naturaleza. Estos contextos se construyen en base a la idea de fomentar relaciones de solidaridad, colaboración y confianza en el medio rural y en el ámbito agrario. Asimismo, plantean la generación de espacios alternativos, donde recuperar modos agroecológicos de manejo de los recursos naturales y de circulación de productos. Estas propuestas no nacen de una realidad de identidad cultural amenazada ni tampoco de la necesidad de garantizar una seguridad alimentaria, como puede ser el caso de los contextos premodernos. El desarrollo de la Agroecología en estos contextos responde a una visión global de los problemas, fundamentalmente ambientales, que son interpretados como una consecuencia directa de modos de manejo industrializados y de procesos de intercambio desequilibrados introducidos por la lógica de funcionamiento neoliberal. La problemática postmoderna se traduce en: la desaparición del tejido social rural; el dominio de empresas transnacionales y la dependencia de los sistemas productivos con respecto a actores externos; la marginación y la "crisis de identidad" de espacios y regiones rurales frente a lo urbano.

El rol de la Agroecología, en estos contextos, se centra en fomentar procesos endógenos en los territorios que permitan recuperar el tejido social y la identidad rural amenazada.

La dimensión ecológica y técnico-productiva del manejo de los recursos naturales

La Agroecología considera que un sistema agrario o agroecosistema[17] debería funcionar bajo procesos ecológicos similares a los ecosistemas naturales, para garantizar un equilibrio y su estabilidad. De esta forma, plantea modos de manejo y técnicas a través de los cuales la intervención de la persona respeta estos procesos. La ciencia agronómica no ha seguido en multitud de ocasiones estas pautas de orientación; por el contrario, ha intentado maximizar los rendimientos con la utilización de agroquímicos cuyo impacto se ha revelado a largo plazo sumamente perjudicial. Consecuentemente, los modos de manejo agroecológicos se alejan de la agricultura industrializada: aunque ambos reducen la madurez y el equilibrio de los agroecosistemas, a través de una simplificación de sus estructuras, lo hacen de muy distinta manera. Los primeros permiten una acción regenerativa; mientras que los segundos eliminan la mayor parte de los procesos que de forma natural se daban en los ecosistemas preagrarios de los que vienen.

Los modos de manejo y las técnicas agroecológicas se basan en la teoría ecológica. Como ya señalara Odum (1969), los ecosistemas son unidades que intercambian materia y energía con su entorno: reciben recursos y elementos del hábitat donde se desarrollan y liberan otros. Esto implica que se ven afectados por todo lo que les rodea, en términos

[17] Esta nomenclatura es utilizada por Gliessman (2002) al considerar que cualquier finca en producción supone una antropización de un ecosistema, que es transformado para fines agrarios. De esta forma, se puede considerar que se convierte en un agroecosistema. Esta denominación permite incidir en que esta antropización no debe hacernos creer que con ello se pierda el carácter de ecosistema, y por lo tanto se le puedan aplicar los principios y conocimientos de la Ecología

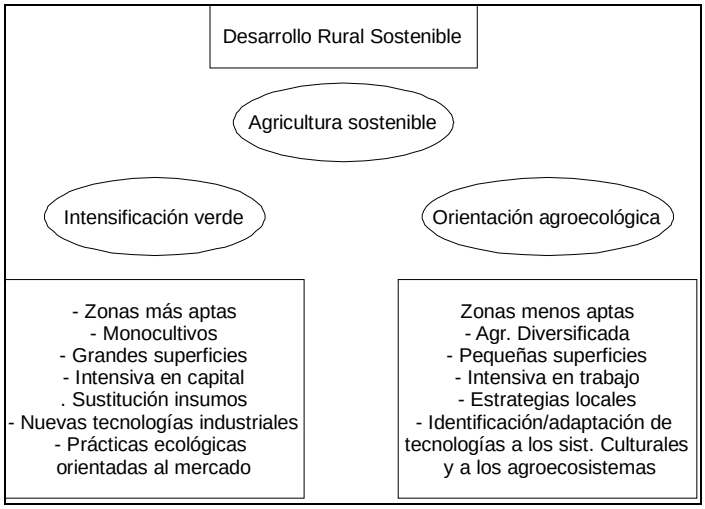
de procesos de intercambio de materia y energía; por ello, para su estudio es difícil establecer sus límites físicos. De este modo, la Agroecología interpreta el funcionamiento de los ecosistemas naturales para diseñar el funcionamiento de los agroecosistemas; y se basa en las interrelaciones existentes entre ambos para entender que una ruptura o desequilibrio en los flujos de materia y energía en alguno de ellos afectará al resto. En esta misma línea, Gliessmann (2002) da una importancia decisiva a las determinaciones que se toman a la hora de intervenir en ecosistemas para transformarlos en agroecosistemas con fines productivos. Los cambios que se generen en este ecosistema estarán estrechamente ligados con la circulación de nutrientes y las transferencias de energía que se desarrollen en el metabolismo general del sistema, y por lo tanto afectarán recíprocamente al mismo.

Toledo (1993: 144-145) plantea que el diagnóstico técnico que se pretenda realizar de los agroecosistemas deberá incorporar aspectos relacionados con la trayectoria histórica y cultural seguida por el agroecosistema y su entorno, para poder comprender mejor su estado actual (como parte de una sucesión ecológica) y los procesos de transformación a impulsar. Esta visión del agroecosistema que aporta la Agroecología se ha visto nutrido por dos construcciones previas: por un lado, la de los movimientos ambientalistas, que elaboraron una visión crítica hacia la agronomía convencional; y por otro lado, la Ecología como ciencia, prestándole su utillaje conceptual y teórico (Guzmán et al., 2000).

En nuestro contexto geopolítico, la Unión Europea, el establecimiento de una regulación comunitaria sobre el sector de la producción ecológica en el año 1991 supuso una exclusión del modo agroecológico de manejo de los recursos naturales. Esta exclusión se materializa en la definición y caracterización que se establece en torno a este tipo de manejo agrario, así como en los mecanismos públicos que se derivan de esta regulación, en torno a los apoyos establecidos y los procesos de control. De esta forma, establece una producción ecológica basada fundamentalmente en una sustitución de insumos de síntesis química por otros naturales, así como en unos mecanismos de apoyo y de control que evalúan apenas la ausencia de residuos químicos en los productos finales.

Así, el marco de legalidad que ofrece el reglamento europeo resulta no sólo insuficiente para satisfacer la visión agroecológica sino, y lo que es peor, perjudicial para su desarrollo y su reconocimiento. Esta constatación es de una trascendencia importante ya que los modos de manejo de tipo agroecológico son desconsiderados y penalizados a nivel público en nuestro contexto. Las consecuencias directas de esta estrecha visión oficial se traducen, asimismo, en el fomento de unas políticas públicas que mantienen el discurso ecotecnocrático de la sostenibilidad ya descrito, frente a procesos de índole agroecológica. En la figura siguiente, representamos las implicaciones que uno y otro modo de entender el manejo ecológico de los recursos naturales tienen en las políticas públicas.

Figura 1.- Comparativa entre el manejo de los recursos naturales concebido desde la "intensificación verde" y la Agroecología



Fuente: Adaptado de Caporal, F. 1998: 440

La intensificación verde supone, como diferencia respeto del manejo industrial de los recursos naturales, el fomento de unas prácticas ecológicas basadas fundamentalmente en una sustitución de insumos. Sin embargo, perpetúa las propuestas de la intensificación en capital; la industrialización de las prácticas; los monocultivos y la rentabilidad económica por encima de otros aspectos productivos. Sin embargo, la propuesta agroecológica supone fomentar procesos que se adapten a cada territorio, a través de una diversificación de las prácticas agrarias; utilizando tecnologías adaptadas y propias a los agroecosistemas y priorizando la mano de obra frente a tecnologías de tipo industrial.

La dimensión socioeconómica del manejo de los recursos naturales

El análisis de los sistemas agrarios se completa, desde la Agroecología, incorporando la dimensión socioeconómica. Las cuestiones inmersas en esta perspectiva están relacionadas con las estructuras sociales y económicas que envuelven al sistema productivo o al agroecosistema. Y responde a lo que Gliessmann (2002:319) denomina sistema agroalimentario, esto es, el conjunto de características que definen las relaciones entre la producción, la comercialización y el consumo de los productos agrarios. Se trata de estructuras más grandes que el propio agroecosistema, que influyen directamente en su configuración y modo de funcionamiento, así como en sus oportunidades de desarrollo y su sustentabilidad (Faeth, 1993).

De esta forma, la Agroecología asume que las prácticas sostenibles de manejo de los recursos naturales dependen tanto de aspectos técnicos y ecológicos, como del establecimiento de un conjunto de componentes sociales y relacionales, organizadas de forma diferente a como propone el discurso industrializador (Gliessman, 2002). El estudio en profundidad de estas componentes y relaciones es el foco de interés de la dimensión socioeconómica de la Agroecología. Algunos de los elementos básicos que componen esta dimensión son: la noción de *equidad* en las relaciones, sean del tipo que

sean; la noción de *calidad de vida*, aspecto tan subjetivo que deberá ser definido por las propias comunidades; el *grado de satisfacción* con la situación presente, que vendrá muy determinado por la cosmovisión en torno a la calidad de vida y la situación de partida; la *eficiencia*, como elemento clave para una reproducción social perdurable en el tiempo; y la *estabilidad cultural* de la comunidad y su entorno (Gliessmann, 2002; Hecht, 1999).

Cuadro 2.- Algunos aspectos importantes del sistema social que interactúa en cada nivel de los sistemas alimenticios

Niveles de los sistemas alimenticios	**Aspectos a considerar**
Condiciones sociales de sostenibilidad	- Equidad - Calidad de vida - Satisfacción - Eficiencia - Estabilidad cultural
Parámetros sociales de la función del agroecosistema	- Dependencia de fuerzas externas - Relaciones de tenencia de la tierra - Papel de la producción de alimentos en la economía - Calidad de los alimentos
Componentes sociales de la estructura y función del agroecosistema	- Agricultores y trabajadores agrícolas - Propietarios - Consumidores de productos alimenticios - Conocimiento técnico y práctico - Conocimiento ecocultural
Fundamentos del sistema social	- Formas y fuerzas de cómo los actores humanos diseñan y manejan los agroecosistemas - Componentes culturales: valores, formas de vida, lenguaje - Componentes sociales: estructuras de clase, instituciones sociales - Componentes económicos: fuerzas del mercado, posición en la economía global - Componentes políticos: políticas legislativas, estructura de gobierno

Fuente: Adaptado de Gliessmann (2002: 324)

Destacamos que entre los fundamentos del sistema social de un agroecosistema presentados en el cuadro anterior existen parámetros y componentes:

a. Por un lado, básicamente sociales, en los que se contemplan aspectos relacionados con la tenencia de la tierra y las relaciones entre propietarios y trabajadores agrícolas; las relaciones entre la producción y el consumo; los canales de comercialización que se establecen y las relaciones de confianza más o menos directa que se fomentan, etc.

b. Por otro lado, básicamente económicos, en los que se considera al agroecosistema en calidad de productor de alimentos y señalan el lugar que ocupa en la economía del entorno; la dependencia del mismo respecto de fuerzas externas; la interrelación entre esta dependencia, la autonomía y la capacidad de decisión económicas y sociales del sistema agrario, entre otros[18].

En este sentido la Agroecología hace suya la construcción que desde la Economía Ecológica se plantea en torno a la insustentabilidad del tratamiento que la economía neoclásica (paradigma vigente) hace de los recursos naturales. Mientras la economía convencional es fundamentalmente crematística, es decir, basa sus análisis en los precios y en los intercambios basados en los valores monetarios de los bienes y servicios; la Economía Ecológica plantea un análisis económico en términos de los flujos de energía y de materiales, tanto de entrada como de salida, de los agroecosistemas (Martínez Alier y Roca Jusmet, 2000). De esta forma se dan un consumo y una generación de residuos determinados en función del tipo de manejo que se practique. En este sentido, la Economía Ecológica vendría a explicar y analizar elementos enmarcados en la dimensión ecológica y técnico productiva[19]. Igualmente, como veremos después, la Economía Ecológica en su aplicación adquiere la praxis de la Ecología Política.

El objetivo fundamental de los elementos que se enmarcan en la dimensión socioeconómica de la Agroecología se podría resumir en la búsqueda de la nivelación de las desigualdades, elevando la calidad de vida de los sistemas sociales. Las estrategias de evolución y cambio deben perseguir obtener un mayor grado de bienestar de la población, que deberá ser definido por las propias comunidades. Para alcanzar este objetivo, la Agroecología no trata de llevar soluciones construidas a las comunidades, como en muchos casos se han entendido los procesos de desarrollo rural y local, sino de detectar aquellas soluciones que pueden surgir localmente, con los recursos y las cosmovisiones endógenos.

Para poder operativizar este objetivo, la Agroecología basa sus procedimientos en facilitar procesos de acción colectiva, que desarrollen el potencial endógeno transformador que todas las sociedades / comunidades poseen. De esta forma y como plantea Ottmann (2005), la Agroecología apuesta por *acompañar* y animar procesos locales de transformación. Siguiendo con esta autora, son tres las características de cualquier proceso agroecológico, atendiendo a los elementos de carácter social y económico:

[18] Cabe destacar, tal y como se ha planteado anteriormente, que este autor relaciona directamente con las cuestiones económicas y sociales los aspectos políticos y culturales que envuelven al agroecosistema (políticas legislativas, estructuras de gobierno, valores, formas de vida).

[19] Sobre la producción científica en torno a la Economía Ecológica cabe citar a Martínez Alier y José Manuel Naredo, quienes establecen los fundamentos teóricos de esta nueva rama de conocimiento desde la década de los años 80 (Mnez Alier, 1987; Mnez. Alier, 1998; Naredo, 1987; Naredo 1994). En el texto de 1994 (pp. 384), Naredo define la Economía Ecológica como la "ciencia de la gestión de la sostenibilidad". En la configuración de la Economía Ecológica en el Estado español tiene especial importancia la obra de Naredo y Campos (1980) sobre los balances energéticos de la agricultura española.

a. Ser generador de autonomía de gestión y control: los propios habitantes de la zona deben ser los protagonistas en la gestión y el control de los elementos clave de los procesos de transformación.
b. Favorecer la minimización de externalidades negativas en las actividades productivas, a través, por ejemplo, de redes locales de intercambio de insumos, o de redes locales de generación de confianza sobre los productos ecológicos, como elementos de resistencia y enfrentamiento al control externo ejercido por actores ajenos al contexto local.
c. Potenciar los circuitos cortos de comercialización, acercando los procesos de producción, distribución y consumo, y estableciendo redes de conocimiento mutuo y confianza entre los distintos actores de la cadena.

Labrador y Sarandón (2001: 26 - 28) completan estas características estableciendo otros indicadores que favorecen la perdurabilidad en los ámbitos económico y social: la utilización racional de los recursos y la energía; la potenciación de valores éticos; el mantenimiento del equilibrio territorial o la revalorización del trabajo del agricultor. Si los procesos agroecológicos fomentan estas características y elementos, estarán favoreciendo la capacidad reproductiva del agroecosistema a nivel sociocultural, es decir, aumentarán las oportunidades del sistema de reponerse y sustentarse (Guzmán et al., 2000).

La Economía Solidaria como paradigma en construcción para su incorporación a la Agroecología

La Agroecología, como enfoque científico que trabaja sobre nuevas premisas con respecto a la ciencia moderna[20], requiere de la reconstrucción y redefinición de algunos conceptos que, tal y como se han construido en el paradigma dominante, no se adaptan a la visión agroecológica de los sistemas agrarios y de las relaciones entre sus distintos componentes.

En su dimensión socioeconómica, podemos definir la contradicción con el pensamiento convencional de la Economía en base a que este ha establecido un sistema que ha ignorado sus vínculos con el sistema ambiental y el sistema social (Kapp, 1966 en Aguilera ed., 1995: 150). Esta contradicción promueve la necesidad de empezar a construir premisas alternativas que se contrapongan al pensamiento económico dominante y que incorporen las interrelaciones entre la Economía y los sistemas sociales y ambientales. Las dificultades en la construcción de estos nuevos paradigmas económicos son previsibles fundamentalmente por dos razones:

a. Porque requieren incorporar una visión sistémica de la realidad, que supone mayor complejidad, lo que exige un proceso de maduración largo;
b. Porque supone una ruptura académica, que genera rechazo de la ciencia normal, ya que implica cambios estructurales y destrucción de rutina y de complacencia (Aguilera, 2001:449).

[20] Ver cuadro 1 del presente capítulo

Las críticas a este pensamiento económico dominante han venido de otros autores, entre los que podemos destacar dos premios Nóbel de Economía: Hicks (1979), quien incide en la simplificación que este paradigma económico hace de la realidad y por lo tanto su incapacidad para explicarla y dar respuestas acordes con las necesidades detectadas; o Coase (1998), quien destaca la lejanía que este paradigma ha ido alcanzando con respecto a la realidad y su incapacidad para captar lo que de ella emana y se demanda[21].

En el ámbito del estudio y el análisis de los recursos naturales y el Medio Ambiente, así como de las relaciones entre estos y la sociedad y como ya hemos comentado, la propuesta en la que se basa la Agroecología es la de la Economía Ecológica.

A nivel de relaciones sociales y la interacción entre estas y la economía, planteamos un paradigma en construcción que puede aportar gran parte de su construcción teórica y práctica: la Economía Alternativa y Solidaria. En este sentido, el paradigma económico criticado (el convencional) entiende la producción sólo en el ámbito de los valores de cambio y la riqueza como la reventa con beneficio y la acumulación de capital (Aguilera, 2001). Asimismo, basa su funcionamiento y regulación en el mercado, que pasa de su sentido original de herramienta o foro de intercambio a convertirse en una institución que genera de forma natural una nueva equidad. El *mercado*, así entendido, traduce las bases conceptuales del paradigma económico que lo institucionaliza. De esta forma, se impone el intercambio de productos y la innovación tecnológica como fuerzas inexorables del ideal *moderno* de organización de todos los aspectos humanos, sociales y naturales. Así, el "*homo faber*" y el "*homo oeconomicus*" se convierten en modelos universales y la eficiencia y la riqueza pasan a ser un fin en sí mismos (Berthoud, 1992: 79 – 80). La mejora de la calidad de vida pasa por transformar cualquier recurso en producto y cualquier producto en mercancía.

Esta noción de mercado, basada en la ley de la oferta y la demanda y el axioma de la maximización de beneficios, fomenta la expansión y deslocalización geográfica de los intercambios. El paso de un mercado como espacio localizado y físico a un mercado intangible y casi sin límites genera un cambio profundo de valores y modos de operar. Dichos cambios provocan ineluctablemente un modo de actuar uniformado y la destrucción de identidades. Esto ha marginado otros modos de entender el manejo de los recursos naturales y las relaciones de intercambio, donde aparecen componentes éticos que la asepsia científica de la economía neoclásica rechaza.

Los efectos de este paradigma económico, hegemónico tras la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, se han resentido especialmente en los países periféricos (Coraggio, 2007), aquellos ubicados fuera de los centros de poder y alto nivel económico, ya que su lógica es incapaz de integrar *sociedades justas* ni *reconocer y desarrollar capacidades*. En palabras textuales, Coraggio (2007) apunta a que: "*esta economía capitalista periférica no va a integrar por sí sola sociedades justas, que requieran y permitan el reconocimiento y el desarrollo pleno de las personalidades y*

[21] Existe una aportación interesante de Coase (1994: 65 – 124) en relación al problema del coste social de las actividades privadas, en las que justifica la necesidad de un cambio de enfoque en el análisis, con respeto al que se plantea desde la economía convencional, para poder abordar esta problemática de forma realista.

capacidades de todos los individuos y comunidades. Se requiere una política democrática y poder social de las mayorías".

Las propuestas a un paradigma económico alternativo han venido de distintas fuentes, a raíz de las críticas vertidas. Kapp (1966 en Aguilera, ed. 1995: 157) ya establecía la necesidad, por ejemplo, de incluir en los conceptos de producción y riqueza valores no monetarios. Esto implica que incorporen, en sus cómputos, no sólo las mercancías que son cambiadas en los mercados, sino también aquellos bienes y servicios que son útiles y necesarios socialmente. De esta forma se separan los conceptos de riqueza y de producción de los conceptos de intercambio y de valor de cambio (Aguilera, 2001).

El nuevo paradigma económico que proponemos, la Economía Alternativa y Solidaria, se ha construido sobre la base de experiencias comunitarias que, como plantea Gaiger (2005), no entraban en ninguno de los modelos dominantes de la segunda mitad del s. XX (el capitalista y el socialista). La Economía convencional no ha considerado apenas su estudio, al interpretarlos como focos de defensa y resistencia y no como alternativas reales a los pilares económicos predominantes.

El origen de estas propuestas como paradigma se puede ubicar hacia la década de los ochenta. Conforma su cuerpo teórico y propositivo sobre la base de diversas corrientes de economía alternativa, que venían aplicando diferentes movimientos sociales en los distintos continentes y que recibían diversos nombres (Guerra, P., coord., 2007): Economía Solidaria, de la Solidaridad, Popular, Social, Social y Solidaria, Comunitaria, del Trabajo, de la Vida, etc.

Con motivo de la celebración del II Foro Social Mundial en Porto Alegre, en el año 2002, los conferenciantes del plenario inaugural del *Espacio de Economía Popular y Solidaria* acuerdan consensuar una denominación común para crear fuerza. El concepto que parece ser el más reconocido e incluyente fue el de *Economía Solidaria*. Desde entonces, este concepto ha ido cogiendo fuerza y está siendo generalizado y globalizado como paraguas que permite la construcción de un contexto teórico común. El concepto que planteamos incorpora, además, la noción de Alternativo. De esta forma, basamos este paradigma en construcción en dos adjetivos genéricos para la Economía:

a. *Solidaria*, en el sentido de concebir la economía sustentada en valores humanos y éticos, basados en un compromiso de solidaridad interna y con el entorno socioeconómico y ecológico.
b. *Alternativa,* en el sentido de concebir la economía con un compromiso transformador, de construcción de alternativas tanto económicas como sociales reales.

La Economía Alternativa y Solidaria concibe el conjunto de actividades de producción, comercialización y consumo a través de mecanismos democráticos, protagonizados por compromisos ciudadanos tanto a nivel local como global (Fraisse et al., 2002). De este modo, este paradigma económico propone supeditar las actividades y relaciones de tipo económico a: 1º. criterios éticos, sociales y ambientales de sustentabilidad; 2º. dinámicas de reciprocidad y solidaridad, que fomenten la democratización de todos los

niveles y; 3º. la creación de puentes entre los intereses individuales y los intereses colectivos.

Las iniciativas organizacionales que se enmarcan en este paradigma surgen para crear sus propios recursos de trabajo o para acceder a bienes y servicios, basando sus procedimientos en los principios de reciprocidad, solidaridad y de articulación entre intereses individuales y el interés colectivo. El contexto en el que se están desarrollando son espacios que genera el sistema económico hegemónico que quedan excluidos o se excluyen del mismo por tres motivos: bien por estar *desamparados* por el mercado, al ser este un mecanismo de regulación que considera sólo las demandas económicas y no las necesidades de las personas[22]; bien por quedar *desprotegidos* por el Estado o; bien por estar *desilusionados* con las utopías tradicionales (Lisboa, 2001).

En este sentido, estas iniciativas surgen bien por necesidad, bien por ideología o identidad (Defourny, 1993). Por *necesidad*, en contextos de desempleo y exclusión donde es urgente a nivel vital construir otras iniciativas económicas encaminadas a satisfacer necesidades básicas no cubiertas, a través de otros modos y racionalidades y; por *ideología o identidad*, como proyectos políticos que surgen de actores sociales que se reconocen en la inquietud y el rechazo en torno al modelo económico dominante y se articulan con la convicción de construir alternativas al mismo. La dimensión de *identidad – ideología* es importante en el paradigma de la Economía Alternativa y Solidaria, ya que sin ella se reduciría a una propuesta asistencialista, a través de la cual tratar de amortiguar los efectos *perversos* del sistema económico hegemónico[23].

Las propuestas que incorpora este paradigma se pueden resumir en los siguientes elementos[24]: a. Repensar el modelo de sociedad; b. des-construir conceptos de uso desconcertante e interesado; c. establecer criterios éticos diferenciales propios; d. poner a la persona como eje y sujeto de la actividad económica; e. preservar la autonomía; f. impulsar la auto-gestión económica y social; g. supeditar la actividad económica a la utilidad social, cultural, medioambiental; h. respetar y fomentar la propiedad social; i. preservar la territorialidad, el arraigo en el territorio; j. fomentar la democracia económica y social y la participación; k. discernir el lucro individual, para que éste sea colectivo y revierta en la colectividad; l. impulsar la cooperación y solidaridad.

Los elementos básicos diferenciales de las iniciativas empresariales solidarias son la quiebra de la división social del trabajo y de la apropiación unilateral del excedente, basándose en un régimen de propiedad común y de autogestión. Son estructuras que fomentan nuevos niveles de participación y satisfacción, humanizando las relaciones entre producción y consumo, y atendiendo a aspiraciones no monetarias, al mismo nivel de importancia (Gaiger, 2005).

[22] Conferencia de Michel Merlet, en el *I Forum Mundial por la Reforma Agraria*, celebrado en Valencia en el año 2004

[23] Resulta interesante remarcar el paralelismo entre la Agroecología y la Economía Alternativa y Solidaria, en cuanto a que incorporan, en ambos casos, una dimensión política (ideológica o de identidad).

[24] Conversación mantenida con Carola Reintjes, en abril de 2005. Carola Reintjes es socia fundadora de la Coordinadora Estatal española de Comercio Justo y de la Red Estatal de Economía Alternativa y Solidaria (REAS); asimismo, es Presidenta de IFAT (International Fair Trade Association) Europa.

El decálogo o carta de la Economía Alternativa y Solidaria sobre el que se basan este tipo de propuestas plantea los siguientes principios[25]:

- Igualdad: Satisfacer de manera equilibrada lo intereses respectivos de todos los protagonistas (trabajadores, empresarios, socios de la asociación o accionistas de la empresa, clientes, proveedores, comunidad local, nacional e internacional, etc.)
- Cooperación: Favorecer la cooperación como un valor más humano, más rentable y más eficaz, en lugar de basarnos en la competencia dentro y fuera de la organización.
- Empleo / Trabajo: El objetivo es crear empleos estables y favorecer el acceso a personas desfavorecidas o poco cualificadas, ya sea vía contratación o a través del autoempleo gestionado por ellas mismas. Asegurar a cada miembro del personal condiciones de trabajo y una remuneración digna, estimulando su desarrollo personal y su toma de responsabilidades.
- Sin ánimo de lucro: Que todos los beneficios que la buena gestión generen se empleen para mejorar los medios y seguir trabajando en la misma dirección, y nunca para repartir entre las personas gestoras o asociadas.
- Medio Ambiente: Favorecer acciones, productos y métodos de producción no perjudiciales para el Medio Ambiente a corto y largo plazo, de manera que el desarrollo pueda ser sostenible en el tiempo sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.
- Compromiso con el entorno: Estrechar lazos con la población cercana del territorio donde realizamos nuestras actividades productivas de manera que sea el conjunto de nuestro entorno el que avance a la par que nuestra iniciativa.

Existen numerosas construcciones reales de este paradigma económico: finanzas éticas, sistemas de intercambios locales, monedas sociales, comercio justo, cooperativas ecológicas, ecomensajería, cooperativas de consumidores – productores, redes sociales de garantía ecológica, servicios de proximidad, iniciativas educativas comunitarias, cocinas colectivas, gestión urbana participada, etc. Fue en el II Foro Social Mundial en Porto Alegre, en el año 2002, cuando se establece a nivel internacional un espacio específico destinado al encuentro de estas iniciativas. Este fue el inicio de la articulación en red, a nivel internacional, de este tipo de iniciativas que, desde ese año, organizan un espacio específico en los Forum sociales que se han ido celebrando en distintos ámbitos geográficos. No obstante, volviendo a Coraggio (2007) cabe decir que estas iniciativas microsociales si bien tienen potencial para mostrar opciones individuales o grupales y se están difundiendo, no tienen aún ni la escala ni la complejidad adecuadas. El gran desafío local y global es la capacidad de articulación de los diferentes sectores emergentes en redes y su capacidad de fortalecer las sinergias.

En suma, la Economía Alternativa y Solidaria aporta buena parte del contenido que la dimensión socioeconómica de la Agroecología contempla. Asimismo, la Agroecología representa la aplicación de las lógicas y principios de la Economía Solidaria a todo lo relacionado con el medio rural, la producción de alimentos, el sistema agroalimentario y la alimentación humana. En esta estrecha relación, cabe incorporar las aportaciones de la Economía Ecológica que, en su dimensión aplicada y al vincularse a los movimientos rurales, campesinos e indígenas, adquiere la dimensión de Ecología Política. En todos los casos, la dimensión política y cultural se plantea como eje trasversal para cualquier

[25] Ponencia marco presentada por Carola Reintjes en el Foro Social Mundial de 2005, celebrado en Porto Alegre, en la mesa inaugural del espacio temático "Economía Social y Solidaria"

iniciativa, proyecto o investigación. Con esta construcción pretendemos sentar las bases que explican el tipo de proyecto llevado a cabo a lo largo de la presente investigación. En efecto, se trata de plantear unos marcos y unos referentes para las relaciones de tipo económico que recuperen a las personas y al Medio Ambiente como objetivo central. Estas premisas, en el contexto de las producciones ecológicas y de las relaciones entre la producción y el consumo serán básicas para construir otros modelos de garantía de los productos que se intercambian como tales.

2.1.2. La Participación como elemento central de la investigación agroecológica

La participación es el concepto que permite traducir las premisas y los paradigmas sobre las que se basa la Agroecología, de una forma operativa. Supone concebir unos procesos epistemológicos construidos con la población beneficiaria de los mismos, no sólo como fuente de información, sino también como fuente de reflexión y de soluciones. De esta forma, se operativizan las bases sobre las que se construye la Agroecología, permitiendo la discusión y reflexión entre *lógicas plurivalentes* (Garrido Peña, 2006). Esto es, permitiendo un diálogo de saberes entre distintos tipos de conocimiento: desde el científico, al empírico, al proveniente de culturas y pueblos de identidad indígena. Sólo a través de mecanismos que permitan el encuentro, la reflexión conjunta y la elaboración colectiva de resultados y conclusiones podremos hablar de una verdadera *ciencia con la gente* (Funtowicz y Ravetz, 1993); rompiendo, de este modo, con el distanciamiento entre la población y la ciencia.

La participación es un medio a través del cual la Agroecología puede incorporar la dimensión político – cultural, en los procesos de investigación que se promueven. Como lo expresaban Caporal y Costabeber (2002:79), la dimensión política de la Agroecología está relacionada con los procesos participativos y democráticos que se desarrollan en el contexto de la producción agrícola y del desarrollo rural, así como con las redes de organización social y de representación de los diversos segmentos de la población rural. Establecer procesos epistemológicos de carácter participativo que impliquen esas redes y realidades locales permite: contemplar la contextualización y el subjetivismo como premisas; legitimar la investigación al basarse en procesos colectivos de reflexión y de construcción de propuestas y conocimientos; respetar las identidades culturales locales en los procesos de construcción y aplicación de nuevos conocimientos y; fomentar la autonomía y la autoorganización en los grupos y territorios donde se desarrolla la investigación, al construir procesos dialécticos que favorecen unas condiciones previas de autorreflexión y autoanálisis.

En este planteamiento epistemológico se elimina la noción de neutralidad de la ciencia (concepto criticado desde la Agroecología), que atribuye la condición de objeto a lo investigado: este elemento pasivo de la investigación clásica desaparece al pasar a ser considerado como sujeto activo. Así, es este quien plantea las necesidades sociales y las demandas a la actividad investigadora. Por lo tanto, debe existir una interacción y una planificación / realización de actividades conjuntas entre este y la persona investigadora. Dados los contextos en los que la Agroecología desarrolla su actividad, los nuevos sujetos activos serán miembros de las comunidades rurales o urbanas relacionados con

el manejo de los recursos naturales, cuyas formas de participación les hagan sentirse inmersos en las estructuras de producción, comercialización y consumo de productos agrarios.

A través de la participación, la propia investigación Agroecológica transforma las relaciones de poder internas entre personas investigadoras formales y sujetos locales. La participación se concibe como un mecanismo a través del cual estos sujetos locales adquieren *poder* para plantear sus demandas y conducirlas, a través de un proceso intelectual, a la búsqueda de soluciones (Ottmann, 2005). De este modo, las relaciones humanas y sus comportamientos pasan de ser analizadas desde una perspectiva naturalista, a trabajarlas desde un enfoque político y reflexivo.

Con este enfoque, la ciencia agraria deja de ser un proceso externo a la realidad que se acerca a ella para extraer información y a partir de ella trabajar y crear conocimiento. La realidad, con todos los actores y elementos que la componen, pasa a ser una parte activa en el proceso de investigación. Como plantean algunos autores (Funtowicz y Ravetz, 1993; Bermejo et al, 2003), se dejan de lado nociones como extracción de información o diagnósticos por parte de expertos, para dejar paso a nociones como procesos de reflexión conjunta entre investigadores y población rural, que dan lugar a interpretaciones, toma de decisiones y construcción de iniciativas de cambio conjuntas. Se operativiza, de esta forma, el concepto de ciencia con la gente.

Este paso, en un enfoque científico que trabaja sobre el manejo de los recursos naturales, es especialmente significativo. La Agroecología plantea, como diferencia sustancial con la Agronomía clásica, incorporar en el análisis de los agroecosistemas los contextos socio - políticos y culturales en los que se desarrollan. Pero, además, propone considerar estos contextos como elementos vivos, reflexivos y en evolución, rompiendo con la idea de estudiar categorías sociales, en función de las acciones y pensamientos que implican y el tipo de relaciones que establecen.

En el ámbito del manejo agrario y de los agroecosistemas, incorporar la participación como elemento clave supone reconocer otras formas de conocimiento (conocimiento práctico agrícola, medicinal, artesanal, etc.), consideradas por la ciencia moderna como secundarias (Funtowicz y Ravetz, 1993). Y, además, potenciar unos entornos sociales en el ámbito agrario críticos y activos, frente a sus problemas. De esta forma, se potencia la transformación de las tendencias acríticas y pasivas[26].

Hemos apuntado algunas características del concepto de participación al que nos referimos en el marco de la Agroecología (generación de espacios de reflexión y de acción conjunta, o reestructuración de las relaciones de poder, entre otras). Sin embargo, nos interesa profundizar en ellas, dada la diversidad de construcciones que, en torno a este concepto, se han trabajado. Para esclarecer la diversidad de enfoques, presentamos el cuadro siguiente.

[26] Sampeu (2001: 523) lo expresa con las siguientes palabras: "*ante la ciudadanía se abren dos caminos posibles (...). Por un lado, el (...) que le ordena que se limite a "producir, consumir y callar" desde una perspectiva acrítica (...). Por otro, (...) (el que le empuja) a reclamar nuestro derecho a servir a la humanidad en su evolución, y no a quienes la quieren poner de rodillas ante los intereses de unos pocos"*

Cuadro 3.- Tipología de la participación

Tipos de participación	Características
1. Participación manipulada	Se facilita la presencia de pseudo representantes de la población "beneficiaria", en un espacio oficial, sin haber sido elegidos para representarla. Estos representantes no tienen ningún poder real
2. Participación pasiva	Se comunica e informa a la población sobre lo que se ha decidido o se está realizando, por parte de los gerentes del proyecto – investigación
3. Participación por consulta	La participación se facilita a través de consultas, generalmente mediante respuestas a determinadas preguntas. Los problemas y el modo de obtener la información se definen externamente y, por lo tanto, el análisis.
4. Participación por incentivos materiales	La participación se facilita a través de una retribución en recursos. El diseño de la investigación y del proceso es externo.
5. Participación funcional	La participación se plantea para trabajar sobre determinados objetivos preestablecidos. Se trabaja en grupos, y se genera una cierta interacción que puede orientar determinadas decisiones. Generalmente, se desarrolla cuando las decisiones estructurales ya están tomadas.
6. Participación interactiva	Se establece una participación conjunta en el análisis y desarrollo del proceso. Se concibe la participación como un derecho, no como un medio para alcanzar unos objetivos. Son procesos de aprendizaje sistemáticos y estructurados
7. Participación mediante acompañamiento	Las personas actúan de forma conjunta, y reciben el apoyo de equipos externos, quienes respetan sus dinámicas de acción social colectiva, y complementan sus carencias tras ser demandadas por las personas participantes, y a través de procesos de aprendizaje colectivo. Las decisiones son responsabilidad de las personas participantes
8. Auto-movilización	Las personas participan, independientemente de equipos externos. Pueden acudir a ellos para cuestiones puntuales: fondos, asesorías concretas, etc. pero mantienen el control de todo el proceso y de los recursos.

Fuente: Caporal, F., 1998: pp. 452

Los enfoques participativos que plantea la Agroecología se ubican en los tipos 6, 7 y 8. El tipo 6, el de la participación interactiva, se adapta a grupos o territorios menos maduros a nivel de tejido social, es decir, donde hay menos cohesión grupal entre las personas habitantes del territorio. En estos contextos difícilmente surgirán procesos colectivos de forma espontánea, por lo que será necesario un impulso inicial. Los tipos 7 y 8, los de la participación por acompañamiento o la automovilización, se pueden aplicar en aquellos contextos maduros a nivel de cohesión social, con los que la Agroecología como enfoque científico se compromete apoyando y acompañando. Estos tres enfoques implican que la sociedad pasa de ser el objeto de estudio a ser escenario de la acción de agentes activos (Villasante, 2002). En todos los casos, la utilidad del equipo científico, aparte de impulsar, apoyar y acompañar los procesos a través de herramientas e instrumentos aptos para esto, se centrará en la capacidad de defender y

tratar de incluir de forma argumentada estas iniciativas en los marcos de la legalidad y las políticas públicas existentes.

Las principales deficiencias que se plantean sobre los 4 primeros tipos de participación (manipulada, pasiva, por consulta o por incentivos materiales) son: por un lado el establecer procesos de intercambio desiguales y desestimulantes entre la población y el equipo científico, ya que quien toma las decisiones, define el proceso y utiliza los resultados es este último; por otro lado, la incapacidad de estos mecanismos de construir procesos sociales posteriores positivos para los actores sociales involucrados, ya que no suponen ningún cambio real en la madurez del grupo social con el que se trabaja. Por sus características y métodos, son procesos susceptibles de ser manipulados externamente (Pretty, J.N., 1995). El tipo número cinco mantiene la posición de dominación de los agentes externos, pues las decisiones que quedan a disposición del grupo son secundarias y están subordinadas a otras ya tomadas previamente en otros ámbitos. La opción que tienen las personas invitadas a participar es influir en la puesta en práctica de estos procesos.

Facilitando tipos de participación interactiva, de acompañamiento o de auto – movilización, la Agroecología pretende promover y potenciar las capacidades de los propios protagonistas de los contextos rurales donde trabaja, para desarrollar y promover procesos. No significa, pues, contar con sus conocimientos para los procesos epistemológicos, sino considerar que ellos y ellas serán parte activa de los procesos de investigación, al ser las principales destinatarias de los mismos.

La idea de esta epistemología participativa, en la Agroecología, la expresan Noorgard y Sikor (1999:27) asumiendo que el poder de la acción generada con estos procesos se distribuye entre las personas implicadas, potenciando sus capacidades para dirigir la coevolución local entre sistemas ecológicos y sociales y manteniendo la retroalimentación entre ambos sistemas a través del tiempo.

Las herramientas metodológicas que derivan de estos principios facilitan que las propias comunidades y organizaciones sociales, que trabajan con el manejo de los recursos naturales, sean las fuerzas motoras de los proyectos agroecológicos. Y el objetivo último se centra en que la producción agraria se realice en contextos donde se protejan, colectivamente, la integridad de los recursos naturales y se fomenten interacciones armoniosas entre los humanos (Goodman y Redclift, 1991). El propio Kapp, ya en 1977 (en Aguilera, ed., 1995: 129-148) planteaba que innovaciones de este tipo en los paradigmas científicos requieren de una gama de referencia más amplia que la que se trabaja en las materias de estudio de la ciencia normal.

Presupuestos epistemológicos de las metodologías participativas

Las metodologías participativas suponen asumir determinadas premisas en el proceso de investigación[27]:

a. Asumir un papel y una cierta responsabilidad de la persona científica social a la hora de aplicar criterios de justicia social en las investigaciones,
b. Promover la participación de los miembros de las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas,
c. Ayudar a los miembros de las comunidades a incrementar el grado de control que tienen sobre aspectos relevantes en sus vidas.

A través de las metodologías participativas se facilitan procesos de reflexión colectiva, entre miembros del grupo o la comunidad y el equipo de investigación. Estos procesos otorgan un estatus de agentes de cambio a todas las personas implicadas, sacándolas de sus tradicionales roles de sujetos investigadores y objetos de estudio.

La generación de conocimiento a través de este enfoque metodológico va mucho más allá de un proceso de construcción de conocimiento, sistematizable y acumulativo, ya que se genera experiencia que permite a las personas participantes *aprender a aprender* (Balcázar, 2003). Son procesos que permiten desarrollar capacidades, para descubrir el entorno con una mirada crítica y para analizar y afrontar situaciones futuras.

Asimismo, permite asumir responsabilidades en el proceso de transformación de la realidad social donde se aplican, permitiendo a las personas participantes pasar de un papel de *víctimas de los problemas* a agentes centrales en los procesos de cambio y de solución.

Para generar estas sinergias, las metodologías participativas implican asumir determinados principios, que las distancian de las metodologías clásicas de investigación social (Selener, 1997):

1. Las metodologías participativas consideran a los participantes como actores sociales, con voz propia, habilidades para decidir y reflexionar y capacidades para participar activamente en el proceso de investigación y cambio.
2. La última meta de estos procesos es la transformación de la realidad social de los participantes, a través del incremento de su poder. A diferencia de otras aproximaciones de investigación, buscan solucionar o remediar problemas concretos que un grupo o comunidad enfrenta, desde las capacidades endógenas, lo que hace que sean procesos con un alto nivel de relevancia social.

[27] Una breve pero válida introducción a los inicios y desarrollos de las metodologías participativas de investigación – acción puede verse en la recopilación de María Cristina Salazar realizada en 1992. Un análisis global del contexto metodológico de las técnicas cualitativas de investigación en el que se insertan estas metodologías se encuentra en Juan Manuel Delgado y Juan Gutiérrez (1999). Desde la perspectiva de su aplicación a la Agroecología, cabe destacar los trabajos de Tomás R. Villasante, en cuyo análisis hemos basado parte de la conceptualización realizada en el texto.

3. La participación activa de la comunidad lleva a un entendimiento en profundidad de la realidad social que viven. Se trata de definir la problemática en los términos y bajo las condiciones que los miembros de la comunidad experimentan, y no desde la perspectiva de los investigadores externos, o a través de instrumentos estandarizados de evaluación.
4. El diálogo lleva al desarrollo de conciencia crítica en los participantes. Se trata de un proceso de comunicación real entre el equipo investigador y los miembros de la comunidad, así como al interno de cada grupo.
5. Reforzar las fortalezas de los participantes lleva a un incremento en el conocimiento de su capacidad personal y grupal para actuar. Cuando la gente está convencida de que su situación no se puede cambiar, promover el cambio es muy difícil. Por esto los agentes externos tienen que esforzarse por planear actividades iniciales que tengan alta posibilidad de éxito, de tal forma que los participantes se sientan reforzados y estimulados para continuar con el proceso.

2.1.3. Los procesos de cambio social agroecológico

Los procesos epistemológicos de la Agroecología dotan a esta de unas fuertes implicaciones políticas y culturales, que toman forma en su modo de crear conocimiento. De esta forma, plantea su coproducción: el conocimiento agroecológico es el producto de la interacción entre sujetos de naturaleza científica con sujetos de naturaleza popular. El ámbito de conocimiento no se ciñe exclusivamente a los problemas de carácter técnico productivo, sino también y muy especialmente a las dimensiones socioeconómica y político cultural de los contextos donde se genera. En este sentido, la investigación agroecológica amplía su objetivo hacia la generación de procesos de cambio social.

Desde una perspectiva genérica, un *cambio social* se puede considerar como una alteración en las estructuras sociales, así como las consecuencias y manifestaciones que se generan en relación a las normas y los valores de estas estructuras en cualquiera de sus niveles, desde el de actor social al grupo (en cualquiera de sus manifestaciones colectivas como institución, organización o cualquier otra categoría sociológica) hasta llegar a la categoría de sociedad humana en sus diversas manifestaciones grupales. Un cambio social agroecológico requiere de un tipo de dinámicas que faciliten una transformación de la naturaleza de las formas de *interacción social* hacia modos horizontales. El tipo de interacción buscado toma formas de naturaleza solidaria y apoyo mutuo. De esta forma se construirán relaciones sociales tendentes a obtener una transición de tipo agroecológico en los territorios, basadas en la equidad, la horizontalidad, la solidaridad y el apoyo mutuo, en lugar de la competitividad y las formas conflictuales que promueve el paradigma económico hegemónico desde su configuración en el liberalismo histórico[28].

[28] La definición de cambio social agroecológico hasta aquí señalada se basa en la estructura conceptual definida en los textos de Max Weber (1964: 88) y Piritim Sorokin (1966: 59 - 62), al definir los conceptos básicos de la Sociología desde la perspectiva de la estructura de la acción social. Para una sistematización estructurada de fácil seguimiento C.f. Trujillo Ferrari (1983), autor ampliamente utilizado en las investigaciones sobre las experiencias de garantía participativa existentes en Brasil (Medaets, 2003; Fonseca, 2005).

El pensamiento científico convencional de la Sociología, al definir sus conceptos básicos dentro del funcionalismo[29], se refiere al cambio social analizando los elementos que lo generan a través de distintas formas de interacción social; en su forma más simple, se refieren a: las solidarias (cuando las aspiraciones y las acciones exteriores de las partes en interacción concurren y se ayudan mutuamente), las antagónicas (cuando los deseos y las acciones externas de las partes son opuestas y se obstaculizan); y las mixtas (Sorokin, 1966: 145). En base a esto, será con el fomento de formas de interacción del primer tipo como se podrán construir procesos de cambio social de tipo agroecológico[30]. De este modo, desde las premisas de la Agroecología se plantea una defensa de las acciones sociales colectivas de carácter solidario como mecanismos que se han puesto en marcha a lo largo de la historia por diversas colectividades frente a procesos de amenaza de identidades, modos de vida o capacidades de supervivencia. En efecto y retomando los escritos de Kropotkin, son las relaciones de ayuda y apoyo mutuo las que han permitido un mantenimiento y un *desarrollo mayores de las especies, así como mayores cantidades de bienestar y goce de la vida con el mínimo de energía* (Palerm, 1976: 156).

Con esta base conceptual y con el objeto de operativizarla, cabe considerar que el rumbo de los cambios sociales viene marcado no sólo por los factores que lo generan, que viene a ser el motor que impulsa estas dinámicas; sino también por el contexto donde se producen y por los grados de libertad que las formas de interacción disfrutan. En este sentido, en una dinámica social en la que se generan transformaciones y mudanzas a través de elementos de multicausación, hay un elemento básico a considerar: las motivaciones que llevan a los actores a adherirse al mismo; lo cual está muy relacionado con las reglas o las convenciones impuestas que los protagonistas desean cambiar o por la búsqueda de la satisfacción de los intereses de su grupo social de pertenencia o referencia.

Considerando los motores de los cambios así como las motivaciones de las personas implicadas en el territorio para participar en ellos, la Agroecología propone facilitar las herramientas y los procesos que ayuden a generar cambio social hacia la equidad, construido a partir de la propia realidad y los *dolores* (Villasante, 2006) del colectivo implicado. Para ello se impulsan dinámicas que facilitan la interacción social de naturaleza solidaria basada en el concepto de apoyo mutuo anteriormente considerado.

[29] No es este lugar para definir la perspectiva sociológica funcionalista y su tremenda carga conservadora, que queda reflejada en la estructura conceptual básica de la Sociología. Una crítica a sus raíces en la Sociología norteamericana aparece en Juan F. Marsal (1977); asimismo, una caracterización de sus más importantes artífices, como apunte biográfico, se encuentra en Benjamín Oltra et al. (2004: 285 - 548), aunque se vea este enfoque mitigado bajo el rótulo de *La Sociedad democrática, los académicos y los profesionales*, salpicada por autores conflictivistas. Un análogo enfoque mezclando la dimensión conservadora con el estructuralismo genérico aparece en Beltrán Villalba (2003): pp. 75 – 94.

[30] En este sentido, cabe incluir de forma sucinta aquí el histórico debate entre la predominancia en la sociedad humana de las formas competitivas, defendido por los darwinistas sociales, o de las relaciones de apoyo y ayuda mutua, defendidas por los críticos utópicos y socialistas (Palerm, 1976: 151). Los principales portavoces a nivel científico de ambas corrientes podríamos identificarlos con Huxley, quien escribió en 1988 "La lucha por la existencia en la sociedad humana"; y Kropotkin, quien elaboró una réplica a este artículo a través de diversos artículos en la última década del s. XIX, recopilados en un libro titulado "La Ayuda Mutua", en 1902.

Dos de las propuestas a partir de las cuales la Agroecología pretende operativizar esta idea son:

a. Trabajando a través de metodologías participativas, de manera que sean las propias personas implicadas en los territorios quienes reflexionen sobre la situación presente y planteen mecanismos de cambio para llegar a situaciones futuras deseadas;
b. Facilitando la toma de conciencia de la capacidad y responsabilidad de estas personas en la construcción de sus propios procesos de cambio.

Concluyendo, definimos como cambio social agroecológico el conjunto de procesos regeneradores del tejido social local, a partir del manejo ecológico de los recursos naturales y de mecanismos socioeconómicos de circulación solidarios. Estos procesos fomentan las potencialidades intrínsecas de los actores implicados y la toma de conciencia de su capacidad para construir relaciones de solidaridad y de apoyo mutuo. Altieri (1992) establece para estos procesos dos características básicas: que sean socialmente activadores y que requieran unos niveles de participación popular máximos.

En todo el análisis del concepto de cambio social agroecológico hemos evitado utilizar la palabra desarrollo, de una forma consciente y por determinadas connotaciones y preconcepciones que subyacen detrás de esta denominación y que tratamos de explicar a continuación de forma sucinta.

La conceptualización pionera con suficiente rigor del desarrollo surge a mediados del siglo XVIII en las Ciencias Naturales, cuando Caspar Friedrich Wolff (1733/1734) define el desarrollo embrionario como el *crecimiento alométrico (variación de las relaciones entre las partes) hacia la forma apropiada del ser*. Sin utilizar la palabra desarrollo, pero profundizando el concepto e introduciendo en él la noción de avance hacia formas más perfectas, Darwin acuñó el vocablo de evolución como sinónimo de desarrollo, al elaborar su Teoría de la Evolución de las Especies un siglo más tarde (Sevilla, 2006b).

Dentro del pensamiento científico liberal, el concepto de desarrollo contiene una fuerte dimensión etnocentrista al ser aplicado a la economía. Esto ocurre al identificarse el estado de mayor plenitud o superioridad con la trayectoria histórica desplegada por la identidad sociocultural occidental y las formas de producción y consumo por ella elaboradas. El desarrollo puede ser así definido como el crecimiento económico (incremento del Producto Nacional Bruto) acompañado de un cambio social y cultural (modernización) que tiene lugar en una determinada sociedad, generalmente un estado-nación, como consecuencia de las acciones realizadas. Un análisis en este sentido que hemos tomado de referencia sobre el concepto de desarrollo es el que hizo Gustavo Esteva (1992:10). En esta elaboración señala que el desarrollo no puede desligarse de las palabras con las cuales se le formó -evolución, crecimiento, maduración. Del mismo modo que quienes la emplean actualmente no pueden liberarse de la red de sentidos que da una ceguera específica a su lenguaje, su pensamiento y su acción.

Relacionado con este concepto en el ámbito económico surge, de forma natural, la noción de Subdesarrollo en la década de los 40. Como momento clave en el que se

ubica el uso de este término con tintes sociopolíticos podemos citar al presidente de Estados Unidos de América, Harry S. Truman, de finales de la Segunda Guerra Mundial. En el discurso oficial que dio para trasmitir la que iba a ser su política exterior de cara al futuro, expresó como objetivos: "Hacer que los beneficios de nuestros avances científicos y progreso industrial sirvan para la mejora y el crecimiento de áreas subdesarrolladas" (Truman, H. 1949, citado en Esteva, G. 1992: 6)[31]. Se produjo entonces, como plantea Escobar (1996: 51), un descubrimiento de la pobreza masiva, en Asia, África y América Latina, que serviría de ancla para una importante reestructuración de la cultura y la economía política globales. En estos momentos, es cuando se genera la estructura operativa que permitió la implementación del modo industrial de manejo de los recursos naturales en todo el mundo, a través de las instituciones de Bretton Woods –Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) (Guzmán et al. 2000: 23 – 24).

Este proceso se vio acompañado por una reorganización intelectual de parte de las fuerzas liberales. F.A. Hayek, profesor de la London Schools of Economics, organizó una reunión en Mont Pelegrin (Suiza) en 1947, con el fin de elaborar una estrategia de articulación entre los intelectuales interesados en defender los ideales de la civilización occidental, frente a la *amenaza* de un posible desarrollo colectivista. En su discurso de apertura, el profesor Hayek estableció con claridad el objetivo de la reunión: crear algún tipo de organización privada donde representantes de distintas disciplinas sentaran las bases científicas de los ideales liberales. De esta forma, esta organización tendría como misión dar consistencia al orden liberal, a través de su legitimización científica (Hayek, 1992: 257-269).

Con estos inicios, cabe considerar que el concepto de desarrollo partió de una visión y unos paradigmas enmarcados en el ámbito de la ciencia moderna, que no encajan con las propuestas alternativas que hace la Agroecología (Sevilla y Woodgate, 1997: 128 – 137), por diversos motivos que explicamos a continuación.

Uno de estos motivos los plantea Esteva (2002: 7), al señalar que la concepción de las distintas realidades en función de la noción de desarrolladas o subdesarrolladas convirtió a cerca de cuatro quintos de la población y de la realidad del planeta en la imagen invertida de los países desarrollados, que representaban la meta a alcanzar. De esta forma, la identidad de estos territorios, con toda su diversidad, su historia, sus modos de acción y su cosmovisión quedó supeditada a una óptica homogeneizadora.

Otro motivo se explica en base a las consecuencias e influencias que estas nociones han generado en la configuración del mundo actualmente. Para que los diferentes pueblos conciban que deben desarrollarse (entendido como el proceso de alcanzar los niveles económicos que tienen los países modelo), es necesario que asuman su condición de subdesarrollados, es decir, de encontrarse en una situación de la que deben salir. Para ello, es preciso estructurar mecanismos que ayuden a estos territorios en este camino.

[31] Truman no es el primero en acuñar esta idea. Ya Wilfred Benson, miembro del Secretariado de la Organización Internacional del Trabajo, lo utilizó escribiendo las bases económicas para la paz, en 1942; y también Rosenstein-Rodan y Arthur Lewis, en 1944 (citados en Esteva, 1992, pp. 7).

Desde sus orígenes, los conceptos y los métodos asociados al desarrollo han ido variando. De una concepción lineal en la que se contemplaba como una serie de etapas predeterminadas para alcanzar el fin deseado y con unas consideraciones estrictamente económicas[32], se ha ido pasando por diversos conceptos que le han ido añadiendo matices, con el fin de completar la concepción inicial que se mostró insuficiente. De este modo se le han añadido calificativos tales como endógeno, comunitario, sostenible, sustentable o humano, entre otros, a través de los cuales se han pretendido contemplar otros aspectos de carácter más social (humano) o ambiental (sostenible) y plantear otros modos de operar menos alienantes (endógeno o comunitario).

Sin embargo, las tecnologías introducidas como ayuda para que estos territorios alcancen las metas establecidas, son cuestionables. Como revelan las investigaciones de diversos autores[33], estos mecanismos han mostrado un fuerte poder de destrucción sociocultural y ambiental. Además, su meta hacia el crecimiento económico ha generado un deterioro ecológico, identificado y estudiado tras todos estos años de aplicación, que ha sido una de las causas de la crisis ambiental de la segunda mitad del s. XX.

Como recopilación de todas las investigaciones y trabajos que se venían planteando en este sentido, tuvo lugar un encuentro internacional en París, en el año 2002, organizado por la asociación francesa La ligne d'horizon – les amis de François Partant[34]. En este encuentro se reunieron gran parte de intelectuales e investigadores que reivindican dinámicas participativas de post-desarrollo, con las que se pretende deshacer este concepto *para rehacer el mundo* (Pérez-Vitoria, S. 2003: 5 - 6). En este encuentro se denunciaron varias cuestiones: el desarrollo como corrupción de la interrelación cultural de los valores en las distintas sociedades (Illich, 2003) ; los efectos de una globalización que aboca a la mayoría de los habitantes del planeta a vivir en condiciones precarias y a la destrucción del Medio ambiente en el que vivimos (de Maillard, 2003) ; la noción de progreso como concepto nefasto en la evolución impuesta a las sociedades (Bové, 2003) y; la necesidad de deconstruir los conceptos subyacentes al desarrollo, para reconstruir otros modos de pensamiento y, por lo tanto, de acción (Yapa, 2003).

Basándonos en estos trabajos, planteamos evitar el uso del concepto de desarrollo, fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, por evitar el riesgo de incorporar la idea de meta a alcanzar, teniendo como objetivo el paradigma económico del capitalismo y su noción de progreso. De esta manera, pretendemos romper con procesos

[32] Para una descripción detallada de la teoría de las etapas del desarrollo: C.f. Rostow (1966)

[33] José Manuel Naredo, 2005; Arturo Escobar, 1992; 130-145; Mariann Gronemeyer, 1992; 54-69 y Vandana Shiva, 1992; 206-218

[34] François Partant fue un pionero de la economía crítica en su denuncia de los estragos que los procesos de *desarrollo* generaban en las comunidades rurales, al desorganizar sus estructuras sociales y romper las matrices socio-culturales en las que se inserta el conocimiento local campesino e indígena. En su libro *La ligne d'horizon* (primera edición en 1988), que dio nombre a la asociación, Partant analiza cómo la noción de progreso, plasmada en la idea de desarrollo, y en diversos mitos (reequilibrio Norte Sur a través de la ayuda al desarrollo; progreso acumulativo de la humanidad; el desarrollo universal, entre otros), han inciden en realidad en la estructura desigual a nivel internacional, muy necesaria Occidente para mantener las ventajas comparativas de Occidente dentro del paradigma económico capitalista. Esta asociación mantiene una página Web donde va recopilando y construyendo conocimiento en torno a estas ideas (http://www.lalignedhorizon.org, fecha de consulta: 8 de enero de 2008)

culturales y políticos de alienación que la hegemonía de este paradigma ha provocado; en segundo lugar, por evitar la idea del avance continuo sobre la innovación tecnológica e industrial. Así, pretendemos preservar la idea de que los procesos sociales, ecológicos y económicos no tienen porqué avanzar continuamente y sin embargo pueden detectar la necesidad de recuperar determinadas opciones que quedaron en el pasado, de volver para atrás en determinadas prácticas y visiones, lo cual para la noción de desarrollo hegemónica no se contempla.

De esta forma preferimos hablar de procesos de cambio social agroecológico, que surjan de la detección de problemas en contextos concretos y cuya dirección y pautas sean definidas desde los propios territorios. Dado el ámbito de aplicación de la Agroecología, centrada en el manejo de los recursos naturales y los territorios rurales, los procesos de cambio en los que centraremos el análisis se ubicarán en estos contextos. No obstante, utilizaremos elementos y construcciones de autores y autoras que han utilizado la palabra *desarrollo*, aunque en una acepción radicalmente distinta que implica el concepto de otro desarrollo diferente al realmente existente y que consideramos válidos para el análisis en curso.

Los procesos de cambio que se trabajan desde la Agroecología tienen que ver con mecanismos para generar la transición agroecológica del territorio. Según Costabeber (1998), existe un continuum de las distintas posibles vías de transición, que se establece entre dos extremos:

a. En un polo: formas de agricultura alternativa que, bajo las aportaciones de la Agroecología, buscan una mayor integración entre los conocimientos agronómicos, ecológicos y de otras disciplinas correlacionadas, al objeto de generar unas bases científicas y tecnológicas más alejadas de aquéllas que, hasta ahora, han caracterizado al modelo agroquímico convencional.
b. En el otro polo: se sitúan las formas de *intensificación sostenible*[35], si bien con algún grado de ecologización de su proceso productivo, continúan muy próximas al patrón tecnológico dominante.

Entre estas dos posiciones estarían, por ejemplo, las denominadas *agriculturas sostenibles de bajos insumos externos* (ASBIE). Estas propuestas plantean basar la producción agraria en los recursos localmente disponibles, a través de técnicas que se adapten a ellos y los combinen eficientemente. En estos modelos, el uso de recursos externos se reduce a aquellos que resultan indispensables y no se pueden encontrar en el territorio, y se fomenta su máximo reciclaje y el menor impacto ecológico posible (Reijntjes, Havercort y Waters-Bayer, 1995).

Si bien este continuum de procesos de transición se centra, fundamentalmente, en cuestiones técnico – productivas, estos mismos autores ponen el énfasis en los métodos participativos y en la valorización del saber de los agricultores y agricultoras, para que las ASBIE se aproximen a las propuestas de transición que, desde el enfoque agroecológico, apoyan la agricultura alternativa.

[35] Es a lo que Caporal (1998) denominaba la intensificación verde. Ver figura 1.

En un contexto europeo, Van der Ploeg et al. (2002) apuntan que la producción ecológica ligada a otras iniciativas sociales es el reflejo de las estrategias agroecológicas desarrolladas en los territorios por los agricultores y agricultoras. Por lo tanto, representarán procesos de transición agroecológica en tanto en cuanto supongan una revalorización de los recursos locales y una articulación con otras actividades económicas.

En este sentido, la defensa de la agricultura de pequeña escala vinculada a los procesos sociales locales es fundamental. La que fuera vicepresidenta de IFOAM, Suzanne Vaupel, en su discurso de despedida, trasmitió las siguientes palabras (citado en Picazos, 2002):

"… en la nueva atmósfera de tremendo crecimiento y aceptación creciente de la agricultura ecológica (…) es de crucial importancia la cuestión del tamaño, encontrar modos de que los pequeños agricultores puedan mantener su lugar en el mercado mientras productores mayores e incluso grandes empresas agrarias se incorporan a la producción ecológica" Suzanne Vaupel, exvicepresidenta de IFOAM.

Lo endógeno y la sustentabilidad como características centrales de los procesos de cambio social agroecológico

Los procesos de cambio social agroecológico son aquellos que se fomentan para conseguir la agroecologización de los territorios donde se trabaja. Estos procesos abarcan tanto el modo de manejo de los recursos naturales como las relaciones sociales y económicas que se establecen en torno a esta producción. El marco político y cultural en el que se inserta cualquier proceso de este tipo, en base a lo estudiado, deberá ser contemplado de forma transversal. Para ello, hay dos conceptos que deben subyacer en todo proceso de transición agroecológica que se fomente o se acompañe: a) potenciar lo endógeno del territorio y; b) garantizar la sustentabilidad de los mecanismos que vayan emanando del proceso.

Potenciar lo endógeno de los territorios donde intervenimos permite operativizar una idea básica para la Agroecología: que el impulso y el motor de cambio de cualquier agroecosistema estén basados en elementos internos propios del sistema socio-cultural en el que se trabaja. De esta forma, las herramientas que facilitarán el cambio deberán adaptarse al contexto real y a las personas protagonistas del mismo. Esta idea de priorizar los procesos y recursos endógenos no supone un rechazo frontal de lo externo. La importancia de lo endógeno viene a defender que lo que venga de fuera del sistema debe ser *digerido*, a través de una adaptación a la lógica etnoecológica interna de funcionamiento del agroecosistema donde se trabaja (Guzmán et al., 2000: 145). Así, lo externo pasa a incorporarse a lo endógeno cuando es asimilado desde un respeto a la identidad y la cosmovisión locales.

Para poder potenciar lo endógeno, es necesario favorecer el fortalecimiento de aquellos factores estabilizadores del territorio y reducir la dependencia de las fuerzas externas (Norgaard y Sikor, 1999). De esta forma, el hecho de que la Agroecología priorice el uso de recursos locales disponibles (ya sean naturales y/o sociales) es por una cuestión de reducir la necesidad de insumos, procesos o elementos controlados por fuerzas

externas. El uso preferente de recursos disponibles localmente aumenta la estabilidad y las condiciones de vida de los productores y productoras.

Teniendo en cuenta este análisis, algunos procesos que pretenden fomentar la Agricultura Ecológica como modo de manejo de los recursos naturales no pueden ser considerados como agroecológicos. En este sentido, podemos señalar tres mecanismos que generan esta contradicción desde el punto de vista de la Agroecología (Sevilla, 2006a: 15): a) procesos de extensión agraria que introducen tecnologías dependientes de recursos externos y procesos de circulación de los productos a través de canales de comercialización largos, b) procesos de extensión que, si bien difunden tecnologías altamente sensibles a la cuestión ambiental, son ajenos al universo sociocultural de la población implicada y; c) procesos de recuperación de conocimiento tradicional a través de unas metodologías de participación de los tipos *manipulada*, *pasiva, por consulta o por incentivos materiales* (ver cuadro 3). Este tipo de tecnologías y procedimientos presentan tres riesgos desde el punto de vista de nuestro enfoque epistemológico: a) pueden generar unos costes elevados a los procesos de producción e incidir en la dependencia externa de las comunidades, tanto para el proceso de producción como para el de comercialización; b) pueden alienar culturalmente a los grupos receptores de estas tecnologías al asumir técnicas no propias y; c) pueden fomentar procesos que anulan las capacidades potenciales de la comunidad o grupo de tomar sus propias decisiones o de construir sus propios modos y mecanismos. La cuestión de los procesos endógenos viene a focalizar el interés del análisis en este punto: en los procesos agroecológicos, se debe entender que es la propia comunidad o grupo quien debe tomar conciencia de su realidad y a partir de ahí desarrollar las capacidades que les van a permitir abordar las circunstancias (Altieri, 1992).

La componente endógena de los procesos de cambio social agroecológico no sólo considera los manejos y las tecnologías que se emplean a nivel de finca o predio. En este sentido, Van der Ploeg et al. (2002) hacen un análisis muy interesante sobre los procesos de cambio rural endógeno (estos autores lo denominan desarrollo rural endógeno) que se generan en base a las medidas desarrolladas por los agricultores y agricultoras a nivel de *explotación*. Nuestra propuesta pretende plantear la oportunidad de contemplar, como cambio social agroecológico, la construcción de contextos socioeconómicos que favorezcan el fomento de procesos endógenos. En este sentido, las cuestiones de la comercialización de los excedentes de producción o la certificación de las producciones como ecológicas han de ser consideradas desde este prisma, es decir, como aspectos sobre los que incidir para fomentar procesos de agroecologización de los territorios. Rescatamos, en este sentido, una serie de elementos que deberán incorporarse en la noción de endógeno en los territorios (Guzmán et al., 2000:144):

a. La ruptura de las formas de dependencia que ponen en peligro los mecanismos de reproducción socioeconómicos.
b. La valorización, regeneración y/o creación de conocimientos locales, para su utilización como elementos de creatividad.
c. El establecimiento de circuitos cortos para la venta y el consumo de productos.
d. La potenciación de la diversidad sociocultural.

De este modo, lo endógeno visto desde la Agroecología considera que las distintas comunidades o grupos son parte de un sistema local que los envuelve y, según sus formas básicas de conocimiento, se aproximarán a su entorno de una forma u otra. Los modos de conocimiento tienen, a su vez, una naturaleza cultural. De este modo, las bases de cualquier cambio social deberán partir de los modos de conocimiento que definan a cada comunidad y que son trasmitidos y aplicados en la práctica cotidiana, en todas sus facetas. Sólo a partir del contacto y la comprensión de estos modos endógenos de concebir los procesos tanto naturales como socioeconómicos, se podrán impulsar y fomentar procesos de cambio social que tiendan hacia la agroecologización de los territorios (Sevilla y Ramos, 1991: 65).

La segunda noción que debe subyacer en todo proceso de cambio social agroecológico es su sustentabilidad[36]. Este concepto ha sido analizado ampliamente desde una perspectiva ecológica en la literatura ambientalista y se refiere al mantenimiento, en el tiempo, de los mecanismos de reproducción ecológica de los agroecosistemas (Sevilla, 2006b). Altieri (1999), en esta línea, propone reducir la necesidad de insumos externos y sustituirlos por otros que se obtienen dentro del mismo predio o sus alrededores, como uno de los elementos clave para la sustentabilidad de los agroecosistemas en un sentido ecológico. Desde una perspectiva agroecológica, no cabe separar la sustentabilidad a nivel agroecosistémico del manejo social e histórico desarrollado por los grupos humanos en el contexto concreto que se analice; es decir, del modo de artificialización social de la naturaleza que se ha llevado a cabo en cada territorio. Un trabajo en profundidad en torno a la sustentabilidad de los agroecosistemas se debe a González de Molina y Guzmán (2006). Estos autores definen diversos indicadores cuya medición permite analizar la sustentabilidad a nivel de agroecosistema. A grandes rasgos los agrupan en tres paraguas: a) una parte de ellos viene a analizar la sustentabilidad del agroecosistema en términos de productividad, en relación a tres aspectos - productividad física, balances energéticos y productividad monetaria; b) un segundo grupo permite analizar la sustentabilidad del agroecosistema en términos de equidad, donde se incorporan mediciones en torno a la distribución de la renta, estructura fundiaria y propiedad de la tierra o entradas y salidas de recursos económicos en el agroecosistema como medición de lo que denominan la equidad/inequidad externa y; c) un tercer grupo de indicadores que incorporan la noción de estabilidad del agroecosistema para medir su sustentabilidad, en términos de biodiversidad, agua y suelo.

En este sentido cabe mencionar el distanciamiento que el concepto de sustentabilidad ecológica construido desde la Agroecología plantea con respecto a las propuestas de

[36] Preferimos utilizar la palabra sustentabilidad, en lugar de sostenibilidad, entendiendo que aporta conceptualmente la noción de perdurabilidad generada desde dentro del etnoecosistema. Sería el modo de expresar en una palabra la idea de sostenibilidad desde lo endógeno. Autores como Guzmán o González de Molina, que empezaron utilizando la palabra sostenibilidad (Guzmán et al. 2000), la han sustituido por sustentabilidad en sus último trabajos (González de Molina y Guzmán, 2006). Una de las primeras propuestas conceptuales que encontramos en relación a este cambio se deben a Leff (2002b: 17), quien plantea que el concepto de sustentabilidad emerge, tras el de sostenibilidad, por el "reconocimiento de la función que cumple la naturaleza como soporte, condición y potencial del proceso de producción". Alargando el concepto en base a las dimensiones consideradas desde la Agroecología, cabría decir que el soporte del proceso de producción lo configuran tanto la naturaleza como la red de relaciones sociales y humanas que conforman cada etnoecosistema.

sostenibilidad realizadas desde la economía neoclásica. En este paradigma económico, la sustentabilidad es analizada desde la convicción de que el agotamiento del capital natural no representa un problema para un posible consumo sostenible, ya que se confía plenamente en la *sustituibilidad* del mismo por capital manufacturado, a través de un avance continuado del progreso técnico. Esta sustentabilidad es lo que Mnez. Alier y Roca Jusmet (2000: 371 – 375) denominaron la *sustentabilidad débil.* La principal crítica a esta visión de la sustentabilidad que destacamos desde la Economía Ecológica es la idea de que sólo considera la función economicista de la naturaleza de proporcionar recursos para la producción, desconsiderando otros *servicios* que no quedan incorporados.

Aparte de la dimensión ecológica y técnico productiva de la sustentabilidad, el énfasis en los procesos endógenos que postula la Agroecología está directamente relacionado con la cuestión de la sustentabilidad en un marco superior a los agroecosistemas, esto es, a nivel de etnoecosistemas. En este sentido, se incorporan elementos de carácter social, cultural e incluso políticos para poder analizar la sustentabilidad de un grupo social o comunidad. De este modo, cabe plantear la sustentabilidad como la articulación de una serie de elementos que permiten la perdurabilidad en el tiempo de los mecanismos sociales y ecológicos de reproducción de un etnoecosistema (Gliessmann, 2002).

En el ámbito socioeconómico, la sustentabilidad incorpora la distribución justa y equitativa de los costes y beneficios del proceso de producción y circulación de los productos; trata de rescatar de forma crítica las formas de manejo propias de cada cultura; persigue reducir las desigualdades en el acceso a los recursos productivos y; busca la rentabilidad económica en el largo plazo. En este sentido y en base a lo atributos propuestos por Masera et al. (2000: 15 - 19) para la sustentabilidad, un sistema podrá ser considerado sustentable socioeconómicamente cuando permite:

a. La autogestión o autodependencia: representa el grado de participación de la gente en las diferentes fases; su poder de decisión sobre aspectos críticos; su control sobre el sistema y la toma de decisiones; el tipo de estructura y permanencia de la organización en la que se trabaja; su nivel de dependencia de estructuras externas o; su capacidad para responder y controlar a los cambios inducidos desde el exterior, manteniendo su identidad y valores.
b. La equidad[37] en la distribución de beneficios y costes del sistema; la equidad en el acceso económico y; la aceptación cultural de los sistemas propuestos: será un indicativo del grado de democratización del grupo o proceso. Contempla los factores que influyen en la toma de decisiones de los productores.

[37] González de Molina y Guzmán (2006: 231 – 236) hacen una aproximación a la equidad de las sociedades agrarias planteando su medición a través del índice de Gini, medida que permite conocer el grado de distribución o concentración de la tierra entre las personas titulares. Considerando que esto no es suficiente, proponen completar esta medida de la equidad analizando la accesibilidad de las personas habitantes del territorio, sean o no titulares, a los medios de producción (índice de accesibilidad), que se estima a través del esfuerzo que requiere el acceso a una hectárea de tierra cultivada o a otros medios de producción necesarios (los autores proponen dos indicadores concretos para operativizar estas medidas). Por otro lado, proponen medir la cantidad de personas privadas del disfrute de los medios de producción (índice de privación), que refleja el porcentaje de personas respecto del total que no tienen acceso alguno, ni en propiedad ni en arrendamiento o cesión.

c. La adaptabilidad a nuevas condiciones del entorno económico y biofísico: vendrá favorecida o perjudicada en función de la capacidad del proceso y de los participantes de apropiarse de conocimientos nuevos, de cambios de personas, de la situación política, etc.

Los procesos agroecológicos deben, pues, implicar determinados elementos para facilitar la sustentabilidad socioeconómica. La cuestión de la autogestión, como mecanismo para alcanzar independencia, autonomía y poder colectivo; la equidad, como mecanismo de redistribución de renta y de justicia en el acceso a los recursos; y la adaptabilidad, como indicador del apoderamiento por parte de las personas implicadas en el proceso.

De este modo, la sustentabilidad tiene una naturaleza relativa. Podemos realizar aproximaciones a contextos más o menos sustentables en función de la realidad territorial en la que estemos inmersas. En base a este análisis, la sustentabilidad tendrá una componente que puede ser analizada a partir de indicadores y cantidades; pero también tendrá otra componente centrada en los mecanismos que se estén fomentando en el territorio y su capacidad para potenciar o inhibir lo endógeno y el control de los diferentes procesos por parte de las personas habitantes del mismo. La medición de la sustentabilidad de estos procesos es un reto que queda pendiente en la producción científica agroecológica, ya que necesita de metodologías más cualitativas que cuantitativas.

Con esta perspectiva, el principal objetivo de una agricultura sustentable no es solamente mantener la base de recursos de la que depende, a través de la minimización de insumos artificiales externos al agroecosistema, del manejo de plagas y enfermedades con mecanismos de regulación interna y que sea capaz de recuperarse de perturbaciones externas e internas (Gliessman, 2001: 3). Para poder considerarla como tal, el modelo de agricultura deberá fomentar la estabilidad a largo plazo de los sistemas sociales rurales. Esta estabilidad va íntimamente relacionada con la protección y el fomento de agroecosistemas, no sólo en equilibrio natural con su entorno, sino también viables económicamente, diversificados y, como elemento clave, autosuficientes. El entendimiento, por lo tanto, de la sustentabilidad de un agroecosistema debe abarcar el contexto agrícola, junto con el ambiente global y el sistema social (Altieri, 2002). Incorporando que los procesos de cambio son fruto de una compleja interacción de multitud de factores, se podrán abordar nuevas opciones de manejo y de organización coherentes con la sustentabilidad en su sentido más amplio.

Los atributos de la sustentabilidad de los agroecosistemas estudiados hacen necesario incorporar una visión a largo plazo en los procesos. Como plantea Gliessmann (2002), esto supone una ruptura más con el paradigma económico hegemónico, donde los programas considerados solamente prevén procesos de planificación y de toma de decisiones de corto plazo.

Es desde esta óptima del tipo de procesos que se fomentan en cuanto a su sustentabilidad desde donde analizaremos tanto los mecanismos de circulación como los de credibilidad y confianza en los productos que se intercambian como ecológicos. Teniendo presente que para que fomenten espacios sustentables, deberán potenciar lo

endógeno, es decir, partir de los recursos locales tanto naturales como sociales, así como facilitar el control de los mecanismos que se establezcan por parte de las personas protagonistas de estos procesos en los territorios. De este modo incorporamos el análisis de dos elementos que nos parecen básicos para incorporar una visión de la sustentabilidad integral: por un lado los procesos de valorización y de rescate de lo endógeno que se estén fomentando en los territorios y; por otro lado el control de los mecanismos de producción y circulación que se estén generando por parte de las personas implicadas en el territorio.

PARTE II. Los Sistemas de Garantía para las producciones ecológicas desde una perspectiva agroecológica

En un principio, la Agroecología establece sus análisis en base a los marcos sociales propios de la producción agraria y el medio donde se establece: la finca agrícola familiar y la comunidad local (Guzmán et al., 2000). La finca como marco donde se desarrollan las tecnologías específicas para la producción y donde la investigación y los procesos de transición indagan en las técnicas de manejo; y la comunidad local, donde se dan las bases de renovabilidad sociocultural[38].

Pero estos marcos resultan insuficientes para el análisis de las relaciones entre producción y consumo, es decir, de los canales de circulación de los productos agrarios. En efecto, los intercambios comerciales agrarios han experimentado una intensificación, proceso que algunos autores relacionaron directamente con la agonía del campesinado y entre los que destacan Alain de Janvry (Sevilla, 1995: 40) y Buttel (1990), quien analizaba el proceso de mercantilización de las cadenas agroalimentarias y la internacionalización del capital como elementos básicos de la nueva agricultura industrializada. En este sentido, cabe destacar diversos elementos que caracterizan este proceso de intensificación de los intercambios comerciales en la agricultura, en el proceso de industrialización de la misma:

a. La integración y subordinación del cultivo de la tierra a las cadenas agroalimentarias, considerándolo como el último eslabón del juego de intereses y actores que dominan las mismas[39].
b. La internacionalización del capital, a través de los mercados financieros de futuros y opciones de materias primas agrarias, fundamentalmente.
c. La reubicación de la agricultura en la cambiante división internacional del trabajo.

[38] C.f. la definición que Galeski aporta a este concepto en el apartado 2.2.2.

[39] Se debe a Friedmann y McMichael una primera conceptualización de lo que denominaron *Regímenes agroalimentarios globales* ya en el año 1982. Estos autores analizan a través de la historia reciente la articulación institucional de los procesos de integración vertical de las distintas fases de producción-circulación-transformación de los alimentos. En base a esto, identifica tres regímenes alimentarios internacionales configurados en tres periodos: a. el "Primer Régimen Agroalimentario Global" que surge en el último tercio del siglo XIX hasta la primera guerra mundial; b. El "Segundo Régimen Global", tras la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por una fuerte industrialización de la agricultura, por la consolidación del proceso de modernización agraria y por el desarrollo de la industria alimentaria y; c. El "Tercer Régimen Alimentario Global" caracterizado por una profundización de los procesos de industrialización agraria y alimentaria. El Tercer Régimen surge tras la crisis económica internacional de los años setenta y se conforma con la profunda reestructuración económica que sentó las bases del proceso de Globalización agroalimentario de los años ochenta (Friedmann y McMichael, 1989). Lo interesante en nuestra construcción de la teorización de Friedmann y Mcmichael es el análisis que realizan de la evolución de la estructura y el crecimiento complejo de las formas agroalimentarias de organización de la producción, transformación y circulación industrializadas, hacia la integración vertical de los sistemas agroalimentarios.

Como plantean Noorgard y Sikor (1999: 37), la traducción más directa de estos procesos ha sido el constante *distanciamiento* entre producción y consumo así como entre extensión e investigación. De este modo, los lazos entre los distintos actores que intervienen en la actividad agraria son cada vez más indirectos. Este distanciamiento ha generado varios efectos: un desconocimiento cada vez mayor de los procesos sociales relacionados con la producción y el consumo de alimentos; una desconsideración del abastecimiento interno de las comunidades locales y; una falta de respeto a la equidad de los intercambios, tanto internos como externos a los etnoecosistemas. Todo ello ha ido asociado a una articulación determinada entre lo urbano-industrial y lo rural, de manera que las personas productoras agrarias han pasado de ser agentes centrales de la economía y la sociedad rurales, a ser el último eslabón de un sistema donde predominan las empresas comerciales y las corporaciones agrarias[40].

Estos procesos han configurado unos sistemas agroalimentarios que se asemejan a espacios de flujos, en los que las relaciones se establecen a través de *verticalidades*, esto es, la agregación y la cooperación entre los actores resultan de un proceso de organización en el que predominan factores externos a las áreas de influencia de cada actor (Santos, 2000). Los espacios y las relaciones socioeconómicas locales están supeditados a lo global. Este proceso organizativo genera subordinación a los intereses de los actores hegemónicos. En el caso de las cadenas agroalimentarias, estos actores conforman oligopolios de grandes empresas de insumos y transformación de alimentos, cuyos intereses prevalecen frente a los intereses públicos o sociales.

En este contexto, las estructuras productivas familiares, caracterizadas por su diversidad ecológica, cultural y socioeconómica, han sido las más perjudicadas. Su exclusión de estos espacios las ha obligado a inventar estrategias de supervivencia para contrarrestar los efectos de unas políticas y unas tendencias económicas que los abocan a la desaparición. Quedan excluidas pues en estos espacios: son estructuras marginadas económica, política, cultural y ecológicamente. Las políticas, precios y servicios agrícolas fomentados desde las instancias públicas y privadas, en estas tendencias, favorecen las estructuras productivas de mayor escala.

Como consecuencia de esto, encontramos en la actualidad una *patología ecosistémica* muy grave, a los ojos de la Agroecología: la desigualdad social (Guzmán et al., 2000); y si profundizamos en el análisis de la equidad social en nuestras sociedades y en las diferentes dimensiones que estos autores comentan, encontramos un elemento clave en

[40] Las críticas sobre este proceso de dominación corporativa de la producción agraria son abundantes y antiguas. Rescatamos, de Guzmán et al. (2000), dos de ellas realizadas ya en la década de los 70, la de John Kenneth Galbriath desde una perspectiva liberal, incidiendo en la falacia que supone entender el mercado como garante de la libre competencia, y ésta como *justiciera social*, ante el control de los precios y las producciones por unas pocas empresas; y la de Hawy Braverman, desde el pensamiento marxista, incidiendo en la degradación del trabajo como consecuencia de estas tendencias de las sociedades post-industriales. También otros autores como Friedmann y McMichael (Op. Cit), en su caracterización de los regímenes alimentarios, analizan el proceso de conformación de un complejo agrario internacional, en el que se empieza a dar una forma de control a través de nuevas empresas y que llega a su punto álgido en la etapa actual de globalización. De esta forma, el sector agrario deja de ser el principal articulador de la función alimentaria y es la transformación la que toma el protagonismo. Para un análisis de esta vasta literatura, dentro del pensamiento sociológico agrario: C.f. Sevilla Guzmán (2006b: 105 – 130).

nuestro análisis: *la inequidad externa*. La civilización industrial se ha fundamentado en un deterioro sostenido de la relación de intercambio entre los alimentos y materias primas provenientes de la actividad agraria y los insumos y productos transformados consumidos en la finca agraria o en las familias productoras. Esto ha generado una transferencia de renta en beneficio de las actividades industriales y un deterioro en la igualdad de los estándares de vida entre el campo y la ciudad. Para tratar de compensar esto, a través de la generación de mayor excedente comercializable en el campo, se ha producido un sobreesfuerzo productivo de los agroecosistemas y su consiguiente deterioro.

De este modo entra la lógica de la productividad como fuente del progreso económico (Castells, 1996:94)[41] en el ámbito del manejo de los recursos naturales y los contextos rurales. El protagonismo de la productividad en la economía, entendida como el aumento del producto por unidad de insumo, tiene dos consecuencias fundamentales: por un lado, hace que se prioricen y favorezcan los procesos productivos de mayor escala; por otro lado, al no internalizar los costes ambientales y sociales de este aumento, es una de las principales causas de la crisis ambiental que vivimos y de la pérdida de la diversidad sociocultural, base de la sustentabilidad del medio rural. Asociada directamente a esta búsqueda desmesurada de una productividad cortoplacista, aparece la dependencia, cada vez mayor, de la producción agraria respecto de la agroindustria y las cadenas de distribución, lo que hace que la producción de alimentos y la alimentación en nuestros contextos entre como una mercancía más en las lógicas de acumulación de capital y el lucro[42].

Beck, en su libro *La sociedad del riesgo* (1992), viene a decir que las fuerzas productivas así establecidas en la sociedad post-industrial de la Europa de finales del s. XX están cargadas de riesgos. La hegemonía del progreso tecnoeconómico viene acompañada por la producción de riesgo, que trata de distribuirse en la sociedad como si habláramos de riquezas. Estos riesgos vienen provocados por el modo de vida industrial y la crisis ambiental generada. Y lo que es más grave, las instituciones de control y protección en este sistema pierden la capacidad de manejar los riesgos sociales, económicos, políticos e individuales que se generan en este proceso de progreso tecnoeconómico (Beck, 1998: 26-32). Los riesgos generados por este proceso y los efectos de esta pérdida de control de los mismos han sido denunciados desde hace décadas. Recientemente, Martínez Alier (2005) y junto a Ramachandra Guha (1997) han trabajado en torno a lo que han denominado *el ecologismo de los pobres,* es decir,

[41] Este autor expresa de forma clara el imaginario que subyace detrás de esta afirmación: "*mediante el aumento de los rendimientos en producto (output) por unidad de insumo (input) a lo largo del tiempo, la humanidad acabó dominando las fuerzas de la naturaleza y, en el proceso, se dio forma como cultura*" (Castells, 1996: 94) En este sentido, sea cual sea el momento económico en el que la humanidad se encuentre, es necesario identificar las fuentes de la productividad para su comprensión (Castells lo hace para lo que él denomina la economía informacional: Op. Cit., pp. 94 – 115).

[42] En este sentido encontramos el marco teórico construido desde la "Sociología Rural como crítica medioambiental a la industrialización alimentaria". Las ideas clave de esta construcción se basan en el análisis del *"proceso de sustitución"* de los alimentos por productos agrarios industrializados, que aparecen como "*alimentos fabricados"* en un creciente *"proceso de apropiación"* industrial de la agricultura (Goodman y Redclift, 1991). Este proceso es criticado desde esta corriente de pensamiento, ya que revoluciona culturalmente la alimentación, desvinculándola de los procesos naturales (Sevilla, 2006b: 116 - 117).

la diversidad de enfoques ecologistas y ambientalistas que existe en función de los contextos socioeconómicos. La analizan en base a las diferentes formas de protesta social, ante el deterioro de sus recursos naturales y la apropiación de los procesos por la lógica de la agricultura industrializada, que se están generando en distintas partes del mundo. Pero las denuncias y la búsqueda de alternativas no sólo surgen y se construyen en los países periféricos de este foco de difusión de la industrialización de la agricultura (países industrializados), sino que también se desarrollan en el seno de estos mismos, por parte de grupos sociales del medio rural que no conciben su entorno ni su trabajo dentro de la lógica imperante (sería, como expusimos anteriormente, la propuesta postmoderna).

Los planteamientos de la Agroecología se hacen eco de todo el diagnóstico analizado. Pretenden, en consecuencia, romper con este proceso evolutivo para evitar la degradación de la naturaleza y de la sociedad que ello implica. Se parte de la idea de que dentro de los etnoecosistemas, la disponibilidad de productos suficientes para el abastecimiento interno debe ser básica, así como la adquisición de otros bienes y servicios necesarios, que provienen de fuera del sistema. Estos intercambios resultan fundamentales para la pervivencia del mismo[43]. Sin embargo, deben establecerse íntimamente relacionados con la productividad natural del agroecosistema, con el carácter de las prácticas agronómicas y del marco social donde se encuadran y con el tamaño adecuado de la población que soportan (Guzmán et al., 2000). En definitiva, deben plantear un metabolismo social[44] del etnoecosistema de naturaleza agroecológica.

La adaptación de las tecnologías de tipo técnico – productivo a los contextos ecológicos y sociales no pueden significar procesos asilados. El cambio a tecnologías propias debe ir acompañado de un cambio en profundidad del contexto agroalimentario en el que se insertan. De esta forma, es preciso abordar los sistemas agroalimentarios donde se engloban los agroecosistemas como focos productivos, junto a elementos como la distribución de recursos y el procesamiento y la comercialización de productos (Altieri, 1999). Se trata, pues, no sólo de adaptar las tecnologías, sino también el entorno económico de los agroecosistemas, construyendo relaciones de intercambio controladas por los propios productores y productoras. La recuperación de este control y protagonismo permitirá mejorar la viabilidad y las oportunidades de las estructuras productivas familiares y por lo tanto se alcanzará una mayor sustentabilidad en las sociedades rurales.

Partiendo de los sistemas más autocentrados, aglutinados en lo que se ha llamado la economía campesina y más allá de la discusión teórica y política de si la producción campesina constituye un específico modo de producción, o es simplemente una clase o fracción de una clase más amplia, encontramos determinadas características que

[43] En este sentido, Altieri (1999) plantea que los agroecosistemas son sistemas abiertos, que intercambian elementos con el exterior y que hace complicado establecer los límites de lo que podríamos considerar el agroecosistema y lo externo a él

[44] El metabolismo social puede definirse como "el conjunto de procesos por medio de los cuales los seres humanos organizados en sociedad, independientemente de su situación en el espacio (formación social) y en el tiempo (momento histórico), se apropian, circulan, transforman, consumen y excretan materiales y/o energías provenientes del mundo natural (Toledo y González de Molina, 2007: 89 – 90). Sobre el concepto de metabolismo social y su origen, C.f. Fischer Kowalski, M. (1997); sobre sus características: C.f. Toledo y González de Molina, Op. Cit.).

expresan que hasta en estos sistemas existen intercambios con el exterior (Toledo, 1993). Una de las características de la producción campesina es que gran parte de ella se destina al autoconsumo, ya que prioriza la autosuficiencia como mecanismo de subsistencia y reproducción del grupo social[45]. Sin embargo, existe una cantidad de producción que se hace circular al exterior de la unidad productiva y familiar. Como representa este mismo autor, existe un amplio espectro de situaciones entre dos tipos extremos de organización social, en cuanto a formas de producción y de relación con el sistema exterior: *la producción para uso* y *la producción para intercambio*. La situación donde encontremos los sistemas que analicemos será consecuencia del proceso histórico y cultural seguido, de modo que corresponderá con una determinada forma específica de sociedad rural.

En la forma más pura de *producción para uso*, el proceso se reduce al intercambio ecológico de la unidad productiva con el entorno natural. En este caso, la unidad productiva es una especie más dentro del ecosistema y el proceso productivo es un puro proceso ecológico. El otro extremo, el sistema puro de *producción para intercambio*, supone una especialización muy elevada de la unidad productiva y una integración total del proceso productivo en las redes del mercado. Los intercambios y procesos ecológicos asociados a este tipo de producción agraria están subordinados a las dinámicas económicas.

Entre estas dos situaciones extremas, se dan una multitud de situaciones y realidades, correspondientes a las diferentes sociedades y culturas. En el caso de las agriculturas industrializadas, las situaciones de *producción para uso* apenas existen. Las situaciones que nos encontramos corresponden a mayores o menores grados de autoconsumo, pero siempre con una orientación hacia la comercialización, ya sea a través de mercados de proximidad, nacionales o de exportación.

También en las economías más campesinas se da una producción de bienes que son circulados externamente (Toledo, 1993). En estos casos, la cuestión se centra en asumir que la producción para autoconsumo no excluye la producción de excedente. Y el *enigma* es por qué ese excedente en las economías de *producción para uso* no se acumula y transforma el sistema (Toledo, 1992).

Estas economías campesinas a las que Toledo se refiere nos demuestran que la lógica económica basada en la acumulación y el lucro no es el resultado de la evolución natural de cualquier sistema que produce excedentes y los intercambia. Por el contrario, los intercambios de los excedentes pueden ser los mecanismos a través de los cuales se preserve la perdurabilidad de las economías familiares rurales.

La cuestión que surge, inmediatamente, es otra relacionada con esta primera: cuáles son los mecanismos que utilizan o están a disposición de las producciones agrarias familiares, para intercambiar sus excedentes. El interés de esta cuestión, más allá de un mero inventario de opciones, se centra en analizar el grado de control y poder que, en cada uno de los mecanismos existentes, tienen los agroecosistemas familiares (capacidad de promover procesos endógenos). Asimismo, interesa analizar la garantía

[45] Es a lo que Toledo (1993), utilizando la nomenclatura de Marx, apunta como la predominancia de los *valores de uso* por encima de los *valores de intercambio*

de *sustentabilidad* y perdurabilidad que estos mecanismos generan para estas estructuras.

En base a lo analizado en torno a los planteamientos de la Agroecología, apuntamos a recuperar o proteger el mercado como espacio de flujos constituidos por redes, en las que las relaciones que se desarrollen lo hagan a través de *horizontalidades* (Santos, 2000). De este modo, el mercado representa el contexto donde la producción local se integra de forma solidaria. Estas solidaridades horizontales tienen una naturaleza tanto económica, social, cultural como geográfica.

Las relaciones que determinan el espacio del mercado se establecerían en base a lo que Boltanski y Thévenot (1987) definieron como economía de las convenciones. Estos autores propusieron este marco conceptual, que aproxima la economía y la sociología[46]. Pretenden explicar los procesos a través de los cuales se establecen acuerdos y cómo se coordinan loa actores que participan en ellos. Esta propuesta representa un intento de analizar las modalidades en las cuales los actores establecen formas cooperativas, a pesar de tener intereses divergentes y establecen aquellas condiciones que facilita la coordinación entre ellos. Para que tengan lugar estos intercambios y estas coordinaciones, será preciso establecer convenciones entre las partes.

Estas convenciones o reglas no se establecen con posterioridad a la acción, sino que emergen en el mismo proceso de coordinación e interacción entre actores. Son representaciones dinámicas de las negociaciones y, por lo tanto, dependen de las prioridades comunes entre los actores implicados. Como plantea Wilkinson (1997), el reconocimiento o identificación intersubjetiva de las reglas es un proceso colectivo y dinámico de permanente justificación y examen.

La economía de las convenciones nos permite aseverar que en las reglas económicas y del mercado pueden aflorar otras racionalidades, que regulen formas de convivencia y de regulación propias y endógenas de cada región o territorio. De este modo, cabe plantear la posibilidad de establecer o defender mecanismos que se resistan a la presión homogeneizadora y unificadora de la racionalidad hegemónica de las verticalidades. En esta línea de pensamiento, el mercado no es un simple mediador de las relaciones sociales, sino que es el fruto de las relaciones sociales y de los valores que un grupo o sociedad quiere construir, considerando los condicionantes histórico-sociales de cada región (Paulus, 1998).

De este modo apuntamos a nuevos paradigmas de la Economía en los que se debe hacer un esfuerzo de imaginación y de desmarque de los grandes circuitos de distribución, participando en la reconstrucción de las economías locales y regionales (Sampeu, 2001). La cuestión se centra fundamentalmente en fomentar canales de comercialización cortos:

[46] Según Fonseca (2007: 123), para los economistas la circulación de bienes y los intercambios son el origen de lazos sociales entre personas; y es el mercado, a través de sus tensiones y sus relaciones de fuerza, quien define esos lazos sociales. Para los sociólogos, los lazos se basan en reglas que los individuos establecen y que rigen sus relaciones; y estas reglas provienen de hábitos, culturas o conocimiento común.

a. En cuanto a distancia, disminuyendo al máximo los costes económicos y ambientales derivados de embalajes, del transporte a grandes distancias y del almacenamiento frigorizado.
b. En cuanto a intermediarios, recuperando la capacidad de decisión y de acción de la producción y del consumo

Esta concepción de los intercambios y del mercado se traduce a través de distintas formas concretas en el ámbito agrario y rural, que coinciden en una característica común: facilita la recuperación de la pequeña agricultura, orientada a la producción ecológica y con una estrecha relación con el consumo, en la que se pueden recuperar determinados valores como (Meirelles, 1997: 212):

a. Transparencia en las negociaciones.
b. Privilegiar la lógica de la solidaridad y la complementariedad, en detrimento de la lógica de la competitividad y la exclusión.
c. Creación de estructuras de mercado que favorezcan a la población como un todo y no a grupos de intereses.
d. Conocimiento mutuo entre los agentes, en detrimento del anonimato.

Así, las alianzas entre producción y consumo son fundamentales si pretendemos construir una actividad agraria y un medio rural sustentables. Para ello, las personas deben preocuparse de lo que comen y a quién entregan su dinero, "*en lugar de entregarlo a sociedades anónimas remotas y destinos desconocidos*" (Sampeu, 2001: 536). En este sentido, el cambio de valores de los consumidores y consumidoras que algunos autores como Stern (1997: 16-17) plantean como eje fundamental en la solución de los problemas ambientales que componen la crisis ambiental descrita, se puede trasladar a la construcción de alternativas en el ámbito de las relaciones sociales y económicas con la producción de alimentos.

Las *convenciones* para los intercambios de productos agrarios, desde la óptica agroecológica, construyen mecanismos que facilitan la confianza entre los actores implicados. La construcción de esta confianza debe basarse, fundamentalmente, en relaciones lo más directas posibles entre producción y consumo, construyéndose de este modo un nuevo consumo urbano al que el medio rural suministra directamente (Perry, 1998). Como ya hemos visto, son numerosas las experiencias de este tipo que se vienen desarrollando desde hace años tanto en nuestros contextos como en otras zonas del mundo[47].

2.2.1. Los sistemas de garantía en las producciones ecológicas

El modo en el que se lleva a cabo la comercialización de los productos ecológicos define el tipo de relaciones que se dan entre la producción y el consumo de estos productos. Estas relaciones determinan la necesidad de generar un mecanismo que

[47] Sobre la experiencia concreta de la Agricultura apoyada por la Comunidad (CSA), en EEUU, se puede consultar la siguiente fuente: Henderson (1999).

permita, por un lado, a las personas productoras mostrar que los productos que ofrecen han sido obtenidos a través de un manejo determinado; por otro lado, a las personas consumidoras tener garantía de que lo que adquieren responde a unas características determinadas en su forma de producción.

Medaets (2003:25) plantea que para distinguir un producto diferenciado del *producto patrón* surge el instrumento de la certificación. Este mecanismo es necesario en el contexto de iniciativas que fomentan producciones de calidad diferenciada, donde se insertan las ecológicas. Por el atractivo en el mercado convencional de los productos ecológicos, debido a unos mayores precios fundamentalmente, tanto el consumo como la producción de estos productos tienen cierto temor de una conducta poco ética de las personas productoras (Briz et al., 2004).

La peculiaridad de los productos ecológicos radica en que se enmarcan en lo que Nelson (1970) definió como productos de confianza y credibilidad, dentro de una clasificación en la que establecía tres tipos de productos de consumo:

1. Los de búsqueda
2. Los de experiencia
3. Los de confianza y credibilidad

En los dos primeros casos, las categorías de búsqueda y de experiencia, las cualidades extrínsecas o intrínsecas de los productos que son valoradas son identificables a simple vista o tras su consumo. Son cualidades que pueden ser detectadas fácilmente por un consumidor cualquiera.

Sin embargo, en la tercera categoría, los de confianza y credibilidad, se encuentran aquellos productos cuyas cualidades pueden incluso no ser detectables tras el consumo, es decir, no es posible juzgar esas cualidades intrínsecas buscadas en el producto. Es el caso de los productos ecológicos: en muchos casos, a simple vista e incluso tras su consumo, no son diferenciables.

En este tipo de productos, el mecanismo de garantía más simple es el establecimiento de una relación directa o personal entre la producción y el consumo. Es la vía adoptada por diversas experiencias de consumo directo de productos ecológicos, donde se establece una relación estrecha entre ambos[48]. En estos casos, la garantía del origen ecológico de los productos intercambiados es directa, a través de relaciones personales de conocimiento mutuo[49].

[48] Una sistematización detallada de las iniciativas de relación directa entre producción y consumo, en el Estado español, puede consultarse en Pérez Neira, D. y Vázquez Meréns, D. (2008)

[49] La confianza ha sido tratada de forma extensa por la pensadora francesa Laurence Cornu. Esta autora plantea que este concepto representa la creencia de que una persona o grupo es capaz y actuará de acuerdo con las normas establecidas. En este sentido, esta autora señala que es el mecanismo a través del cual se pueden establecer relaciones de reciprocidad horizontales, donde no haya superioridad de poder de unos actores con respecto a otros. El primer paso para poder garantizar esta base relacional, en el contexto que estamos desarrollando, serán las relaciones directas, ya que estas permiten establecer un seguimiento continuado de las acciones de las personas implicadas.

En los canales de intercambio en los que esta relación no es tan estrecha, el consumo y la producción deben recurrir a ciertos mecanismos que dan garantía, de alguna forma, de que el producto tiene un origen ecológico. La cuestión central que pretendemos polemizar en esta construcción teórica radica en el siguiente planteamiento: qué tipo de estructuras y modos de manejo de los recursos naturales fortalecen los mecanismos aplicados, cómo incluyen y a qué nivel de participación a los distintos actores; y cómo establecen los procedimientos de elaboración de los criterios y los procedimientos en los que se basan.

Componentes de los sistemas de garantía

Cualquier proceso de generación de confianza en lo que se intercambia consta de dos componentes fundamentales: en primer lugar, las cualidades que se buscan en los productos o en los procesos que hay detrás de ellos y que se pretenden garantizar. Sería lo que correspondería con la cuestión de *qué se está avalando.* En segundo lugar, el procedimiento o mecanismo a través del cual se va a verificar que el producto o el proceso en cuestión reúne las cualidades exigidas. Sería lo que respondería a la pregunta de *cómo se está avalando*.

La primera componente se refiere a las características y criterios productivos que se desea que el producto o proceso respeten. Son las normas de producción y manejo o los patrones de producción. Como los define Farnworth (2004), refiriéndose al ámbito de la responsabilidad social, son acuerdos más o menos públicos y democráticos que regulan una serie de responsabilidades para los diferentes actores de los puntos de una cadena de producción – consumo[50].

En la producción ecológica, estas normas establecen aquellas técnicas de manejo y aquellos productos cuya aplicación está permitida. En la actualidad existen diversas normas establecidas en diferentes ámbitos geográficos. Existen algunas que se centran fundamentalmente en establecer un listado de productos y prácticas prohibidas, como es el caso del Reglamento Europeo 2092/91, que es el que regula en toda la Unión Europea la producción ecológica oficial; y otras que establecen también criterios de carácter social y criterios sobre procesos de transición hacia prácticas con un carácter más agroecológico, como es el caso del cuaderno de normas con el que trabaja la Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa, red brasileña de la que hablaremos en el capítulo 6. Estos acuerdos o normas pueden estar regulados a nivel público – institucional, como es el caso de la Unión Europea y el Reglamento ya citado, o pueden ser acuerdos a los que llegan un grupo de actores, con un carácter privado. En este último caso, lo privado puede tener diferentes formas, de entre las que proponemos, para nuestro análisis, dos modelos: a. aquel que conforma una cadena agroalimentaria concreta, controlado por las entidades que dominan la misma (sería lo privado regido por intereses particulares); b. aquel que construye una colectividad social concreta, en la que los niveles de participación de todos los actores interesados es máxima (sería lo privado regido por intereses colectivos o sociales).

[50] Esta cuestión la podemos enmarcar en la *teoría de las convenciones* considerada con anterioridad en este mismo capítulo

La regulación pública del sector de la agricultura ecológica conlleva diferentes ventajas (Galante, 2002:43):

a. Fortalece la confianza de los consumidores y consumidoras en estos productos, pues ofrece al consumo información objetiva sobre la calidad de los productos ecológicos.
b. Potencia el desarrollo del sector y de los productores y productoras.
c. Posibilita el intercambio de estos productos a través de las fronteras.

Sin embargo, el establecimiento de una reglamentación pública genera una serie de efectos no deseados: a) provoca una homogeneización de las formas de producción, en todo el territorio afectado por la reglamentación pública que entorpece, o desincentiva, el desarrollo de las especificidades locales; b) genera la percepción de que los criterios incluidos en la reglamentación son un fin en sí mismos, pues con su cumplimiento se está dentro del sector en cuestión, desincentivando los procesos de evolución y mejora y, por último; c) causa la exclusión de productores y productoras que, no por motivos de filosofía ni intención, sino por motivos fundamentalmente económicos y administrativos no pueden entrar en los circuitos reconocidos bajo esta reglamentación.

En el caso de la Unión Europea, región donde la regulación pública se implantó en el año 1992 y en palabras de Sylvander (1997), el proceso de regulación pública marcó un punto de inflexión en el movimiento de agricultura ecológica europeo. Supuso el paso de una visión global del sistema de producción ecológica a una visión "producto / cliente".

Por otro lado, las normas de carácter privado, establecidas por grupos generalmente de productores y consumidores, que no cuentan con un reconocimiento oficial, presentan ciertas ventajas e inconvenientes muy relacionados con los de la reglamentación pública. Como ventajas diremos que se trata, generalmente, de normas más dinámicas y vivas, que suelen estar en continua revisión. Las modificaciones y construcciones colectivas suelen ser más fáciles y ágiles. Su flexibilidad les permite adaptarse mejor a las realidades locales de las que surgen, respondiendo de forma más directa a las inquietudes o problemáticas reales existentes.

Sin embargo, también presentan ciertas desventajas. En primer lugar, uno de los grandes problemas que se encuentran este tipo de experiencias suele ser el dar a conocer la imagen o logotipo que les representa. No sólo la imagen en sí, sino todo lo que significa y simboliza. Esto se agrava cuando en el mercado existen varias imágenes, de diferentes grupos, que pueden querer significar procesos parecidos, pero con especificidades propias. Trasmitir todo esto a los consumidores sin generar confusión resulta complicado. En realidad, el modo de operar de estos grupos equivaldría a dar a conocer una marca o logo en el mercado, para lo que se requieren tiempos de difusión y de consolidación bastante importantes. El hecho de contar cada iniciativa con especificidades propias y no estar bajo un único paraguas puede generar cierta rivalidad o competencia entre diferentes grupos, que el consumidor o consumidora puede no entender. Esto puede debilitar la unión de fuerzas para reivindicar determinados reconocimientos o apoyos públicos.

Cuadro 4.- Ventajas y desventajas de las regulaciones públicas y privadas

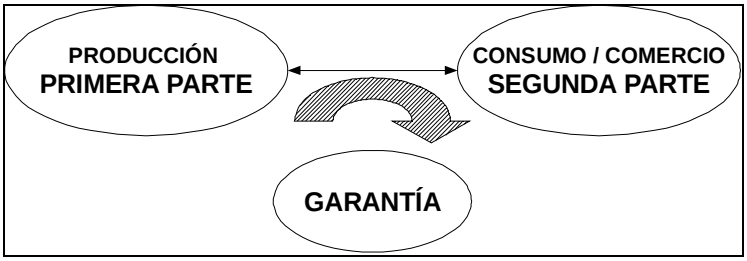
	Regulación pública	**Iniciativas privadas de regulación**
Ventajas	El apoyo público facilita la difusión de ese modo de producción, así como la confianza del consumo. Esto permite un mayor desarrollo de ese sector y el intercambio de productos a grandes distancias	Se trata de normas dinámicas y vivas, en continua revisión. Responden de forma más fiel a las realidades y problemáticas locales, y los procesos de adaptación a cambios o coyunturas son ágiles.
Desventajas	Acota y homogeneiza los modos productivos regulados bajo el mismo paraguas, desincentivando procesos locales de adaptación, de innovación y de mejora. Suelen generar situaciones de exclusión de determinados sectores productivos, por cuestiones económicas o burocráticas de los mecanismos de verificación establecidos	La difusión de la iniciativa y su contenido suele ser dificultosa, en un mercado donde existan otras iniciativas y otros identificativos. Esto puede generar confusión en el consumo. Su establecimiento y consolidación es más lenta. Si se generan dinámicas de competencia entre iniciativas diferentes aunque similares puede debilitar el movimiento y perder fuerza de reivindicación frente a los poderes públicos.

Respecto a la segunda cuestión relacionada con los procesos de generación de confianza, el *cómo se avala*, existe toda una serie de sistemas y mecanismos, reconocidos o no por los reglamentos oficiales existentes. Se les denomina *Sistemas de Garantía*.

Los Sistemas de Garantía en la producción ecológica

La primera clasificación que podemos establecer para los Sistemas de Garantía viene dada en función de los actores que se van a responsabilizar de asegurar que el proceso de producción en cuestión respeta las normas establecidas. Partimos de la idea de que los mecanismos para verificar el cumplimiento de las normas establecidas se colocan entre dos partes interesadas: los actores responsables de la producción o *primera parte*; y los actores que adquieren la producción, bien para comercializarla bien para consumirla, denominados *segunda parte*.

Figura 2.- Lugar que ocupan los mecanismos de garantía en el proceso de circulación de productos ecológicos



Partiendo de esta nomenclatura, existen cuatro grandes tipos de Sistemas de Garantía, en función de los actores implicados en avalar el cumplimiento de las normas establecidas por parte del proceso productivo o el producto evaluado.

Cuadro 5.- Sistemas de garantía en función de los actores responsables de avalar la producción

Sistema de garantía	Características
Garantía de primera parte	Los actores productores que componen la iniciativa asumen un compromiso y firman una declaración de cumplimiento. Son ellos y ellas quienes dan la garantía de lo que hacen
Garantía de segunda parte	Quien garantiza el cumplimiento de las normas establecidas no son los productores o productoras, sino otros grupos o actores que adquieren estas producciones: una organización que comercializa los productos, una organización externa que apoya el desarrollo del proyecto productivo, una organización que consume esta producción, etc.
Garantía de tercera parte	La garantía del cumplimiento de las normas establecidas la establece una entidad profesionalizada en la cuestión de la certificación y acreditada para ello por los organismos correspondientes. Dentro de este sistema, el control puede realizarse a los productores y productoras individualmente o en grupo.
Garantía participativa	Los grupos de productores, en colaboración con otros actores (consumidores, ONG,...) establecen un sistema propio de verificación, en el que participan todos los actores implicados en el proceso de producción y consumo.

Fuente: Adaptado de Lernoud y Fonseca, 2004

En base a la nomenclatura que considera a la producción como la primera parte del proceso de garantía y a la figura que adquiere el producto, ya sea el consumo o la entidad comercializadora, como segunda parte, definimos aquellos sistemas que basan su garantía en uno de estos actores, de forma independiente. Por otro lado, la garantía de tercera parte es aquel sistema en el que entra un actor intermediario entre la producción y el consumo, para generar la confianza en lo que se intercambia. Por último, la garantía participativa es el sistema que aglutina a todos los actores implicados en el proceso de

producción y consumo para, colectivamente, generar procesos de confianza. Sea cual sea el Sistema de Garantía que se establezca, el proceso que se sigue es el siguiente:

a. En primer lugar, se deben considerar los principios o normas que se quieren promover o hacer respetar;
b. En segundo lugar, se les asigna un valor a estos principios, a través de la traducción en estándares. Los estándares contemplan el peso específico que se le quiere dar a cada norma o principio;
c. En tercer lugar, se desarrollan indicadores que permitan evaluar, de una forma creíble y efectiva, los estándares;
d. En cuarto lugar y en función del sistema de garantía establecido, se trabaja el proceso de comprobación del cumplimiento de las normas o principios. Es a lo que se denomina *evaluación de conformidad*.

De los cuatro grandes sistemas de garantía descritos, el más extendido en los productos ecológicos es el de *tercera parte*. Este sistema es más ampliamente conocido como certificación, ya que el proceso de garantía se traduce en un certificado emitido por la entidad intermediaria. De este modo, la certificación supone un proceso complejo donde entra en juego una tercera entidad, reconocida públicamente con capacidad para verificar el cumplimiento de las normas establecidas para el proceso productivo. En la garantía por tercera parte, las entidades de certificación pueden ser:

- *Públicas* (en su acepción como sinónimo de institucionales), asumiendo la propia administración la verificación de los estándares exigidos y para lo cual debemos estar ante una regulación pública; en este caso reciben el nombre de *organismos de control;*
- *Privadas*, en cuyo caso es necesario que estén autorizadas para realizar esta labor (éstas pueden actuar tanto en el caso de que haya una regulación pública, si así se establece, como privada); en este caso reciben el nombre de *entidades de control*. Este proceso de autorización a las entidades privadas de control se denomina *"acreditación"* y viene realizado periódicamente por las llamadas *"entidades de acreditación"* o *"autoridades de control"*.

La base del sistema de garantía por tercera parte es la evaluación de conformidad de la forma de producción a través de una visita anual, por parte del organismo/entidad de control. La visita anual la realiza una persona, con cualificación técnica, contratada por el organismo/entidad para tal efecto. Esta visita recibe el nombre de *auditoría técnica*[51]. El informe de la visita es trasmitido a la entidad/organismo, quien establece sus mecanismos de evaluación del informe y de toma de decisiones. En este procedimiento, es obligatorio que el organismo/entidad responsable tenga separadas claramente las funciones de inspección y las de autorización del uso del sello, en su organigrama (Medaets, 2003: 157).

El sistema de garantía a través de la *certificación por tercera parte* es el más ampliamente reconocido actualmente a nivel internacional y oficial. La propia ISO, que es la Organización Internacional de Estandarización (International Standards

[51] Este sistema de garantía recibe también el nombre de *sistema de garantía por auditoría*

Organisation), establece la importancia que actualmente tiene este sistema de evaluación de conformidad: "*Con tanto comercio como existe entre fronteras, la evaluación de conformidad se ha convertido en una componente importante de la economía mundial. A lo largo de los años, ISO ha desarrollado numerosos estándares sobre los cuales se verifica la conformidad de muchos productos, así como métodos de evaluación estandarizados, que permiten hacer comparaciones sobre los resultados, tan necesarios para el comercio internacional (...). ISO desarrolla las guías y los estándares ISO/IEC a ser usados por las organizaciones que se dedican a realizar las evaluaciones de conformidad. Su uso contribuye a la consistencia y coherencia de las evaluaciones de conformidad a nivel mundial, y por lo tanto facilita el comercio a través de las fronteras*"[52]. De esta forma, la imposición de una forma gradual y suave de este tipo de evaluación de conformidad en los productos se ha debido fundamentalmente a la intensificación de los intercambios comerciales internacionales.

La norma a nivel internacional que regula el procedimiento de la certificación por tercera parte es la Norma ISO/IEC 65, que establece cuatro reglas fundamentales que toda entidad de certificación por tercera parte debe cumplir[53]:

a. Imparcialidad: exige de las entidades que se mantengan en una estricta labor de control y auditoría, prohibiéndoles cualquier otra actividad de asesoría, consultoría, etc. que podrían generar conflictos de intereses. Asimismo, se les exige que apliquen las mismas normas y reglas a todos los operadores con los que trabajan, independientemente de las características locales o posibles casos particulares.
b. Confidencialidad: Establece que todos los datos e informaciones de las que disponen las entidades de control son secretos y no pueden divulgarse públicamente.
c. Competencia: se les exige a las entidades unas mínimas infraestructuras para garantizar que pueden desarrollar su trabajo, así como una cualificación técnica adecuada a su personal para ejecutar los controles, las auditorías y toda la cuestión burocrática asociada a este procedimiento.
d. Independencia: estas entidades deben demostrar que tienen medios para ser viables y sostenibles y que no dependen de fondos de otros actores privados para poder operar. Asimismo, no pueden formar parte ni de la producción ni de la comercialización, sino que deben ser actores completamente ajenos a estos procesos.

[52] Texto original (traducción propia): "With so much trade taking place across borders, conformity assessment has become an important component of the world economy. Over the years, ISO has developed many of the standards against which products are assessed for conformity, as well as the standardized test methods that allow the meaningful comparison of test results so necessary for international trade (...) ISO develops ISO/IEC guides and standards to be used by organizations which carry out conformity assessment activities (...). Their use contributes to the consistency and coherence of conformity assessment worldwide and so facilitates trade across borders". En http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=96545 (fecha de consulta: 5 de enero 2008)

[53] Entrevista realizada a Fernanda Fonseca, investigadora de EMBRAPA, Brasil, y experta en Sistemas de Garantía (PE17) y a Lionel (PE20), técnico inspector de la Federación Nature et Progrès (PE20)

El sistema de certificación por tercera parte en la producción ecológica tiene dos variantes: a) que la entidad certificadora trabaje con titulares de fincas ecológicas de forma individual; b) que la entidad certificadora trabaje con un grupo de titulares, de manera que determinados trámites burocráticos son gestionados en común por el grupo. De esta forma se consigue simplificar algunos procedimientos y abaratar en cierto grado los costes. En este caso, la entidad de certificación realiza, de igual forma, las visitas de auditoría a todas las fincas implicadas en el grupo. Es a lo que se denomina *certificación grupal por tercera parte*.

El sistema de garantía diametralmente opuesto al de la *certificación o garantía por tercera parte* es el *sistema participativo de garantía*. Los *Sistemas Participativos de Garantía (SPG)* se basan en la idea de la capacidad intrínseca del entorno social de las personas productoras para avalar si estas llevan a cabo un sistema de manejo ecológico. El entorno social estaría compuesto por otras personas productoras vecinas, consumidoras que le compran directamente y que han establecido con esa producción una relación de confianza directa y las figuras técnicas de administraciones u ONG locales de asesoría, que trabajan directamente con la producción de forma habitual.

Estos sistemas formalizan la red de relaciones locales que la producción establece en su actividad cotidiana, con el fin de avalar como ecológicos su comportamiento y los productos con los que trabaja. De este modo, el proceso de *evaluación de conformidad* se basa en la participación solidaria de todos los segmentos interesados en asegurar la calidad del producto final y del proceso de producción.

Como plantea Meirelles (2004), los *Sistemas Participativos de Garantía* son el resultado de unas dinámicas sociales que integran a todos los actores involucrados en la producción, el consumo y la divulgación de los productos que son avalados. Su principal característica reside en ser un procedimiento que prescinde de la figura técnica como máximo responsable de la credibilidad de un producto (Red Ecovida, 2004: 4).

La filosofía que sustenta estos sistemas, según IFOAM[54] (2007), responde al ideal que persiguieron los pioneros de la agricultura ecológica: tienen una visión de la agricultura que es fundamentalmente ecológica y defienden al campesinado y los trabajadores y trabajadoras agrarios en un contexto de justicia social y economía sustentable a largo plazo. Suelen tener como prioridades los mercados locales y consiguen, donde funcionan, favorecer la cohesión social, la protección del Medio Ambiente y el desarrollo de la economía local en general. A grandes rasgos, los principales elementos en los que los SPG basan sus procedimientos son los siguientes[55] (adaptado de Santos, C.R. y Oliveira, D. Coord. 2004):

a. *Confianza*: Parte del principio de que tanto la producción, como el consumo y la parte técnica desarrollan sus acciones de forma responsable y honesta, con el objetivo de potenciar la Agroecología
b. *Participación*: Demuestra que la garantía se puede llevar a cabo de forma participativa, esto es, los principios y normas construidos colectivamente pueden ser puestos en práctica y verificados con la implicación efectiva de la producción

[54] IFOAM es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica.
[55] El funcionamiento concreto de algunas de estas experiencias lo describimos en el capítulo 6.

y sus organizaciones, la parte técnica y las organizaciones locales y regionales de asesoría y consumo.

c. *Descentralización*: Respeta y prioriza las iniciativas y estructuras locales, respetando la organización social de base de cada zona o grupo.
d. *Formación de red*: son procesos sin jerarquías, que buscan establecer conexiones entre los distintos actores de un territorio, a través de directrices y principios comunes construidos colectivamente
e. *Transparencia*: Las informaciones generadas en el proceso no son confidenciales
f. *Revisión externa*: Garantiza la presencia de personas y organizaciones no implicadas directamente en el proceso productivo
g. *Pedagogía*: Se considera fundamental que la garantía contribuya a una mejora en la comprensión de todo el proceso productivo y de comercialización agroecológico por parte de todos los actores que participan.

Como sistema intermedio, encontraríamos lo que IFOAM ha dado en llamar *los Sistemas de Control Interno (SCI)*. Este sistema consiste en la certificación de un grupo de productores por parte de un organismo/entidad de certificación. El grupo en cuestión establece un procedimiento interno de control mutuo y de evaluación. La entidad externa verifica periódicamente que este proceso funciona y audita un porcentaje de explotaciones para contrastar los resultados del mismo. En los Sistemas de Control Interno, el procedimiento de control y evaluación internos lo pueden asumir los propios productores y productoras o bien delegarlo a una figura técnica local, que entra a formar parte del propio grupo. Sea como sea, la verificación externa por parte de la entidad de certificación es condición *sine qua non* para obtener la certificación.

En el caso de que el control interno lo asuma una figura técnica local, debe recibir una capacitación por parte de la entidad de certificación. El contenido de la misma se centra en cuestiones relacionadas con la inspección de las fincas y los registros de control. Esta figura debe realizar una visita anual a cada una de las fincas que componen el grupo, antes del momento de la inspección externa. De esta forma, la inspección externa se basa en la revisión de la documentación generada y en la auditoría técnica de un porcentaje de las fincas, para verificar el contenido de los registros y la documentación.

Comparación entre los sistemas de garantía descritos

Para terminar de esclarecer los distintos sistemas de garantía existentes, vamos a profundizar en los elementos diferenciadores de aquellos que, en un principio, pueden resultar más próximos.

Los Sistemas de Control Interno vs la certificación grupal por tercera parte

Tanto en los Sistemas de Control Interno como en la certificación grupal por tercera parte, la evaluación de conformidad y la autorización del uso del sello recaen en un organismo o entidad de certificación. La diferencia fundamental de ambos sistemas radica en los mecanismos de control que se establecen. En los Sistemas de Control

Interno, el grupo productor establece un sistema de autocontrol y de verificación interna o bien busca a un técnico local que lo haga. El papel de la entidad de tercera parte se limita a comprobar que este sistema de aval mutuo o interno funciona correctamente. En la certificación grupal, lo que se asume por parte del grupo es la gestión de tipo burocrático. Sin embargo, el control de las fincas y de los manejos los hace la entidad/organismo de tercera parte.

Cabe decir que tanto la certificación grupal por tercera parte como los Sistemas de Control Interno con un técnico local encargado del control son sistemas que cumplen los requerimientos establecidos en la Guía ISO 65/97 y representan una forma de adaptar la normativa establecida por la ISO para la certificación por tercera parte a grupos productores (Medaets, 2003: 154). Los Sistemas de Control Interno establecidos a través de un control mutuo entre las personas miembro del grupo productor, sin embargo, no quedan recogidos en estos reglamentos, ya que no cumplen con el requisito de que cada finca sea visitada por una figura con cualificación técnica e independiente.

La forma de organizarse estos grupos, ya sea a través de una simple certificación grupal por tercera parte, bien a través de un Sistema de Control Interno, puede venir impulsada por dos vías (Medaets, 2003:155), l. Que la demanda del sello provenga de una empresa que quiere organizar la base productiva de la que sacar sus materias primas ecológicas. La empresa establece un grupo de certificación, con la modalidad que sea de las expuestas y ella es la que asume los costes derivados de este proceso, así como toda la producción que salga del grupo. La relación entre el grupo y la empresa se establece a través de contratos negociados. 2. Que el propio grupo productor, ya organizado, quiera certificarse y esta es la forma de poder acceder al servicio de una forma menos costosa.

Los Sistemas de Control Interno vs los Sistemas Participativos de Garantía

Los Sistemas Participativos de Garantía son procesos que implican a diferentes actores de la cadena productiva, comercial y de consumo. Son estos mismos actores quienes verifican el cumplimiento de las reglas establecidas, a través de diferentes herramientas como son las visitas cruzadas entre productores, de consumidores a productores, de ONG o instituciones técnicas y productores, etc.

En los Sistemas de Control Interno quien da el aval, en última instancia, es una organización técnica de certificación, revisando lo que un grupo de productores y productoras establece para autocontrolarse. Generalmente, en estos Sistemas no intervienen distintos actores, sino fundamentalmente grupos productores.

A nivel de organización, los Sistemas de Control Interno vienen supeditados a las condiciones de la entidad externa de verificación. El proceso de autoevaluación y de control mutuo deberá adaptarse y responder a los requerimientos de esta entidad. En el caso de los Sistemas Participativos de Garantía, los procedimientos son establecidos por las propias redes de personas implicadas. De esta forma suelen ser mecanismos más adaptados a la realidad territorial en la que se desarrollan. En los primeros, la capacidad de avalar y dar garantía recae en la entidad técnica de certificación, mientras que en los

segundos, estas capacidades se atribuyen a la implicación colectiva de las personas interesadas.

Los Sistemas Participativos de Garantía vs los Sistemas de Control Interno y la certificación grupal por tercera parte

Las principales diferencias entre la garantía y la certificación por tercera parte, ya sea grupal, ya sea a través de un control interno, se fundamenta en los actores que intervienen en los controles y el procedimiento de aval final. Podemos destacar como idea básica que la gran diferencia entre uno y otro sistema se basa en que parten de visiones y conceptualizaciones completamente diferentes, en torno a la garantía y a la capacidad de los actores interesados para implicarse en el proceso.

La certificación por tercera parte se basa en registros más rigurosos y en el mecanismo de las inspecciones externas para reducir los oportunismos. Mientras, la garantía participativa se sustenta en la conformidad social en torno a un objetivo común, la ampliación de la comunicación entre los grupos, en la reputación, en la exclusión social cuando se detectan oportunismos y en la implicación del consumo.

La base de la garantía en los primeros sistemas son las visitas técnicas por auditoría, con los registros exhaustivos que hemos comentado y los análisis de laboratorio. Los Sistemas Participativos de Garantía, por su parte, trabajan con un sistema social más complejo, en el que se establecen visitas de otras personas productoras y del consumo relacionado con la experiencia.

En los Sistemas de Control Interno y la certificación grupal hay una importante inversión de tiempo en llevar los registros exigidos para las propiedades. La inversión de tiempo en los Sistemas Participativos Garantía se centra en las visitas a otras personas productoras y en el establecimiento de procesos colectivos de discusión y toma de decisiones.

Cuadro 6.- Diferencias entre los Sistemas Participativos de Garantía y los sistemas de garantía de tercera parte grupales

Certificación colectiva por tercera parte: Sistemas de Control Interno y certificación grupal	**Sistemas Participativos de Garantía**
Se basa en el control del cumplimiento de una determinada normativa por parte de una entidad de certificación ajena al grupo de productores.	Se basa en una red de actores, implicados en toda la cadena productiva y comercial, que se corresponsabilizan para garantizar la calidad del manejo y los procedimientos, a través de visitas regulares y un control social
La entidad de certificación externa es la que define el proceso. Lo que delega es la actividad de inspección o los procedimientos burocráticos.	El sistema sobre el que se trabaja es fruto de una decisión y construcción colectivas
Generalmente, los productores de un mismo grupo tienen una producción similar y un mercado centralizado. Quien es certificado es el grupo en su conjunto.	La producción no tiene porqué ser similar, y el mercado puede ser diverso. El certificado puede ser del agricultor individual, si así se establece.
El objetivo de estas vías es abaratar costes y aumentar el ingreso.	Su objetivo, además de abaratar costes y aumentar el ingreso, es garantizar la autonomía del grupo, la corresponsabilidad y consolidar el tejido social local.
El destino de la producción es diverso, pero suele estar destinado a mercados lejanos.	El destino de la producción es, fundamentalmente, el mercado local.
La clave del proceso son las inspecciones externas que realiza la entidad de certificación por tercera parte.	La clave del proceso es la implicación de todos los actores de la producción, comercialización y consumo, en las visitas de revisión y la co-responsabilidad para la garantía.
Las figuras clave son los inspectores externos.	Las figuras clave son los propios actores del proceso de producción, comercialización y consumo.

Por el proceso de autocontrol y revisión mutua que se establece en los SCI, podemos decir que este mecanismo se encuentra a caballo entre la certificación grupal por tercera parte y los SPG.

2.2.2. Construcción del concepto de garantía desde la Agroecología

Las propuestas teóricas de la Agroecología en torno al manejo de los recursos naturales abarcan aspectos que van desde cuestiones técnicas a cuestiones políticas, como hemos desarrollado anteriormente. En relación a la cuestión de los sistemas de garantía de las producciones ecológicas, hay una serie de cuestionamientos y análisis poco desarrollados hasta el momento. Indudablemente no se trata únicamente de criticar procesos y visiones, sino de aportar aquellos que pueden suponer alternativas reales, desde la visión transformadora y emancipadora que supone la Agroecología.

El análisis que proponemos desde la Agroecología se basa en dos pilares: por un lado, los elementos que un sistema de garantía debe recoger para fomentar procesos de cambio social agroecológico; por otro lado, aquellos que darán la confiabilidad necesaria para poder construir sólidamente una garantía en torno a estos productos.

Una crítica desde la Agroecología a la certificación por tercera parte

El sistema de garantía oficializado, el de tercera parte, reúne una serie de características que lo hace poco adaptable a contextos de pequeñas y medianas producciones, con altos niveles de independencia. Santos (2002) cita algunas de ellas:

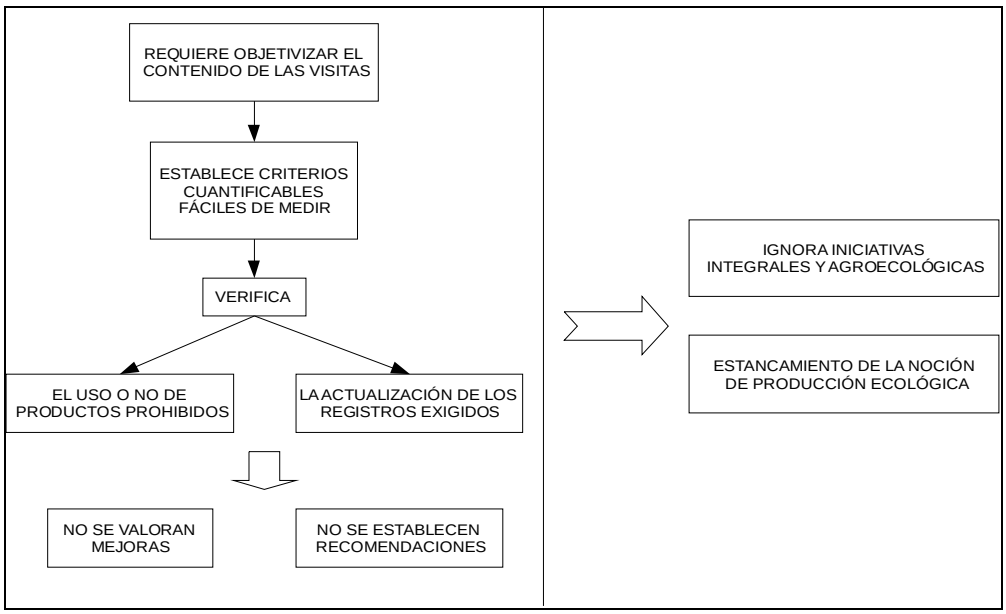
1. Suele estar basado en una documentación extensa y compleja, lo que dificulta el acceso a la misma a productores y productoras con menores capacidades de lectura y comprensión.
2. Sus principios y métodos son resistentes a cambios y adecuaciones, lo que los hacen muy poco flexibles y adaptables a diferentes realidades.
3. Se sobrevalora la figura técnica inspectora, como figura observadora, neutra y máxima responsable de la garantía.
4. Es un proceso caro. Los costes de la persona técnica (remuneración y dietas), de la elaboración de informes, de la emisión de los sellos y de las infraestructuras asociadas a estas actividades son elevados para grupos productores que no practican una agricultura de gran escala. A su vez, supone un sobreprecio al producto final ecológico que puede desincentivar el consumo de estos productos.
5. Se sella un producto y no un proceso, lo que hace que no se valore el trabajo en conjunto de la persona productora ni su compromiso real con cuestiones ambientales o éticas. Esto no garantiza una sustentabilidad real de las fincas o centros de producción, pues no se evalúa un cambio de actitudes.
6. Es un modelo centralizado y vertical, donde la certificadora y las figuras técnicas son las que ostentan la capacidad de decisión en todo el proceso.
7. Está supeditado a los intereses del mercado: la existencia de un mercado final que paga más por estos productos suele ser, en muchos casos, el principal motivador de la producción bajo los estándares verificados. Hay un riesgo real de dejar en un segundo plano cuestiones relacionadas con cambios de actitudes y comportamientos.

En este sistema técnico de entender la garantía, tanto producción como consumo son considerados como actores pasivos. Meirelles[56] expresa esta idea, con las siguientes palabras "…*lo peor* (del sistema de certificación por tercera parte), *las certificadoras se asumen por encima de las organizaciones de agricultores familiares, condicionándolas e imponiéndoseles, negando la existencia de opciones de credibilidad en la base popular (…). Lo que en un primer momento fue una iniciativa de los propios agricultores para diferenciar el fruto de su trabajo, con una marca que los identificase, acabó transformándose en un intrincado mecanismo que envuelve leyes, normalizaciones, acreditaciones, inspecciones, contratos, certificados, sellos y, aun, fuertes intereses comerciales*". La producción e intercambio de los productos

[56] Conversación mantenida con Laercio Meirelles, en Antonio Prado (Rio Grande do Sul), Brasil, en enero de 2005

certificados no necesitan redes sociales, ya que pueden provenir de producciones independientes y aisladas (Sylvander, 2004). Por tanto, esta producción y el consumo quedan sumidos en una pasividad que hace que el espíritu de red entre actores en el sector ecológico sea inexistente o pierda fuerza. Este mecanismo de garantía sólo exige abonar ciertas cantidades a la entidad/organismo certificador, imponiendo unas relaciones de tipo *cliente – prestador de servicios.* En esta lógica, las redes asociativas de producción y consumo pierden capacidad de acción e influencia (Sylvander, 1997). De esta forma se pierde una riqueza y una oportunidad de organización social importantes y se dificulta la acción transformadora de las propuestas agroecológicas. Por otro lado, la noción de examen técnico en la que se basa la garantía por tercera parte genera un proceso en cadena, que se esquematiza en la figura siguiente.

Figura 3.- Lógica y efectos de la garantía por tercera parte



La lógica en la que se asienta la garantía por tercera parte necesita criterios cuantificables, con el fin de objetivizar al máximo el contenido de las visitas. Esto implica una simplificación de los procesos productivos ecológicos, al centrar el proceso de evaluación en el uso o no de productos prohibidos y en la actualización de los registros exigidos. La cuestión de las recomendaciones y de las mejoras en las fincas hacia sistemas cada vez más agroecológicos y sustentables pierde su lugar. De este modo, se corre un serio riesgo de facilitar el estancamiento en lo que se concibe como producto ecológico y de frustrar a aquellas personas productoras con una visión más integral y agroecológica de su trabajo. Algunas consecuencias directas de estos efectos las analiza Roure (2007:17):

a. Favorece una especialización de las explotaciones, al ser menos costoso y más simple a nivel de burocracia la certificación de monocultivos, en detrimento de la diversidad necesaria para el buen funcionamiento de un agroecosistema.
b. Excluye de manera sutil y progresiva a las pequeñas explotaciones de policultivos y ganadería.

c. Fomenta la visión "enfermedad – tratamiento" (agricultura ecológica como sustitución de insumos), en detrimento de una visión del sistema de manejo más integral y preventivo.
d. Distancia el consumo de la producción de estos productos.
e. Homogeneiza la producción ecológica, en detrimento de la diversidad local de manejos y variedades.

Medaets (2003: 27) apunta que este procedimiento de certificación y de estructuración de las entidades certificadoras, impuesto y globalizado por el sistema ISO, fue desarrollado en un contexto industrial – urbano y bajo la lógica de la competitividad. La traslación de esta lógica a la actividad agraria y los contextos rurales ha sido directa, sin establecer ningún proceso de adaptación y ha desconsiderado las especificidades de una producción y un consumo que se relacionan a través de los alimentos.

La certificación en la producción agraria ecológica ha generado un sistema institucionalizado donde la agricultura de pequeña escala tiene serias dificultades para entrar. Podríamos decir y lo sustentaremos a lo largo de la investigación, que se trata de una normativa excluyente que afecta al ámbito rural en nuestras sociedades.

La garantía de los productos ecológicos como gestión colectiva de la confianza

Iniciamos el final de la aproximación teórica que constituye el marco conceptual de esta tesis doctoral. En este tratamos de establecer aquellos elementos que deberían incorporarse al concepto de garantía para que respondiese a las propuestas agroecológicas descritas. Esta construcción parte de las consideraciones analizadas en el presente capítulo sobre: por un lado, los procesos epistemológicos agroecológicos en torno al manejo de los recursos naturales; por otro lado, la visión de la ciencia con la gente, que se elabora a partir de una concepción profunda y estructural de la participación y; por último, la capacidad y el interés político de generar procesos de cambio social, de tipo agroecológico.

Con estas premisas, tratamos de construir una aproximación al concepto de garantía que implique una gestión, en este caso del recurso *confianza*, por parte de las propias personas implicadas en la producción y el consumo de productos ecológicos en los diferentes etnoecosistemas. Recuperar la capacidad popular de gestión de cualquier recurso, como base para garantizar una sustentabilidad de carácter ecológico, social y económico; en contraposición a la enajenación que el proceso de industrialización de la agricultura y sus procesos adyacentes generó, asignando a actores institucionales o privados la capacidad de gestión de los recursos, entre los que consideramos la confianza en los productos ecológicos. De este modo, la garantía en lo que se intercambia como producto ecológico puede plantearse como una ventaja y un premio para las personas implicadas en su producción y su consumo y no una penalización en términos de dependencia externa, de costes y de burocracia, como viene siendo la garantía establecida a través de la certificación por tercera parte.

De esta forma, partimos de la constatación de que la gestión de la confianza se puede establecer de tres formas: a través de una colectividad social; a través del Estado o los poderes públicos (institucionalización); o a través de una iniciativa empresarial privada (privatización)[57]. Desde la Agroecología, cabe elaborar una serie de conceptos que nos ayudarán a mostrar que la generación de confianza en los productos ecológicos puede llevarse a cabo a través de una gestión colectiva, con unos efectos a nivel social y económico muy interesantes para los grupos de producción y consumo de productos ecológicos de pequeña escala.

Partimos de la realidad de que la lógica económica mercantil desconsidera en sus análisis formas distintas de relación social que no sean la competitividad. De esta forma, no incorpora en sus análisis los impactos que generan otras posibles relaciones sociales entre producción, comercialización y consumo, de carácter alternativo (ya sean premodernos o posmodernos). Incorporando las relaciones sociales de tipo solidario, podemos considerar la noción del *control social comunitario* como base para los procesos de generación de confianza en las producciones ecológicas. El contexto donde se facilita este tipo de relaciones es lo que Galeski (1977: 133) definió como comunidades locales: "*la totalidad de habitantes de un territorio determinado en la medida en que constituyen un grupo social, esto es, si están unidos por un sistema de lazos y relaciones; por intereses comunes, pautas compartidas de normas y valores aceptados; por la conciencia de ser distintos de los demás grupos*". De esta forma, el control social comunitario se establece y, por lo tanto, se podrá sistematizar sólo en aquellas situaciones donde existan grupos de agricultores y consumidores establecidos a través de relaciones e intereses comunes en torno a la producción ecológica o bien, en aquellos donde se puedan fomentar un reconocimiento mutuo en relación a este tipo de producción a partir del cual construir formas grupales de solidaridad.

Las elaboraciones teóricas en torno al control social como base de la garantía participativa la plantea Jean Pierre Medaets en base a las conceptualizaciones de Landis, quien rescata la aportación de uno de los fundadores de la Sociología estadounidense, E.A. Ross. Este autor publicó un libro en 1901 con el título: "*Social control: A survey of the foundations of order*"[58] en el que lleva a cabo una conceptualización del control social en base a tres elementos que son valorados colectivamente como activos comunitarios: *la simpatía, la sociabilidad y el sentido de justicia* (Medaets, 2003: 75).

En este sentido, el control social puede definirse como un proceso en el que se condiciona el comportamiento de las personas dentro de un contexto específico; en nuestro caso, el manejo ecológico de los recursos naturales. Los elementos que

[57] Establecer la generación de garantía como un sector económico privado puede generar dos consecuencias importantes: por un lado, que se establezca una competencia por el mercado de la garantía, donde un mayor número de clientes y de sellos autorizados supondrá mayores ingresos; por otro lado, que se busque la minimización de los costes, con el objetivo de mantener los beneficios y el crecimiento de la empresa. Los riesgos de estas consecuencias para el sector de la producción ecológica son importantes: a) puede amenazar la calidad de las inspecciones por cuestiones de costes (la empresa CertiCAAE, entidad certificadora andaluza, en el año 2007 comenzó un proceso de subcontratación de sus inspecciones, a través de personal autónomo que cobra una cantidad fija por visita realizada); b) si existen varios organismos de certificación privados para un mismo sector y bajo una misma reglamentación, aquel que se muestre más flexible en las concesiones de las licencias será el que tenga un mayor número de clientes.

[58] Control social: una panorámica de los orígenes del orden (traducción propia)

sustentan este condicionamiento son las normas y los patrones de producción establecidas por la comunidad para realizar su manejo ecológico concreto. Las expectativas del entorno social son las que limitan los posibles desvíos e implican una cierta conformidad.

El respeto a las normas y patrones productivos establecidos puede venir dado por tres elementos: a) por el sentido de pertenencia a un grupo de referencia, con el que se comparten una serie de valores en relación a la producción ecológica; b) por motivación con respecto a los objetivos establecidos por el grupo, en términos de salud, de respeto al Medio Ambiente o de cambio social local o; c) por las relaciones de interdependencia de las personas miembro del grupo, en base a construcciones conjuntas de relaciones de apoyo mutuo en cuestiones como la comercialización, el intercambio de insumos, etc.

El control social en grupos humanos donde se establecen vínculos sociales en torno a la producción y el consumo de alimentos ecológicos puede considerarse automático. Existen unas exigencias mutuas en torno a las distintas responsabilidades de cada actor para asegurar estos procesos, así como un compromiso y una implicación permanentes. Los oportunismos o las posibles negligencias en estos contextos se detectan por estas relaciones sociales continuadas y este control social permanente. La ruptura con las expectativas del entorno social, por una no conformidad con las normas establecidas, es un elemento de suma gravedad. Conlleva la expulsión de esa persona del grupo generado.

De esta forma, un elemento fundamental en la construcción y consolidación de grupos radica en la confianza. La confianza es el mecanismo a través del cual una persona puede explicar o predecir cómo otra actuará en una situación futura, en función del comportamiento presente y anterior (Cornu, 2002). Para generar confianza entre personas o en grupos, existen algunas condiciones que facilitan como paso previo la cooperación entre ellas. Algunas de estas condiciones son, fundamentalmente, que se permitan relaciones interpersonales de largo plazo y que existan mecanismos que aseguren una comunicación fluida y frecuente (Good, 2000). De este modo, todas aquellas situaciones o condiciones donde se reducen las ambigüedades por una comunicación continua, por unos contactos personales libres y donde se dan ciertos niveles de cooperación permiten el desarrollo de la confianza interpersonal. En este sentido, la confianza se desarrollará con más dificultades en situaciones donde las personas tienen menos oportunidades de encontrarse *cara a cara*, menos interacción espontánea y pertenecen a contextos más heterogéneos (Zolin y Hinds, 2002).

La operativización del control social que se establece en los territorios, entre productores así como a través de consumidores directos de los productos demandados como ecológicos, donde nada pasa desapercibido y donde todos saben qué se hace y cómo se produce en cada predio es el modo de establecer la gestión colectiva de la confianza.

En realidad, lo que hemos visto hasta ahora no constituye nada nuevo. Uno de los argumentos sobre los que podemos basar esta elaboración teórica la encontramos en los bienes históricos comunales y la gestión colectiva que el campesinado ha realizado de los mismos a lo largo de la historia. En este sentido y como hemos visto en la discusión

teórica en torno a las relaciones de competencia y de apoyo mutuo presentadas a través de Huxley y Kropotkin; también en torno a la gestión de los bienes comunales ha existido una polémica a lo largo de la historia, de un interesante paralelismo. De un lado, se encuentra Hardin (1968), quien popularizó la idea de que existía una divergencia fundamental entre la racionalidad colectiva y la individual y que por lo tanto las dos vías para preservar el buen funcionamiento o gestión de los bienes comunales sería a través de su privatización o de su institucionalización.

De otro lado, Aguilera (1990) y Glez. de Molina y Glez. Alcantud (1991) quienes rebatieron las propuestas de Hardin denunciando la imprecisión de este autor al establecer una relación directa entre gestión colectiva y desregulación o descontrol. Estos autores argumentan que, muy al contrario, una gestión organizada a través de estructuras colectivas sociales puede suponer el modo más efectivo y sustentable de gestionar los recursos comunales, tal y como se había demostrado a lo largo de la historia[59].

En términos generales, las situaciones locales o regionales donde se conciba la confianza en los productos ecológicos como un bien de gestión colectiva, puede ser construida a través de mecanismos que favorezcan la implicación solidaria entre los distintos actores. La confianza se puede construir a través del control social, mediante mecanismos elaborados colectivamente y basados en: relaciones de proximidad; instrumentos de comunicación; y/o apoyo de instituciones formales, entre otras (Medaets, 2003: 78).

Proponemos, pues, como bases para construir unos conceptos agroecológicos en torno a la generación de confianza en los productos ecológicos, las nociones desarrolladas en torno a la gestión colectiva de un bien. Los elementos serían: el reconocimiento de las relaciones sociales que se establecen en torno a la producción y consumo de alimentos ecológicos y el control social que se establece en estos grupos de productores y consumidores.

Las estructuras colectivas organizadas en torno a intereses comunes pueden establecer sistemas de autorregulación de las actividades. En este sentido la noción de control social encajaría como una de las bases de esa autorregulación. González de Molina y González Alcantud (1991) plantean que es la lógica mercantil la que pretende sustituir, con argumentos erróneos, las lógicas colectivas basadas en relaciones de solidaridad y apoyo mutuo y en significados igualitarios. De nuevo converge la idea de la posibilidad de sustituir la predominancia de las relaciones antagónicas por las solidarias.

De esta forma, el problema de la confianza en los productos ecológicos no es una cuestión de organización o jurídica, sino de los valores sobre los que se sustentan las

[59] En este sentido cabe citar los trabajos de Joaquín Costa quien, especialmente en su obra "El colectivismo agrario en España", del año 1898, hace un análisis teórico, apoyado en experiencias colectivistas en el contexto agrario español desde el s. XVII, de las formas de gestión colectiva que históricamente se han dado en el Estado español, en el sector primario. Una de estas formas son las actuales Comunidades de Regantes, que serán descritas en la Parte II del capítulo del *Contexto de desarrollo de la investigación.* Una sistematización crítica de la obra de Costa puede verse en Gómez Benito y Ortí Benlloch, 1996.

formas de organización y de interacción entre producción y consumo. En estas, si los valores individuales sustituyen a los de solidaridad y apoyo mutuo en la mentalidad de las personas protagonistas de estos procesos se pierde sentido de pertenencia. En este contexto, la mediación externa será necesaria (certificación por tercera parte, p.e.). Sin embargo, si se fomentan otro tipo de relaciones y de estructuras de tipo solidario, el mecanismo de la confianza podrá basarse en procedimientos endógenos y propios de los territorios y las colectividades implicadas, recuperando la capacidad intrínseca de establecer procesos sistemáticos de control social comunitario. A través de la sistematización de estas relaciones, se podrá extrapolar la garantía hacia fuera del territorio o grupo.

Un sistema de garantía agroecológico así concebido funciona desde lo endógeno. Esto significa que se sustenta sobre elementos internos propios del sistema socio-cultural en el que se desarrolla. Lo endógeno es el punto de partida desde donde surgen las herramientas a través de las cuales se genera la garantía, sistematizando los vínculos y el control social propios. Para que los recursos sociales locales sean importantes y suficientes en estos procesos, será fundamental potenciar una mayor proximidad entre la producción y el consumo. De esta forma, se facilita el fortalecimiento de las relaciones de confianza entre ambos actores y la fidelidad. Se trata de recuperar los intercambios como modos de apoyar la sustentabilidad y la supervivencia de los diferentes actores, a través de relaciones solidarias: de colaboración y cooperación.

Los mecanismos de garantía coherentes con las propuestas agroecológicas señaladas, incorporando los elementos de participación y de cambio social agroecológico, serían los relacionados con la garantía participativa. Este modo de entender la generación de credibilidad en los productos ecológicos incorpora las siguientes características al proceso:

a. Reduce las dependencias de los grupos productores ecológicos de fuerzas y actores externos al territorio, esto es, de las entidades de certificación.
b. Convierte la generación de confianza en un proceso que fomenta la autonomía y la capacidad de decisión endógena al grupo y al territorio.
c. Promueve de forma importante los procesos colectivos y asociativos en los territorios, entre grupos productores y con consumidores. En este sentido, se favorecen los circuitos directos y/o cortos de comercialización de los productos ecológicos.
d. Favorece un nivel elevado de redistribución de poder entre las personas miembro de los grupos implicados, lo cual se traduce en un fomento importante de la equidad.

En base a este análisis, el mecanismo de certificación por tercera parte sería un procedimiento muy contrario a las propuestas agroecológicas y en muchos casos muy perjudicial y desincentivador de procesos de cambio social agroecológico en los territorios, ya que su planteamiento se basa en:

a. Generar una dependencia absoluta, con respecto a la garantía de las producciones, de los grupos productores y consumidores frente a entidades técnicas de certificación.

b. Concebir la garantía como un examen técnico externo, establecido de forma homogénea a todos los territorios y realizado por una entidad externa, frente al que el grupo productor sólo puede aprobar o suspender.
c. Trabaja a través de personas productoras individualmente, o en grupo pero a nivel burocrático solamente; además, se instala como intermediario entre la producción y el consumo, relegándolos a un papel pasivo en lo que se refiere a la garantía. Esto no favorece potenciales procesos de organización y articulación.
d. Se establecen relaciones desiguales de poder entre la entidad externa de certificación y las personas productoras y consumidoras, ya que el papel protagonista y la capacidad de decisión se concentra en la certificadora.

La garantía de tipo participativo contempla, pues, una serie de características en el proceso que la hace adaptarse plenamente a los principios y propuestas que desde la Agroecología se hacen para el manejo de los recursos naturales de un modo ecológico. Si bien en sí representa un modo agroecológico de entender uno de los procesos relacionados con este tipo de manejo: la generación de confianza en que se está realizando de un modo tal; también los procesos de construcción de este tipo de propuestas deben concebirse en el marco de mecanismos de cambio social agroecológico. Esto es, no cabría entender unos mecanismos de garantía participativa que se estableciesen en los territorios a través de una imposición vertical y acabada a grupos productores y consumidores, a modo de recetas a aprender y aplicar.

Los Sistemas Participativos de Garantía, desde una perspectiva agroecológica, deberán ser procesos construidos desde los propios territorios interesados en estos mecanismos, para que respondan a la realidad y características endógenas de cada territorio/grupo. De esta forma, la construcción de un mecanismo de garantía participativa podrá ser considerado como un proceso de cambio social, que generará formas de acción colectiva en torno a la garantía basadas en la interacción y el establecimiento de vínculos de confianza entre las personas de los grupos implicados.

Para ello, los planteamientos que desde la Agroecología se hacen en torno a la participación, sus características y los fundamentos epistemológicos en base a los cuales se concibe pueden ser incorporados al proceso que se impulse de construcción de un mecanismo de garantía participativa. La utilización de unos procedimientos que impulsen, acompañen y defiendan las inquietudes de determinados territorios en torno a la opción de la garantía participativa será de una importancia trascendental, en el fomento de procesos de cambio social agroecológico. En este sentido, el papel de la Agroecología como posible *ciencia con la gente* surge en el ámbito de la confianza en los productos ecológicos de una forma evidente. La capacidad de generar cambios sociales de tipo agroecológico, a partir de la insatisfacción de grupos productores y consumidores en torno a la certificación por tercera parte y de la construcción de formas colectivas de gestión de la confianza es un reto de plena actualidad para la Agroecología.

3. EL CONTEXTO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

PARTE I.- El sector de la producción ecológica: de la Unión Europea a los territorios implicados en el proyecto

Como contexto en el que se ha desarrollado el proyecto, queremos plantear, en base a las grandes cifras, las características de la producción ecológica desde el nivel comunitario al regional, para ubicar las zonas implicadas en el proyecto en este contexto. A partir de esto, analizaremos las especificidades de estos territorios, que pueden explicar las demandas expresadas en torno a la problemática que la certificación por tercera parte estaba generando, y la posible falta de adecuación de las regulaciones generales comunitarias a zonas específicas de determinadas regiones. Los datos tomados son de los años 2004, 2005 y 2006, al ser éste el periodo en el que se demandó, planificó y puso en marcha el presente proyecto.

Por último, y en base al Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, elaborado por la Junta de Andalucía para el periodo 2007 – 2013, trataremos de justificar el interés de las zonas objeto de este estudio, y por lo tanto el interés de poner en marcha un proyecto y una alternativa a la legislación vigente como los que plantea el presente proyecto de investigación – acción, en determinadas realidades sociales, geográficas y productivas de nuestra región.

3.1.1. La Agricultura Ecológica en la Unión Europea

Los productores ecológicos de nuestra región comparten regulación sectorial con el resto de países de la Unión Europea, ya que existe un reglamento comunitario que normativiza este modo de producción, desde el año 1991 (RE2092/91).

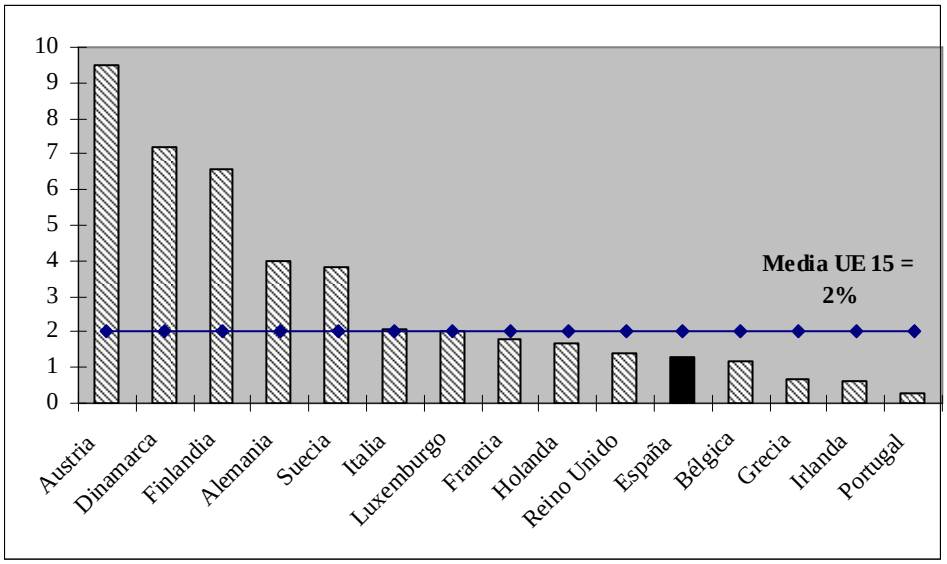
Presentamos en este capítulo el contexto productivo en el que estábamos inmersos, al iniciar el proyecto de construcción de un SPG para la producción ecológica en Andalucía en el año 2005, analizando la realidad de la producción ecológica europea en ese año. La información presentada a continuación ha sido extraída de un informe elaborado por la Comisión Europea, en noviembre de 2005[60].

El número de fincas certificadas como ecológicas, en la Unión Europea de los 15, era del 2% del número total de fincas agrarias en el año 2003. Los porcentajes que

[60] Dirección General de análisis económicos y evaluación (2005)

contribuían a aumentar esta media iban del 9,5% que presentaba Austria, al 2,1% de Italia, con países como Dinamarca, Finlandia, Alemania o Suecia.

Gráfica 1.- Porcentaje de explotaciones agrarias bajo manejo ecológico. UE 15. Año 2003

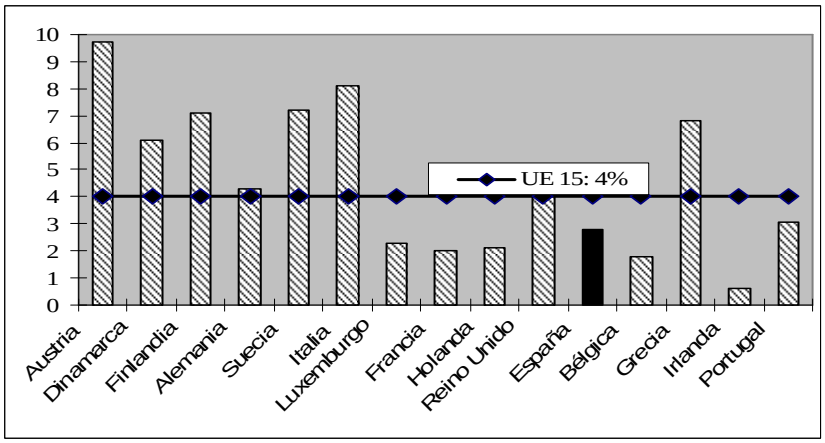


Fuente: Datos de la Comisión Europea - http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/facts_en.pdf (fecha de consulta: 27 marzo 2006)

El Estado español se sitúa por debajo de la media, con una importancia relativa de las fincas agrarias respecto del total del 1,5%.

En cuanto a superficie, la certificada en ecológico representa, de media en la UE de los 15, el 4% de la Superficie Agraria Útil (SAU en adelante).

Gráfica 2.- % de la SAU bajo manejo ecológico. UE 15. Año 2003



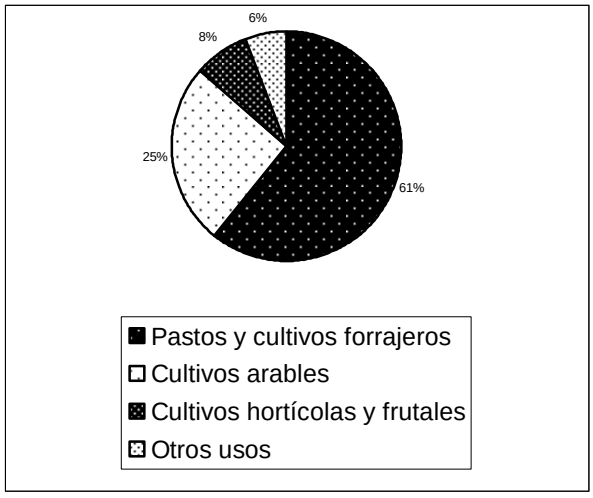
Fuente: Datos de la Comisión Europea (Op. cit).

De nuevo, el Estado español está por debajo de la media, con una importancia relativa de la superficie ecológica certificada respecto a la SAU del 3% aproximadamente. Los países que aumentan esta media en la Europa de los 15 son Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Italia y Grecia.

Como últimos datos descriptivos de la realidad del sector agrícola ecológico en la Unión Europea, comentaremos el tamaño medio de las explotaciones y el tipo de aprovechamiento predominante. El tamaño medio de las fincas certificadas en ecológico es de unas 40 ha., muy superior al tamaño medio de las fincas convencionales que es de 15 ha. Esta diferencia es muy superior en países como Grecia y Portugal, donde el tamaño medio de las fincas ecológicas es de media 9 veces superior el tamaño medio de las fincas convencionales.
En España, el tamaño medio de las fincas ecológicas es de unas 43 ha.

Si analizamos el tipo de aprovechamiento al que se está destinando la superficie ecológica certificada, podemos comprender en cierta forma estos tamaños medios elevados. El principal aprovechamiento ecológico en la UE, en superficie, son los pastos y los cultivos forrajeros. Y el segundo aprovechamiento en ecológico en importancia, por superficie, son los cultivos arables.

Gráfica 3.- Distribución de usos de la superficie ecológica. UE 15. Año 2003



Fuente: Datos de la Comisión Europea (Op. cit)

Cultivos que se practican en fincas de menor tamaño por su carácter más intensivo (hortícolas y frutales fundamentalmente) representan, relativamente, tan sólo el 8% de la superficie total certificada en ecológico en la UE. Los cultivos que representan más superficie relativa, en el sector ecológico (pastos y forrajes), se ubican principalmente en Irlanda (es la principal productora de pastos y forrajes ecológicos en la UE, representando el 91% de la superficie total certificada destinada a este cultivo), Reino Unido, Austria, Bélgica, Francia y Grecia.

España es especialmente relevante en cultivos arables. Junto con Italia, Alemania y Francia, representa cerca del 67% de la superficie total certificada para estos cultivos.

También destaca en hortícolas y frutícolas, que junto con Italia representa el 84% de la superficie total certificada.

En cuanto al sector ganadero ecológico en la UE, las cabezas certificadas representan el 2,3% del número total de cabezas. En este porcentaje, el Estado español ocupa el séptimo lugar.

Cuadro 7.- Número de cabezas bajo manejo ecológico y potencial productivo por tipo de ganado y principales países productores. UE 15. Año 2003

Tipo de ganado	Potencial productivo*	Principales países productores
Vacuno de leche	2,5%	Reino Unido y Alemania
Vacuno de carne	1,7%	Austria (25% del total)
Cerdo	0,4%	Alemania y Francia
Gallinas para carne	No hay datos	Francia
Gallinas de puesta	1,7%	Reino Unido y Francia
Ovino	2,4%	Reino Unido e Italia
Caprino	2,4%	Grecia (50% del total)

Fuente: Datos de la Comisión Europea (Op. cit)
*Porcentaje que el ganado bajo manejo ecológico representa del total de ganado existente para cada especie

El sector menos desarrollado en la UE 15 es el porcino, lo cual es atribuido por la Comisión a unos elevados costes de producción que el consumo no está dispuesto a pagar por este tipo de carne. En todas las especies animales el potencial de crecimiento es muy elevado, pues en ningún caso el manejo ecológico supone más del 2,5% del total de cabezas de cada especie existentes en Europa.

En resumen, el sector ecológico en Europa, continente que ocupa el tercer lugar en cuanto a superficie y número de explotaciones bajo este manejo, tan sólo ocupa el 4% de la SAU y el 2% del total de sus explotaciones. Pero la realidad dentro de la UE no es homogénea.

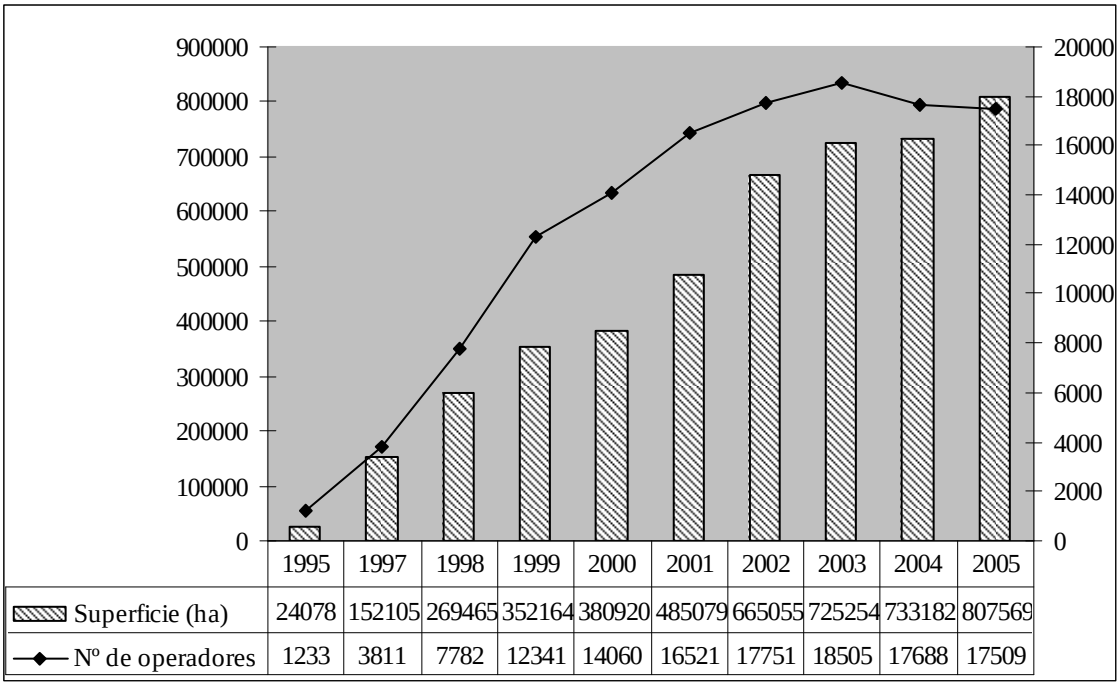
El mapa productivo de la UE destaca por centrar la producción de pastos y forrajes y arables como los cereales en los países del centro de Europa fundamentalmente, que también destacan, evidentemente, por un mayor desarrollo de la ganadería ecológica. Y la producción de otras especies arables, hortalizas, frutales, viñedo y olivar en los países mediterráneos, fundamentalmente Italia y España. Los pastos, praderas y forrajes ecológicos son los que representan, por otro lado, una mayor superficie certificada en ecológico en relación al resto de producciones certificadas.

En ganadería, es importante destacar el escaso desarrollo del ganado porcino en Europa, dado fundamentalmente por los elevados costes de la cría en ecológico de este animal, y la poca disposición del consumo europeo de asumir estos incrementos de precio en este tipo de carne. El Estado español no tiene una posición relevante en cuanto a producción ganadera certificada dentro de la UE.

3.1.2. La Agricultura Ecológica en el Estado español

La producción ecológica, en el Estado español, creció de forma continuada en el periodo de 1995 a 2005, en cuanto a superficie certificada. El número de operadores/as, sin embargo, a pesar de haber experimentado un crecimiento importante en gran parte de este periodo, descendió en los últimos dos años.

Gráfica 4.- Evolución de la superficie y número de operadores. España. Periodo 1995 – 2005



	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Superficie (ha)	24078	152105	269465	352164	380920	485079	665055	725254	733182	807569
Nº de operadores	1233	3811	7782	12341	14060	16521	17751	18505	17688	17509

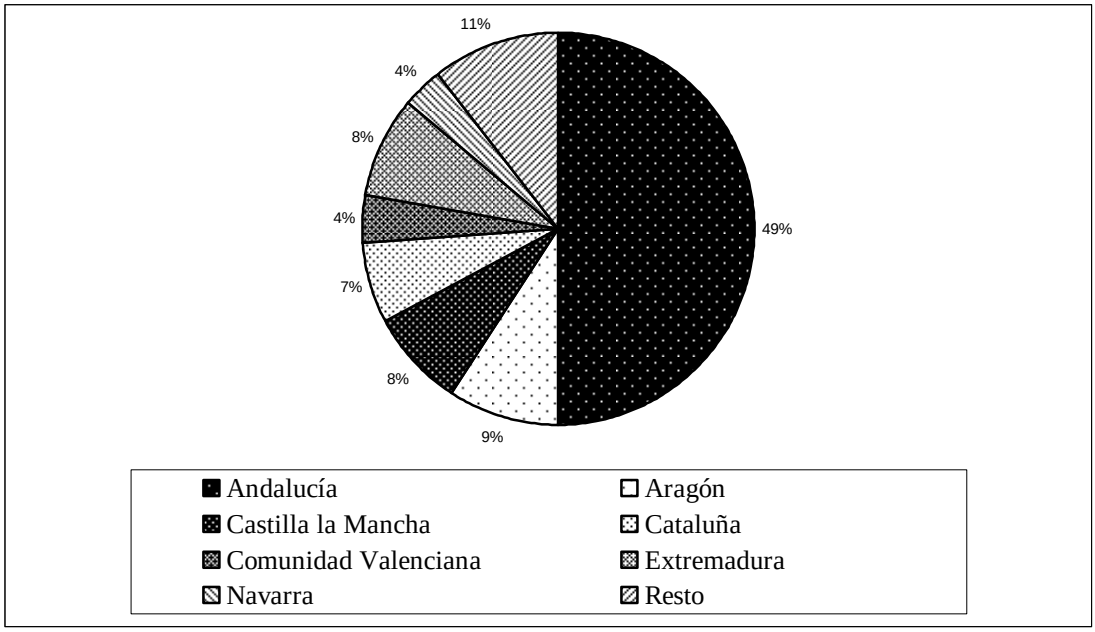
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación[61]

El aumento de la superficie certificada y el descenso del número de operadores estarían indicando un cierto cambio en la estructura de la tierra, al producirse un aumento de las superficies medias por operador.

De toda la superficie certificada en el Estado español, cerca de la mitad correspondía a nuestra Comunidad Autónoma. Andalucía era la principal productora de materias primas ecológicas certificadas, en cuanto a superficie, seguida de lejos por Aragón y Extremadura. Además, fue la Comunidad Autónoma que experimentó un mayor crecimiento de la superficie certificada, en el periodo 2001 - 2005. Es destacable el receso experimentado por Extremadura y el estancamiento o crecimiento muy moderado de la superficie certificada en las demás Comunidades Autónomas del Estado español, en este periodo.

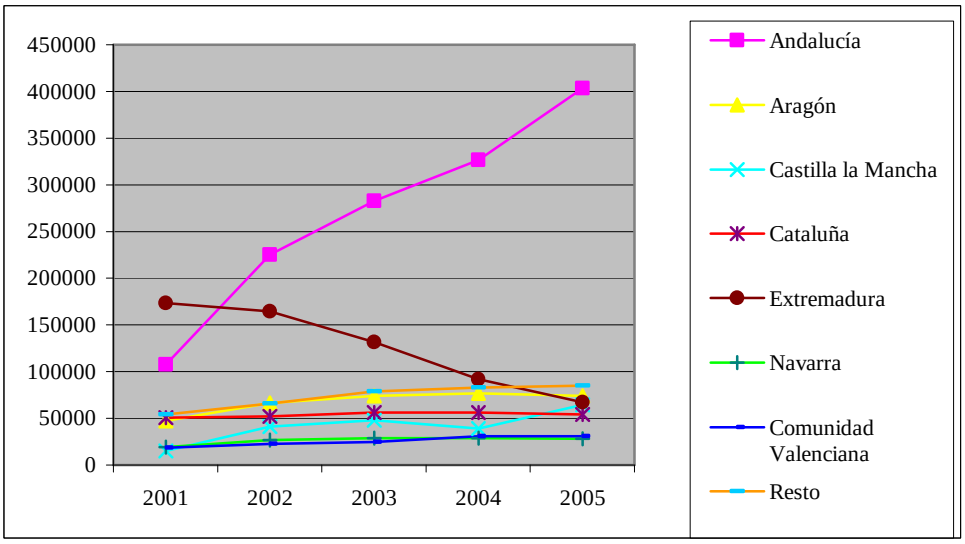
[61]Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002), (2003), (2004), (2005) y (2006)

Gráfica 5.- Distribución de la superficie ecológica por Comunidades Autónomas. España. Año 2005



Fuente: Datos de la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

Gráfica 6.- Evolución de la superficie calificada en ecológico de las principales comunidades autónomas. España. Periodo 2001 - 2005



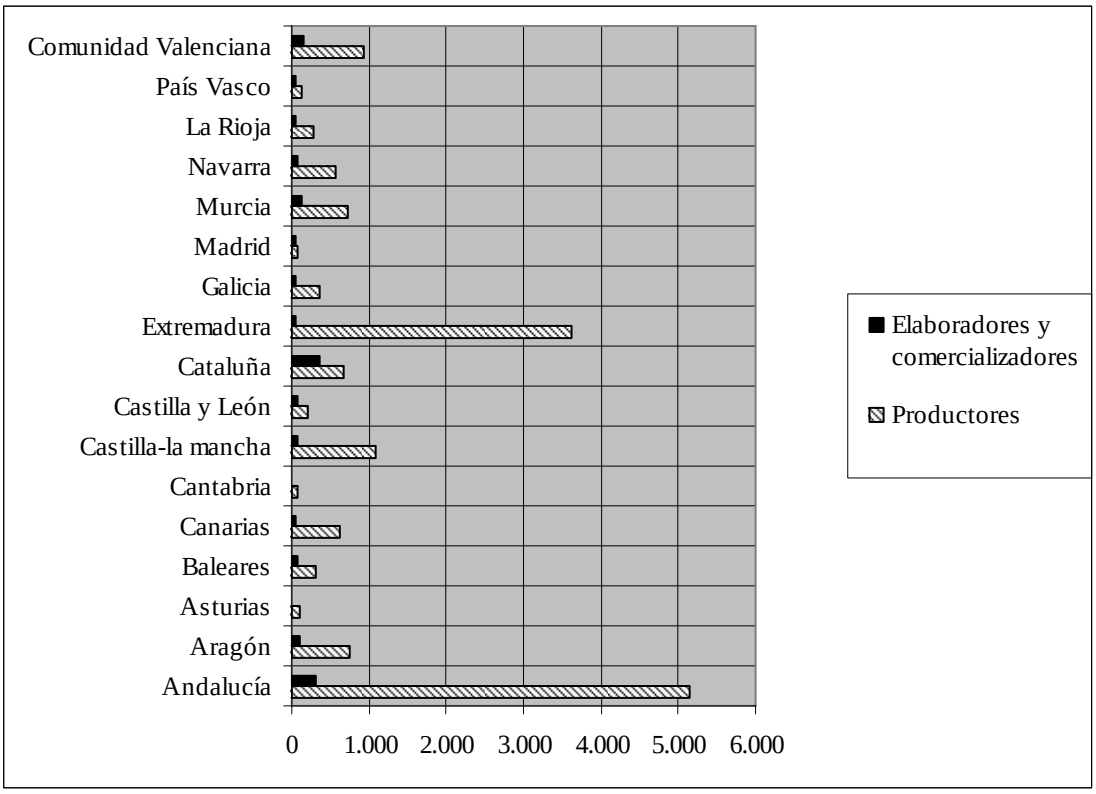
Fuente: Datos de la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

Respecto a los operadores, la evolución seguida mostrada en la gráfica 5 se corresponde a la evolución del número de productores, ya que estos representaban, en el año 2005, el 89,6% de los operadores totales (donde se contemplan también elaboradores, comercializadoras e importadoras)[62].

[62] Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

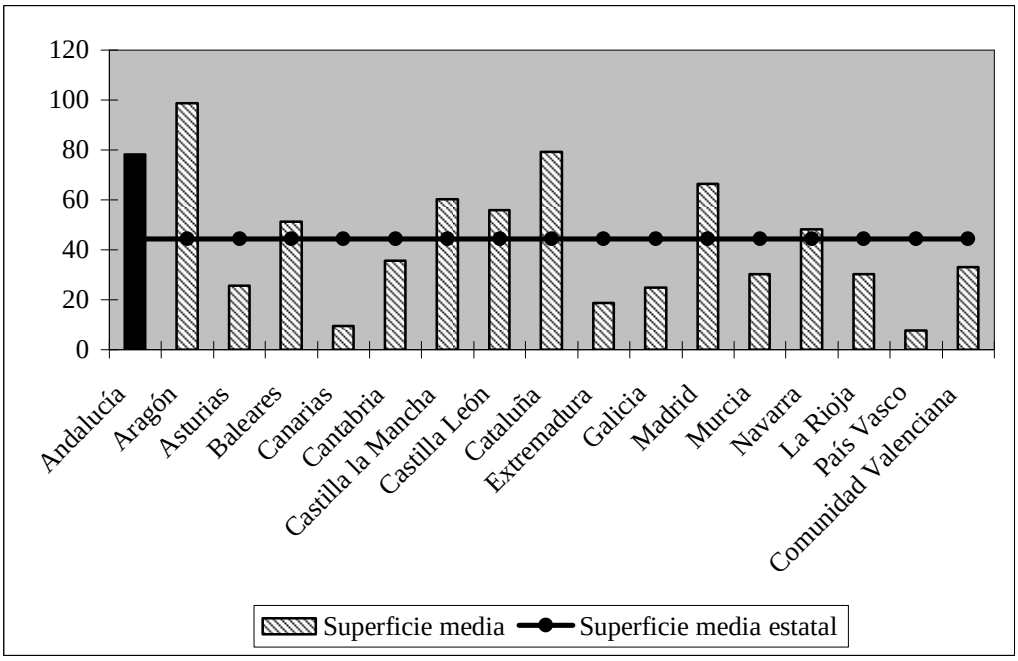
Andalucía representaba, en el año 2005, cerca de un tercio del total de productores ecológicos del Estado español, seguida por Extremadura, y muy de lejos por Castilla la Mancha. En cuanto a las superficies medias certificadas por operador, el panorama en el Estado español era muy diverso en el año 2005.

Gráfica 7.- Número de Operadores por Comunidades Autónomas. España. Año 2005



Fuente: Datos de la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

Gráfica 8.- Superficies medias certificadas por operador (ha). Estado español. Año 2005



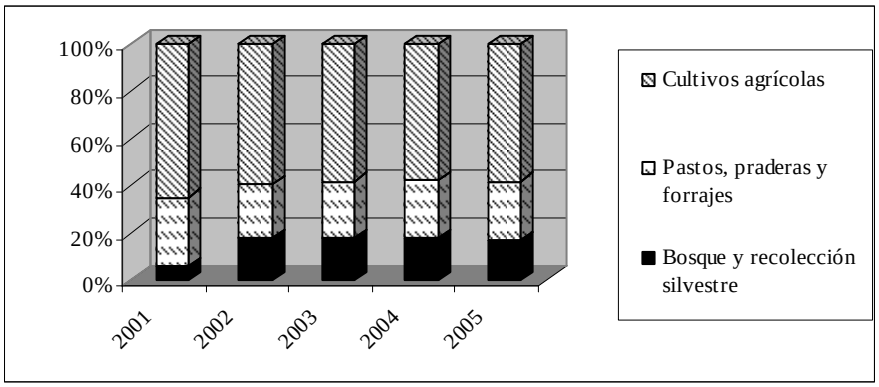
Fuente: Datos de superficies certificadas y número de operadores de la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006).

En relación a la media estatal de 43 ha. de superficie certificada por operador, Andalucía se sitúa por encima, con unas superficies medias certificadas de cerca de 80 ha. Cataluña presentaba una situación similar, y Aragón era la Comunidad Autónoma con una media de superficie declarada mayor.

En resumen, la evolución del sector ecológico en nuestro país hasta el año 2005 reflejaba un incremento continuo de la superficie y sin embargo una pequeña disminución del número de productores primarios, lo que podría estar indicando un cambio en la estructura de la tierra certificada en ecológico, hacia una cierta concentración de la tierra certificada en menos operadores. El tamaño medio de la superficie certificada por operador era, en Andalucía, de alrededor de las 80 ha., situándonos muy por encima de la media estatal.

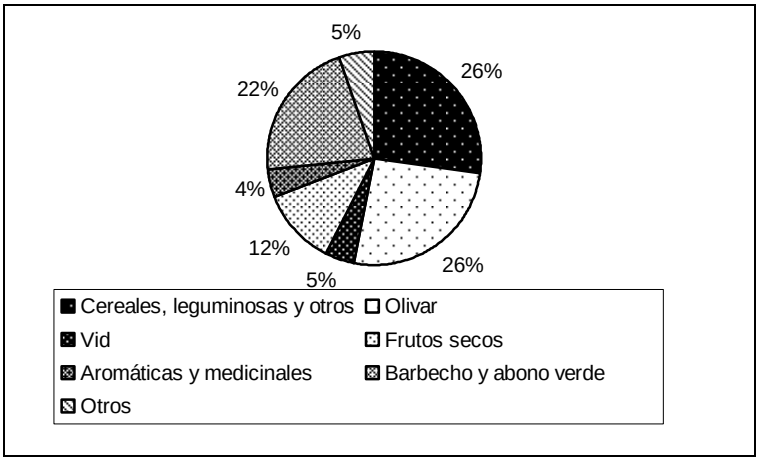
Analizando el tipo de aprovechamientos a los que se destinaba la superficie certificada en ecológico, en el Estado español, en el año 2005, observamos una predominancia de los cultivos agrícolas para alimentación humana, por encima de los pastos y forrajes y de los aprovechamientos forestales. La importancia relativa entre los tres tipos de grandes aprovechamientos establecidos, a lo largo del periodo 2002 – 2005, apenas varió.

Gráfica 9.- Importancia relativa de los distintos usos de la superficie ecológica. España. Periodo 2001 – 2005



Fuente: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

Gráfica 10.- Importancia relativa de los diferentes tipos de cultivos predominantes. Estado español. Año 2005

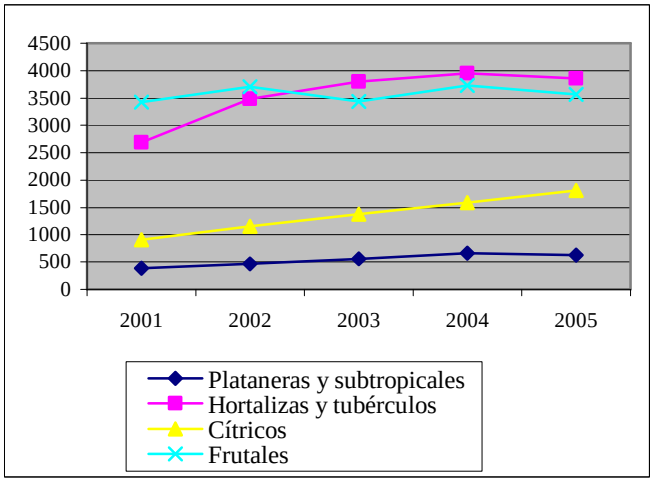


Fuente: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

Dentro del aprovechamiento mayoritario, el de cultivos agrícolas para consumo humano, más de la mitad de la superficie certificada en ecológico en nuestro país estaba destinada a cereales y leguminosas y a olivar, en el año 2005.

Como dato llamativo, cabe comentar el elevado porcentaje de tierras destinadas a barbecho y abono verde[63]. Otros cultivos importantes en cuanto a superficie certificada, aunque en mucha menor medida que los predominantes, eran los frutos secos, la vid y las plantas aromáticas y medicinales. La importancia relativa entre los distintos tipos de cultivo se mantuvo estable en el periodo 2001 – 2005, detectando un aumento de la importancia relativa del barbecho y el abono verde.

Gráfica 11.- Evolución de los principales cultivos ecológicos. España. Periodo 2001 - 2005



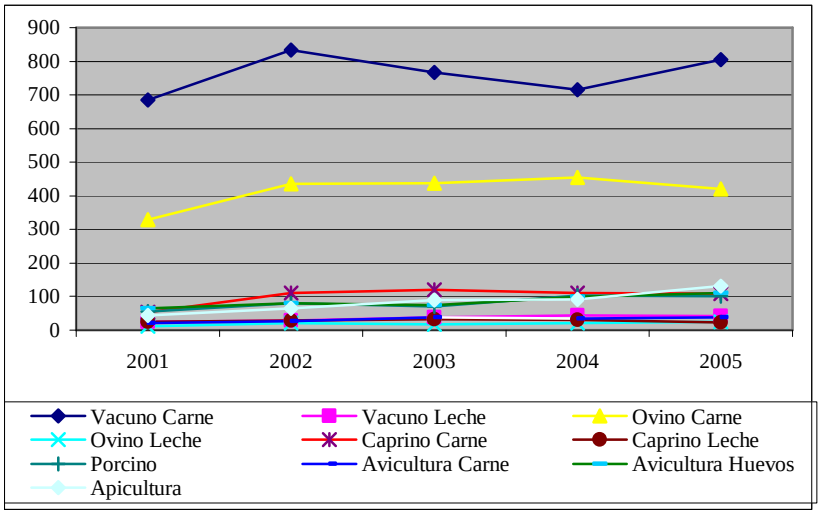
Fuente: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

[63] El porcentaje exigido por ley para barbecho es del 5% de las tierras totales.

En *otros cultivos*, con una importancia relativa pequeña en cuanto a superficie certificada, las estadísticas se refieren a hortalizas y tubérculos, frutales, cítricos y plataneras y subtropicales.

En cuanto a la producción ganadera, las cabezas de ganado certificadas como ecológicas representaban, en el año 2005, el 1% de las cabezas de ganado totales de nuestro país. El único ganado que sobrepasaba este porcentaje es el vacuno de carne (MAPyA, 2005a). El segundo ganado en importancia, siguiendo de lejos al vacuno de carne era el ovino también para carne. Si analizamos la evolución seguida por el número de cabezas certificadas, en cada uno de los tipos de ganado y aprovechamientos y en el periodo 2001 – 2005, observamos un estancamiento general.

Gráfica 12.- Evolución del número de explotaciones ganaderas por tipo de ganado. España. Periodo 2001 – 2005

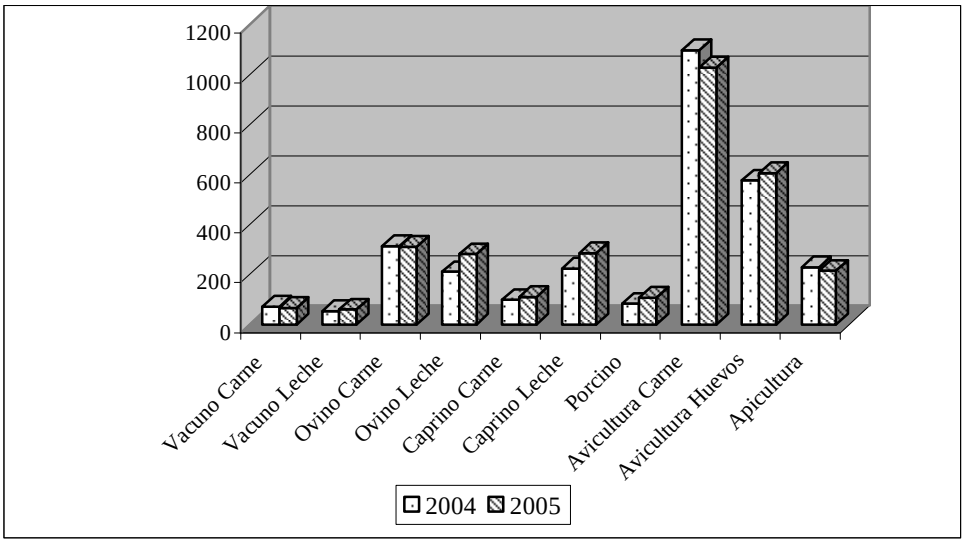


Fuente: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006)

Los únicos sectores que experimentaron un cierto crecimiento fueron el vacuno de carne y la apicultura. En términos absolutos en todo el periodo, el caprino de leche fue el único sector que experimentó una caída en el número de cabezas certificadas. En general, la producción de leche ecológica en nuestro país era el aprovechamiento ganadero más deficitario (MAPyA, 2005a). En este contexto, Andalucía era la principal productora de ganado ecológico en todos los sectores exceptuando el vacuno y el ovino de leche, donde Galicia y Castilla la Mancha, respectivamente, eran las predominantes.

En cuanto al tamaño medio de las explotaciones certificadas, los datos entre el año 2004 y el año 2005 (primeros registros de este tipo en nuestro país) diferían, según el tipo de ganado y aprovechamiento. En términos generales, la carga ganadera de las explotaciones ecológicas en nuestro país aumentó, o se mantuvo estable, en el periodo estudiado.

Gráfica 13.- Evolución de la carga ganadera media de las unidades productivas. Estado Español. Periodo 2004 – 2005



Fuente: Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2005) y (2006). No existen estos datos para años anteriores

En resumen, la ganadería ecológica en España tan sólo representaba el 1% de la ganadería total existente, en el año 2005. Sin embargo, la evolución seguida hasta este año nos mostró que la tendencia no era al aumento, sino a mantener la posición de nuestro país como pequeño productor de ganado ecológico, con una tendencia al estancamiento, incluso a la disminución.

La principal producción que existía se destinaba a carne, principalmente de vacuno, seguida de lejos por el ovino. Y el sector lechero ecológico era muy deficitario, con una evolución paralela a la pauta general, de estancamiento o disminución. Por Comunidades Autónomas, cabe destacar que la principal región productora era Andalucía, excepto en ganado de leche, donde el poco que había se concentraba en Galicia (vacuno) y en Castilla la Mancha (ovino).

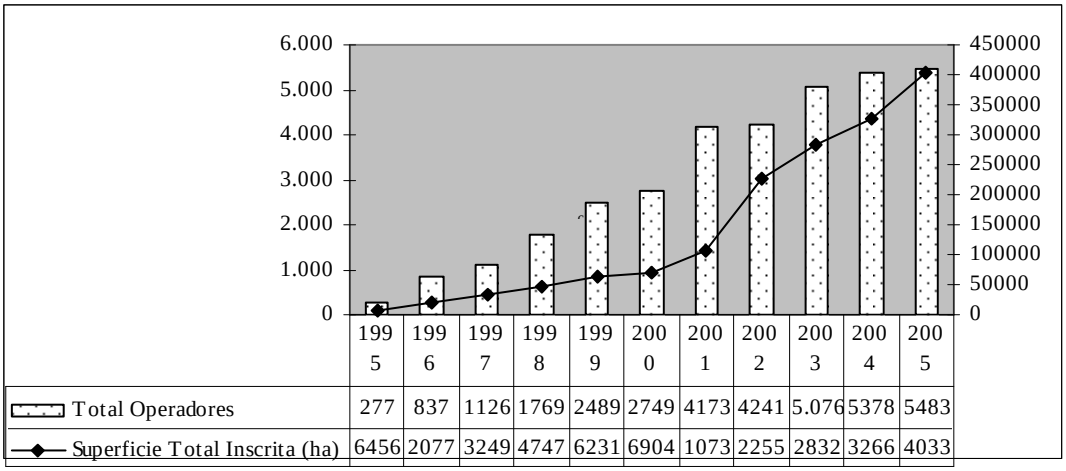
3.1.3. La Agricultura Ecológica en Andalucía

La actividad agraria constituye el principal aprovechamiento del territorio en Andalucía. Nuestra Comunidad Autónoma cuenta con 4,7 millones de hectáreas de superficie agraria útil (SAU), lo que representa el 53% del territorio andaluz. Este porcentaje es similar al que se da en el conjunto de España (50%), y sensiblemente superior al que representa la SAU sobre el territorio total comunitario (39%)[64].

La producción ecológica era un sector en auge en el año 2005, como muestran la evolución experimentada en nuestra región en cuanto a número de hectáreas de operadores/as certificados, representando en el año 2005, el 8,6% de la SAU andaluza.

[64] Junta de Andalucía, 2007, pp. 11

Gráfica 14.- Evolución de la superficie y del número de operadores certificados en ecológico. Andalucía. Periodo 1995 – 2005

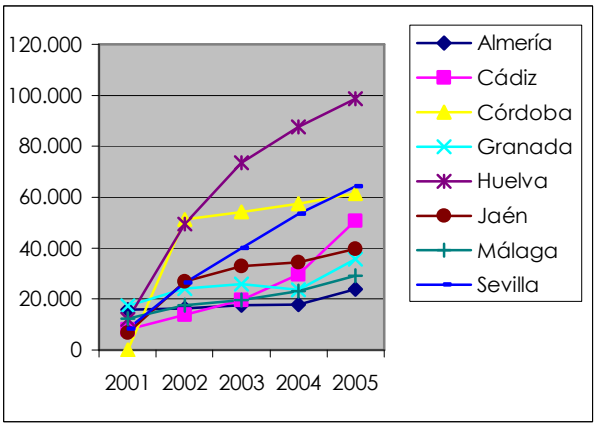


	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Total Operadores	277	837	1126	1769	2489	2749	4173	4241	5.076	5378	5483
Superficie Total Inscrita (ha)	6456	2077	3249	4747	6231	6904	1073	2255	2832	3266	4033

Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).
La superficie total inscrita viene expresada en ha/10^2

También en Andalucía se observa una tasa de crecimiento superior en la superficie certificada que en el número de operadores, lo que podría estar indicando, al igual que a nivel estatal, un incremento en el tamaño medio de las explotaciones certificadas en ecológico. Esta evolución, no obstante, difiere al observar los datos por provincias, ya que esta importante tasa de crecimiento se ha debido, fundamentalmente, al crecimiento experimentado en las provincias occidentales.

Gráfica 15.- Evolución de la superficie certificada en ecológico por provincias (ha.). Andalucía. Periodo 2001 – 2005



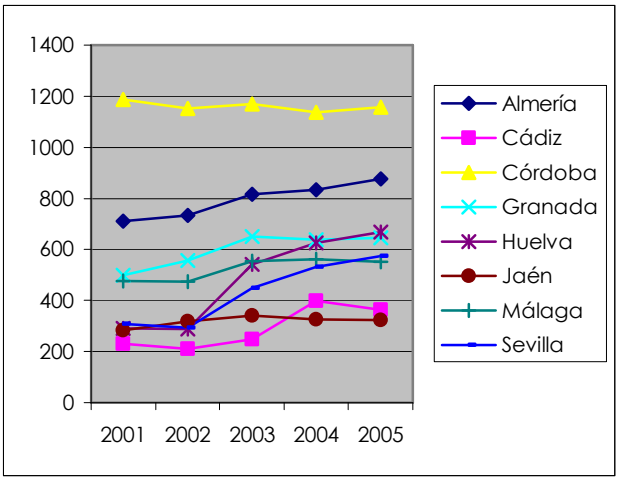
Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).

Los mayores crecimientos se observan en las provincias de Huelva, fundamentalmente, seguida por Sevilla y Cádiz. El resto ha experimentado una evolución marcada por un ritmo de crecimiento lento, y en algunos casos por el estancamiento. En las provincias

donde se ha desarrollado el proyecto, cabe destacar un cierto estancamiento en Jaén, y un ligero crecimiento en el último año analizado (2004 – 2005) en Málaga y, de forma más marcada, en Granada.

En cuanto al número de operadores, cabe destacar un crecimiento muy moderado, incluso un estancamiento en algunos casos, en el periodo de 2001 a 2005.

Gráfica 16.- Evolución del número de productores primarios por provincias. Andalucía. Periodo 2001 – 2005



Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).

Las únicas provincias que han mantenido un cierto crecimiento han sido Sevilla, Cádiz y Almería. En las provincias de nuestro proyecto, la tendencia ha sido al estancamiento e incluso a la disminución, especialmente en el periodo de 2003 a 2005. La evolución seguida por la superficie y el número de productores certificados ha generado una evolución al alza de la superficie media por explotación certificada en ecológico.

En todas las provincias se observa un crecimiento en la superficie media de las explotaciones ecológicas, en el periodo estudiado, si bien el ritmo de este crecimiento ha variado de unas a otras. Huelva es la única provincia cuyo comportamiento ha sido más errático.

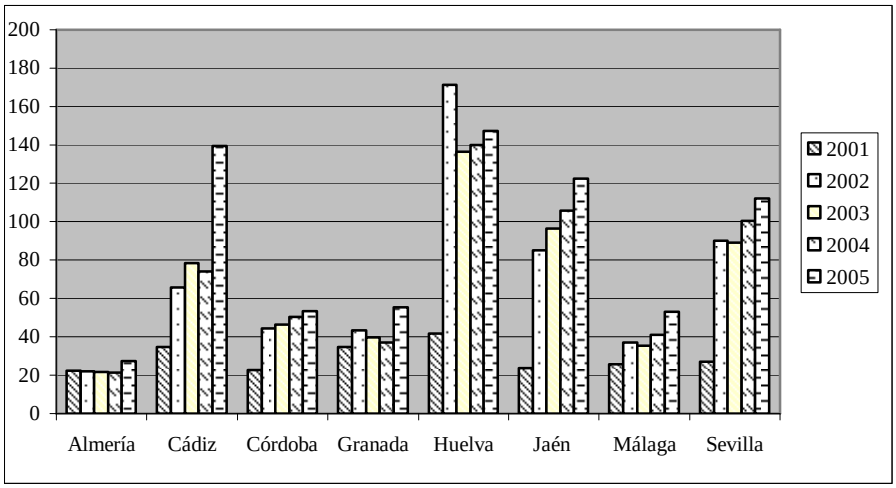
Las superficies medias en la provincia de Jaén alcanzaron, en el año 2005, las cerca de 120 ha. Granada y Málaga presentan una estructura fundiaria de explotaciones de menor tamaño, situándose sus medias en torno a las 55 – 60 ha. En todos los casos, excepto en Almería[65], las superficies medias están por encima de la media estatal de 43 ha.

En general, la concentración de las explotaciones ha sido muy relevante. En las provincias de Granada y Málaga, la superficie media por explotación se ha duplicado en

[65] Las características de las explotaciones ecológicas almerienses, centrada en invernaderos intensivos de hortícolas, explican estas superficies medias por debajo de la media estatal, y muy alejadas de las del resto de provincias andaluzas

el periodo 2001 – 2005. En el caso de Jaén, se ha pasado de una explotación ecológica media de unas 23 ha, a explotaciones de 120 ha.

Gráfica 17.- Evolución de la superficie media por explotación por provincias. Andalucía. Periodo 2001 – 2005



Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).

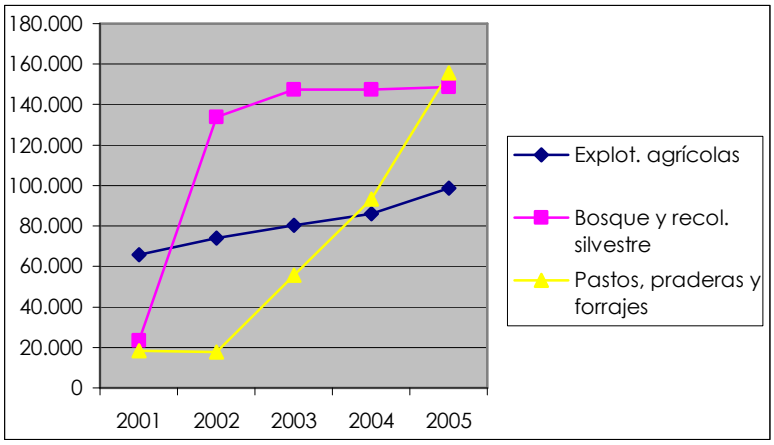
Estos datos contrastan con las superficies medias de las explotaciones andaluzas, convencionales, que se sitúan en las 17,3 ha.

Tipo de usos predominantes

Al contrario que a nivel estatal, y a diferencia de lo que ocurre en la producción convencional, donde más del 70% de la SAU se destina a cultivos agrícolas[66], en nuestra región predominan las tierras certificadas en ecológico destinadas a pastos y forrajes.

[66] Junta de Andalucía, 2007; pp. 12

Gráfica 18.- Evolución de los distintos usos de la superficie ecológica. Andalucía, Periodo 2001 – 2005

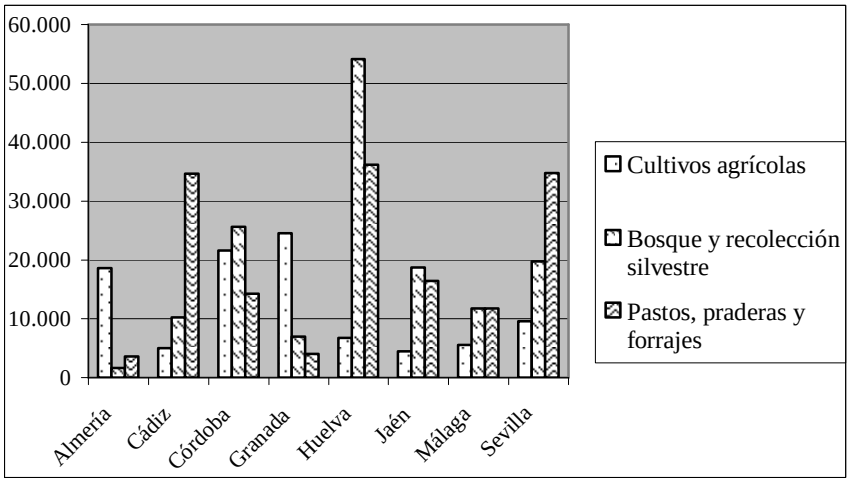


Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).

La evolución seguida, entre los tres principales aprovechamientos definidos en la clasificación: pastos y forrajes, bosque y recolección silvestre y fincas agrícolas, fue hacia una importante disminución de la importancia relativa de las tierras certificadas, destinadas a productos agrícolas de consumo humano.

En el año 2005, la importancia relativa de la superficie agrícola representaba el 24,5% de la superficie total certificada, frente al 61,1% que representaba en el año 2001.

Gráfica 19.- Superficie de Agricultura Ecológica por tipo de aprovechamiento y provincia (has). Andalucía. Año 2005*



Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006).

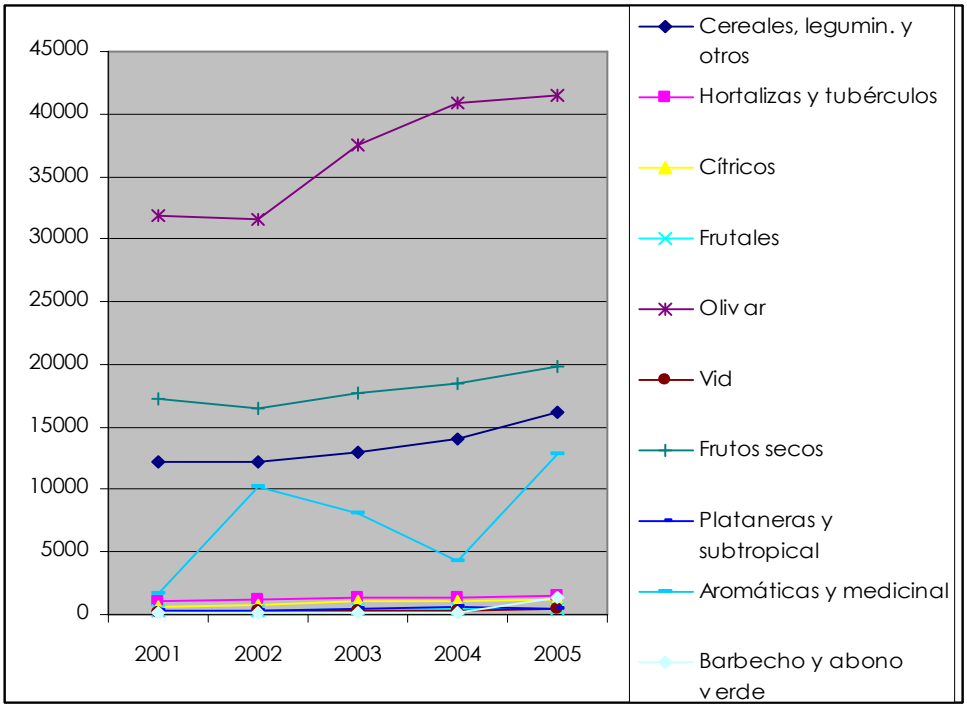
Analizándolo por provincias, observamos que las principales provincias con aprovechamientos agrícolas son Almería, Granada y Córdoba. Huelva es la provincia con una mayor producción ganadera en ecológico, y junto con Cádiz y Sevilla

representan la mayor parte de la superficie destinada a bosque y recolección silvestre. En Málaga y Jaén, la importancia relativa de las tierras agrícolas ecológicas es pequeña, frente a las fincas ganaderas o destinadas a bosque y recolección silvestre. Es destacable que las provincias con un mayor uso ganadero de su superficie ecológica, en forma de pastos y forrajes, o mayores aprovechamientos forestales, son las que presentan superficies medias mayores. Sin embargo, las provincias con un mayor uso agrícola, que se corresponden con las orientales, son las que presentan superficies medias por unidad productiva menores, muy por debajo de la media andaluza, y más en consonancia con la media española.

En cuanto a los principales cultivos agrícolas ecológicos de nuestra región, destacan el olivar, los frutos secos, los cereales y las leguminosas y las plantas aromáticas y medicinales. Como dato interesante a destacar, cabe citar que el olivar, que ocupa el 42% de las tierras agrícolas ecológicas de nuestra región, tan sólo representa el 2,7% de la superficie total de olivar de Andalucía[67].

La evolución de los distintos usos agrícolas de la superficie certificada en ecológico, hasta el año 2005, nos muestra que los únicos aprovechamientos que crecieron fueron los cereales y leguminosas y los frutos secos, de forma muy moderada, el olivar, con un estancamiento en el último periodo, y las plantas aromáticas y medicinales, con una tendencia muy errática.

Gráfica 20.- Evolución de los distintos usos agrícolas. Andalucía. Año 2005



Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).

[67] Íbidem

El resto de cultivos se mantuvieron muy estancados en este periodo. Y el barbecho, que experimentó cierto crecimiento de 2004 a 2005, representaba el 8% de las tierras destinadas a cultivos de rotación[68], porcentaje que sitúa a Andalucía muy por debajo de la media estatal, y más en consonancia con lo establecido a nivel reglamentario.

Comparando estos datos con los aprovechamientos agrarios en convencional[69], observamos que los cereales y leguminosas, así como las hortalizas y tubérculos, son relativamente más importantes en el mapa productivo de la agricultura convencional, que en el ecológico, donde otros tipos de aprovechamiento han dado el cambio ha ecológico de forma más fácil (especialmente los frutos secos). Por otro lado, sectores clasificados como de importancia económica en nuestra región, como los frutales y cítricos, apenas son relevantes en producción ecológica.

En resumen, Andalucía pasó, en el periodo de 2001 a 2005, de responder al perfil español de predominio de usos agrícolas en las tierras ecológicas, frente a los usos forestales o ganaderos, a responder a un perfil más en consonancia con Europa en general, donde el principal uso era el ganadero (pastos y forrajes). Esto se debió, fundamentalmente, a un crecimiento espectacular de la superficie calificada para pastos y praderas, así como para actividades forestales, y un crecimiento muy moderado de la superficie destinada a cultivos agrícolas.

Trasladando el análisis a nivel de provincias, cabe destacar que las provincias occidentales se estaban especializando, para el año 2005, en aprovechamientos ganaderos y forestales, y que los aprovechamientos agrícolas se situaban, principalmente, en las provincias orientales. Esta especialización fue la que generó que los grandes crecimientos de superficie certificada en ecológico, que se experimentaron en Andalucía hasta el año 2005, se debieran a las provincias occidentales, a la certificación de fincas destinadas a aprovechamiento animal y forestal.

La producción animal ecológica

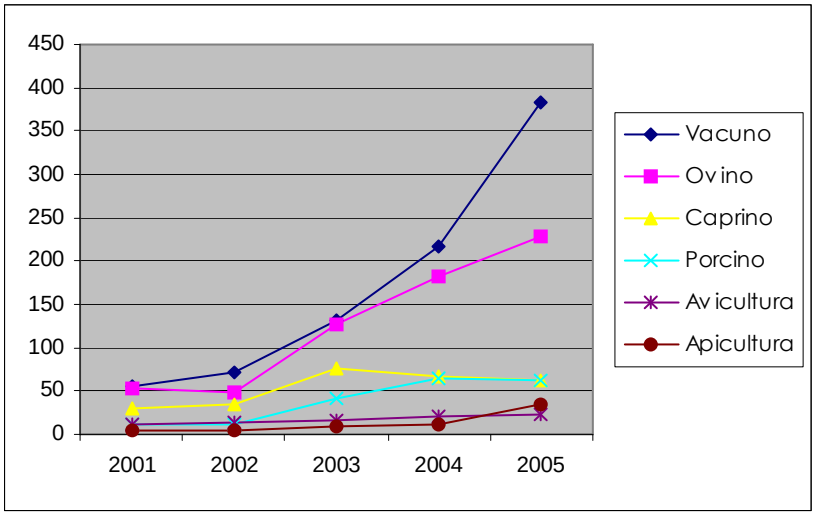
Al ser nuestra Comunidad Autónoma la primera productora de ganado ecológico del Estado español, su perfil productivo es muy similar al detallado a nivel estatal: predomina la producción de carne ecológica, especialmente de vacuno y ovino[70].

La evolución seguida en el periodo del 2001 al 2005, de la superficie certificada en ecológico destinada a pastos y forrajes, nos indica que en ese periodo la ganadería ecológica en nuestra región evolucionó de forma interesante. Efectivamente, en el año 2004, la mayor parte de la cabaña ganadera ecológica se concentraba en las sierras noroccidentales, así como al sur de la provincia de Cádiz. En el resto de Andalucía la ganadería ecológica era apenas existente[71].

[68] DGAE (2006).
[69] Junta de Andalucía, 2007: pp. 12.
[70] Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002), (2003), (2004), (2005) y (2006).
[71] DGAE (2005)

La producción de leche ecológica era inexistente en nuestra Comunidad Autónoma, en el año 2005, y la avicultura, tanto de carne como de huevos, era muy escasa.

Gráfica 21.- Evolución del número de explotaciones ganaderas por especies. Andalucía. Periodo 2001 – 2005

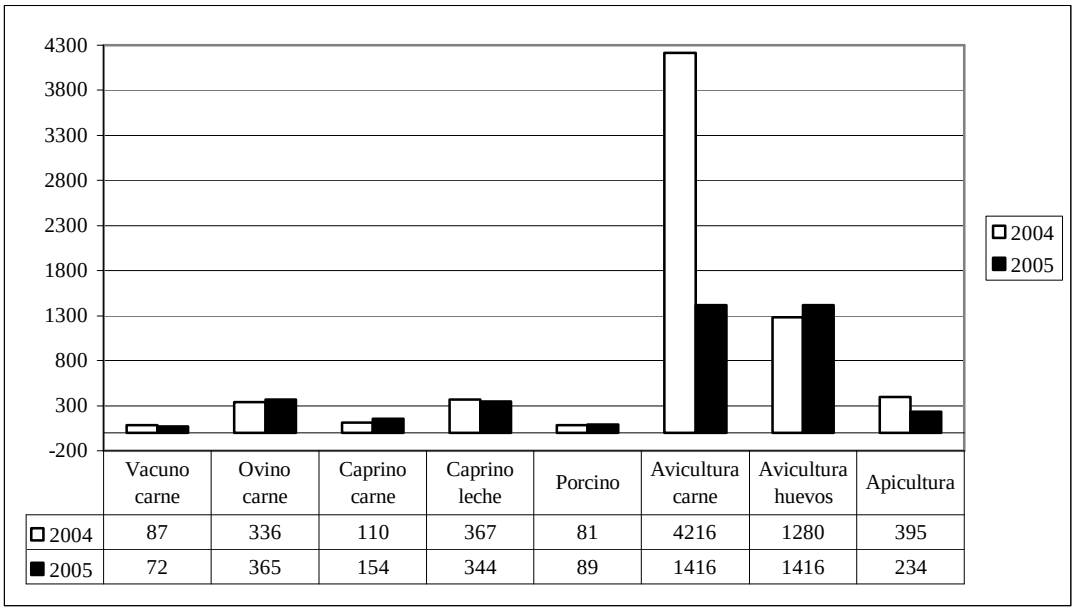


Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).

El estancamiento general de la ganadería ecológica, en nuestra Comunidad Autónoma, y en el periodo del 2001 al 2005, sólo se ve perturbado por unos incrementos importantes en el número de explotaciones de vacuno y de ovino.

En cuanto al tamaño medio de las fincas, observamos una evolución desigual según el tipo de ganado.

Gráfica 22.- Evolución del tamaño medio de las explotaciones (carga ganadera). Andalucía. Años 2004 – 2005



	Vacuno carne	Ovino carne	Caprino carne	Caprino leche	Porcino	Avicultura carne	Avicultura huevos	Apicultura
2004	87	336	110	367	81	4216	1280	395
2005	72	365	154	344	89	1416	1416	234

Fuente: Datos de la Dirección General de Agricultura Ecológica (2006) y la Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002).

En los principales sectores ganaderos andaluces, el tamaño medio de las explotaciones se mantuvo relativamente estable en el periodo 2004 – 2005. Sólo el sector de la avicultura de carne, por importante en nuestra región, sufrió un descenso del tamaño medio de sus explotaciones a cerca de un tercio.

En resumen, destacar que el incremento de la superficie destinada a pastos y forraje, en el occidente de nuestra Comunidad Autónoma, se correspondió con un incremento importante del ganado vacuno y ovino de carne. Alrededor del 80% de la producción de ganado ecológico en Andalucía se sitúa en las provincias occidentales. Por otro lado, la producción de leche ecológica en nuestra Comunidad Autónoma era inexistente, y la avicultura muy escasa, tanto de carne como, especialmente, de huevos.

3.1.4. Aspectos destacados del sector de la producción ecológica en nuestros contextos

Las primeras conclusiones que podemos extraer de la información analizada se centran en algunos aspectos que llaman la atención, o que resultan relevantes para el proyecto de investigación presentado. En primer lugar, resulta llamativo el dato de que las superficies medias por productor, en producción ecológica, sean cerca de tres veces superiores a las superficies medias en convencional. Los motivos pueden ser muy diversos, pero el hecho es que la producción ecológica certificada predominante en la Unión europea, en el Estado español y en Andalucía es aquella de gran escala con unas superficies medias por encima de las 40 ha. (este dato llega a las 80 ha. por operador en

Andalucía). Además, y en esta línea, la tendencia en el periodo estudiado apunta hacia un incremento aún mayor de las superficies medias por operador.

La poca representatividad de las pequeñas y medianas fincas en el sector ecológico contrasta con los datos de la agricultura andaluza, ya que las explotaciones de menos de 5 ha. de SAU representan en torno al 61% de las explotaciones agrarias de nuestra región y aquellas con una SAU comprendida entre las 5 y las 10 ha. representan alrededor del 34% de las explotaciones andaluzas[72]. Esta realidad debe inducir a plantear serios cuestionamientos en torno a las barreras o problemáticas que las pequeñas y medianas explotaciones encuentran, bien para iniciar el proceso de transición hacia un manejo ecológico, bien para verse reconocidas como ecológicas a través del proceso de certificación oficial.

Por otro lado, el Estado español y nuestra Comunidad Autónoma presentaban porcentajes relativos de superficie y operadores ecológicos frente a los convencionales, por debajo de la media europea, lo que puede estar indicando que estamos frente a un sector que, por diversos motivos, resulta menos atractivo o más dificultoso en nuestro país que en los otros de la Unión Europea. Sin embargo, hasta en el Programa de Desarrollo Rural para Andalucía, para el periodo 2007 – 2013, se asume que es la intensificación de la agricultura la que genera los mayores problemas de pérdida de biodiversidad y de contaminación del Medio Ambiente e insta a poner en marcha medidas para evitarlo (Junta de Andalucía, 2007: 24).

En cuanto a la evolución observada, son los cultivos más extensivos o los pastos y los forrajes los que han experimentado incrementos mayores de superficie certificada. Otros cultivos fundamentales en nuestra región por su importancia relativa[73], como las hortalizas, los frutales o los frutos secos, apenas aumentaron su superficie certificada en el periodo estudiado. De nuevo encontramos que, para determinados subsectores productivos, la transición al manejo ecológico o la certificación no está resultando atractiva.

3.1.5. Perfil de los territorios piloto implicados en el proyecto de construcción de un SPG para la producción ecológica en Andalucía

Presentamos en este subcapítulo el perfil productivo de la agricultura y ganadería ecológicas de las zonas implicadas en el proyecto protagonista de esta tesis doctoral. Las características de esta producción y de sus productores nos ayudarán a establecer las especificidades de unas zonas que demandaron una alternativa a la certificación oficial por auditoría privada establecida de forma obligatoria por el Reglamento 2092/91. Las zonas implicadas se sitúan en tres provincias distintas:

a. En Málaga, la Serranía de Ronda.

[72] Junta de Andalucía, 2007a: pp. 13

[73] Según el Programa de Desarrollo Rural para Andalucía, elaborado para el periodo 2007 – 2013 por la Junta de Andalucía, "en la producción vegetal andaluza destacan frente al resto hortalizas, aceite de oliva y frutas. En 2005, sus pesos relativos en la producción vegetal de Andalucía eran del 36% para las hortalizas, 27% para el aceite de oliva y 21% para las frutas" (Junta de Andalucía, 2007a: pp. 4)

b. En Jaén, la Sierra de Segura.
c. En Granada, los municipios de Castril y Castilléjar.

La Serranía de Ronda[74]

La Serranía de Ronda se ubica al suroeste de la provincia de Málaga, con una superficie de 1.456 Km^2. En el año 2006, la población era de 53.334 habitantes, distribuidos en 21 municipios y 12 pedanías. El 65.5 % de la población pertenecía a su cabecera comarcal, Ronda, sólo 6 municipios superaban los 1000 hab. y diez de ellos no alcanzaban los 500 hab. La densidad media de población era de 42 hab. /km².

Su orografía viene marcada por una serie de macizos montañosos con una altura media de 800 m, llegando a superar en el 25% de los casos los 1200 m. Estos macizos marcan la separación de la comarcas en tres subcomarcas, con características geomorfológicos diferenciadas: a. El Valle del Guadiaro, donde predomina la ganadería y los cultivos de secano; b. El valle del Genal, donde predomina la producción, a pequeña escala, de frutales y huerta; c. La meseta de Ronda, con pocos desniveles, donde predominan los cultivos de secano de mayor escala.

Según la Agenda 21 comarcal, el 25% de la población activa trabajaba en el sector primario, si bien sólo representaban el 4% de las altas de actividades empresariales, en el año 2003 (Varios, 2005:37).

En cuanto al tipo de cultivos[75], destacan los árboles frutales de secano, sobretodo el olivar (el 19,9% de los productores trabajan este cultivo) y el castaño (11,5% de los productores). Con porcentajes menores de implantación encontramos el naranjo (6,4% de los productores) y el almendro (5,7%). En hortícolas, destaca el tomate, cultivado por el 3,2% de los productores. De forma minoritaria encontramos la producción forestal, la patata, el limonero y el cerezo, manejados por el 2,6% de los productores de la Serranía.

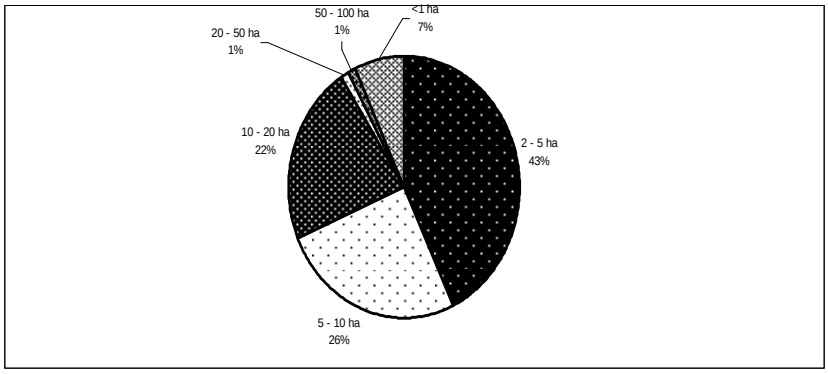
En cuanto a ganadería, el 83,3% del total de las cabañas corresponden al ovino. El caprino representa sólo el 8,4% de la cabaña total. El resto son explotaciones de porcino y vacuno, muy residuales en la Serranía.

Las superficies medias de las unidades productivas ecológicas difieren mucho en función de su uso. Si analizamos la realidad de la agricultura ecológica, las unidades cuentan, en su mayoría, con unas extensiones de entre 2 y 5 hectáreas (el 37% de las parcelas) y de entre 5 y 10 hectáreas (22% de las parcelas). Casi un quinto de las parcelas tiene entre 10 y 20 ha., y un 20% menos de 2 ha. Apenas hay parcelas superiores a las 20 ha. (2%).

[74] Los datos generales de la Comarca, salvo donde se indica, han sido obtenidos de la memoria elaborada para la DGAE por Rocío Eslava, dinamizadora para la Serranía de Ronda del proyecto de Construcción Participativa de un Sistema de Garantía participativo en Andalucía

[75] La información sobre tipos de cultivos y cabaña ganadera de la Serranía ha sido obtenida del "Estudio del potencial productivo Serranía de Ronda", realizado en el año 2007 por el CEDER de la Serranía de Ronda.

Gráfica 23.- Superficies medias de las fincas certificadas en ecológico. Serranía de Ronda. 2005



Fuente: Varios, 2005

Por su parte, las parcelas destinadas a ganadería ecológica presentan superficies mucho mayores. El mayor porcentaje de parcelas (32%) se encuentra en el rango de 100 a 500 ha. Seguido por las que ocupan entre 50 y 100 ha., que representan el 22%. No existen unidades ganaderas ecológicas por debajo de las 5 ha, y hay un 6% que tienen más de 1000 ha.

A pesar de que la mayoría de la población activa en el sector primario es agricultora, y no ganadera, la superficie ocupada por la ganadería ecológica es más de 8 veces superior que la ocupada por la agricultura ecológica (CEDER Serranía de Ronda, 2005).

Casi el 50% de las parcelas agrícolas ecológicas tienen menos de 5 Ha, y apenas hay fincas con más de 20 Ha, mientras que las de ganadería ecológica ocupan superficies medias de entre 50 y 500 Ha.

Sierra de Segura

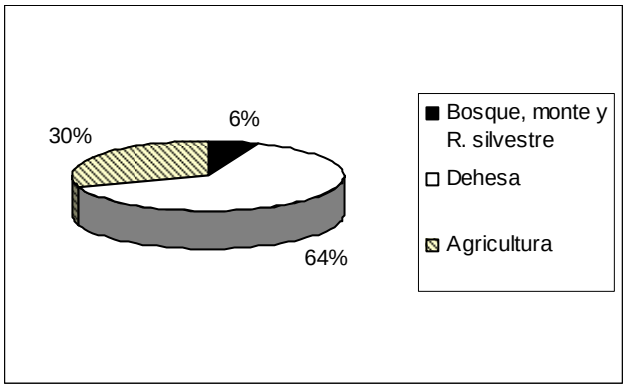
La Sierra de Segura la componen 13 municipios, en la zona nororiental de la provincia de Jaén. Con una superficie total de 193.412 Ha, representa el 69,5% de la superficie del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas y es Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

Como parte de las Cordilleras Béticas destaca, fundamentalmente, su elevación, ya que el 70% de su superficie está por encima de los 800 metros sobre el nivel del mar, y cuenta con 37 cumbres de más de 1500 metros de altura. Esto le confiere un clima de montaña templado y frío, predominando los olivares y las encinas en las partes bajas, y los pinares y sabinares en las partes altas.

Cuenta asimismo con numerosos cauces de agua, entre los que destacan el río Segura, y los afluentes Zumeta, Madera, Borosa y Aguasmulas. Asimismo, son varios los pantanos y presas construidos en este entorno: El Tranco, El Guadalmena, Las Anchuricas y La Vieja.

A principios de 2006, la Sierra de Segura contaba con 4400 Ha certificadas en ecológico.

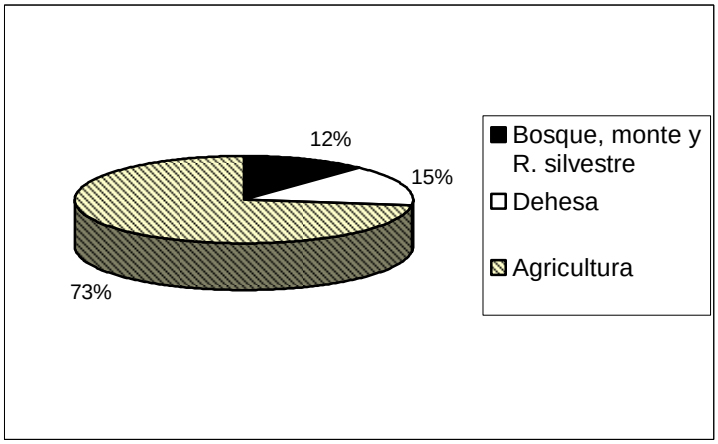
Gráfica 24.- Usos de la superficie declarada en ecológico. Sierra de Segura. Año 2006



Fuente: Registros facilitados por CertiCAAE al Ayuntamiento de Siles (Sierra de Segura)

La mayor parte de la superficie ecológica de esta zona se destina a pastos. El segundo uso en importancia es la agricultura, y muy de lejos el aprovechamiento forestal. Sin embargo, en lo que a operadores se refiere, observamos porcentajes muy diferentes.

Gráfica 25.- Perfil de los operadores certificados en ecológico. Sierra de Segura. Año 2006



Fuente: Registros facilitados por CertiCAAE al Ayuntamiento de Siles (Sierra de Segura)

El 30% de la superficie certificada en ecológico la maneja el 73% de los productores/as ecológicos de la Sierra, que son los agricultores. Mientras que el 65% de la superficie está en manos del 15% de los productores, que responden al perfil de los ganaderos. Las unidades productivas en agricultura ecológica son de un tamaño mucho menor que las destinadas a ganadería ecológica, con una superficie media de 6.8 ha., pero ocupan a la mayor parte de las personas dedicadas a actividades agrarias ecológicas en la zona.

De las especies agrícolas cultivadas en ecológico, el principal cultivo con diferencia es el olivar, con el 86% de la superficie declarada. Este se ubica fundamentalmente en el eje Génave – Villarrodrigo – Puente Génave. El resto de la superficie la ocupan fundamentalmente los frutales y herbáceos de secano (alrededor del 11% de la

superficie ecológica declarada). Como especies destacan el almendro y los cereales. Cabe destacar que la producción hortícola ecológica, certificada, es muy pequeña.

Estas superficies minoritarias de hortícolas, herbáceos y frutales se concentran en los municipios de Siles, Santiago-Pontones y Segura de La Sierra. Son zonas de sierra que poseen un factor limitante como es la climatología, con inviernos largos y fríos, lo que conlleva un ciclo de cultivo muy corto (3-4 meses). El término de Beas de Segura tiene un potencial alto puesto que está a una altitud menor y todavía se mantiene alguna actividad hortícola tanto tradicional como con invernaderos[76].

Las superficies medias de las explotaciones destinadas a agricultura ecológica son de unas 16 ha. Esta media varía enormemente, en función del tipo de cultivo del que estemos hablando. Si se trata de hortícolas, las superficies medias certificadas no llegan a la hectárea. Sin embargo, en olivar, las superficies medias certificadas oscilan en torno a las 63 ha[77].

En cuanto a la ganadería, en el año 2006 había certificados 7 operadores en toda la sierra: 4 de ovino, 2 de caprino y 1 de avicultura de puesta.

Municipios de Castril y Castilléjar[78]

Los municipios de Castril y Castilléjar están ubicados en pleno Parque Natural de la Sierra de Castril, que es la continuación del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas en la provincia de Granada.

En esta provincia, los productos ecológicos certificados ocupan, aproximadamente, una extensión de unas 35.660 ha. Cerca del 63% de la misma está destinado a plantas aromáticas y medicinales, así como a pastos, praderas y forrajes. Los frutos secos representan cerca del 18% de la superficie, y el 20% restante está ocupado por otros cultivos como cereales y leguminosas, hortícolas, frutales y vid.

En la zona de Castril y Castilléjar, conocida como el Altiplano granadino, el desarrollo de la agricultura y ganadería ecológicas se ha visto limitado principalmente por las condiciones climáticas extremas en invierno, y por la falta de agua para riego. En consecuencia, los principales cultivos que se están trabajando en ecológico son los cereales, el olivar y el almendro (frutos secos).

A pesar de las limitaciones climáticas, la producción ecológica en el altiplano granadino es importante dentro de la provincia, representando el 60% de la superficie total certificada en ecológico de la provincia. Dentro de este contexto, el caso particular del municipio de Castril de la Peña es relevante, ya que más de un 20% de la SAU del término está certificada en ecológico.

[76] Esta información ha sido obtenida del dinamizador del proyecto "Construcción colectiva de una sistema de garantía participativo para Andalucía", en la zona de Segura, en la primera parte del mismo, de abril a septiembre de 2006 (Mariano Ojeda).
[77] Datos elaborados a partir de los registros de operadores/as y superficies de CertiCAAE (julio de 2006)
[78] Los datos utilizados en esta descripción han sido extraídos de la memoria elaborada por el dinamizador del proyecto en la zona, César de la Cruz Abarca, en julio de 2007.

En las comarcas de Baza y Huéscar, donde se ubican los municipios implicados en el proyecto, los cultivos predominantes son los cereales, las leguminosas y los frutos secos. Los cultivos hortícolas existen, pero en la mayoría de los casos se corresponden con parcelas destinadas al autoconsumo o a venta de proximidad, que no están certificadas.

Especificidades de los territorios implicados

Los tres territorios piloto implicados en el proyecto andaluz de construcción de un sistema de garantía alternativo se corresponden con zonas geográficas que presentan ciertas semejanzas, así como ciertas especificidades entre sí.

Las semejanzas nos permitirán analizar los contextos en los que el proceso desarrollado podría funcionar y adaptarse de una forma relativamente fácil. Las especificidades nos han permitido abarcar un mayor abanico de posibilidades y situaciones, haciendo del SPG construido y del proceso seguido experiencias adaptables a unos contextos relativamente diversos. Las semejanzas de los tres territorios se pueden analizar en base a cuatro aspectos: el productivo, el sociocultural, el económico y el ambiental[79].

En el *aspecto productivo*, los tres territorios se ubican en zonas de montaña, con gran parcelación de las explotaciones y una importante presencia de la agricultura tradicional de autoconsumo. Las fincas compaginan frecuentemente la actividad agraria y la ganadera, y se da una amplia diversificación de cultivos y ganado. Los principales cultivos, en cuanto a productores, son el olivar, las hortalizas y los frutos secos.

En el *aspecto demográfico y sociocultural*, cabe destacar que nos situamos en zonas consideradas, según la clasificación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), como rurales, con unas densidades de población por debajo de los 150 habitantes / ha, y en zonas de montaña donde las densidades de población son menores que la media andaluza[80] . Por otro lado, en los tres territorios la agricultura ecológica no era una novedad, sino que los Centros de Desarrollo (Serranía de Ronda) y otras instituciones como la Universidad (Castril - Castilléjar) o Ayuntamientos (Sierra de Segura) venían desarrollando proyectos de fomento de la producción y/o de la comercialización desde el año 2000. Los productores ecológicos y la población en general tenían ya cierto conocimiento y/o experiencia en torno a la producción ecológica.

En el *aspecto económico*, los agricultores y ganaderos responden al perfil de la producción de pequeña escala, dándose unas superficies medias por explotación inferiores a la media estatal y andaluza: no llegan a las 10 ha. por finca certificada, frente a la media estatal de 43 ha. o andaluza de 80 ha.

[79] Este análisis se ha realizado en base a las aportaciones de las personas dinamizadoras del proyecto en los territorios, y a la observación participante llevada a cabo durante los 2 años y medio de trabajo en campo.
[80] Junta de Andalucía, 2007b: pp. 3

Por último, en el *aspecto ambiental*, estas zonas se encuentran ubicadas en espacios dotados de alguna figura de protección (Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas o Parque Natural de Castril) o bien están en zonas limítrofes a algunos de ellos (Serranía de Ronda rodeada por la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves, Parque Natural de Grazalema y Parque Natural de los Alcornocales).

En cuanto a las diferencias entre estos territorios, éstas radican en el tamaño del territorio y el número de municipios, el perfil productivo y el entorno socioeconómico de influencia.

El tamaño del territorio y número de municipios: estas variables aumentan las singularidades y la posibilidad de hallarse frente a casuísticas muy diferentes. La Serranía de Ronda cuenta con 24 municipios y una superficie de 1.389 Km^2, la Sierra de Segura cuenta con 13 municipios y una superficie 1.931 Km^2 y el municipio de Castril cuenta con una extensión de 243 Km^2.

El perfil productivo: si bien la actividad agraria está diversificada en las tres zonas, la Sierra de Segura tiene una marcada tendencia olivarera, con una mayor dependencia productiva de un monocultivo de este tipo.

El entorno socioeconómico de influencia: La Sierra de Segura y el municipio de Castril se encuentran alejados, y con vías de comunicación más dificultosas, de los grandes centros de consumo más próximos, que en sendos casos son las respectivas capitales de provincia. En el caso de la Serranía de Ronda, la proximidad de la Costa del Sol marca el perfil socioeconómico de los operadores, que tan solo en muy contadas ocasiones son agricultores a título principal.

Cuadro 8.- Resumen de las características de los territorios implicados en el proyecto de investigación

Características	Castril	S. de Ronda	S. de Segura
Superficie (Km$^{2)}$	243	1389	1931
Municipios	1	24	13
Entorno	Montaña	Montaña	Montaña
Agricultura tradicional	Sí	Sí	Sí
Parcelación de las fincas	Sí. Extrema en huertas	Sí	Sí
Tipología agricultores	A título principal (ATP), pequeña y mediana escala	No ATP, pequeña y mediana escala	ATP, pequeña y mediana escala
Figura de protección ambiental	Incluido en el PN Sierra de Castril	Rodeada de PN Sierra de Grazalema, PN de los Alcornocales, Sierra de las Nieves	Incluido en el PN de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas
Trayectoria previa en AE	ISEC (Universidad de Córdoba).	Grupo de Desarrollo Local	Ayuntamiento de Siles y Puente Génave

Dos ideas de cierre

Con todos los datos analizados, desde el ámbito europeo al contexto de los territorios piloto implicados en el proyecto de construcción de un sistema alternativo de garantía para la producción ecológica en Andalucía, cabe resaltar dos conclusiones fundamentales.

Por un lado, nuestra zonas piloto son zonas consideradas como *zonas desfavorecidas*, las cuales, y según el Programa de Desarrollo Rural para Andalucía, para el periodo 2007 – 2013 (Junta de Andalucía, 2007b), es una figura que "*contribuye al mantenimiento de las prácticas agrarias en territorios con determinadas dificultades para su continuidad: limitaciones topográficas, con amenazas por despoblación o con determinadas limitaciones específicas (parajes de alto valor ambiental, salinidad...). La figura viene a recoger, en suma, la necesidad de la agricultura y la ganadería para la conservación de determinados hábitats, sin posibilidad de mantenerse sin la acción humana*".
Según este Programa, en nuestra Comunidad Autónoma un 70% de su SAU se encuentra clasificada como zona desfavorecida, predominando con un 38% de la SAU andaluza la superficie incluida en "zonas de montaña". Zonas con unas especificidades que no responden a las macromagnitudes de los distintos sectores agrarios.

Esto fundamenta las ideas iniciales de este proyecto de que: por un lado, debe impulsarse cualquier acción encaminada a resolver los problemas que los productores tengan, en especial aquellos que practican manejos respetuosos con el entorno social y natural en este tipo de zonas, si se quieren aplicar políticas y acciones que potencien el medio y el *desarrollo rural* en nuestros territorios; por otro lado, el proyecto piloto llevado a cabo en estos tres territorios puede tener un cierto interés a nivel andaluz, al poder adaptarse y construirse en otras zonas (el 38% de la SAU andaluza) que comparten ciertos elementos productivos, sociales y geográficos.

En segundo lugar, estamos frente a un modelo agrario ecológico, en el que predominan superficies de fincas muy por encima de las medias estatales y regionales en convencional, generalmente destinadas a los cultivos extensivos tradicionales (pastos y forrajes o cereales) y en régimen de monocultivo (podemos incluir en esta característica a los citados anteriormente, así como al olivar). Esta estructura responde a un sector cuya orientación exportadora es del 64% de sus ventas totales, lo que provoca una concentración de las producciones en pocos productos, con mercados internacionales bien consolidados[81].

Esta realidad tiene una cara oscura, desde el punto de vista de la Agroecología, detectada incluso desde ámbitos oficiales. Las producciones ecológicas diversificadas, como puede ser el caso de la producción hortícola, así como las fincas de pequeño y mediano tamaño en cultivos de importancia como el olivar, los frutos secos o los cereales, están poco desarrolladas. Esto a pesar de representar la forma más eficiente de abastecer el mercado interno y facilitar la estabilidad en el medio rural y la autonomía comercial de los agricultores, así como de *dar estabilidad ecológica al sistema agrícola, al contribuir a mejorar la fertilidad y la prevención sanitaria de los cultivos*[82].

De esta forma, fomentar proyectos e iniciativas que vayan a apoyar a la agricultura ecológica de pequeña y mediana escala, adaptándose y respondiendo a sus problemas y realidades específicos, facilitará el fomento de un sector de la producción ecológica con un enfoque agroecológico, donde se potencien los mercados de proximidad y las producciones y fincas diversificadas. Esto implica una noción amplia de la producción ecológica, que incorpora elementos de sustentabilidad:

a. Social: el apoyo a las pequeñas producciones facilita la fijación de población en las zonas rurales; el fomento de este tipo de agricultura potencia el abastecimiento del mercado interno, en el que aumenta la autonomía en la toma de decisiones de los productores al reducir intermediarios.
b. Económica: los mercados internos y de proximidad permiten reducir intermediarios y por lo tanto percibir precios mejores; asimismo, evita las acumulaciones de capital y de información en pocas manos, lo que revierte en una mejora de la calidad de vida de un número más amplio de personas de una forma más equilibrada y justa.
c. Ambiental: las fincas diversificadas y de pequeño y mediano tamaño permiten llevar a cabo un manejo más agroecológico, en un equilibrio dinámico más estable con el entorno natural y con un menor uso de insumos externos.

[81] Junta de Andalucía, 2007a: pp. 12 – 14.
[82] Íbidem: pp. 12

Asimismo, el cierre de ciclos de materiales y energía es más sencillo y operativo.

PARTE II.- Los sistemas de garantía para las producciones ecológicas en la Unión Europea

El sector de la agricultura ecológica está regulado, en la Unión Europea, por el reglamento RE 2092/91, de aplicación en todos los Estados miembro. Este Reglamento de "*la producción agraria ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios*" define que el sistema de garantía reconocido a nivel oficial es el de la "*Evaluación de conformidad por auditoría*" o "*certificación por tercera parte*", basado en la Norma ISO 65, que se tradujo en la Unión Europea en la Norma UNE 45011.

Dentro de este marco, cada estado miembro debe establecer el sistema de control que estime oportuno, existiendo tres posibles variantes (Cantó, 2002):

1. La tercera parte que realiza los controles son entidades privadas llamadas *organismos de control***,** que deben estar acreditados para ello por la *autoridad competente,* en base a la Norma UNE 45011. Es lo que se conoce, oficialmente, como el sistema A.
2. La tercera parte que realiza los controles es la propia administración pública, a través de una o varias *Autoridad/es de control*. Es lo que se conoce como sistema B.
3. La tercera parte que realiza las inspecciones pueden ser bien *organismos de control* privados, autorizados para ello, bien una *Autoridad pública de control*. Es lo que se conoce como sistema C o mixto**.**

El Estado español tradujo el Reglamento europeo en torno a la producción ecológica, a través del Real Decreto 1852/93. A través de este decreto, se delegan las competencias para definir la variante del sistema de certificación por tercera parte, a establecer, a las Comunidades Autónomas.

A finales de noviembre de 2007, la única Comunidad Autónoma que trabaja la certificación a través del Sistema privado, o sistema A, era Andalucía. Con un sistema mixto, o sistema C, trabajaban Castilla la Mancha y Aragón. El resto tenían implantado un sistema público, o sistema B.

3.2.1. El sistema de garantía para la producción ecológica en Andalucía

En España y en Andalucía las primeras asociaciones de productores y técnicos de Agricultura Ecológica surgen, en su mayoría, en la década de los 80. En Andalucía es curioso observar que las primeras asociaciones de ámbito regional son promovidas por personas extranjeras, principalmente alemanas, que acabaron ubicándose y dedicándose a la producción ecológica en nuestra región.

Cuadro 9.- Principales asociaciones de agricultura Ecológica a finales de los años 80

Asociación	Año de fundación	Ámbito	Personas asociadas*
Vida Sana	1975	Estatal	3000 (25% agricultores)
Agricultura Biodinámica	1981	Estatal	Unas 80. La mitad dedicadas a la agricultura (Canarias y Península)
Coordinadora de AE (CAE)	1983	Estatal	285 (54% con fincas agrarias y 50% en Cataluña)
Umbela	1987	Andaluz	87 miembros (30% agricultores)
BioAndalus	1987	Andaluz	80 miembros (31 productores)

Fuente: Adaptado de Molina Casino, M.A. Y Pérez Sarmentero, J. (2004)
*Lehmbecker, G. (1988, citado en Molina y Pérez, 2004)

Bioandalus y Umbela surgieron como escisiones de una asociación mayor, creada en 1985, en su parte por productores alemanes afincados en nuestra región, llamada Bioland – Andalucía (Molina y Pérez, 2004).

Al principio, estas asociaciones desarrollaban tanto trabajo de asesoramiento, intercambios y formación como de control de las personas socias, en el cumplimiento de los cuadernos de normas establecidos por cada una de ellas. Eran las propias asociaciones quienes avalaban el origen ecológico de las producciones, a través de marcas o logos y de un control interno de las mismas. Cada una, además, tenía su propio cuaderno de normas a respetar.

Vida Sana, por ejemplo, concedía tres tipos de avales (Molina y Pérez, 2004):

a. Producto Biológico: para alimentos obtenidos según sus normas
b. Producto Natural: para alimentos transformados, provenientes de agricultura convencional, pero en cuyo proceso de transformación no se habían utilizado productos de síntesis
c. Producto Recomendado: para productos no alimentarios que, por sus propiedades, contribuían a mejorar la calidad de vida según los objetivos de la asociación

Otro ejemplo lo encontramos en la Asociación Biodinámica, que usaba un sello otorgado por la Demeter-Bund de Alemania y sólo para aquellos productos que se exportaban. Para mercados de proximidad, los productores no utilizaban ningún tipo de aval físico; o bien utilizaban los de las asociaciones andaluzas miembro del CAE, que concedían un distintivo "*Producto de la Agricultura Biológica*" y trabajaban sobre el cuaderno de normas editado por IFOAM en la época.

Hasta el año 1988 no se regula en nuestro país la Denominación Genérica "Agricultura Ecológica", y se hace a través del Real Decreto 759/1988. En este momento se crea el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica (CRAE), que tuvo competencias a nivel estatal hasta el año 1993, en el que se transfieren éstas a las comunidades Autónomas.

En los cinco años de actuación del CRAE a nivel estatal se avanzó en tres aspectos fundamentalmente (Molina y Pérez, 2004): por un lado, en la unificación del logo a nivel estatal, lo que facilitó el reconocimiento de estos productos y su exportación; por otro lado, en la creación de un registro central de operadores y producciones y; por último, en la unificación de los cuadernos de normas de producción en una normativa común. Asimismo, fue el CRAE el organismo que participó en la elaboración del Reglamento Europeo, RE2092/91, que vendría a unificar el sector a nivel de la Unión Europea, y el que llevó el proceso de adaptación de la normativa estatal a este marco comunitario.

Como ya hemos expresado, fue en el año 1993 cuando se transfieren las competencias en materia de producción ecológica a las Comunidades Autónomas. Se hace a través del Real Decreto 1582/93 y supuso la desaparición del CRAE. En su lugar, se creó la CRAE, Comisión Reguladora de la Agricultura Ecológica, compuesta por representantes del sector del consumo, la Administración Pública y las Comunidades Autónomas[83].

En este proceso, Andalucía fue la primera Comunidad Autónoma que asumió las competencias en este sector (el 17 de enero de 1994), con la particularidad de que fue la única que creó un sello propio para los productos ecológicos andaluces, distinto al establecido por el CRAE (Molina y Pérez, 2004). Desde este año hasta el 2002, el sistema de control implantado en nuestra Comunidad Autónoma era el sistema B, en el que las inspecciones y el proceso de certificación recaía sobre una Autoridad de Control pública, dependiente de la Junta de Andalucía, llamada Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE).

A partir del 2002 y a través del Reglamento, se modificó el sistema de control para la producción ecológica andaluza, iniciando un proceso de transición hacia un sistema privado (sistema A), a través del cual se abrió el sector a entidades privadas de certificación. El proceso de transición consistió en un año, del 2002 al 2003, en el que se estableció un sistema mixto o sistema C de control, compartiendo ámbito de actuación el CAAE en proceso de privatización y una nueva entidad privada acreditada, que entró a operar en nuestra región, llamada Sohiscert.

Desde el año 2005, el sistema de certificación en Andalucía es un sistema A, en el que la *Autoridad competente* es la Dirección General de Producciones Ecológicas[84], perteneciente a la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que es la

[83] La misión de este organismo, vigente en la actualidad, es la de armonizar y dar seguimiento a cuestiones relativas a la normativa y al control del sector, con el fin de asegurar una aplicación uniforme y correcta del Reglamento Europeo en todo el territorio estatal.

[84] Esta Dirección General se creó en el año 2004, bajo el nombre de *Dirección General de Agricultura Ecológica*. Tras el cambio de gobierno en el año 2008, pasó a denominarse *Dirección general de Producciones Ecológicas*

encargada de autorizar a los *organismos privados de control* para que puedan operar en nuestra región. En abril de 2008, eran seis los organismos de control autorizados[85]:

1. Servicio de Certificación CAAE, S.L. (unipersonal)**:** es la entidad de certificación vinculada a la asociación CAAE (ACAAE), creada el 24 de julio de 2002 y heredera del CAAE público reconvertido al sistema privado como asociación sin ánimo de lucro.
2. Sohiscert, S.A.: sociedad andaluza que opera en Andalucía desde el año 2002, miembro del grupo europeo Ecocert. Se dedica exclusivamente a certificaciones de productos ecológicos (normas JAS, NOP, etc.).
3. Agrocolor S.L.: creada en el año 2003 y dedicada a certificaciones varias además de la ecológica (producción integrada, mención *vino de la tierra*, etc.).
4. Lgai Technological Center, S.A.: se encontraba, en abril de 2008, en proceso de acreditación por parte de ENAC, que es la Autoridad Competente para la *acreditación* de los Organismos de Control.
5. Agrocalidad del sur, S.L.: se encontraba, en abril de 2008, en proceso de acreditación por parte de ENAC.
6. Ceres Certification of Environmental Standards, GMBH: acreditada por una de las Autoridades Competentes alemanas para la certificación de productos ecológicos.

La diversidad de logotipos, a nivel estatal y comunitario, llevó a la UE a establecer, en el año 2000, uno común para todos los países de la Unión, a través del Reglamento CE 331/2000. El uso de este sello será obligatorio a partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento, que sustituye al RE 2092/91.

3.2.2. El sistema de garantía en el nuevo reglamento europeo para la producción ecológica

El nuevo reglamento para la producción ecológica, que entrará en vigor en enero de 2009, considera la cuestión de la certificación y el control en la línea de las tendencias del "*análisis de riesgos y de puntos críticos*" (traducción al castellano del acrónimo inglés HACCP), originado en el ejército estadounidense, aplicado en la industria para controlar los temas de calidad planteados en la ISO 9000 y traducido en la Unión Europea a través del Reglamento RE 882/2004 (Roure, 2007).

Aplicar este reglamento a la producción ecológica supone interpretar este tipo de manejo como una cuestión de calidad, en el que lo que interesa es analizar aquellos puntos específicos de la finca donde puede haber riesgos: fundamentalmente los insumos utilizados, y el resultado final, es decir, posibles residuos que aparezcan en el producto final.

La implantación de este sistema de control a la producción ecológica conlleva que los

[85] Junta de Andalucía, 2008: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/PDF_Directos/Directorio_Organismos_de_Control_Andalucxa_120407.pdf (fecha de consulta: 15 de septiembre de 2008)

Organismos o Autoridades de Control no tienen que revisar uno por uno los criterios establecidos para la producción ecológica, sino únicamente controlar los puntos considerados "de riesgo" en el proceso productivo. Esta lógica tiene varias implicaciones en cuanto a las tendencias que puede impulsar dentro del propio sector de la producción ecológica:

a. Se simplifica la concepción del agroecosistema ecológico, interpretándolo como una cadena productiva de recursos y resultados, donde lo que se verifica es un producto final sin residuos
b. Se reduce el concepto de producto ecológico a aquel que minimiza los riesgos de contaminación o de productos dañinos para la salud, dejando a un lado cuestiones ecosistémicas de equilibrio sustentable con el entorno, de ciclos de materias y energía, de conservación de recursos naturales como el suelo, la biodiversidad y la diversidad genética, entre otros.
c. Simplifica y encarece las exigencias a los productores ecológicos, ya que sólo se verifica que han tomado todas las precauciones para minimizar los riesgos de no conformidades. Esto implica un aumento en la toma de muestras y de analíticas, así como la compra de insumos certificados o garantizados oficialmente. Esto, que supone un aumento en los costes fijos, irá en detrimento de los pequeños agrosistemas y de las producciones diversificadas y favorecerá las producciones que trabajen bajo una lógica industrial del control de riesgos, es decir, la agricultura como una rama de la industria y no como un modo de vida y de interacción con la Naturaleza.

La certificación de este tipo no considera la producción ecológica como una actividad global, una actitud en el manejo de una finca o de una producción ganadera; sino que considera, bajo una lógica industrial, que es una cadena productiva con puntos de riesgo.

En este contexto y estas tendencias de extremar la certificación por auditoría, no se ha recogido ninguna posibilidad de plantear otros sistemas de garantía, que puedan adaptarse a unas lógicas más agroecológicas de la concepción de la actividad agraria, y unas estructuras productivas de pequeño y mediano tamaño, diversificadas, integrales y en búsqueda del equilibrio de flujos de materia y energía con su entorno natural.

Como conclusión a este primer análisis cabe decir que las tendencias reglamentarias en torno a la producción ecológica, no sólo no tienden a incorporar criterios de las propuestas agroecológicas, sino que están alejándose de éstas, hacia concepciones y lógicas de tipo industrial, en las que la agricultura lejos de ser un modo de manejo de recursos naturales, y un intermediario entre la naturaleza y la sociedad, es una actividad industrial más, donde lo que existen son recursos, productos y procesos de transformación. Las relaciones ecosistémicas de los agrosistemas con su entorno, incluso los ciclos internos de materias y energías son conceptos que no se manejan en la visión industrial de la agricultura ecológica.

3.2.3. La certificación por tercera parte y el sector. Críticas vertidas

Las críticas al sistema de certificación oficial, la auditoría por tercera parte, son abundantes en los últimos tiempos, tanto en la escasa bibliografía científica existente como en documentos fruto de encuentros y foros del sector de la producción ecológica.

Como idea central de las críticas que apuestan por la búsqueda de otras alternativas, podemos comentar que, a partir del año en el que en la Unión Europea se instaura un sistema de garantía por tercera parte, la producción ecológica pasa de una concepción de sistema, en el que había distintos elementos que lo configuraban (producción – transformación y consumo), a una lógica de producto – cliente (Sylvander, 1997). El proceso de conformación del sector de la producción ecológica, hasta la entrada en vigor del reglamento, estaba basado en asociaciones y redes que se responsabilizaban de dar garantía de las formas de producción ecológicas. La confianza se construía a través de un control implícito de todas las personas socias por parte del resto de adherentes y del entorno social de las mismas. Se generaban y fomentaban redes de relaciones y confianza, que eran la base para el reconocimiento de las diferentes marcas y de su credibilidad.

Al entrar en vigor un sistema de garantía unificado, a través de auditorías técnicas de tercera parte, la garantía pasa a ser una relación de "cliente – prestadoras de servicios" (Roure, 2007), reduciéndose la confianza a una compra de un servicio de control y de certificación a una entidad tercera. Con este paso, las entidades de distribución – comercialización ya no necesitan a las asociaciones o redes para adquirir productos ecológicos, sino que pueden acudir a operadores individuales que hayan sido certificados.

Ambos procesos, la reducción de la garantía a una relación "cliente – prestadoras de servicios" y la posibilidad de distribuir y comercializar sin necesidad de contar con grupos organizados, tuvieron como consecuencia, entre otras, la pérdida del espíritu de red y de asociacionismo iniciales del sector. La estructura basada en un tejido social en red perdió capacidad de presión, generándose una desarticulación del sector (Roure, 2007).

La desarticulación del sector por un sistema de garantía que relaciona directamente a las entidades de certificación con el/la operador de forma individual se traduce, asimismo, en un distanciamiento y anonimato entre la producción y el consumo, desincentivando el fomento de las relaciones directas y de confianza entre una y otra.

La relación directa de los organismos o autoridades de Control con los operadores se establece en una visita anual, a través de la cual el/la técnico inspector evalúa si la finca cumple o no con las normas establecidas a nivel de reglamento y en función de esto se le otorga o se le deniega el uso del sello. En esta lógica de examen, que se aprueba o se suspende, no entra la práctica de las recomendaciones o las observaciones que podrían permitir una mejora continuada de las fincas, independientemente de que se autorice o no el uso del sello. El reglamento sobre la producción ecológica se convierte así en un fin en sí mismo, ya que su cumplimiento es suficiente para que un producto pueda ser considerado como ecológico. Esto puede generar un estancamiento del sector de la

producción ecológica en base a ese reglamento, desincentivando procesos de ecologización continuada.

Por último, la cuestión de los costes y del nivel de burocracia para los productores implicados en el sistema de garantía por tercera parte es importante. En primer lugar y como efecto general, cabe destacar que los manejos respetuosos con el Medio Ambiente y la salud humana que quieran ser certificados, sea cual sea su tendencia, están directamente penalizados en el mercado al tener que asumir unos niveles de registros que no se exigen en la producción convencional. En segundo lugar, supone una serie de costes que la agricultura convencional no tiene[86]. Estos, además, son de dos tipos: por un lado los fijos, correspondientes a la visita, la inspección, las analíticas y el proceso burocrático de la certificación, que cualquier finca debe asumir, sea cual sea su tamaño y; por otro lado los variables, que se establecen en función de la superficie y de la variedad de productos que se quieran certificar.

Los costes fijos perjudican a las pequeñas y medianas fincas, que deben afrontar un precio base de certificación, sea cual sea su producción y su comercialización[87]; los costes variables perjudican a las fincas diversificadas, por la combinación tanto de distintos tipos de cultivos como de ganadería con agricultura. De esta forma, el cierre de ciclos de energía y materia, así como la diversificación de la producción, resultan penalizados en este sistema de garantía oficial.

Esta realidad llevó, a algunas organizaciones del sector, a elaborar un documento de trabajo[88] enviado al Ministerio, en el año 2005 y con motivo de la discusión del nuevo Reglamento europeo para la producción ecológica, en el que planteaban entre otras propuestas cubrir los costes de la certificación al menos durante los cinco primeros años de actividad en ecológico. La propia ACAAE, asociación heredera del antiguo comité público de certificación y tras más de una década de experiencia en la certificación por tercera parte, publicó un documento de reflexión titulado "*En defensa de la agricultura ecológica*" en marzo de 2005, en el que hacía un balance sobre la situación del sector de la agricultura ecológica y en el que planteaba que "*las explotaciones pequeñas tienen dificultades para soportar los costes de certificación, por lo que se hace necesario articular medidas que palien esta situación*" (ACAAE, 2005).

En cuanto al nivel de burocracia, el análisis sería muy similar. Existen unos cuadernos de campo homogéneos para cualquier operador, independientemente del tamaño de su finca, de los canales de comercialización trabajados o del tipo de manejo que esté llevando a cabo dentro del ecológico. La complejidad de los registros se incrementa con la diversificación del tipo de productos de la finca, especialmente si se combina ganadería con agricultura.

[86] En el documento de reflexión editado en el año 2005 por la Asociación CAAE, lo expresa de la siguiente forma: *"La certificación (ecológica) es obligatoria, no hay posibilidad de elegir, y esto la sitúa en condición desigual frente a otros sistemas productivos", y "En Andalucía, el productor ecológico soporta íntegramente los costes de un sistema de certificación obligatorio (…). Dicha situación supone un agravio comparativo para los productores andaluces"*.

[87] La propia FAO ha denunciado esta realidad, en un documento del año 2003, en torno a las normas ambientales y sociales y a la certificación (FAO, 2003: pp. 100 – 101).

[88] Este documento lo elaboraron COAG (Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas), Greenpeace y Amigos de la Tierra, en mayo de 2005.

Todas estas críticas se ven agudizadas cuando se trata de un sistema de garantía por tercera parte de carácter privado, esto es, las entidades de control son empresas privadas dedicadas a la certificación. La propia FAO (2003: 98-99) establece los riesgos que entraña la constitución de los procesos de generación de credibilidad como un sector económico privado.

Estas deficiencias y críticas al sistema de garantía por tercera parte tienen su expresión más directa en las demandas, dentro del sector de la producción ecológica, de alternativas. A nivel internacional, IFOAM[89] ha promovido, desde documentos de trabajo y jornadas, la idea de trabajar y reconocer otros sistemas de garantía alternativos. En esta línea, existe un documento oficial de la Federación, "*Posición sobre la diversidad completa de la agricultura orgánica. Lo que llamamos orgánico*", en el que reconoce la existencia de otros mecanismos de garantía: "*aparte de la certificación por terceros, existen otros métodos para asegurar la calidad orgánica del producto en el mercado. Estas pueden ser las auto-declaraciones sobre la participación en sistemas de garantía. También existen situaciones donde la relación entre el consumidor y los productores es lo suficientemente fuerte para que sirva como un mecanismo de confianza y no se requiera una verificación externa*". En este mismo documento IFOAM defiende los sistemas alternativos de garantía, como mecanismos viables y confiables en determinados contextos, bajo el epígrafe de "*diferentes productores, diferentes circunstancias y diferentes mercados… diferentes escenarios y diferentes soluciones*". Como acciones concretas promovidas por IFOAM en este sentido, cabe destacar el Taller Seminario celebrado en Torres, Rio Grande do Sul (Brasil) en el año 2004, en torno a sistemas participativos de garantía en el mundo, coorganizado con el MAELA[90].

A nivel europeo, la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea editó, en noviembre de 2003, una "*Guía para la evaluación de equivalencia de los regímenes de certificación de grupos de productores aplicados en los países en desarrollo*" ("*Guide pour l'évaluation de l'équivalence des régimes de certification des groupements de producteurs appliqués dans les pays en développement*")[91], cuyo objetivo era superar las dificultades económicas relativas a la inspección de los pequeños productores ecológicos[92]. Si bien se trataba de un texto no vinculante y limitado a países terceros *en vía de desarrollo*, la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea planteaba la posibilidad de reconocer como válidos (es decir, como confiables) determinados sistemas de garantía participativa en grupos de pequeños productores, mediante la evaluación externa de estos sistemas, que es uno de los esquemas de lo que se conoce como Sistemas de Control Interno.

[89] International Association of Organic Agriculture Movements (Asociación Internacional de los Movimientos de Agricultura Ecológica)

[90] El MAELA es el Movimiento de Agroecología de América Latina y el Caribe. Existen diversas referencias a este seminario, entre las que proponemos la siguiente: http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/InternationalWorkshopOnAlternativeCertification_Torres_es.pdf (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2008)

[91] Referencia AGRI/03-64290-00-00-FR

[92] En el texto en cuestión deriva a la definición de la OCDE, para entender lo que quieren decir al hablar de pequeños productores.

A nivel estatal y con motivo de la discusión en España del borrador de propuestas para elaborar el que sería el nuevo Reglamento para la producción ecológica, se celebraron unas jornadas el 25 y 26 de mayo del 2005, en las que participaron organizaciones agrarias, colectivos sociales y profesionales del sector en nuestro país. Las demandas iniciales presentadas a las Jornadas de Reflexión por diversos colectivos contaban[93], entre otras, con la petición de que el modelo de certificación fuese "*público, participativo y gratuito*"; y que se abriera un debate "*sobre los modelos de certificación existentes y los que puedan desarrollarse, incluyendo la incorporación de criterios sociales*".

En el documento final que el Ministerio presentó como aportación española al debate, a nivel europeo, los puntos que se plantearon en torno a la certificación fueron los siguientes[94]: a) la apuesta por una certificación pública; b) la necesidad de que se establecieran ayudas de manera que los costes de certificación no recayesen en los productores; c) la necesidad de estudiar formas de reducción de burocracia y de dar solución a los problemas específicos de los pequeños productores y; d) la necesidad de informar a los consumidores de las garantías de la certificación.

En la misma línea y a nivel autonómico, se pronunciaron las conclusiones de unas jornadas celebradas el 27 de octubre de 2005, también con el objetivo de debatir participativamente sobre la modificación del Reglamento Europeo de Agricultura Ecológica, que estuvieron organizadas por la Dirección General de Agricultura Ecológica y en las que participaron expertos, entidades y organizaciones agrarias del sector y autoridades competentes de todo el Estado. En un apartado específico de las conclusiones, se menciona el deseo de que "*se contemple la posibilidad de desarrollar sistemas de certificación alternativos a nivel nacional o regional adaptados a la problemática y posibilidades del sector ecológico de cada región"*, así como el necesario reconocimiento de estos sistemas en la legislación que regula la producción ecológica[95].

La demanda de una apertura de las opciones para los sistemas de garantía en el sector ecológico no ha sido incorporada en el último reglamento, que entrará en vigor en el año 2009. Muy al contrario, este Reglamento incide en la lógica de la tercera parte a través de auditorías más tecnificadas e industrializadas como son las de análisis de riesgos y puntos críticos. Las cuestiones detectadas en torno a los efectos perversos de un sistema de garantía de este tipo se verán, pues, agudizados. Así, seguiremos en un contexto reglamentario que: impone intermediarios entre la producción, la comercialización y el consumo, en lugar de fomentar relaciones directas de confianza y garantía y; concibe el reglamento como un fin en sí mismo, desincentivando procesos de mejora continuada en el modo de manejo ecológico. Asimismo, se seguirán penalizando a través del sistema de costes y burocracia a las pequeñas y medianas fincas. Esta puede ser una de las causas de que el sector ecológico certificado presente fincas cuyo tamaño medio es hasta tres veces el tamaño medio de las fincas agrarias en nuestro país y en nuestra región; y que sectores que requieren una mayor diversificación y un manejo más

[93] Documento ya nombrado presentado por COAG, Greenpeace y Amigos de la Tierra
[94] MAPyA (2005b)
[95] Dirección General de Agricultura Ecológica (2005b).

reducido en tamaños, como el de las hortalizas, apenas sea relevante en el sector ecológico, mientras suponen el 8% de la SAU agraria convencional en nuestra región. Nuestro sector ecológico certificado responde a una estructura productiva que no se corresponde con el esquema de la agricultura convencional, lo que refleja una diferencia importante en cuanto a facilidad de conversión y de certificación de unos determinados manejos y superficies frente a otros.

Una reglamentación de obligado cumplimiento, que genera exclusión o agravios comparativos, es uno de los motivos fundamentales que han justificado la puesta en marcha del proyecto protagonista de este desarrollo doctoral.

3.2.4. Iniciativas de sistemas alternativos de garantía en Europa

En las jornadas que IFOAM y MAELA organizaron en Brasil, en el año 2004, sobre sistemas alternativos de garantía, Europa fue el único continente del que no participó ninguna experiencia. La existencia de un Reglamento desde el año 1991 y el paquete de subvenciones y ayudas asociadas a él podríamos considerarlos como dos motivos por los que este tipo de iniciativas de carácter alternativo en nuestra región están desincentivadas.

Sin embargo, en el proceso de investigación llevado a cabo con el presente desarrollo doctoral podemos citar por lo menos dos experiencias en este sentido. La de la Federación francesa Naturaleza y Progreso, fruto de la resistencia de una asociación de productores ecológicos franceses a la Norma EN45011 impuesta por el Reglamento europeo[96]; y una iniciativa puesta en marcha por IFOAM Europa, en torno a la implantación, de forma piloto, de un Sistema de Control Interno en el año 2007. Hemos identificado otras iniciativas, como el proyecto Arco impulsado por COAG en el Estado español, o algunos documentos trabajados por ICHEA, una entidad certificadora italiana. Sin embargo, cabe decir que se trata de reflexiones y planteamientos más teóricos, con ninguna o casi ninguna puesta en práctica o realidad de base.

El proyecto piloto sobre la implantación de un SCI en Europa, planteado por IFOAM a principios de 2006, llevaba por título "Sistema de Control Interno y Participativo". En este proyecto se implicaron cuatro territorios piloto, uno de los cuales fue el de la Sierra de Segura (Estado español), que coincidió con el grupo implicado en el proyecto andaluz de construcción de un Sistema Participativo de Garantía.

Sobre este proyecto, cuyas conclusiones no están terminadas en el momento de elaboración de este documento, cabe decir que planteaba un SCI ya elaborado y que el objetivo se centraba en ponerlo en práctica y evaluar el grado de adaptación y de funcionamiento en los distintos territorios[97]. El esquema de trabajo del proyecto se centró en las cuatro zonas piloto, a través de un grupo voluntario de productores en cada

[96] Esta resistencia, así como la experiencia en sí, se argumentan y detallan en profundidad en el capítulo 6 en torno a otras experiencias de garantía alternativa en el mundo

[97] http://www.ifoam.org/organic_facts/farming/pages_FG/I-GOInformationResources/ICS_Inspectors_Kit_es.php (fecha de consulta: diciembre de 2007)

zona y una entidad de certificación acreditada a nivel del estado en cuestión. Su función era la de aplicar el Sistema de Control Interno establecido por IFOAM y estarían coordinados a través de una Consultora holandesa llamada AgroEco. El perfil de los grupos buscados exigía que estuvieran conformados por un mínimo de 20 personas productoras, a los que les asignaban una persona asesora, de ámbito local, en todo el proceso. Los territorios piloto que han participado en la experiencia han sido: el grupo local Tarn, de Nature et Progrès, en Francia; el Consorcio Biogargano, en Italia; el grupo Rapunzel, en Turquía y el grupo de Sierra de Segura, en el Estado español.

El proyecto se ha trabajado en varias *fases*[98]. La *primera* consistió en un entrenamiento intensivo para el establecimiento y desarrollo del SCI propuesto, con el grupo productor y la entidad certificadora. En el caso andaluz, esta jornada formativa se hizo con el grupo original planteado, que fue la Cooperativa Sierra de Segura de Génave (grupo de unos 85 productores olivareros que ya trabajan con la empresa CertiCAAE en una certificación grupal), y la entidad de certificación CertiCAAE.

Durante esta reunión, la entidad de certificación se retiró del proyecto, lo que promovió la retirada a su vez del grupo productor. Desde la DGAE se promovió la entrada de un grupo alternativo, en este caso el mismo grupo que estaba implicado en el proyecto de construcción de un SPG para Andalucía, en la zona de Segura, bajo la tutela del dinamizador contratado para este proyecto en este territorio y con otra entidad de certificación de las acreditadas en Andalucía, Agrocolor.

La *segunda* fase consistía en poner en práctica el SCI establecido por IFOAM, del que podemos destacar los siguientes elementos:

a. Ciertos requerimientos de personal, a establecer por el grupo productor: una persona responsable de la gestión del SCI y una persona responsable de las inspecciones internas del grupo
b. La persona inspectora interna era la responsable de hacer las visitas de inspección anuales a los miembros del grupo, y los informes correspondientes a las mismas, coordinar la ejecución del proyecto y llevar los contactos con las otras contrapartes del proyecto europeo
c. Otra persona presente en el proyecto era la llamada "consultora local", encargada de dar asesoría técnica con regularidad, para asegurar la mejora continua del sistema.

Para terminar esta experiencia piloto, la *tercera fase* consistía en recibir una inspección externa por parte de la entidad de certificación implicada (Agrocolor en el caso andaluz). El rol de la entidad consistía en verificar que la documentación elaborada en todo el proceso era correcta y detallada, para otorgar una "certificación virtual" grupal.

El Sistema de Control Interno que IFOAM propuso en este proyecto piloto "*fue elaborado por un grupo de expertos bajo la coordinación de IMO"*[99] *(*IFOAM,

[98] Toda esta información ha sido recabada de la observación participante directa de la investigadora, así como de conversaciones con los responsables del proyecto en Andalucía: Juan José González y Eva Torremocha

[99] Institute for Market Ecology (Instituto para la Ecología de Mercado, de Suiza)

2004)[100]. El objetivo de este manual fue el de armonizar los SCI a nivel internacional[101]. Los principales elementos del sistema propuesto son:

1. *Referente al grupo productor*:

    a. Lo que se entiende por pequeños productores. En este manual se establecen dos criterios: por un lado, que el coste de la certificación externa sea desproporcionado y establecen un porcentaje ejemplar del 2% de los ingresos; por otro lado, que la mano de obra y el manejo de la unidad de producción sea principalmente familiar.
    b. Lo que se entiende por grupo de pequeños productores susceptibles de entrar en un SCI. El manual establece cuatro criterios de homogeneidad entre sus miembros: ubicación geográfica, sistema de producción, tamaño de la unidad de producción y sistema de comercialización común.

2. *Referente al proceso de garantía:*

    a. El grupo productor: cuenta con una unidad o cuerpo identificado al que se delega la función de inspección anual de sus miembros.
    b. La entidad de certificación: inspecciona la documentación elaborada por el grupo, las calificaciones de las visitas de sus miembros, y reinspecciona a una muestra para verificar que es verídico lo elaborado por el grupo.

Esta experiencia resulta de interés para el tema que planteamos, ya que reconoce la capacidad de los grupos de productores de establecer un sistema propio de control y de garantía, si bien mantiene la revisión de tercera parte como garante final de todo el proceso. En los SPG, la necesidad de esta figura externa al final del proceso es cuestionada ya que prescinden de ella, considerando que todo el proceso de control interno que se establece entre los productores es suficiente. Otra diferencia importante de esta experiencia con los SPG se basa en que el proceso de control interno recae sobre una persona del grupo y no sobre todos sus miembros en general, a través de visitas cruzadas planificadas.

Por último, los requisitos establecidos en este SCI suponen grupos homogéneos de productores, con tipos de cultivos y canales de comercialización similares. Sin embargo, en los SPG no existen estos requisitos, ya que la implicación directa de cada participante hará viable una mayor heterogeneidad en los grupos.

3.2.5. Otros modelos de gestión colectiva en el medio agrario español: las Comunidades de Regantes

[100] IFOAM: "Certificación de grupos de pequeños productores. Manual de guía para organizaciones de productores". IFOAM. 2004

[101] El manual fue el resultado de: tres reuniones de trabajo de armonización de los SCI para grupos de pequeños productores (organizadas por AgroEco); y los documentos básicos para la certificación de grupos de pequeños productores, contenidos en el Manual de Pequeños Productores de Naturland/IMO (2001). Fue ensayado en capacitaciones piloto en Vietnam, India y Perú (IFOAM, 2004)

La gestión colectiva de un bien considerado común o colectivo no es nueva en nuestro país. Para ilustrar esta idea y asumiendo la justificación realizada en el marco teórico de que la garantía en las producciones ecológicas podría considerarse como una gestión colectiva de la confianza, queremos recoger aquí un ejemplo, arraigado en nuestro entorno agrario, que son las Comunidades de Regantes, que ha servido de referente en todo el proyecto.

Las Comunidades de Regantes son instituciones milenarias con una larga tradición histórica, creadas desde sus orígenes para la distribución de las aguas y la organización propia del regadío. La organización de las Comunidades de Regantes se ha basado históricamente en el Derecho consuetudinario, en la costumbre, en hábitos que acabaron plasmándose en ordenanzas escritas, la primera de ellas en 1866. La última Ley de Aguas se promulgó en agosto de 1985 y ha sido recientemente reformada[102].

Las Comunidades de Regantes son agrupaciones de todos los propietarios de una zona regable, que se unen obligatoriamente por ley para la administración *autónoma y común* de las aguas públicas. Estas Comunidades se caracterizan por tener personalidad jurídica propia, ser Corporaciones de Derecho público, tener la calificación de Administración Pública y no tener ánimo de lucro [103]. La legislación obliga a los futuros usuarios del agua en común a constituirse en Comunidad de Regantes, de manera que la mayoría del regadío español está integrado en estas agrupaciones. De esta forma, las Comunidades de Regantes tienen la función asignada de "*organizar los aprovechamientos colectivos de aguas públicas, superficiales y subterráneas que le son comunes*". Para ello deben acatar las normas "*sancionadas por la Administración y elaboradas por los propios usuarios*"[104].

Así, la gestión del 70% de un bien básico y colectivo como es el agua[105], en nuestro país, es cedida por la sociedad a los grupos de regantes y otros propietarios, organizados a través de figuras jurídicas concretas, que la gestionan en base a sus propios criterios y organizaciones[106].

En Andalucía, la estructura jurídica definida y exclusiva es la de Corporaciones de Derecho Público, adscritas a la Agencia Andaluza del Agua. Son las responsables de la gestión del agua, a través del trabajo colectivo de sus integrantes que deben ser siempre personas físicas. Cuentan con tres órganos para su funcionamiento[107]:

---

[102] Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España: http://www.fenacore.org/ (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2008)
[103] Íbidem
[104] del Campo García, A. (Presidente de la Federación nacional de las Comunidades de Regantes de España): Las comunidades de regantes de España y su federación nacional, www.fenacore.org/empresas/fenacore/documentos/espanol.doc (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2008); pp. 5
[105] Íbidem: pp. 4
[106] Íbidem: pp. 5; "*Con carácter general, el artículo 73.1 de la Ley de Aguas (en adelante LA) establece que la organización de comunidades de usuarios, así como la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento, estarán regulados por los Estatutos u Ordenanzas, que una vez redactadas y aprobadas por los propios usuarios, deberán ser sometidas para su aprobación administrativa al Organismo de cuenca*" (subrayados propios)
[107] Íbidem: pp. 7

a. La *Junta General*: Constituida por todos los comuneros o usuarios. Es el órgano soberano de la Comunidad, correspondiéndole la gestión de las funciones legislativas y competencias específicas (aprobación de Presupuestos, elección de cargos, solicitud de Concesiones nuevas de aguas, adquisición o enajenación de bienes, etc.).
b. La *Junta de Gobierno*: Constituida por comuneros elegidos por votación en Junta General. Les corresponde la gestión de la función ejecutiva de la Comunidad, a través de las competencias que les corresponden por Ley y por las Ordenanzas propias. Algunas de estas competencias pueden ser: hacer cumplir las Ordenanzas, elaborar presupuestos, organizar y distribuir el riego, cuidar el estado de las obras e infraestructuras, etc.
c. El *Jurado de Riego:* Constituido por los comuneros elegidos en Junta General. Le corresponde la gestión de las funciones judiciales. Es el encargado de conocer las cuestiones que se susciten entre los usuarios de la Comunidad, pudiendo imponer a los infractores las sanciones reglamentarias. Su función principal es la de arbitraje en los conflictos que surjan entre regantes, regantes y guardas, etc. El objeto es dar una solución rápida a los problemas planteados, sin tener que acudir a los tribunales ordinarios de Justicia. Los Jurados funcionan como tribunales de hecho.

Los estatutos de las Comunidades de Regantes, aprobados en asamblea, recogen el reglamento interno de funcionamiento donde quedan definidas, entre otras, las faltas, sanciones e indemnizaciones, de manera que el Jurado de Riegos sólo tiene que aplicar lo estipulado. El Jurado se reúne cuando se presenta cualquier queja o denuncia por escrito a cualquiera de los miembros. Para poder celebrar una sesión o juicio deben estar presentes todas las vocalías (o suplentes). Las decisiones se toman por mayoría absoluta y, en caso de empate, decide el voto del Presidente. En algunos casos (por lazos familiares o de amistad con la persona demandada, por ejemplo), que deben estar bien definidos en los estatutos, deben abstenerse de intervenir algunas vocalías.

Otros puntos de interés en el funcionamiento de las Comunidades de Regantes, para el caso que nos ocupa, se centran en que la gestión de la propiedad depende de la Asamblea. La Junta de Gobierno puede proponer las actuaciones que estime necesarias para los intereses generales pero no se realizarán sin el acuerdo de la Asamblea. Asimismo, para realizar cualquier obra en el bien común, se debe contar con la autorización expresa de la Junta de Gobierno. Asimismo, funcionan a través de un padrón de usuarios de la Comunidad de Regantes, donde se recogen todos los datos de parcelas de los comuneros, quienes deben informar de cualquier modificación que efectúen en su explotación.

Si el agua, bien de necesidad básica, se ha gestionado tradicionalmente en nuestro país y nuestra cultura agraria de forma colectiva, en base a asociaciones con reglamentos autónomos y estructuras de gestión propias, nos muestra que promover estructuras autónomas de gestión colectiva para otros procesos, como en este caso pueda ser la garantía de las producciones ecológicas, es una cuestión que no es novedosa en nuestro medio agrario.

4. PROPUESTA METODOLÓGICA

Para responder con adecuación a los objetivos marcados, la vía considerada como oportuna y necesaria ha sido aplicar un pluralismo epistemológico, donde se han incorporado: enfoques metodológicos desde una perspectiva dialéctica, a través de los cuales hemos creado conocimiento en paralelo a un proceso de acción y cambio social; y enfoques metodológicos desde una perspectiva estructural, a través de los cuales se ha podido realizar un trabajo de análisis y sistematización del proceso andaluz y de los procesos brasileño y francés[108].

La inclusión de enfoques metodológicos desde una perspectiva dialéctica responde a la incorporación de la dimensión política de la Agroecología, que plantea que la investigación puede ser un proceso de impulso de cambio social, a partir del cual se establezca una elaboración epistemológica con las personas implicadas en el proceso. En nuestro caso, el impulso y el acompañamiento de un proceso de construcción de un Sistema Participativo de Garantía para Andalucía es el que ha traducido esta dimensión política.

Partimos de la conciencia de que el "poder" no es sino el contexto que permite que algunos de los miembros de un sistema definan lo que es "verdad" y "realidad" para el resto de componentes del mismo (Packman, 1991: 86). Esto nos lleva a plantear la necesidad y consecuentemente la oportunidad de introducir en posición de sujetos a los actores que se implican en el proceso de investigación, como constructores de su propia realidad (Rosa y Encina, 2003: 90). De esta forma, y como plantea Fernández de Castro (1991: 83), a través de las metodologías dialécticas como la IAP tratamos de facilitar que sean las personas implicadas quienes produzcan su verdad y la registren, construyendo sus espacios de sociedad a su medida.

Este proceso participativo ha sido el centro del desarrollo doctoral, a partir del cual se han trabajado los demás objetivos, a través de las técnicas que hemos considerado las más adecuadas para cada caso. Por esto, presentamos la metodología seguida en la investigación dividida en dos apartados:

a. Desde una perspectiva dialéctica: el proceso metodológico seguido en la construcción de un SPG andaluz, que permite responder al objetivo específico tercero y que responde a un proceso de Investigación Acción Participativa. A través, fundamentalmente, de encuentros asamblearios, se ha buscado que entre las personas participantes se generen enlaces más fuertes, capaces de observar las relaciones sociales y reformar las instituciones que las contienen (Rosa y Encina, 2003: 92). Desde esta perspectiva dialéctica, hemos tratado de producir cambio tratando de mover la realidad hacia su/s estado/s posible/s (Ibáñez, 1989: 65).

[108] Hemos utilizado la nomenclatura utilizada por Jesús Ibáñez (1989:49), cuando establece una «*tricotomía de perspectivas para el estudio científico*» según los objetivos del estudio, que se forma por: la perspectiva distributiva, la perspectiva estructural y la perspectiva dialéctica

b. Desde una perspectiva estructural: otras herramientas metodológicas que han servido para la consecución del resto de los objetivos específicos: a) entrevistas semiestructuradas individuales y grupales y grupos de discusión, como herramientas para trabajar los contenidos de los objetivos segundo, cuarto y quinto; y b) observación participante, herramienta metodológica que ha facilitado la consecución de los objetivos del segundo al quinto. Asumimos, en este caso, una articulación entre empirismo y formalismo, donde restituimos a las personas implicadas en el proceso sólo parcialmente, ya que hemos sido nosotros, desde la investigación, quienes hemos definido los elementos sobre los que indagar las opiniones y visiones de las personas participantes.
c. Proceso de revisión bibliográfica, que ha permitido dar respuesta a los objetivos primero y sexto.

4.1. La perspectiva dialéctica de la investigación: el proceso metodológico seguido en la construcción de un Sistema Participativo de Garantía andaluz

Ante la problemática expresada a la DGAE en torno a la certificación por auditoría, por parte de algunos grupos productores ecológicos concretamente de la Sierra de Segura y de la Serranía de Ronda, se propuso, desde esta institución y contando con el ISEC, plantear un proceso de Investigación Acción Participativa con el fin de:

- Resolver participativamente esta problemática.
- Generar un proceso de reflexión colectiva en profundidad en torno a la cuestión.
- Promover un proceso de construcción colectiva de las propuestas de solución a llevar a cabo.

De esta forma, se podría alcanzar el objetivo tercero planteado para esta investigación: por un lado, construir participativamente un SPG para nuestra región y; por otro lado, comprobar si, a través de un enfoque metodológico de este tipo, es posible promover procesos de Garantía Participativa en nuestros contextos.

La Investigación Acción Participativa es una propuesta metodológica en el marco de la perspectiva dialéctica, que plantea una *metodología* de investigación y un *proceso* de intervención social en paralelo. De esta forma, propone el análisis de la realidad como una forma de conocimiento y sensibilización de la propia población que pasa a ser, a través de este proceso, sujeto activo y protagonista de un proyecto de desarrollo y transformación de su entorno y realidad más inmediatos (ámbitos de vida cotidiana, espacios de relación comunitaria, barrio, distrito, municipio...).

Las circunstancias concretas de cada proceso o realidad son las que determinan de qué forma se lleva a cabo este proceso, así como los medios con los que se cuenta para ello. No obstante, existen una serie de criterios comunes, que se pueden identificar en la mayoría de los procesos de IAP: se trabaja para conseguir unos objetivos marcados a partir de los problemas concretos que se desean solucionar; se incorpora un proceso de apertura a todos los puntos de vista de las personas implicadas ante los problemas y los objetivos marcados, con el fin de consensuar un diagnóstico y poder debatir y negociar sobre las propuestas que se plantean a lo largo del proceso, entre todos los sectores; la

implicación de las personas participantes es una condición indispensable, ya que es en base a sus propuestas como se marcarán las líneas de actuación para el futuro y; estas líneas de actuación que se promueven con el proceso son el punto de inicio de una nueva etapa de detección de nuevos problemas, para los que se plantearán nuevos objetivos, dando origen así a un nuevo proceso.

El diseño del proceso concreto de IAP que se realizó para el presente proyecto, inicialmente, trató de incorporar las tres dimensiones de las que nos habla Balcázar (2003):

a. *Investigación*: desarrollar un proceso epistemológico conjunto, entre todos los participantes en el proceso, en torno a la construcción colectiva y puesta en marcha de un SPG, con sus dificultades y puntos fuertes; y la identificación de los problemas a los que se enfrentan los productores con la certificación oficial (la certificación por auditoría). En todo este proceso epistemológico, los participantes juegan un papel activo, documentando todo el proceso de la experiencia, las condiciones en las que se van desarrollando, las problemáticas que van surgiendo,...
b. *Educación:* el diagnóstico conjunto y la elaboración colectiva de propuestas, a través de técnicas grupales y participativas, enseña a las personas implicadas a trabajar a través del diálogo, la discusión, la capacidad de empatía, el respeto mutuo y el consenso.
c. *Acción:* Las soluciones prácticas y los elementos del modelo construido son asumidos e implementados por los propios participantes en el proceso. De este modo, se ha trabajado sobre un proceso continuado de ensayo – error, a través del cual se ha garantizado un modelo adaptado a la realidad social y cultural local.

De este modo, el proceso de investigación de la viabilidad de los SPG en nuestros contextos, así como de la capacidad de las metodologías participativas de promoverlos, se produce en el curso de una acción concreta que es la construcción de un SPG para Andalucía, por tres territorios piloto, generándose con ello un proceso de transformación de la realidad en la que hemos trabajado. Permite, como plantea Ottmann (2005: 97), "*desarrollar la generación de un tipo de conocimiento transformador, que establece estrategias de cambio*". Estas tres dimensiones se concretan en una serie de actividades, que traducirán todo este proceso de investigación, educación y acción.

Cuadro 10.- Actividades Centrales de la Investigación-Acción Participativa

Actividad	Característica
Investigación	1. Análisis de un proceso de construcción participativa de un SPG 2. Análisis de la operatividad de un SPG en Andalucía. 3. Análisis de las posibilidades de construir un SPG en un territorio, a partir de una intervención con metodologías participativas
Educación	1. Trabajo a través de reuniones grupales para el desarrollo de conciencia crítica y capacidad de plantear alternativas y soluciones. 2. Desarrollo de capacidades de discusión, planteamiento de opiniones y visiones, y búsqueda de consensos.
Acción	1. Construcción y puesta en práctica de un SPG 2. Respuesta a las necesidades de organización e interacción entre los participantes, para la puesta en marcha del sistema – creación de tejido social

La dimensión de investigación del proceso de IAP se concreta en el análisis, de forma colectiva, de todo el proceso de construcción del SPG andaluz, su operatividad en nuestros contextos y la aplicabilidad de metodologías participativas para promover procesos de SPG en los territorios.

La dimensión educativa se visibiliza en el aprendizaje colectivo en torno al trabajo en grupo y la capacidad de construir conjuntamente, a través de procesos de reflexión y proposición, alternativas y soluciones a los problemas de los territorios. Un aspecto interesante de este aprendizaje se centra en el desarrollo de las capacidades de hablar en público, de construir y explicar planteamientos, opiniones y percepciones y de trabajar los procesos de consenso.

Por último, la dimensión de la acción se define a través de la puesta en práctica del SPG construido, así como de los procesos de organización interna y de creación de tejido social, surgidos a partir de las demandas del propio modelo construido.

Los procesos de IAP, generalmente, son impulsados por agentes externos a las comunidades o grupos en los que se desarrollan, ya sean provenientes de una universidad o de otra administración local o regional. En estos casos, los agentes externos como elementos facilitadores del proceso juegan un papel inicial central, al ser los impulsores del proceso de reflexión y de desarrollo de conciencia crítica en torno a los problemas o necesidades del grupo, a partir del cual se podrá trabajar todo el proceso de IAP.

En los casos en los que se produce este protagonismo del agente investigador en las primeras fases del proceso, un correcto desarrollo de la metodología y de la IAP en cuestión debería generar una transformación, a medida que la construcción avanza, hacia el traspaso del protagonismo a los propios participantes del proceso. El papel, en estos casos, de las figuras técnicas va reduciéndose hacia el de facilitadores metodológicos y logísticos.

En el proceso de construcción de un SPG para Andalucía, uno de los objetivos a los que hemos pretendido dar respuesta ha sido testar si, a través de un proceso de IAP promovido desde la institución, con un papel central del equipo técnico en las primeras fases del proyecto, como fue el caso, es posible construir colectivamente un sistema de garantía participativo que funcione en los territorios de forma autónoma. A nivel conceptual, ha habido dos principios en los que se ha basado el diseño de la metodología para este proyecto:

1. Que las personas de los grupos que habían trasmitido la problemática de la certificación por auditoría, y la necesidad de soluciones, eran capaces de encontrar ellos mismos las respuestas. La clave para dar este paso de pedir una solución a la administración a plantearle a la administración las acciones a poner en marcha estaba en un proceso participativo que les facilitase desarrollar su conciencia crítica y realizar su potencial transformador (Balcázar, 2003: 7).

2. Que el proceso de IAP debía promover una transformación de la realidad social de las personas implicadas, a través del incremento en la confianza en sí mismos y en la colectividad.

4.1.1. Las etapas del proceso dialéctico propuesto

La estructura de la IAP seguida en el proceso, ayudándonos de la sistematización sugerida por Joel Martí y en base a una propuesta de Alberich, ha constado de las siguientes etapas[109]. Cabe destacar que los referentes teóricos utilizados sobre las fases de una IAP han sido eso, referentes, ya que los procesos que se plantean a través de la IAP no son finalistas ni aprioristas; el cómo y el con quién se van redefiniendo a lo largo de todo el proceso (Rosa y Encina, 2003: 95).

Etapa previa o de compromiso

Durante la etapa previa o de compromiso, se trata de realizar una inmersión en la temática que se va a abordar en la IAP, en este caso la construcción de una alternativa a la certificación por auditoría.

Por un lado, centra su interés en el conocimiento contextual del territorio, que permita elaborar un esbozo de la realidad local de los grupos a implicar, así como de los *analizadores históricos*[110] presentes en los territorios.
Por otro lado, profundiza en la temática de los sistemas de garantía, en general, y de los SPG en particular, con las discusiones y polémicas que existen en torno a ellos, a través de la documentación existente sobre el tema, y de una estancia en una iniciativa de SPG consolidada, en Brasil.

[109] La propuesta que hacen Guzmán, Alonso, Pouliquen y Sevilla (1996) sobre cuatro fases para la IAP: fase de compromiso, fase de investigación participativa, fase de acción y fase de evaluación ha sido también una referencia a la hora de planificar inicialmente este proyecto

[110] El *analizador histórico responde a* acontecimientos que se tienen presentes o se han vivido en la comunidad, y que estructuran los discursos desde las diferentes posiciones sociales, mostrando las contradicciones existentes (Balcázar, 2003).

Es la fase que permite sentar las bases a partir de las cuales definir el proyecto de construcción de un SPG para Andalucía.

Primera etapa: Diagnóstico y primeros esbozos de propuestas

Durante esta etapa, se genera un proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, en cada uno de los tres territorios implicados en el proyecto, utilizando métodos cualitativos y participativos.

Los elementos concretos trabajados se centran en identificar la problemática concreta a resolver, y en plantear los primeros esbozos de lo que podría ser un modelo participativo de garantía que resolviera la problemática identificada y consensuada.

Segunda etapa: Conclusiones y propuestas definitivas

Esta etapa centra su interés en la negociación y la elaboración de propuestas concretas.

El objetivo a alcanzar consiste en ultimar los detalles de lo que será la propuesta de SPG para Andalucía, y en realizar los primeros ensayos de las visitas cruzadas, poniendo en práctica los documentos y manual de visita elaborados por los grupos.

Tercera etapa: Puesta en práctica del modelo construido.

Etapa de puesta en práctica de las propuestas construidas, en este caso del SPG elaborado, y corrección y adaptación de las dificultades encontradas en su aplicación.

La puesta en marcha del SPG construido de forma consensuada permite ir consolidando la organización interna de los grupos, necesaria para el correcto funcionamiento del sistema, y detectar los puntos débiles del modelo construido. A partir de estos ensayos, se proponen cambios para solventar las dificultades.

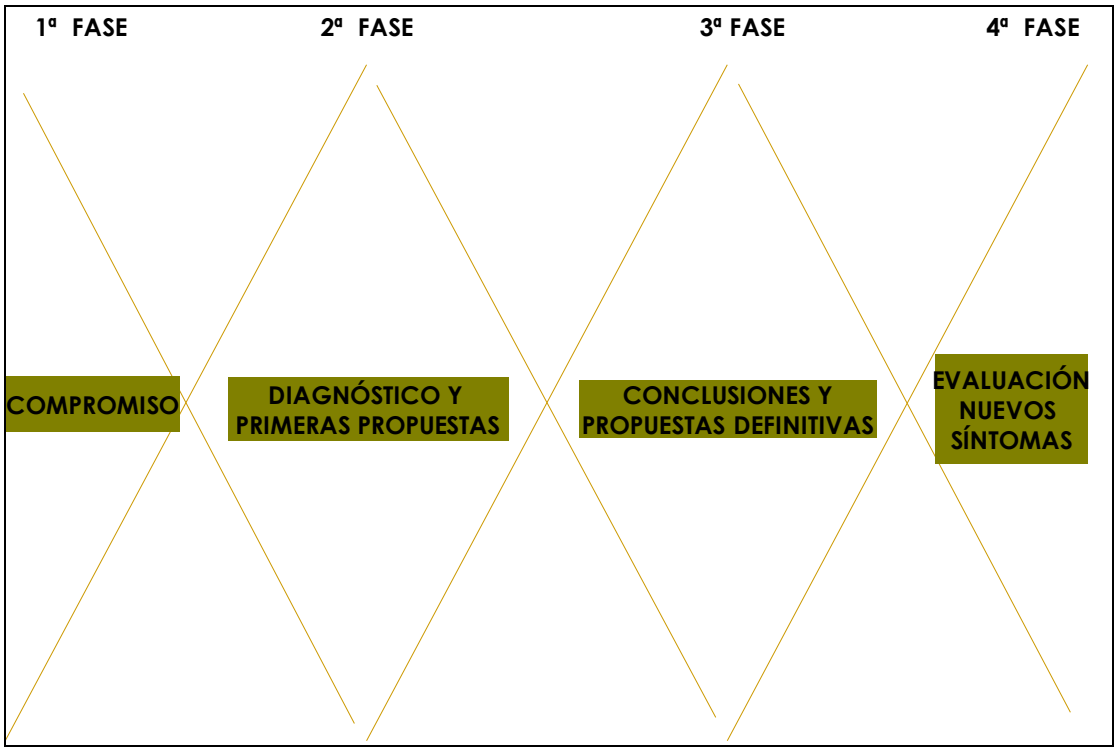
En este momento se empiezan a trabajar los elementos que pueden incidir en la construcción de una coordinación entre los tres grupos, lo que podría convertirse en una Red andaluza del SPG: participación conjunta en canales de comercialización o la definición de una estructura supraterritorial con determinadas funciones comunes a los tres territorios, entre otros.

Cuarta etapa: Evaluación y detección de nuevos síntomas

La etapa de evaluación y detección de nuevos síntomas se centra en la evaluación, en cada territorio, de su propia organización interna. También trabaja un proceso de reflexión en torno al futuro del SPG y de los grupos creados, dada la coyuntura política, en torno a la voluntad de las personas implicadas en los grupos de defender este proceso, y a la capacidad de incidencia política para implicar a la nueva administración en este proceso.

El diseño de la IAP aplicada, considerando estas etapas, ha respondido a la figura que propone Villasante (2006), en la que se plantean diversas fases que representan procesos de apertura y de cierre consecutivos, tal y como indica el esquema siguiente.

Figura 4.- Fases del proceso de Investigación Acción Participativa propuesto



Fuente: Adaptado de Villasante, 2006

Cada etapa de las descritas constaba de una fase de apertura, y otra de cierre. La fase de apertura se correspondía con el inicio del trabajo de cada una de las etapas descritas en cada territorio, a partir de sus propias dinámicas y ritmos. Es un proceso de apertura hacia todas las propuestas y opiniones en cada uno de los tres territorios. La fase de cierre la identificamos con los procesos de consenso y concreción de propuestas, al final de cada etapa, en cada territorio, que culminaban en encuentros regionales entre los tres grupos, en los que se generaba el espacio para construir los consensos y propuestas entre los tres territorios. En los encuentros regionales se sentaban las bases y los elementos sobre los que se iniciaría la fase de apertura de la etapa siguiente.

En este tipo de metodología, se asume que cada territorio debe adaptar el proceso a su propia realidad, a nivel de técnicas concretas a poner en práctica en cada momento, y en función de los objetivos que se quieran ir alcanzando. Esto se traduce, en un proceso de este tipo que se conforma a partir de tres procesos en paralelo en territorios distintos, en una cierta libertad a cada una de las personas dinamizadoras y a cada uno de los grupos implicados, para establecer las técnicas y modos de trabajo que mejor se adapten a su contexto.

El modo de garantizar una cierta coordinación y un trabajo paralelo de objetivos y etapas similares se plantea a través de reuniones periódicas de coordinación del equipo técnico. La periodicidad de las reuniones varía en función del momento de la etapa en la que se encuentre el proceso, pero se puede establecer una media de un mes – un mes y medio entre reunión y reunión.

Estas reuniones de coordinación contemplan diferentes objetivos metodológicos:

a. Evaluar el trabajo desarrollado en el periodo anterior
b. Establecer los objetivos para el periodo siguiente
c. Asesorar en torno a aspectos conceptuales y metodológicos de la construcción en marcha: sistemas de garantía, SPG, metodologías participativas, técnicas participativas, y legislación vigente
d. Adecuar el grado de avance o de desarrollo del proceso entre los territorios, con el fin de evitar diferencias de ritmos que pudiesen generar unas disparidades irrecuperables

4.1.2. Los encuentros regionales de cierre – apertura de cada etapa

Los encuentros regionales, organizados como cierre de cada una de las etapas, entre los tres territorios, se plantean con una doble finalidad: por un lado elaborar, a partir de las realidades de cada territorio, y de dinámicas de encuentro y de intercambio, un consenso o una construcción conjunta, con posibles especificidades consensuadas, entre los tres territorios y; por otro lado, facilitar la articulación entre los tres territorios, que permite construir una organización mayor, supraterritorial. De esta manera, se sientan las bases de una posible red, a nivel andaluz, que coordinase a los grupos de SPG que se fuesen creando, pensando en la posible ampliación de este proceso a otros territorios, y en mecanismos de apoyo mutuo entre los existentes.

Utilizando la nomenclatura propuesta por Alberich (1998), estos encuentros sirvieron de "*analizadores construidos*", es decir, elementos introducidos en el proceso que tienen capacidad de provocar impactos en cada uno de los grupos que acudían desde los territorios. El encuentro y el diálogo entre territorios obligaban a las personas participantes a abrirse desde sus propias realidades territoriales a las otras dos, planteándoles la necesidad de deconstruir elementos establecidos y reconstruir desde una colectividad más amplia, a partir de los nuevos puntos de vista incorporados.

La estructura de los encuentros se inspiró en la nomenclatura empleada en el ámbito de la Investigación Acción Participativa de *talleres de creatividad social*. Constituían momentos en los que las personas participantes se involucraban en un análisis estratégico de sus posiciones, de sus relaciones y de sus potencialidades (Rosa y Encina, 2003: 108).

Villasante (2001: 16) lo plantea como momentos para "*abrir desde un principio las oportunidades de situaciones complejas, y ganar una mayor creatividad y eficacia*". Son herramientas a través de las cuales se expresan y reflexionan las propuestas

sociopolíticas de los actores. Estos encuentros estaban guiados por algunas pautas metodológicas:

a. Planteamiento de objetivos concretos y concisos a alcanzar.
b. Trabajo de los diferentes temas en subgrupos, compuestos por participantes de los diferentes territorios, para facilitar el intercambio de posicionamientos y discusiones, así como la búsqueda de consensos interterritoriales.
c. Aportaciones por tarjetas, en la mayoría de los casos, para facilitar la participación de todos y todas.
d. Puestas en común por parte de algún componente de los grupos de los consensos alcanzados y apertura general del debate entre todos los participantes.
e. Evaluación de cada encuentro, a través de aportaciones individuales, en cuanto a: reparto de los tiempos, metodología seguida, ubicación, fluidez de las discusiones y consensos alcanzados.

Una norma básica empleada fue la no participación de los dinamizadores y las coordinadoras en las discusiones, centrando su participación en centrar las discusiones, sintetizar conclusiones y facilitar los consensos. Esto facilitó que fuesen los propios participantes quienes planteasen los argumentos y posicionamientos de sus grupos, generándose un proceso de aprendizaje en aspectos como hablar en público, organizar ideas y trasmitir razonamientos.

En todos los encuentros, se reservaba una última sesión destinada a establecer el cronograma de acciones y de objetivos a alcanzar, territorialmente, en la siguiente etapa. Cada encuentro iba acompañado de un informe – relatoría final, que era devuelto a todos los participantes, y facilitado a la Comisión de Seguimiento, donde se detallaban:

a. Los avances alcanzados y los consensos establecidos
b. El estado del modelo en construcción
c. Los puntos pendientes de definición, concreción o consenso del modelo
d. La planificación y objetivos planteados para la siguiente fase

4.2. La perspectiva estructural de la investigación: otras herramientas metodológicas

El pluralismo epistemológico aplicado es una consecuencia de los objetivos planteados en la investigación, y se traduce en la aplicación de diferentes enfoques metodológicos. La primera parte planteada en este capítulo responde a un proceso metodológico participativo, a través del cual generar un proceso social, que ha sido la base de la presente investigación y el contenido de uno de los objetivos marcados: el tercero. La segunda parte, que es la que nos proponemos plantear, se corresponde con un proceso de investigación desde una perspectiva estructural, a partir del cual hemos dado respuesta a los objetivos segundo, cuarto y quinto.

La perspectiva estructural, tal y como señalan Guzmán et al. (2000: 163), plantea explicar los procesos impulsados o analizados, con sus fenómenos y sus interrelaciones, a través de la percepción de las propias personas implicadas en ellos y sus discursos. De esta forma, podemos generar una información cualitativa a partir de la cual *dotar de sentido sociocultural a los procesos generados en la realidad* (Guzmán et al., 2000: 163).

Las herramientas concretas que han servido para este fin han sido: las entrevistas semiestructuradas, personales y grupales, y los grupos de discusión. Asimismo, los talleres de reflexión y creatividad, llevados a cabo en cada encuentro regional durante el proceso participativo, han sido una herramienta de la que se ha obtenido parte de la información y el sentido sociocultural de todo el proceso.

4.2.1. Entrevistas semiestructuradas, individuales y grupales y los grupos de discusión

Las entrevistas semiestructuradas y los grupos de discusión son técnicas de investigación cualitativa que sirven como espacios de relación con cada uno de los sujetos, y como instrumentos para la recogida de información. Van más allá de un registro y una estructuración de datos, ya que permiten interpretar y analizar los discursos para poder comprenderlos (Ortí, 1998: 171).

La relación directa entre investigadora y personas implicadas que estas técnicas entrañan las hacen instrumentos de observación directa. Además, están basadas en la libre expresión de las personas entrevistadas, permitiendo situaciones reales de comunicación, donde cabe la alternancia de las figuras de emisión y recepción.

Esta técnica fue considerada oportuna para atender el objetivo específico segundo, a través del cual se pretende analizar las motivaciones que llevaron, a las personas implicadas al principio del proceso, a participar en él y su percepción en torno a la certificación oficial (por auditoría o tercera parte).

Para ello, se llevaron a cabo una serie de entrevistas individuales y grupales, a los 5 meses de haber iniciado el proyecto. El momento metodológico que consideramos como el más oportuno fue, una vez finalizada la etapa previa de compromiso, en la fase de apertura de la etapa primera de diagnóstico y primeras propuestas. El desarrollo de estas entrevistas persiguió, aparte de responder al objetivo específico segundo de la investigación, evaluar el grado de avance y de satisfacción de las personas implicadas en esta primera etapa del proyecto, con el fin de:

a. Detectar posibles deficiencias o insatisfacciones en el proceso y tratar de reconducirlas, considerando que estos primeros momentos del proyecto eran los que estaban sentando los pilares de todo el proceso.
b. Establecer un primer contacto entre la coordinación y los territorios, considerando que: a) a través de un conocimiento personal de las personas implicadas, el trabajo de coordinación lo podríamos realizar de forma más consciente y adaptada; y b) que estableciámos un momento visible de apoyo

> explícito a las personas dinamizadoras, de cara a los territorios, considerando que de este modo se daba solidez y consistencia al proyecto

Esta misma técnica fue utilizada para responder al objetivo tercero de la investigación: analizar la evolución generada en torno a la percepción de las personas implicadas sobre los SPG, y sobre la confianza en la construcción de procesos grupales en sus territorios. En este caso, se tomó la decisión de hacer otra segunda ronda de entrevistas, procurando contactar a las mismas personas que en la primera serie, al año y 7 meses de desarrollo del proyecto. El momento metodológico elegido, en esta ocasión, correspondió con el cierre de la etapa tercera, de elaboración de conclusiones y propuestas definitivas, e inicio de la etapa cuarta de evaluación. El tercer encuentro regional fue el momento en el que se anunció y explicó, a los grupos, esta segunda fase de entrevistas.

Al igual que en la primera serie de entrevistas, esta herramienta se utilizó con otros objetivos complementarios para el proceso: por un lado, captar el grado de satisfacción de las personas implicadas con la marcha y la metodología del proyecto, lo que permitió aplicar determinadas adaptaciones y realizar recomendaciones al trabajo de los dinamizadores para la última fase, así como realizar una evaluación de la metodología y el proceso de dinamización seguidos; por otro lado, reforzar el proceso y a los dinamizadores de cada territorio, fortaleciendo la idea de proyecto regional y de apoyo institucional; asimismo, detectar el tipo de productores y consumidores que encajan mejor en este tipo de construcción y alternativa, al profundizar en torno a las visiones de las personas participantes sobre la Agricultura Ecológica y la Agroecología, su implicación como personas activas en sus contextos y sus expectativas.

El número de entrevistas realizadas sobrepasó lo que Glaser y Strauss (1967: 65) dieron en llamar el *principio de saturación*, es decir, al cabo de un determinado número de entrevistas, el contenido de las nuevas que se iban haciendo ya no aportaban datos o ideas nuevas, llegándose a una repetición en las reflexiones captadas.

La decisión metodológica de superar el principio de saturación fue tomada por los objetivos complementarios que nos habíamos marcado con esta herramienta metodológica, para los cuales un número mayor de personas entrevistadas era beneficioso, en varios sentidos, pues permite: a) fortalecer el desarrollo del proceso y la confianza en él; b) apoyar a las figuras de los dinamizadores y; c) profundizar nuestro conocimiento, como coordinación, de la realidad de las personas implicadas en el proyecto.

En la primera fase de entrevistas, se llevaron a cabo 24, de un total de 82 personas implicadas en este momento, con las siguientes características:

Cuadro 11.- Descripción de las entrevistas realizadas en la primera fase del proyecto

Según el tipo de técnica	*Entrevistas individuales*	19	Total: 24
	Entrevistas a 2 o más personas	3	
	Grupos de discusión	2	
Según el perfil de la persona entrevistada	*Productores*	19	Total: 24
	Consumidores	5	
Según el territorio	*Castril y Castilléjar*	7	Total: 24
	Sierra de Segura	9	
	Serranía de Ronda	8	

En la segunda fase de entrevistas, se llevaron a cabo 23, de un total de 61 personas implicadas, cuyas características fueron las siguientes.

Cuadro 12.- Descripción de las entrevistas realizadas al final del proyecto

Según el tipo de técnica	*Entrevistas individuales*	19	Total: 23
	Entrevistas a 2 o más personas	4	
Según el perfil de la persona entrevistada	*Productores*	15	Total: 23
	Consumidores	5	
	Técnicos dinamizadores	3	
Según el territorio	*Castril y Castilléjar*	7	Total: 23
	Sierra de Segura	8	
	Serranía de Ronda	8	

El número de personas que fueron entrevistadas en ambos momentos (tanto en la primera serie como en la segunda) representan aproximadamente, el 55% de las personas entrevistadas. El número, por territorios, se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro 13.- Personas entrevistadas en ambos momentos del proyecto

Número de personas entrevistadas al inicio y al final del proceso	*Castril y Castilléjar*	2	Total: 13
	Sierra de Segura	6	
	Serranía de Ronda	5	

De las personas entrevistadas en la primera fase de entrevistas, un número importante se dio de baja a lo largo del proceso. Los motivos fueron de diversa índole[111]: salud personal o de familiares; abandono de la actividad; identificación del proyecto con determinados partidos políticos locales, al recibir apoyo de administraciones locales; o por falta de tiempo para asistir e implicarse en el proceso.

[111] Esta información ha sido extraída en las sucesivas estancias en los territorios implicados, a través de conversaciones informales con los dinamizadores y con los implicados.

Con este porcentaje de coincidencias, hemos tomado la decisión metodológica de realizar el análisis de la evolución de los discursos, en torno a los SPG y a la confianza en procesos grupales en la zona, con todas las entrevistas realizadas, tanto al principio como al final del proceso. En el caso de las personas con las que nos entrevistamos al inicio del proceso, la entrevista de evaluación era más directa y concisa. En el caso de aquellas personas a las que entrevistamos por primera vez en la segunda fase, la entrevista procuraba provocar una construcción de todo el proceso seguido, y de la evolución sentida por la propia persona entrevistada. De este modo, tratamos de solventar a nivel metodológico la coincidencia en un 55% de las personas entrevistadas en ambas fases. El guión de las entrevistas semiestructuradas establecido contenía los objetivos marcados en cada una de las dos series de entrevistas[112]:

Cuadro 14.- Guión de las entrevistas realizadas en el proceso andaluz

<table>
<tr><td rowspan="2">Entrevistas de la primera fase</td><td colspan="2">Entrevistas de la segunda fase</td></tr>
<tr><td>Persona entrevistada en la primera fase</td><td>Persona no entrevistada en la primera fase</td></tr>
<tr><td>Visión en torno a la producción ecológica</td><td></td><td>Visión en torno a la producción ecológica</td></tr>
<tr><td>Visión de la certificación oficial (por auditoría o tercera parte)</td><td></td><td>Visión de la certificación oficial (por auditoría o tercera parte)</td></tr>
<tr><td>Motivaciones para entrar en el proyecto de construcción de un SPG para Andalucía</td><td></td><td>Motivaciones para entrar en el proyecto de construcción de un SPG para Andalucía</td></tr>
<tr><td colspan="2">Visión de los SPG</td><td>Evolución seguida en su visión de los SPG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Confianza en el territorio y en el grupo creado para construir un proceso colectivamente</td><td>Evolución seguida en su confianza en el territorio y en el grupo creado para construir un proceso colectivamente</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Percepción de la metodología empleada en el proceso</td></tr>
<tr><td colspan="3">Percepción del proceso de dinamización</td></tr>
</table>

La elección de las personas entrevistadas se hizo conjuntamente con los dinamizadores, para abarcar todo el abanico de realidades que estaban presentes en el proyecto: a nivel productivo y de consumo y a nivel de implicación.

La metodología aplicada para el análisis de los discursos captados en las entrevistas ha venido muy marcada por las orientaciones de Ibáñez (1985a), que propone cuatro lecturas. La segunda y la tercera más analíticas/técnicas, y la primera y la cuarta más intuitivas/interpretativas. Las variables en torno a las cuales se ha realizado el análisis se han establecido en base a los objetivos específicos marcados, concretados en el guión de las entrevistas planteado. Cada variable, por su parte, ha sido estructurada en base a

[112] Las entrevistas trascritas en ambos momentos pueden ser consultadas en el Anexo I.

diferentes categorías, que se iban extrayendo tras la segunda y tercera lectura de las entrevistas. A cada una de las categorías establecidas se le ha asignado un valor cualitativo, en forma de letra. Por último, a estas categorías se les han atribuido aquellos fragmentos de las entrevistas que aluden a las mismas (tercera y cuarta entrevista) y se han organizado, para facilitar su lectura, a modo de tablas (que se adjuntan en los anexos organizados por variables). La selección, organización y sistematización de las categorías y de las citas correspondientes ha sido facilitada enormemente gracias a la herramienta informática Atlas.ti en su versión 5.0.

El grupo de discusión se utilizó en dos ocasiones, en dos de los territorios implicados en el proyecto y en ambos casos al inicio del mismo. Esta técnica permite convocar a las personas seleccionadas previamente, bajo determinados criterios, para que hablen y discutan entre ellas sobre la temática planteada.

Uno de ellos se llevó a cabo con el grupo de Segura, concretamente con el subgrupo de Beas de Segura. El objetivo estratégico de este grupo de discusión fue evaluar el grado de satisfacción de las personas implicadas, a los 4 meses de haberse iniciado el proceso. Y respondió a una inquietud, detectada a través de la observación participante en la zona: la persona dinamizadora, por motivos personales, no estaba alcanzando los objetivos marcados para el proyecto en estas primeras etapas, lo cual podía estar haciendo peligrar el funcionamiento del mismo en el territorio.

El segundo grupo de discusión se realizó en Castril, aprovechando la celebración de una Jornadas de Agricultura Ecológica, y la asistencia a las mismas de personas con cargos de responsabilidad en la DGAE. Este grupo de discusión persiguió el objetivo estratégico de captar el nivel de madurez del grupo, a los 4 meses de haberse dado inicio el proyecto, y sus visiones y discursos en torno a la certificación oficial y al SPG en construcción.

La técnica de las entrevistas semiestructuradas fue la utilizada para atender los objetivos específicos 4 y 5. Se realizaron a través de dos estancias de investigación de 5 meses de duración en total en Brasil, en los estados donde se desarrolla la experiencia de la Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná); y de una estancia en Francia de dos semanas de duración en el Parque Natural de Cevènnes.

Con la utilización de este instrumento metodológico desde la perspectiva estructural, perseguimos profundizar en los discursos de las personas implicadas en estas experiencias extranjeras de SPG, ya consolidadas, en torno a diversas ideas, que nos servirían para trabajar la sistematización y comparativa entre experiencias que se presenta en el capítulo 7.

La guía de estas entrevistas semiestructuradas estaba centrada en captar las siguientes ideas:

a. La visión de su rol como productores/as ecológicas en la sociedad
b. Su percepción del tipo de agricultura que practican

c. Su percepción de los sistemas de generación de credibilidad en las producciones ecológicas
d. Proceso seguido de construcción del sistema alternativo de garantía en el que participaban
e. Motivaciones para participar y, en ocasiones, liderar, un proceso de este tipo
f. Percepción de este modelo alternativo en el que estaban inmersos/as

La elección de los lugares donde se realizaron estas entrevistas, en contextos culturales e idiomas diferentes, fue considerada un elemento importante. De esta forma, se buscaron espacios como las propias casas de los entrevistados/as, o espacios colectivos de los grupos como los mercados semanales donde vendían sus productos o las asambleas de los grupos.

La estrecha convivencia con algunas de las familias entrevistadas, durante varios días, así como la entrada en los grupos o las familias a través de líderes y personas reconocidas por ellos/as, fueron elementos que ayudaron a romper las barreras iniciales entre investigadora y sujetos investigados, y a profundizar en los discursos y en el nivel de interrelación y comunicación.

Las entrevistas que se llevaron a cabo fueron, en total, las que se presentan en la tabla siguiente[113].

Cuadro 15.- Detalle de las entrevistas realizadas en las experiencias extranjeras estudiadas

Perfil personas entrevistadas	**Experiencia Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa**		**Experiencia Federación Internacional de Agricultura y de Ecobiología Nature et Progrès**	
	Año 2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008
Productores	6	5	2	6
Consumidores	1	1	1	
Técnicos	1	-	1	
Investigadores	1	2		
Total	17		10	

En total se han realizado 17 entrevistas en la experiencia brasileña de la Red Ecovida, en la que se ha conversado con personas de perfiles distintos: productores/as, consumidores/as, técnicos/as e investigadores/as implicados en la Red; y a 10 personas de la experiencia francesa Naturaleza y Progreso, fundamentalmente productores/as, una a consumidores/as que se corresponde con la asistencia a la asamblea del grupo de la Lozère (este es el grupo que inició el SPG en la federación) y donde confluyen anualmente todos/as los/as productores/as y consumidores/as miembros de la asociación; y a un técnico de la Federación. No se han conocido, ni por referencias, personas investigadoras relacionadas con la experiencia. Cabe decir que las seis entrevistas utilizadas, del año 2008, no fueron realizadas por la doctoranda, sino por la

[113] Las entrevistas trascritas en sus idiomas originales pueden consultarse en el Anexo I.

otra persona de la coordinación político – técnica del proyecto andaluz, Eva Torremocha.

4.2.2. La observación participante

La técnica de la observación participante se caracteriza por aportar una gran riqueza y profundidad en la información que se va recabando, así como por la posición que los/as investigadores/as ocupan ante la realidad en la que pretenden sumergirse. A través de esta técnica participan personal y directamente en las acciones que promueven las personas implicadas en el proceso. No se trata de una observación pasiva e invisible, sino participante, es decir, que entra en un juego con el contexto de observación (Rosa y Encina, 2003: 106).

Como apuntan García Ferrando y Sanmartín (1998: 129), la persona de los investigadores, en su integridad, es la herramienta para la observación; su mayor o menor memoria visual, sus biorritmos, sus capacidades y carácter son lo que les permitirá, a pesar de sesgar el trabajo, llevarlo a cabo.

La realidad de las personas que se implican en los procesos dialécticos del tipo de la IAP se podrá comprender si se comparten sus espacios. Son ellos/as quienes conocen el terreno, en el que construyen el sentido y el objeto de su implicación. De este modo, para el aprendizaje de sus modos y maneras, se hace necesaria la convivencia y el diálogo en sus contextos (Fals Borda, 1992). Esta técnica ha facilitado, de forma complementaria al proceso de la IAP, el reconocimiento e intercambio entre la investigadora y los agricultores. Esta interrelación ha sido esencial en la dinámica de aceptación y legitimación mutua.

El establecimiento de la residencia habitual en uno de los territorios, durante un año, permitió asistir a sus reuniones, hacer visitas a sus fincas y lugares de trabajo, compartir espacios de sociabilidad y mantener charlas informales en contextos distendidos, entre otros. En los demás territorios, se planificaron momentos de convivencia in situ aprovechando los periodos en los que se desarrollaron las entrevistas semiestructuradas, así como otros eventos organizados por las personas implicadas en el proyecto, relacionados con su trabajo productivo y grupal: asistencia a alguna Bioferia o a algún biopunto, fundamentalmente. El tiempo total de convivencia en cada uno de los territorios ha sido de un año y dos meses en la Sierra de Segura, y de dos meses en Castril y Castilléjar y en la Serranía de Ronda.

En las experiencias extranjeras, la observación participante ha partido de la convivencia de varios días con algunas de las familias miembro de la experiencia, tanto en Brasil como en Francia, así como de la participación de la investigadora en puntos de encuentro y de toma de decisiones de estos grupos, tales como asambleas generales, mercados semanales donde estos grupos vendían sus producciones con su sello alternativo, reuniones semanales para organizar las visitas de campo o la logística de la comercialización conjunta de la producción, trabajo cotidiano en las fincas, etc...

4.3. Revisión bibliográfica para la construcción de propuestas conceptuales

La cuestión de la credibilidad en las producciones ecológicas, así como los mecanismos de garantía, son temas relativamente nuevos, que han sido poco tratados en la bibliografía existente. Por un lado, por ser mecanismos que han sido impuestos como obligatorios desde algunas legislaciones vigentes, sólo desde la década de los noventa.

Por otro lado, porque la Agroecología, el ser un enfoque científico relativamente nuevo, ha ido explorando los distintos ámbitos de estudio y de trabajo y se ha centrado, hasta la fecha, en cuestiones relacionadas con técnicas de manejo, la sociología rural, la historia del campesinado y el conocimiento en profundidad de modos de manejo de los recursos naturales de identidades étnicas y culturales en el contexto de cosmovisiones indígenas del continente americano, que se podrían aglutinar en lo que hemos descrito como premodernos. Las cuestiones relacionadas con la credibilidad y las relaciones de confianza entre producción y consumo, en el ámbito de la producción ecológica, es un tema poco trabajado en el acervo agroecológico.

Ante esta realidad, la revisión bibliográfica en profundidad tuvo que recurrir a otros ámbitos de conocimiento, y a otros contextos, más allá de la Agroecología y de Europa.

De las construcciones teóricas en torno a la Agroecología, se han extraído los principios y fundamentos en los que hemos basado la argumentación de que los Sistemas Participativos de Garantía son los procedimientos de generación de credibilidad actuales que más se acercan a las propuestas de la Agroecología[114].

Los otros ámbitos de conocimiento a los que hemos recurrido, para completar la construcción teórica de la credibilidad y la generación de confianza, se han enmarcado fundamentalmente en las construcciones teóricas de la Economía Solidaria, la Participación, las teorías del Desarrollo, y en nociones económicas y sociológicas de la credibilidad y de los procesos de confianza.

En lo que se refiere a los contextos donde hemos tenido que recurrir para realizar la revisión bibliográfica, dado el bajo número de referencias especializadas en torno a Sistemas de Garantía en Europa, cabe destacar la relativamente extensa elaboración conceptual que hemos encontrado en Brasil. Dos estancias de investigación en este país han facilitado el acceso a todo este acervo teórico, a través de las bibliotecas de la Universidad Federal Rural de Rio Grande do Sul, en la ciudad de Porto Alegre y las de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro y la Asociación Nacional de Agroecología (ANA), en Rio de Janeiro.

La poca bibliografía existente en nuestros contextos, acompañado de las muestras de interés y de preocupación por el tema que ha dado el sector de la producción ecológica

[114] Esta argumentación se ha desarrollado en la última parte de la construcción teórica de la presente tesis doctoral

en Europa[115], nos hacen concluir que el tema central de esta tesis doctoral responde a una necesidad sentida del sector de la producción ecológica europeo, que ha sido insuficientemente atendida hasta la fecha por la producción científica.

[115] Referencias en torno a la preocupación del sector de la producción ecológica europeo en torno a la certificación por auditoría y la necesidad de buscar alternativas las podemos encontrar en IFOAM, 2003, pp.2; MAPyA, 2005b, pp. 3; DGAE, 2005b, pp.6; COAG, Greenpeace y Amigos de la Tierra, 2005, pp. 3-4; ACAAE, 2005, pp. 12-13. Asimismo, diversos proyectos puestos en marcha por actores importantes de este sector en Europa dan cuenta de ello: COAG, sindicato agrario mayoritario en el Estado español, a través de su proyecto ARCo; IFOAM Europa, a través de su proyecto piloto de implantación de Sistemas de Control Interno en la Unión Europea; la Xarxa de Consum Solidari y la Xarxa de Agroecología, ambas catalanas, con sus jornadas anuales sobre Agroecología y Comercio Justo, en cuyas ediciones de 2007 y 2008 centraron parte de las sesiones en la cuestión de los Sistemas Participativos de Garantía.

5. PROCESO ANDALUZ DE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍA PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

La solución al problema de la certificación oficial se buscó a través de tres procesos convergentes, uno por cada territorio implicado. Esto significa que se planteó una metodología común a las tres zonas, pero un desarrollo propio en cada uno de ellos. La convergencia venía operativizada a través de encuentros periódicos entre los tres territorios donde se consensuaban los avances alcanzados hasta el momento.

Para presentar el proceso seguido y los resultados obtenidos, hemos planteado tres tipos de aportaciones: en primer lugar, aquellas de carácter descriptivo, que permiten entender la realidad de la que se partía, el proceso concreto seguido y el sistema de garantía alternativo construido, con sus características y mecanismos. En segundo lugar, los resultados de carácter analítico, donde presentamos los resultados obtenidos de tipo estructural y de tipo dialéctico. En tercer lugar, la evaluación participativa del proceso, en cuanto a la metodología y la dinamización seguidas.

A nivel de descripción, como elementos de utilidad para comprender el proceso y su contexto, presentamos las características de cada uno de los territorios implicados en el proyecto. Esta descripción nos parece importante para contextualizar el desarrollo del proyecto, ya que tuvo su influencia en el modo de abordar la metodología y en la evolución seguida. La descripción de este punto de partida supone la primera parte del presente capítulo.

Junto con las características de los territorios, el segundo elemento descriptivo se centra en la concreción de la metodología a lo largo del proceso. Como hemos planteado en el capítulo correspondiente, el enfoque utilizado se basó en las pautas de la IAP. Su aplicación a los territorios requirió una continua adaptación a la evolución de los mismos y a elementos coyunturales (temporadas de recolección, adversidades climatológicas, etc.). De este modo, surge el desarrollo concreto que se llevó a cabo en los territorios implicados. La descripción de este proceso la presentamos como un aporte: 1º a la aplicabilidad de este tipo de enfoques metodológicos en nuestros contextos; 2º al acervo de herramientas e instrumentos metodológicos utilizables según los objetivos perseguidos. De este modo contribuimos con un ejemplo de proceso metodológico, para impulsar mecanismos de garantía participativa en nuestros contextos.

El tercer elemento descriptivo del proyecto es el propio modelo de SPG construido participativamente. En este apartado detallamos las estructuras y los mecanismos que se han propuesto para establecer un sistema de garantía alternativo en nuestra región. En todos los elementos definitorios existe un elemento común: se basan en la implicación directa de las personas que lo establecen. El nivel de operatividad y de confiabilidad serán los dos elementos que den solidez o hagan vulnerable al modelo construido. De

este modo contribuimos a los escasos estudios que hemos encontrado en torno a sistemas alternativos de garantía.

A nivel de análisis y siguiendo el planteamiento realizado en el capítulo metodológico, planteamos dos niveles de resultados: los de tipo estructural y los de tipo dialéctico.

El primer nivel de resultados analíticos está compuesto por los elementos estructurales que han vertebrado el proyecto. Aquí analizamos: 1º el perfil de las personas implicadas en este proyecto, de acuerdo a sus características y a su visión en torno a la producción ecológica; 2º las razones por las que las personas implicadas formaron parte de un proyecto de búsqueda de alternativas a la certificación oficial.

El análisis del perfil de las personas implicadas, en base a su visión de la producción ecológica, se realiza como aporte a la Agroecología en Europa. Tratamos de contribuir a la discusión sobre la existencia o no de propuestas agroecológicas en nuestro continente[116]. Por este motivo, hemos analizado la cabida que las visiones y propuestas de tipo agroecológico tienen en nuestros contextos agrarios, desde el proceso seguido en este proyecto. Así, tratamos de aportar nuestro grano de arena a la posibilidad de construir procesos agroecológicos en contextos posmodernos.

El segundo nivel de resultados analíticos está compuesto por elementos de tipo dialéctico, es decir, aquellos resultados emanados del proceso sociopráxico seguido. La propuesta participativa ha generado reflexiones, cambios y aprendizajes en los imaginarios de las personas implicadas en el proyecto. Estos cambios los analizaremos de acuerdo a: 1º la evolución de la confianza de las personas implicadas con respecto a su entorno social, en base a su disposición para establecer vínculos de cooperación y trabajo colectivo; 2º la evolución de la percepción de estas personas sobre la posibilidad de construir un sistema participativo de garantía y sus percepciones en torno a la generación de credibilidad en los productos ecológicos; 3º el surgimiento de acciones y procesos colectivos en los territorios, impulsados por las personas implicadas en el proyecto.

Este nivel de resultados nos permitirá discutir la oportunidad de las propuestas sociopráxicas para generar procesos de cambio social agroecológico. Asimismo, podremos analizar el nivel de profundidad que estos cambios han tenido en los territorios, a través de la discusión de los procesos y acciones impulsados por las personas implicadas.

La evaluación del proceso seguido se consideró un elemento básico en un proyecto participativo de este tipo. Por esto, se plantearon diversas herramientas para permitir evaluar de forma participada la metodología y la dinamización llevadas a cabo a lo largo del proyecto. La discusión de estos aspectos nos permitirá analizar la viabilidad y adaptabilidad de este tipo de propuestas metodológicas a unos contextos acostumbrados

[116] Referencias en torno a esta discusión las encontramos en Guzmán et al (2000): pp. 61 – 79. En esta cuestión hay autores que plantean que la Agroecología no existe en Europa y es ámbito exclusivo latinoamericano.

a políticas públicas asistencialistas[117]. Como elemento clave en este análisis presentamos el perfil de las personas responsables de dinamizar el proceso en cada uno de los territorios.

5.1. Perfil de las personas implicadas en el proyecto en base a sus características socioeconómicas

Las personas implicadas en el proyecto han sido en torno a 80, incluyendo tanto productores y productoras, como consumidores/consumidoras y técnicos/técnicas. Este número ha ido variando en el tiempo, en función de la disponibilidad de las personas y de cuestiones familiares y profesionales, entre otras. En el cuadro siguiente presentamos una caracterización de las personas implicadas.

Cuadro 16.- Caracterización de las personas implicadas en el proyecto

Aspecto		**Total andaluz**	**Serranía de Ronda**	**Sierra de Segura**	**Castril y Castilléjar**
Perfil	**Productores/as**	80%	80%	96%	64%
	Consumidores/as	20%	20%	4%	36%
Superficies medias	**Agricultura**	3.7 ha.	3.9 ha.	3.5 ha.	---
	Ganadería y forestería	46.3 ha.	56.5 ha.	36.1 ha.	---
Tipo de producciones	**Hortícola**	24%	17%	41%	0%
	Olivar	5%		5%	11%
	Ganadera	7%	25%	5%	0%
	Diversificada	64%	58%	48%	89%
Inscritos como ecológicos/as	**Sí, en toda su producción**	61%	75%	65%	42%
	No, en algún tipo de producción	39%	25%	35%	58%

Fuente: Datos facilitados por los/la dinamizadores/dinamizadora de cada territorio

Las personas implicadas en el proceso han sido principalmente productoras, si bien la presencia del consumo es interesante especialmente en Castril y Castilléjar y muy pequeña en Segura. Esta orientación diversa entre los tres territorios responde, básicamente, al perfil de la persona dinamizadora. Mientras en Segura se trata de un técnico extensionista, con mucho reconocimiento y contacto entre las personas productoras de la zona, lo que le llevó a centrarse en ellos; en Castril y Castilléjar el dinamizador era una persona con experiencia previa en procesos de comercialización local y Sistemas Participativos de Garantía, lo que le llevó a incidir en la parte del consumo, como elemento imprescindible en las relaciones de producción – consumo y de confianza a nivel local.

[117] Desde el año 1986 en el que entramos en la entonces CEE, y a través de la Política Agraria Común, la relación entre la administración pública y la producción agraria se ha vehiculado, básicamente, a través de subvenciones económicas. Este ha sido el instrumento estrella de la política pública para orientar las producciones y apoyar al medio rural

Las superficies medias de los/las productores/productoras implicados/implicadas es de 46.3 ha en las actividades ganaderas y forestales y de 3.7 ha. en las actividades agrícolas. Si las comparamos con las superficies medias certificadas por operador/a, a nivel estatal y regional, observamos que la media ganadera y forestal se acerca a la media estatal (46 ha/operador-a), si bien son muy inferiores a la media andaluza, situada en las 80 ha/operador-a. También son inferiores a las medias de sus respectivas provincias, especialmente en Jaén. Comparativamente, las superficies medias de los agricultores/as ecológicos implicados en el proyecto, 3,7 ha., están a una gran distancia por debajo de las medias estatal, la andaluza y la de sus respectivas provincias.

Encontramos, pues, un perfil de productores/as implicados en el proyecto con pequeñas superficies, muy alejadas de las medias barajadas a nivel de estadísticas y de cifras oficiales. Estas pequeñas superficies se destinan en primer lugar a una actividad diversificada y en segundo lugar a la producción de hortícolas.

No disponemos de datos sobre operadores/as con manejos diversificados de sus fincas, a nivel oficial. Las estadísticas que se manejan desde la administración se basan en los registros de las entidades de certificación, que se organizan por superficies y tipos de productos, y no por operadores. No obstante, el sistema de certificación oficial penaliza los manejos diversificados. Esto se debe al mecanismo de costes establecido: se paga por cada tipo de producción que se lleva a cabo, de forma independiente. De este modo y como ejemplo, resulta más caro certificar una combinación de ganadería y hortalizas, que un monocultivo de tomate, para una misma superficie de finca.

Esta realidad puede ser uno de los elementos que justifiquen la predominancia de las fincas diversificadas en el proyecto. En efecto, este tipo de enfoques productivos estarán más motivados a buscar alternativas al sistema de certificación oficial. Por lo tanto, un sistema de garantía que facilite la diversificación productiva dará cabida a estos productores y productoras y contribuirá a la biodiversidad, al equilibrio ecosistémico o al cierre de ciclos de materias y energía, entre otros. Y, por consiguiente, el sistema de certificación oficial está desincentivando todos estos procesos.

Con respecto a las hortícolas, son el tipo de producción más importante entre las personas implicadas en el proyecto. Representan una media del 25% de las mismas. Esto contrasta con la importancia de las hortícolas en los datos oficiales sobre cultivos certificados en ecológico, en los que las hortícolas apenas son relevantes. Los menores tamaños de este tipo de producción y el sistema de costes fijos establecido en la certificación oficial pueden explicar, en parte, esta realidad.

En resumen, son las personas productoras dedicadas a una producción diversificada o a una producción hortícola las que enfrentan unos mayores problemas con el sistema de certificación oficial. De hecho, son los perfiles mayoritarios en este proceso de búsqueda de alternativas.

De esta forma, podemos concluir que la construcción del SPG andaluz ha venido de la mano de personas productoras con perfiles relativamente homogéneos: personas de zonas consideradas desfavorecidas, de montaña, con superficies medias muy por debajo de las medias oficiales de la producción ecológica y con aprovechamientos

diversificados y hortícolas, fundamentalmente. Estos perfiles son los que se ven especialmente agraviados por el sistema de certificación oficial. Es un sistema que penaliza por sus estructuras de costes y de burocracia a las pequeñas producciones y a los aprovechamientos diversificados.

Por último, cabe destacar que cerca del 40% de las personas productoras implicadas tenían su producción, o parte de ella, sin certificar. De esta forma, son realidades que quedan al margen de los canales oficiales de reconocimiento a nivel de: cifras y estadísticas, comercialización y apoyos públicos.

Con este dato podemos concluir que una parte del medio rural de zonas de montaña, caracterizadas por fincas de pequeño tamaño, con una producción diversificada y/u hortícola fundamentalmente, a pesar de llevar un manejo ecológico, no se ven reconocidas por no entrar en los circuitos de certificación oficiales.

5.2. El proceso seguido en la construcción de un SPG andaluz

El proceso seguido para encontrar una solución al problema de la certificación oficial duró cerca de tres años. Las decisiones básicas que se tomaron desde las instituciones implicadas (DGAE e ISEC) fueron tres: el problema se resolvería de forma participativa con los grupos que habían expresado el malestar; este proceso participativo debería facilitar una reflexión colectiva en profundidad en torno a la cuestión de la garantía y la certificación; y este proceso se centraría en la construcción colectiva de un sistema alternativo al mecanismo oficial de tercera parte.

Como antecedentes a la puesta en marcha del proyecto podemos destacar dos trabajos, uno realizado desde el ISEC y otro auspiciado por la DGAE.

El primer trabajo que realiza aportaciones al proyecto se basó en una estancia de investigación que habíamos realizado entre enero y febrero de 2005, en Brasil. En esta pesquisa realizamos una inmersión en diversos grupos de la Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa, ubicados en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná[118]. Los detalles de las entrevistas realizadas en este periodo de tiempo se pueden consultar en el anexo II.

La estancia sirvió de base para elaborar el proyecto de investigación de la Suficiencia Investigadora de la doctoranda, evaluado en junio de 2005. Este trabajo previo de investigación contribuyó a elaborar un análisis conceptual de lo sistemas de garantía en general y de los SPG, en particular. Parte de esta exploración sirvió de referente para el proyecto impulsado, a nivel conceptual. Asimismo, el trabajo realizado permitió profundizar en el estudio de un ejemplo práctico de SPG, liderado por la Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa. Este estudio nos brindaría la oportunidad de valorar los elementos clave a tener en cuenta en la definición de un SPG en cualquier

[118] La estancia fue en parte financiada por el Ayuntamiento de Córdoba, a la doctoranda, en calidad de Experta del Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad, para participar en el V Foro Social Mundial, en Porto Alegre, donde se participó en los ámbitos temáticos de la Economía Solidaria, y desde donde se hicieron los contactos para desarrollar la estancia de investigación mencionada.

territorio. El estudio en profundidad de la experiencia brasileña nos permitió establecer estos elementos, en base a su importancia en cuanto a la definición del sistema y a su funcionamiento.

De este modo, pudimos hacer una propuesta de los elementos que consideramos básicos para la construcción andaluza. Estos elementos se centran en varios aspectos generales que configuran un SPG: la estructura y la organización que adopta el colectivo de personas implicadas; el perfil de actores que participan en la iniciativa, en función de su rol o su interés en relación a la garantía, así como las interacciones que se organizan entre ellos; los mecanismos a través de los cuales se operativiza la confiabilidad y la credibilidad del sistema de garantía; las normas de producción en las que se basan los mecanismos de verificación, es decir, el tipo de manejo que se quiere garantizar con el sistema y, por último; el modo de trasmitir el sistema establecido y sus resultados, es decir, los elementos que identificarán el sistema fuera del contexto donde se desarrolla. Cada uno de estos aspectos está compuesto por diversos elementos concretos. En el cuadro siguiente los describimos.

Cuadro 17.- Aspectos a considerar en la construcción de un proceso de Garantía Alternativa en Andalucía

A. Sobre la configuración del colectivo de personas implicadas
- Cómo se organizan los productores/as: tamaño de los grupos y alcance geográfico - Niveles de estructuración: responsabilidades y funciones de cada nivel - Cómo se trabajan los temas de gestión y organización de cada grupo, y de cada nivel organizativo - Cómo se coordinan todos los grupos - Procedimiento para entrar en la iniciativa - Quién y cómo circula la información y garantiza la transparencia - Cómo se organiza la contabilidad. Cómo se afrontan los gastos de funcionamiento
B. Sobre los actores implicados:
- Qué actores se van a implicar en el proceso: productores/as, industrias de transformación, consumidores/as, técnicos/as, administraciones locales, provinciales, regional, Universidades, ONG, asociaciones, otros. - Cómo se resuelven los conflictos entre actores
C. Sobre el proceso de verificación de las normas:
- Etapas para obtener el identificativo - Cómo se realizan las verificaciones: · Autodeclaraciones · A través de visitas: periodicidad, quiénes participan, cómo se organizan · A través de análisis de muestras: a quién, periodicidad - Qué tipo de registros se deben llevar - Quién participa en las verificaciones - Cómo se decide la salida de un productor/a de la iniciativa – con qué criterios. Qué penalización se establece en caso de incumplimiento de las normas
D. Sobre el cuaderno de normas sobre el que trabajar:
- Si se establecen estándares, normas y principios de producción propias o se asumen las de la legislación. Si son las mismas para todos los grupos o puede haber diversidad en función de la ubicación del grupo. Cómo se decide esto - Cómo se establecen los estándares si son propios - Si se incluyen criterios de producción sólo ecológicos o también sociales

E. Sobre la identificación
- Qué se obtiene con el proceso: una certificación de producción ecológica legal, una marca o distintivo, otros - Cómo se traduce físicamente el proceso: un sello, un logo, una marca, otros - Si se busca un reconocimiento legal o no

El segundo trabajo que realiza aportaciones al proyecto se basó en una investigación que llevamos a cabo sobre la realidad de la certificación en la Unión Europea y en Andalucía. En este trabajo se profundizó en la legislación pública que regula el sector de la producción ecológica. Esto sirvió de base para plantear: las opciones que deja la regulación para sistemas de garantía de tipo participativo; los mecanismos a través de los cuales estos sistemas podrían operar en nuestros contextos.

La investigación se centró, además, en otros dos aspectos. En primer lugar, indagamos en torno a las críticas y deficiencias que desde el sector se habían vertido sobre la certificación por tercera parte. En base a esto, construimos argumentos justificados para la puesta en marcha del proyecto y constatamos que las demandas de los grupos productores andaluces no eran aisladas.

El segundo aspecto trabajado en esta investigación fue rescatar, del trabajo previo realizado por el ISEC, la descripción de los SPG como alternativas viables a la certificación oficial. De este modo, se incorporó el funcionamiento de la Red Ecovida como ejemplo de SPG consolidado, así como el proceso de conformación de la Asociación de Certificación Socioparticipativa de Acre y Amazonía. Esta última se tomó como referencia de experiencia joven[119].

Los antecedentes descritos ayudaron a construir el proyecto, en base a tres criterios básicos:

a. El objetivo del proceso se centraría en dar alternativas sustentables a la problemática de la certificación, a través de soluciones que empoderasen a las personas implicadas y les diese capacidad de acción
b. La problemática a solventar sería la de la certificación, en todas sus facetas y no sólo en la de costes elevados para determinadas producciones (esto hubiera tenido una solución directa: subvencionar este servicio). Para ello, había que impulsar un proceso de reflexión en profundidad sobre esta cuestión, que fuese acompañado de una búsqueda de soluciones. Por esto, la opción que se plantea es la de una construcción participativa de un sistema alternativo, a través de un proceso inspirado en la IAP
c. La cuestión del reconocimiento legal de este nuevo sistema alternativo era fundamental. Se perseguía un sistema que fuese reconocido oficialmente. Se asumía que esta cuestión estaba en manos de la voluntad política de la institución impulsora, y de las opciones que el reglamento europeo permitiese.

[119] Una alumna (Irene García Roces), de la Maestría "Agroecología: un enfoque sustentable de la Agricultura Ecológica" del curso 2007 – 2008, ha planteado su tesis de Maestría sobre esta experiencia.

Para alcanzar los objetivos acordados y cumplir con las premisas establecidas, se estableció un proceso participativo dividido en cinco etapas. Lo hemos estructurado en base a este esquema para adaptarlo a la secuencia descrita en el capítulo de la metodología, así como para facilitar su lectura.

5.2.1. Descripción de las etapas seguidas

La descripción de estas etapas nos permitirá explicar de forma más adecuada los resultados obtenidos. También nos facilitará profundizar en la discusión sobre la adaptabilidad de este tipo de procesos a nuestros contextos. Pretendemos, de esta forma, aportar una posible vía para promover Sistemas de Garantía alternativos, analizando los aciertos y las debilidades detectadas.

Cuadro 18. Esquema de la Investigación Acción Participativa (IAP) seguida

Etapa	Objetivos	Acciones
Previa	Conocer el contexto territorial de cada zona. Establecer un primer acercamiento a la problemática	1. Constitución de la Comisión de Seguimiento 2. Inicio del trabajo de campo en el contexto andaluz: contratación de los dinamizadores, primeros contactos con el territorio, detección de las personas interesadas en participar en el proceso, asociaciones y personas clave en cada territorio y profundización en los analizadores construidos de cada zona
Primera	Consensuar el diagnóstico y establecer los primeros esbozos de propuestas	Se trata de establecer un proceso de apertura a todos los conocimientos y puntos de vista existentes, utilizando métodos cualitativos y participativos. 1. Trabajo de campo: reuniones con los participantes para ir analizando la realidad y las alternativas. Realización de talleres de creatividad social (Villasante, 2002) 2. Realización del primer encuentro andaluz entre los tres territorios.
Segunda	Construir las propuestas definitivas para el SPG andaluz	Se trata de facilitar la negociación y la elaboración de propuestas concretas 1. Concreción del sistema alternativo de garantía 2. Construcción del Programa de Acción Integral (PAI) 3. Realización del segundo encuentro andaluz
Tercera	Poner en práctica del modelo construido	1. Puesta en marcha del modelo creado 2. Evaluación de la puesta en marcha del modelo creado 3. Tercer encuentro andaluz para discutir resultados y conclusiones. 4. Concreción de nuevas necesidades
Cuarta	Evaluar el modelo y el proceso seguido. Detectar nuevos síntomas	1. Cuarto encuentro andaluz para evaluar el trabajo desarrollado y la situación de los grupos 2. Reflexión en torno al futuro del SPG andaluz – mecanismos de regulación y posibilidades de reconocimiento oficial 3. Pasos a seguir para la difusión del proceso y la inclusión de nuevos grupos interesados en trabajar el SPG en Andalucía

Etapa previa

La etapa previa del proceso se centró en conocer los contextos desde donde había surgido la demanda de una solución al problema de la certificación oficial. De esta forma se planteó como un primer acercamiento a la realidad y la problemática a abordar.

Dos de las primeras cuestiones abordadas en esta etapa se centraron en aspectos de tipo organizativo: por un lado la definición de las personas que conformarían la *Comisión de Seguimiento*, que fue planteado desde la institución impulsora (la DGAE); y por otro lado, la selección y contratación de las personas técnicas que se encargarían de dinamizar los territorios y de coordinar a nivel político - técnico el proyecto.

La comisión de seguimiento variaba su composición en función del objetivo de la reunión. En el caso de reuniones de carácter informativo, estaba compuesta por el Director General de Agricultura Ecológica, la Jefa de Servicio de Industrias y Control y la coordinadora técnico – política. En estas reuniones se hacía un repaso del estado del proyecto, a través del traspaso de información: sobre los avances del proyecto en los territorios y las dificultades encontradas; y sobre las demandas de la institución y el estado de la cuestión en torno a la posible regulación del sistema. Cuando las reuniones tenían un carácter más estratégico, a nivel de toma de decisiones sobre la continuación del proyecto o la regulación del sistema, a esta Comisión se incorporaban la coordinadora técnico – metodológica (ISEC) y las personas dinamizadoras en los territorios.

El segundo elemento que quedó resuelto en esta etapa previa fue la contratación de las personas dinamizadoras del proceso, en cada territorio. El perfil buscado respondía a personas que formasen parte de los territorios donde iban a trabajar, o que fuesen conocidas en el ámbito de la producción ecológica en cada zona. De este modo, se partiría de un conocimiento previo de la zona que permitiría acortar la fase de toma de contacto. También se valoraban los conocimientos y la experiencia en la dinamización de procesos participativos, de manera que hubiese garantía de que se sabría manejar la metodología propuesta. Por último, se valoró positivamente cierta formación técnica relacionada con la producción ecológica, lo que facilitaría la comunicación y la relación con las personas productoras del territorio.

Finalmente, las personas contratadas como dinamizadoras del proceso respondieron a los siguientes perfiles.

Cuadro 19.- Perfil de las personas contratadas para dinamizar el proceso

Perfil	Ronda	Segura[120]	Castril – Castilléjar
Formación	Socióloga	Ing. Técnico Agrícola	Ing. Agrónomo
Relación con el territorio	Vecina de la zona. Experiencia de trabajo en un proyecto de recuperación de variedades autóctonas	Vecino de la zona. Técnico extensionista en agricultura ecológica de uno de los ayuntamientos	Introducido en el entorno por un investigador del ISEC, que llevaba trabajando en la zona 3 años
Conocimiento / experiencia en procesos participativos	Conocimiento de metodologías participativas	Capacidad de liderazgo, pero ningún conocimiento de metodologías participativas	Amplio conocimiento y experiencia en procesos participativos relacionados con mercados locales y SPG, en su país de origen

Las diferencias que se detectan con relación al perfil requerido en un principio son distintas según los territorios. En Ronda, quedaba sin cubrir la parte de los conocimientos técnicos sobre producción ecológica; en Segura, había cierta deficiencia en cuanto al manejo de metodologías y técnicas participativas; y en Castril y Castilléjar, la persona seleccionada no era del territorio. Este equipo lo complementaron dos figuras de coordinación, una en el ámbito político – institucional y otra en el ámbito metodológico y de planificación del proceso (ISEC).

La primera aproximación a los territorios se hizo a través de las personas dinamizadoras y las redes sociales e instituciones que, en torno a la producción ecológica, existían (Centros de Desarrollo Rural - CEDER, Oficinas Comarcales Agrarias - OCA, Ayuntamientos, cooperativas de consumidores y productores, Sociedades Agrarias de Transformación - SAT, Cooperativas agrarias, entre otras). Estos primeros contactos se concretaron en una reunión informativa, en la que se presentaron los objetivos perseguidos con este proyecto conectándolos con las demandas recibidas.

Los primeros contactos y reuniones, llevados a cabo por los dinamizadores, facilitaron el conocimiento del territorio así como la detección de algunos *analizadores históricos.* Adoptamos este concepto de Balcázar (2003), quien lo define como aquellos acontecimientos que se tienen presentes o se han vivido en la comunidad y que estructuran los discursos desde las diferentes posiciones sociales. En este sentido, algunos ejemplos de analizadores históricos podrían ser asociaciones en torno a la Agricultura Ecológica que habían fracasado, o cuyo desmembramiento se había vivido como un fracaso, conflictos de intereses entre grupos relacionados con la producción ecológica, enfrentamientos locales por cuestiones políticas de partidismos, entre otros.

[120] El proceso en Segura fue complejo, en el sentido de que la primera persona que se seleccionó, por motivos personales, no llegó a los objetivos establecidos para la primera etapa, por lo que fue sustituido por otra persona. El perfil que se detalla responde al de la segunda persona que, desde el 5º mes de proyecto hasta el final, ha sido el que ha dinamizado este territorio

De esta forma se pudo realizar una primera aproximación a los territorios. Esta realidad se definía en base a las instituciones clave y a los analizadores históricos que influían en la configuración del territorio. De la información recogida, destacamos los siguientes elementos[121]:

a. *Serranía de Ronda*: la demanda surge del CEDER, que gestionaba un grupo de manejo compartido de la zona con el CertiCAAE[122]. Al ponerse en marcha el proyecto, y por conflictos personales subyacentes, la persona del CEDER vinculada al sector ecológico empieza a hacer una campaña de desacreditación con respecto al proyecto en el entorno productivo. Asimismo, había en la zona una cooperativa de producción y consumo que estaba generando conflictos entre el CEDER y algunos productores. Por otro lado, se estaba poniendo en marcha una SAT para la comercialización, que tampoco terminaba de funcionar por conflictos internos. Existía cierta sensación de que muchos proyectos habían empezado y casi ninguno había finalizado. Había la impresión de un cierto abandono y de poca consistencia por parte de las administraciones públicas y los proyectos que impulsaban. En general, se percibía poca confianza con respecto a la administración pública en general.

b. *Sierra de Segura*: la demanda surge de un técnico local de agricultura del Ayuntamiento de Siles, que por su labor extensionista es conocido y ampliamente reconocido en la comarca. Le acompañaba, en esta iniciativa, el Agente Local de Promoción de Empleo de esta administración local. La situación por la que plantearon la problemática la identificaban en base a un número interesante de productores y productoras que, llevando a cabo un tipo de manejo ecológico, no se registraban. Las causas fundamentales que esgrimían eran los elevados costes relativos y el nivel de burocracia del servicio de certificación. En la zona existía alguna iniciativa de asociacionismo y de grupos de consumo en torno a la producción ecológica, que no habían terminado de prosperar. Asimismo, había un conflicto importante con la cuestión del Parque Natural, entre los grupos ecologistas y los agricultores, que hacía que las producciones ecológicas estuviesen mal vistas a nivel social.
c. *Castril y Castilléjar*: es el único territorio que entra en el proyecto por una voluntad política, y no por una demanda explícita. En esta zona se venía trabajando, desde el ISEC, para revalorizar el conocimiento de las personas productoras en el manejo de los recursos naturales[123]. Desde la DGAE se consideró que trabajar en esta zona podría generar sinergias considerables. Si bien en un principio se habló sólo de Castril, al principio del proceso se sumó un productor de Castilléjar, por lo que la zona de trabajo se amplió a dos municipios. No existían iniciativas de asociacionismo en la producción

[121] Esta información la hemos elaborado en base al proceso de observación participante llevado a cabo por la investigadora (conversaciones informales con los dinamizadores, productores y agentes locales entre otros). No se ha pretendido en ningún momento contrastar estas informaciones con las partes criticadas, ya que el objeto de este conocimiento ha sido acercarnos al punto de partida de las percepciones de las personas implicadas en el proceso y no al análisis en profundidad de los conflictos.

[122] Los grupos de manejo compartido son una forma de certificación grupal establecida por la empresa certificadora CertiCAAE, en Andalucía.

[123] Se pueden consultar diversas tesis de doctorado y de Maestría del ISEC en este contexto geográfico, entre el año 2000 y el 2007.

ecológica. Sin embargo, el manejo ecológico era muy importante en el municipio de Castril, ya que representaba el 20% de la SAU.

Primera etapa: Diagnóstico y primeros esbozos de propuestas

En la primera etapa del proceso participativo, el trabajo se centró en identificar los elementos que deberían considerarse en la construcción del sistema alternativo de garantía. Para ello, se profundizó en el diagnóstico de la problemática de la certificación oficial y se trabajaron los primeros esbozos de lo que podría ser el SPG a construir.

Se llevó a cabo en 4 meses aproximadamente, a lo largo de los cuales se mantuvieron 5 reuniones de coordinación[124]. En estas reuniones se trabajaban aspectos relacionados con el avance del proyecto en cada territorio. Asimismo, se fomentaba el conocimiento mutuo entre las personas técnicas implicadas y se discutían conjuntamente los objetivos y la metodología propuestos.

En cada reunión se presentaba el estado de avance de cada territorio, atendiendo a distintos aspectos: la conformación del grupo implicado; los objetivos, el calendario y la planificación de las acciones a llevar a cabo entre reuniones; el proceso formativo en torno a la certificación por tercera parte y sus mecanismos de control y garantía. En este momento se empezó también a trabajar en la Sierra de Segura el proyecto de puesta en práctica de un sistema de Control Interno, impulsado por IFOAM Europa[125].

Al final de esta etapa se desarrolló el primer encuentro interterritorial[126], realizado en la sede del Centro de Investigación y Formación en Agricultura Ecológica y Desarrollo - CIFAED, en Santa Fe, Granada. Su principal objetivo fue establecer un cierre para la etapa primera. Para ello se trabajó sobre el consenso del diagnóstico desarrollado en cada territorio, así como los primeros elementos definitorios del SPG. Estos elementos habían sido esbozados de forma incipiente en cada territorio. Se habían centrado en: la estructura interna del sistema, el régimen de control, la entrada de nuevos participantes, los mecanismos de resolución de conflictos y la idea de una posible estructura regional de coordinación.

El trabajo de cada sesión de trabajo se estructuró por grupos, a través de aportaciones de ideas por tarjetas. Fue fundamental la puesta en común de lo trabajado en cada grupo, al final de la sesión, así como la discusión y el proceso de consenso final. A este encuentro asistió el entonces Director General de Agricultura Ecológica, para reiterar el compromiso de ese equipo de gobierno con el proyecto y su futura regulación.

[124] Las actas de las reuniones de coordinación mantenidas a lo largo del proceso se pueden consultar en el anexo III

[125] Este proyecto se describe en el capítulo de contextualización

[126] Los programas detallados de los encuentros, así como los resultados obtenidos, se pueden consultar en el Anexo IV

Segunda etapa: conclusiones y propuestas definitivas

La segunda etapa del proceso participativo se centró en concretar lo que sería la propuesta de SPG para Andalucía. Asimismo, se trató de realizar los primeros ensayos de las visitas cruzadas, poniendo en práctica los documentos y el manual de visita elaborados por los grupos.

A esta segunda etapa se dedicaron otros 4 meses, y se tuvieron 3 reuniones de coordinación[127]. En cada reunión el trabajo se centraba en evaluar el avance del proyecto en cada territorio y planificar el trabajo a desarrollar y los objetivos a alcanzar en el siguiente periodo de tiempo. Asimismo, se iban presentando los avances en el estudio de las opciones de regulación que se planteaban para el SPG en construcción.

En esta etapa se trabajó sobre el procedimiento de entrada para nuevos grupos que quisieran entrar en el proceso. Esto vino en respuesta al interés y algunas demandas que se estaban recibiendo de otros territorios andaluces. También centramos la atención en la organización de actividades complementarias, que estaban surgiendo desde los grupos implicados. Algunas de estas actividades fueron cursos de formación en torno a manejo, plagas, comercialización y reglamento, o la posibilidad de participar en las Bioferias[128] con un puesto de venta compartido entre los tres territorios.

El cierre de esta etapa culminó en el segundo encuentro interterritorial, realizado en Torres de Albanchez, en la Sierra de Segura. El punto central de este segundo encuentro se basó en el consenso del modelo definitivo, a partir de los modelos ya perfilados en cada uno de los tres territorios.

Para facilitar el consenso, se preparó un material previo. A partir de los modelos elaborados en los tres territorios, se elaboraron diferentes tablas donde se exponían los puntos convergentes y los puntos divergentes entre ellos[129]. De este modo, se facilitó el trabajo en grupos durante el encuentro, centrándolo sobre los puntos divergentes detectados. Para facilitar las discusiones, estos puntos se clasificaron en función del ámbito del SPG al que pertenecían. De este modo, se agruparon en torno a los siguientes epígrafes:

a. Reglamento general
b. Funcionamiento del SPG
c. Estructuras y funciones
d. Costes
e. Sanciones
f. Normas adicionales contempladas, más allá del Reglamento 2092/91

[127] Las actas de las reuniones de coordinación mantenidas se pueden consultar en el anexo IV
[128] Proyecto impulsado por la DGAE, a través del cual se organizaron mercados de productos ecológicos de carácter divulgativo y comercial, en las 10 principales ciudades andaluzas. En estas ferias se dio preferencia a organizaciones de productores y productoras andaluzas.
[129] Este documento se puede consultar en el anexo IV

Con el fin de agilizar las sesiones y facilitar el consenso, se conformaron tres grupos de trabajo entre los que se distribuyeron los contenidos a trabajar. A las personas participantes se les dio libertad para inscribirse en el grupo cuyas temáticas más les apeteciera trabajar. Una vez alcanzados los consensos por grupos, se planteó una sesión conjunta donde se hicieron las puestas en común y se debatieron aquellos puntos más problemáticos.

En este encuentro se trabajaron, asimismo, los documentos de funcionamiento que se habían elaborado desde los territorios: a) el manual de las visita de campo; b) los registros a llevar a cabo en el funcionamiento del sistema de garantía; c) el documento para la solicitud de entrada de nuevas personas socias.

Por último, se plantearon los resultados del estudio en torno a las opciones de regulación de este posible SPG a nivel legal[130].

Tercera etapa: puesta en práctica del modelo construido

La tercera etapa del proceso participativo se centró en la puesta en práctica del modelo consensuado. Esto permitió ir consolidando la organización interna de los grupos, detectar puntos débiles, proponer mejoras y empezar a trabajar los elementos que podrían ir construyendo la coordinación entre los tres grupos: la posible Red andaluza del SPG.

Esta etapa duró unos 5 meses y estuvo acompañada por 5 reuniones de coordinación[131]. Los contenidos de las mismas se centraron, fundamentalmente, en aspectos relacionados con el estado del proyecto en cada territorio y la planificación de los siguientes pasos a dar en cada uno de ellos; la evaluación de la madurez de los grupos en los territorios para funcionar de forma creíble y rigurosa; las opciones de regulación del modelo y las estrategias a seguir en cada una de ellas; y las actividades adicionales demandadas por los territorios tales como los cursos de formación o la entrada en canales de comercialización locales promovidos por la administración (biopuntos[132] y Bioferias fundamentalmente).

La fase culminó en el tercer encuentro interterritorial[133], realizado en el albergue L'Aljara, en Córdoba, a finales de septiembre de 2007. Este tercer encuentro se planteó en torno a tres aspectos:

1. En primer lugar, nos centramos en el intercambio de la experiencia de poner en práctica el modelo consensuado: las dificultades con las que se estaban encontrando, las adaptaciones que se habían aplicado para solventarlas, el grado de implicación de los/as participantes en el proyecto, entre otros aspectos.

[130] Un análisis en profundidad de las opciones de regulación de los SPG en la Unión Europea se presenta en el capítulo XXX

[131] Las actas de las reuniones de coordinación mantenidas se pueden consultar en el anexo IV

[132] Iniciativa promovida por la DGAE para establecer puestos de productos ecológicos en los mercados semanales de algunos municipios

[133] El programa y documentos trabajados en este encuentro se pueden consultar en el anexo IV

2. Por otro lado, se había percibido de forma generalizada la necesidad de una capacitación en torno al procedimiento de las visitas de campo y al manejo del manual de visita. En efecto, en la puesta en práctica del modelo se habían sentido ciertas deficiencias en la realización de las visitas de campo de verificación. Para dar respuesta a esta demanda, en el marco del encuentro se organizó una visita de control, en la finca de la cooperativa agroecológica La Acequia (Córdoba). En esta actividad, se practicó de forma colectiva el manual de visita elaborado, se intercambiaron impresiones, modos de intervenir, así como sugerencias de trabajo y de verificación.
3. Por último, se trabajó sobre la idea de consolidar una red entre los grupos que facilitase la cooperación interterritorial. Para ello, se estudió colectivamente la posibilidad de participar, de forma conjunta, en las Bioferias. La propia DGAE había ofrecido tal posibilidad a los grupos: contar con un puesto de venta, de gestión compartida, donde se visibilizara que se trataba de los grupos implicados en el SPG andaluz.

El cierre de este encuentro estuvo a cargo del entonces director General de Agricultura Ecológica, quien planteó la situación política en la Junta de Andalucía y las opciones de reconocimiento legal que se presentaban para este proceso.

Cuarta etapa: evaluación y detección de nuevos síntomas

La cuarta etapa estuvo marcada por el fin de la legislatura en la Junta de Andalucía y la salida del gobierno de la figura política que había estado apoyando el proyecto. Esta salida se produjo sin haber dejado resuelta la cuestión de la regulación. El panorama que se abría, en este momento, era el de un modelo de SPG construido que no había sido reconocido a nivel legal y un nuevo equipo de gobierno que planteaba incertidumbres sobre esta propuesta. Uno de los efectos de esta incertidumbre fue el cese de los contratos de las personas dinamizadoras y la coordinación político – técnica.

La etapa se centró fundamentalmente en el trabajo de los grupos consolidados en cada territorio, en torno a su propia organización interna. Asimismo, se impulsó un proceso de reflexión en torno al futuro de todo el trabajo realizado, la voluntad de los grupos de defender este proceso y su capacidad de incidencia política para implicar a la nueva administración en este reto.

A lo largo de esta etapa, dado el cese de los contratos de las personas dinamizadoras y de la coordinadora técnico – política, no se llevaron a cabo reuniones de coordinación. No obstante, hubo un contacto permanente entre el equipo técnico y se llevó a cabo un seguimiento de los grupos desde el ISEC, a través de la segunda ronda de entrevistas semiestructuradas.

La etapa culminó con el cuarto encuentro interterritorial[134], organizado en la sede de la Fundación Gondwana, en Santa Fe, Granada. Los objetivos de este encuentro fueron tres:

[134] El programa del encuentro así como sus resultados se pueden consultar en el Anexo IV

1. Evaluar conjuntamente el desarrollo global del proceso y los cambios detectados en los territorios a raíz del mismo.
2. Evaluar el proceso metodológico seguido, a nivel de ritmos, objetivos alcanzados y técnicas de dinamización trabajadas.
3. Decidir colectivamente sobre los siguientes pasos a seguir, dada la situación política del momento y el estado de incertidumbre del SPG andaluz construido.

Para la sesión de la tarde se invitó a aquellos grupos productores que, en algún momento del desarrollo del proyecto, habían mostrado interés por el tema. Con esta invitación se perseguía un doble objetivo: explicarles el estado de avance del SPG andaluz; y plantear posibles ampliaciones a nuevos grupos, para conseguir una mayor capacidad de incidencia política. De los grupos asistentes, uno de la Alpujarra granadina, facilitado desde la Cooperativa Las Torcas, empezó en agosto de este mismo año a poner en práctica el SPG de forma experimental.

5.3. El modelo de Sistema Participativo de Garantía construido en Andalucía

La descripción del modelo de SPG construido en Andalucía se presenta en torno a tres ejes, establecidos a partir del cuadro 15 planteado al inicio del proceso: a) la configuración del colectivo de personas implicadas, donde presentamos las estructuras y funciones, los procedimientos de entrada para nuevas personas socias y los costes que conlleva el procedimiento; b) el proceso de verificación de las normas de producción establecidas, donde describimos los elementos de confiabilidad del sistema, el procedimiento de control y la cuestión de las infracciones y las sanciones; c) las normas de producción y los requisitos que se garantizan a través de este sistema. El Reglamento de funcionamiento elaborado se puede consultar en el Anexo IV.

5.3.1. Sobre la configuración de la iniciativa

El SPG construido a lo largo del proceso se organiza en base a cuatro estructuras: la asamblea general, la comisión de admisión, la comisión de calidad y el grupo de visita.

Los grupos que se implican en el SPG se establecen en base a figuras jurídicas de carácter horizontal, fundamentalmente asociaciones. Esto significa que el máximo órgano de toma de decisiones y de resolución de conflictos del grupo es la *asamblea*, que se reúne anualmente. Asimismo, cuenta con la figura de la Junta Directiva, que es la responsable de guardar todos los registros que se van generando y de gestionar las cuotas de los socios y socias y los gastos del grupo.

En lo que respecta al funcionamiento cotidiano del sistema de garantía, se establecen las otras tres estructuras operativas. Las personas que las componen son elegidas anualmente por la asamblea. Su composición y funciones se presentan en el cuadro siguiente.

Cuadro 20.- Estructuras operativas del Sistema Participativo de Garantía andaluz

Estructura	Composición	Funciones
Comisión de Admisión	Dos personas del grupo	- Operativizar la entrada de nuevas personas al grupo, a través de los mecanismos establecidos
Comisión de Calidad	Tres personas del grupo	- Organizar los procedimientos de control y verificación - Evaluar los informes emitidos en los procedimientos de control - Autorizar o denegar el uso del distintivo a las personas miembro del grupo, en base a los informes - Gestionar las denuncias sobre posibles incumplimientos de alguna norma establecida
Grupo de visita	Dos personas del grupo, más una tercera externa a él	- Realizar las visitas de control anuales a todos los miembros productores del grupo - Determinar las analíticas por sospecha, en caso de detectar alguna irregularidad durante las visitas de control

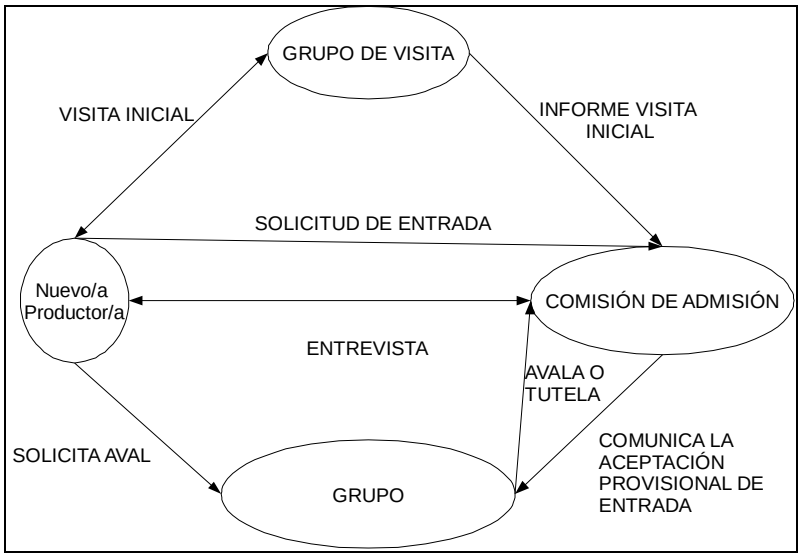
De esta forma la garantía viene organizada a través de tres estructuras, compuestas por personas diferentes pertenecientes al grupo. En el caso del *grupo de visita*, se incorpora una persona externa al mismo. Esta persona o personas externas que acompañarán las visitas de control son propuestas anualmente por la asamblea.

La composición de cada una de estas estructuras es anual. En el caso de los grupos de visita, se incluye la posibilidad de establecerlo semestralmente, si la asamblea lo considera oportuno. Esta decisión trata de evitar, en algunos grupos y previendo un crecimiento de los mismos, una saturación de trabajo de las dos personas responsables de las visitas.

En el caso de Castril y Castilléjar, el grupo que ha conformado la iniciativa es pequeño en cuanto a número de personas. Esto les llevó a unificar la Comisión de Calidad y la de Admisión, en una única estructura denominada *Tribunal*, compuesta por tres personas del grupo. El Tribunal asume las funciones atribuidas tanto a la Comisión de Calidad como a la Comisión de Admisión.

La Comisión de Admisión es la encargada de operativizar, como hemos descrito, la entrada de nuevas personas a la iniciativa. Este proceso se ha establecido en base a dos etapas: la etapa de solicitud y aceptación provisional y el periodo de prueba y aceptación definitiva. En el esquema siguiente tratamos de representar gráficamente la primera etapa.

Figura 5.- Procedimiento de entrada de nuevas personas a un grupo del SPG andaluz



La persona productora que solicita la entrada debe contar con el apoyo explícito de alguna persona miembro del grupo. Con este apoyo explícito, debe hacer llegar la solicitud de entrada a la Comisión de Admisión. Tras esto, y en el plazo máximo de un mes, la Comisión deberá organizar las siguientes fases de esta etapa, esto es:

- Organizar una entrevista inicial con la persona solicitante, a través de la cual evaluarán su actitud y sus motivaciones para entrar en el grupo
- Demandar al Grupo de visita que realice una visita inicial, donde se evaluará el estado de la finca, la necesidad de un periodo de conversión y las cuestiones de manejo que precisan ser modificadas, entre otras.

Con los informes de la entrevista y la visita iniciales, la Comisión de Admisión acepta o no la entrada provisional de esta persona. En caso de que sea admitida, se inicia la segunda etapa del proceso de admisión. Se la denomina *periodo de prueba* y dura 1 año. Durante este tiempo, la persona debe ir supervisada por la persona del grupo que la avaló para entrar, no tendrá que pagar cuotas y deberá implicarse como un miembro de pleno derecho.

El año de prueba tiene como objetivo evaluar la implicación y la motivación de la persona en cuestión con respecto al grupo. Si el año de prueba es valorado positivamente por la Comisión de Admisión, esta persona será aceptada definitivamente. De lo contrario, se comunica la decisión argumentando los motivos de la no aceptación.

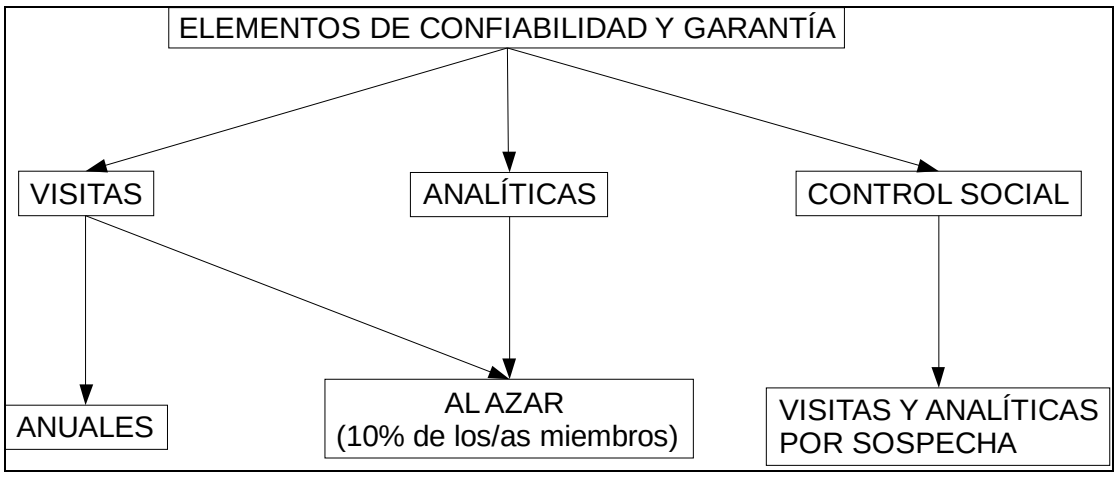
En el sistema se prevé el caso de que la persona que solicita la entrada no cuente con el aval de alguna persona del grupo, porque no conozca a nadie. En este caso, se le permite iniciar el proceso, siempre y cuando haya alguna persona del grupo que pueda ejercer de supervisor o tutor durante el periodo de prueba.

Para formar parte de la iniciativa, los grupos han establecido una cuota anual de 30 euros. Esta cuota se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de la organización, así como algunos relacionados con el sistema de garantía.

5.3.2. Mecanismos de verificación de las normas de producción establecidas

Los procedimientos de control que dan confiabilidad al SPG andaluz son tres: las visitas, las analíticas y el control social.

Figura 6.- Elementos de confiabilidad del Sistema Participativo de Garantía andaluz



Las visitas a las personas productoras implicadas son revisiones in situ que realiza el *grupo de visita*, en base al *manual de campo*[135] elaborado, con el fin de verificar el modo de producción que se lleva a cabo y el cumplimiento de las normas establecidas. Los gastos ocasionados por el desplazamiento del grupo de visita a las fincas son asumidos por la persona visitada.

Las visitas de control pueden ser de tres tipos:

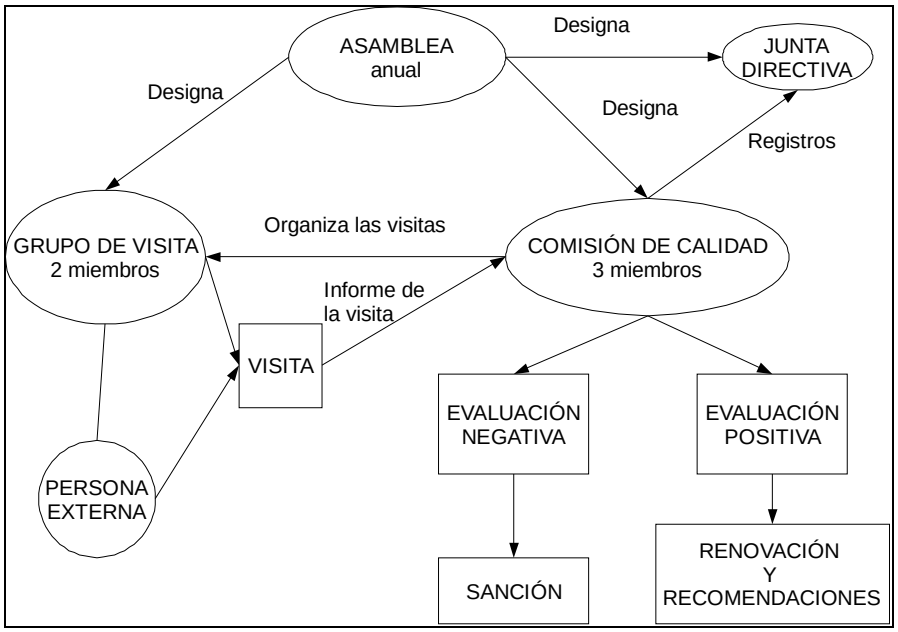
a. las visitas de rutina, realizadas una vez al año a todos los miembros del grupo;
b. las visitas al azar, como elemento adicional de garantía, que son visitas extraordinarias que se hacen a un 10% de las personas miembro de la iniciativa, anualmente;
c. y las visitas por sospecha, en caso de que haya alguna denuncia por parte de algún otro miembro del grupo, sobre un posible mal manejo ecológico o el incumplimiento de alguna norma establecida. En este caso, se visita a la persona denunciada para verificar la veracidad de los hechos denunciados.

[135] El manual de campo elaborado se puede consultar en el anexo V.

El segundo elemento de confiabilidad son las analíticas, pueden se establecen de dos tipos: las que se realizan, anualmente, a un 10% de los/as miembros de la iniciativa; las que se realizan por sospecha, cuando hay una denuncia de un manejo no permitido. La toma de las muestras del material que será analizado la lleva a cabo el *grupo de visita*. Los gastos ocasionados por las analíticas al azar son asumidos por el grupo. En el caso de las analíticas por sospecha, los gastos los asume la persona denunciada. Sólo en caso de que la analítica muestre que la sospecha era infundada, el grupo le devolverá el importe de la misma.

Los miembros de pleno derecho del grupo deben renovar anualmente la autorización de uso del identificativo. Para ello se establece el procedimiento de garantía ordinario que sigue una serie de pautas.

Figura 7.- Proceso de renovación del identificativo en el Sistema Participativo de Garantía andaluz



El proceso de renovación del sello comienza en la asamblea general anual, donde se eligen a los y las integrantes de la Comisión de Calidad y del grupo de visita (también elige a los de la Comisión de Admisión).

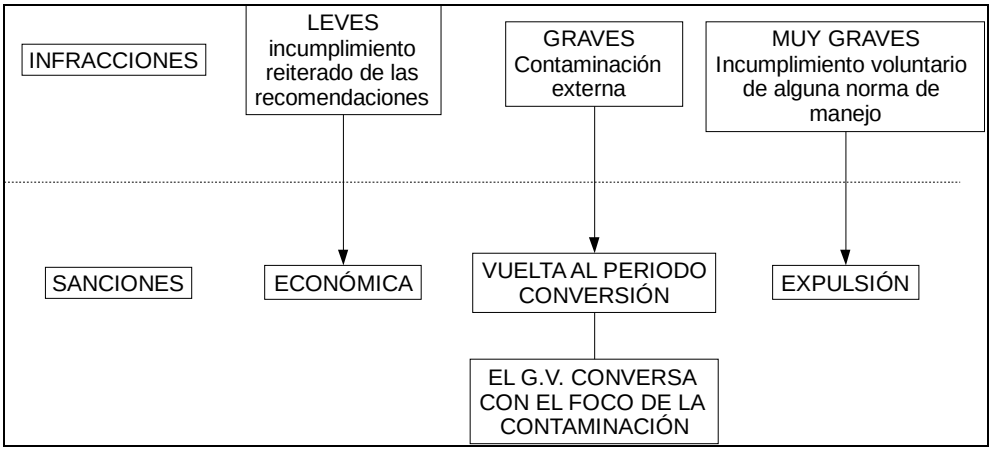
A partir de este momento, la Comisión de Calidad organiza: las visitas anuales a los miembros y el 10% de las analíticas al azar a realizar. Esta planificación la trasmite al grupo de visita. Conforme este va realizando las comprobaciones, envía los informes de vuelta, con las recomendaciones oportunas de mejora del manejo y las muestras de las analíticas al azar.

La Comisión de Calidad manda analizar las muestras y, en base a los resultados y a los informes remitidos por el grupo de visita, toma una decisión. Bien autoriza la renovación, bien establece las medidas consideradas en base a alguna infracción

detectada. La decisión viene influenciada, así mismo, por los informes de visita de otros años. De esta forma se considera la evolución seguida en el manejo en la finca, así como el grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas en otros años. En todo caso la información de la finca es devuelta a la persona miembro, con las recomendaciones que se consideran oportunas o la sanción pertinente. En este último caso se da opción a la persona en cuestión a defenderse.

Por otra parte, se establece un 10% de visitas al azar anuales. Estas visitas son organizadas en momentos distintos a las visitas de rutina pero su procedimiento es el mismo. Las infracciones contempladas en el SPG construido son de tres tipos y van asociadas a tipos de sanciones distintos.

Figura 8.- Tipo de infracciones y de sanciones en el Sistema Participativo de Garantía andaluz



Las *faltas leves* son aquellas relacionadas con el incumplimiento reiterado de las recomendaciones. No suponen un incumplimiento del Reglamento 2092/91, pero sí representan prácticas que están consideradas como poco recomendables: cuestiones relacionadas con el cuidado del suelo y la erosión, la biodiversidad y el manejo de los setos, entre otras. La sanción asociada a este tipo de infracción es económica y repercute en la asociación o grupo en su conjunto.

Las *faltas graves* son aquellas relacionadas con contaminaciones externas. Son infracciones al reglamento interno, causadas por una contaminación externa (no por un manejo inadecuado de la persona socia). La sanción es, como contempla el Reglamento europeo, la vuelta al periodo de conversión. En estos casos, se prevé que el mismo grupo de visita que detecta esa infracción hable con la persona causante de la contaminación, para explicarle las consecuencias de su acción. Es una forma de apoyo a la persona socia perjudicada y una posible vía para evitar que el problema se repita.

Las *faltas muy graves* son las relacionadas con el incumplimiento del reglamento interno, de una forma intencionada, por parte de la persona socia. La sanción es la retirada del identificativo y la expulsión del grupo.

5.3.3. Normas de producción y requisitos que se garantizan

Existen una serie de elementos extras garantizados por el SPG andaluz construido, con respecto al Reglamento 2092/91. Están relacionados con cuestiones de manejo así como con elementos que tienden a favorecer la organización y cohesión interna de los grupos y de la red.

Por un lado, se contemplan criterios relacionados con las condiciones laborales de la mano de obra contratada, con la convicción de que una agricultura no puede ser ecológica si no es socialmente respetuosa. Asimismo, se incluyen criterios a nivel ecológico que contemplan una visión de las fincas holística e integral. De esta forma, se exige la conservación del suelo y de la biodiversidad, el fomento del cierre de ciclos de materiales y energía, entre otros aspectos.

Por otro lado, se contemplan mecanismos que favorecen la consolidación de los grupos y la red, como son encuentros periódicos de intercambio. Asimismo, se incentiva la mejora continuada de los manejos hacia equilibrios ecosistémicos mayores, a través de premios.

El SPG construido establece un aval a las personas, no a los productos. Evalúa el modo de manejo y la actitud de la persona productora y no los resultados que obtiene. Esto significa que una persona productora que entre en este sistema deberá realizar un manejo ecológico en el 100% de sus fincas y actividades productivas.

5.4. Resultados de carácter estructural del proyecto

El primer nivel de resultados analíticos es a lo que hemos denominado los resultados estructurales. Parten de un modelo construido de garantía que plantea grandes diferencias con la certificación oficial y que pretende resolver la problemática en torno al mecanismo legalizado. Con el fin de profundizar en estas diferencias y las implicaciones que tienen, presentamos una comparación detallada entre el sistema participativo elaborado y el mecanismo oficial.

El modelo construido parte de la implicación de unas personas, que responden a perfiles concretos. Sus características socioeconómicas las hemos descrito en la primera parte de este capítulo. Sin embargo y a nivel estructural, interesa analizar el perfil al que responden las personas participantes en el proyecto, en base a: a) su visión sobre la producción ecológica; b) las razones por las que se han implicado en la construcción de un sistema participativo de garantía. Esto nos permitirá analizar si las personas implicadas en el proceso andaluz responden a una visión determinada de la producción ecológica. En caso de que exista este perfil más o menos definido, nos interesa estudiar la coherencia que guarda esta visión generalizada con las propuestas teóricas de la Agroecología.

5.4.1. Análisis de las diferencias entre el SPG andaluz y la certificación oficial

El SPG construido supone un cambio en la lógica y el funcionamiento de los sistemas de garantía en la Unión Europea. Los elementos fundamentales sobre los que podemos establecer estas diferencias giran en torno a: a) el tipo de criterios y normas de producción que se incluyen; b) lo que se está garantizando y cómo se está realizando esta verificación; c) el proceso a través del cual se autoriza el uso del identificativo; d) quién asume la responsabilidad de la garantía; e) el nivel de costes y la burocracia que requiere el sistema; f) el nivel de transparencia del proceso; g) las penalizaciones que se establecen en caso de que haya un incumplimiento de las normas establecidas. Para facilitar la comparación, hemos elaborado el cuadro siguiente.

Cuadro 21.- Principales diferencias entre el Sistema Participativo de Garantía andaluz y el sistema de certificación oficial en la UE

Cuestión	Sistema de garantía oficial establecido en la Norma UNE 45011	Sistema Participativo de Garantía construido en Andalucía
Tipo de estándares que contemplan y a qué nivel	Los estándares establecidos en el RE 2092/91, basados fundamentalmente en listado de insumos y productos prohibidos	Los estándares establecidos en el RE 2092/91, junto con prácticas de manejo recomendadas y estándares de carácter social. Asimismo, se establece un criterio de prioridad para los canales cortos y de proximidad de comercialización
¿Qué se certifica?	Productos concretos, independientemente del tipo de manejo que la persona productora lleve en el resto de cultivos. No está permitido tener parcelas del mismo tipo de cultivo, en el mismo municipio, sin certificar.	Se avala a la persona productora, su modo de manejo en la totalidad de fincas y tipos de aprovechamientos. Se avala una actitud traducida a un modo de manejo coherente.
Tipo de verificación	Auditoría por tercera parte: visita anual de una persona técnica y analíticas	Garantía participativa: visita anual de tres personas (productoras y técnicas) y control social continuo. Un 10% aleatorio de visitas extras y analíticas
¿Cómo se obtiene la certificación?	Tras la visita técnica, y en caso de que no haya ningún parte de no conformidad, la entidad certificadora autoriza el uso del sello	El grupo de visita compuesto por tres personas elabora conjuntamente un informe de la visita. Este es discutido en la Comisión de Calidad, compuesta por otras tres personas quienes, con el informe y los informes de otros años, autorizan o no el uso del sello. Esta autorización puede ir acompañada de recomendaciones de mejora del manejo, cuyo cumplimiento se evaluará en años posteriores

¿Quién verifica el cumplimiento de los estándares?	Una persona de perfil técnico denominada inspectora	Otros productores y productoras y consumidores/as miembro del grupo, y una persona de perfil técnico invitada al grupo de visita
Costes (quién los asume)	- Coste mínimo anual, incrementado en función de la superficie y del número de aprovechamientos distintos que se quieren certificar. - Analíticas Todos estos costes los asume la persona certificada	- Cuota anual a la asociación. La misma para cualquier miembro. - Traslado del grupo de visita a la finca. Estos costes los asume la persona avalada - Analíticas al azar (los asume el grupo) y por sospecha (los asume la persona si el análisis da positivo, y el grupo si da negativo)
Burocracia (quién la asume)	- Manual de explotación elaborado por la entidad certificadora - Listado de insumos con las facturas correspondientes Los asume la persona certificada	- Manual de visita e informe (entre tres personas) - Informe final y recomendaciones (entre tres personas) - Manual de la finca elaborado por el grupo (lo asume la persona avalada)
¿Las informaciones son públicas? ¿Es un proceso transparente?	No. Hay obligatoriedad de confidencialidad	Sí. Todos los miembros del grupo conocen los resultados de los mecanismos de control
¿Qué penalización existe si no se cumplen los estándares?	Denegación o retirada del sello	Según el tipo de infracción. Desde la expulsión del grupo, a una sanción económica en caso de incumplimiento reiterado de las recomendaciones de mejora

En el Sistema Participativos de Garantía andaluz se amplía el concepto de producción ecológica. En su cuaderno de normas, se incluyen prácticas recomendadas que buscan un aumento en la sustentabilidad de las prácticas agronómicas. De esta forma, supera la simplicidad del reglamento europeo, que reduce la producción ecológica en la práctica a la no utilización de una serie de productos prohibidos. Además, el SPG incluye criterios de justicia social, reparando en aspectos como las condiciones laborales de las personas empleadas.

En esta línea, el SPG avala las actitudes de las personas que ejercen su profesión de productoras. Evalúa su modo de concebir la producción como ecológica, traducida en unas pautas de manejo generales para cualquier producto o finca. La certificación oficial avala productos concretos, descontextualizándolos de la actitud general a nivel de producción de la persona evaluada.

En el modo de operativizar la garantía, el SPG andaluz supone una democratización y una colectivización de la misma. El proceso establecido implica a varias personas del entorno social de la persona evaluada. De esta forma, se establece una objetividad colectiva. Por otro lado, la evaluación de las fincas y de los manejos se hace de forma

dialogada y reflexionada. En la certificación oficial, la garantía recae en una persona de perfil técnico, que es quien evalúa el manejo y la finca y elabora el informe.

De este modo, el proceso de garantía en el SPG es un proceso de intercambio y de aprendizaje mutuos, en el que se establecen recomendaciones de mejora, frente a la certificación oficial que concibe la garantía como un examen, que se aprueba o se suspende.

El mecanismo alternativo supone un nivel de costes mucho menor, si bien este ahorro en dinero se traduce en unos requerimientos mayores en tiempo y esfuerzo. La participación en las estructuras y los mecanismos establecidos requieren de una implicación mucho mayor que la visita técnica anual a la finca. A nivel de burocracia, el sistema participativo establece manuales elaborados por los propios productores, lo que facilita su manejo y entendimiento. Asimismo, en la mayoría de los casos es llevada a cabo entre varias personas, lo que diluye la carga individual.

Otra diferencia fundamental entre ambos sistemas es la transparencia. La legislación en torno a la certificación establece la confidencialidad de todas las informaciones manejadas por las entidades / organismos de control. Sin embargo, el sistema participativo plantea una transparencia absoluta en cuanto a los informes y los resultados de las visitas. Esto conlleva unas penalizaciones diferentes. En ambos casos una infracción de las denominadas graves o muy graves suponen una retirada de la autorización del uso del sello. Sin embargo, en el sistema participativo este hecho tiene una trascendencia social en el grupo al que pertenece el productor o productora en cuestión. Bien puede generar acciones de apoyo, en el caso de contaminaciones externas; bien la expulsión del grupo, su desconfianza y su rechazo.

5.4.2. Perfil de las personas implicadas en base a su visión de la producción ecológica[136]

A grandes rasgos, la característica fundamental de las personas implicadas en el proceso se centra en su visión de la producción ecológica y su profesión como productores. En general, son personas que conciben la ecología en la agricultura como algo más integral y holístico que la simple sustitución de unos insumos que quedan prohibidos por otros autorizados. Su visión no sólo abarca el ámbito productivo, sino también el económico y el social. De esta forma, conciben una comercialización de la producción ecológica basada en la proximidad, así como unos procesos sociales asociados a ella que fomenten lo endógeno y lo local.

La idea fuerza que define su modo de concebir la agricultura ecológica es que la consideran una cuestión de convicción ideológica y de vocación. Para las personas implicadas, no es un simple estilo de manejo que persigue diferenciar la producción y acceder a otros mercados. Para ellas, ser productores ecológicos es una cuestión de actitud y conciencia ante la naturaleza y la agricultura: "*el que quiere hacer AE, la va a*

[136] Las citas y alusiones a este aspecto, analizadas en las entrevistas realizadas, se pueden consultar en el anexo VI.

hacer, sea con el CAAE o sea…una reunión que estuve yo, había un hombre que tenía cabras lecheras y ese las tenía ecológicas, estaba en el CAAE y se borró. Y él las tenía ecológicas pero no tiene que venir nadie a certificármelas ¿no? Pero eso es más que nada, una forma de vida o una filosofía…" (P28).

La convicción ideológica de lo que hacen va acompañada de una vocación hacia su profesión y hacia el modo ecológico de manejar los recursos naturales. Supone una dignificación de su trabajo como agricultores/as. Es su manera de oponerse a un sistema agroalimentario que tiende a reducirlos a meros operarios/as, dependientes de toda una cadena de actores externos. Frente a esta percepción, defienden la recuperación de la soberanía y el protagonismo de la agricultura. Como instrumentos conciben la organización de los/as pequeños/as agricultores/as y la defensa de los mercados locales frente a mercados deslocalizados: *"Ojalá, que en vez de que haya franquicias montadas por particulares que seamos un grupo de productores los que podamos tener tiendas por todo…"* (P9); *"pequeñas empresitas, que sí señor, que hacen su yogurt para allí, locales… y hacemos un sistema…. Que es que eso nos hemos montado, en los grandes Mercadonas y en las grandes empresas… ¡no Señor!, hay que volver a autoabastecerse, autoabastecer tu mercado, y sería una economía sostenible, no la economía que estamos teniendo…"* (P15).

Como hemos explicitado, su modelo de agricultura ecológica integra cuestiones que van más allá de un modo de manejo sin productos químicos de síntesis. Hablan de cuestiones relacionadas con la justicia social, como elementos intrínsecos a su concepción de la producción ecológica: *"no es sólo que te certifiquen que no lleven pesticidas o lo que sea (…) pero las cosas que vienen de sellos grandes y tal, quiénes lo han recogido, cómo les han pagado, cómo les han tratado… eso también hay que tenerlo en cuenta…"* (P33). Asimismo, defienden: por un lado la pequeña escala, por ser el contexto donde mejor se garantiza la biodiversidad frente a la economía de escala y el monocultivo; y la recuperación de variedades locales frente a la dependencia de variedades comerciales controladas por grandes empresas de insumos: *"yo veo por ejemplo pequeños productores, ¿dónde tienen cabida? Porque sí, muchas veces para que sea rentable hay que producir un cierto nivel, pero cierto nivel ¿es ecológico? Cuando tienes una campo enorme lleno de lo mismo, el tema de la biodiversidad. Es que claro hay ciertos límites para las cosas. Yo creo que un producto puede ser muy ecológico, porque no le han echado…pero también tiene que haber otros límites, si las semillas son de variedades más locales…"* (P12).

Los procesos de comercialización considerados como óptimos, dentro de este imaginario compartido, son aquellos que fomentan relaciones de proximidad entre producción y consumo, como las únicas garantes de la conservación de la producción de pequeña escala y, por lo tanto, de la vida en las zonas rurales: *"liderar un proyecto que consolide el consumo interno, lo que son los pequeños productores y recuperar la agricultura en las zonas rurales y la agricultura cercana y variedades locales y todas estas cosas que nos gustan tanto… y para eso tiene que haber consumidore*s" (P13).

En coherencia con esta visión, encontramos una idea generalizada en gran parte de las personas implicadas en el proceso: no pretenden enriquecerse ni hacer dinero fácil a través de la actividad agraria ecológica, sino vivir dignamente de una actividad en la

que creen y por la que tienen vocación. De esta forma, no supeditan su modo de manejo a los resultados económicos, sino que es su forma de producir y de trabajar sus recursos naturales. Si bien perciben serias dificultades para vivir de la actividad agraria, esto los lleva a buscar otros complementos de renta, no a cambiar el modo de manejo: *"lo que no me gusta es cuando la gente quiere meterse en ecológico por el negocio, que no piensan en ecológico, por La Tierra, por el Planeta, piensan en cómo gano más dinero. Así no me gusta"* (P42).

Sólo una parte minoritaria de las personas entrevistadas a lo largo del proceso supeditan el manejo ecológico a los rendimientos económicos. Una de las frases seleccionadas de las entrevistas lo trasmite de forma clara y concisa: *"Yo lo he dicho donde ha hecho falta, que yo si estoy en AE es para mantener mi casa y si de paso colaboras con el Medio Ambiente…pero que no soy el fanático ese que va a salvar el mundo, que no, lo tengo muy claro"* (P31). Curiosamente, todas las personas que han expresado esta visión en relación a la producción ecológica y a la economía, bien estuvieron en un principio en el proyecto y lo dejaron en el transcurso del mismo, bien han estado poco implicadas a lo largo de la construcción colectiva desarrollada.

La producción ecológica como una cuestión de salud o de respeto al Medio Ambiente, que es la definición y la visión que subyace en el Reglamento europeo 2092/91, es comentada por las personas entrevistadas, de forma secundaria. Esta visión predomina en personas que estaban empezando a producir en el momento de inicio del proceso o que entraron en el proyecto en cierta forma por curiosidad[137]. Algunas frases que ilustran esta idea son, en relación a la salud: *"yo lo que veo es mi salud, porque mi salud por encima de todo, antes que todo lo demás ¿eh? (…) Entonces una persona que se encuentra…a consecuencia de los productos que se está metiendo pues yo lo veo una criminalidad en la vida que se está haciendo y ahí hay que poner unos medios, entonces que por medio de esto se puede conseguir algo en beneficio de la sociedad pues muy bien"* (P1); y en relación al Medio Ambiente: "*estuvimos en defensa del río, en defensa del monte y todas estas historias… claro que es importante, muy importante. Tenemos contaminación por todas partes: en el agua, en la tierra, en los árboles, en la atmósfera… tenemos contaminación por todos sitios, ya ves si es importante"* (P7).

En relación al imaginario predominante, interesa analizar las causas que han motivado la ausencia o las bajas de algunos productores y productoras. En este sentido, detectamos dos tipos de motivos que han generado distancia o abandono:

a. unos están relacionados con las características de este tipo de proyecto y los imaginarios de las personas que entran a participar en él. Estos serán el foco de atención de nuestro análisis
b. otros están relacionados con cuestiones coyunturales (de índole personal – enfermedades, caracteres conflictivos o inadaptados socialmente - o política – partidismos locales). Estos motivos no los estudiamos, por considerarlos fuera de la lógica seguida en la construcción de este análisis. Sin embargo, pueden ser consultados en el anexo V.

[137] Las distintas motivaciones que han llevado a las personas implicadas a participar en el proyecto las analizamos en el punto siguiente, pero podemos avanzar que la cuestión de la curiosidad aparece como una motivación, aunque de forma minoritaria.

Centrándonos en los motivos relacionados con las características del proyecto y el imaginario de las personas, cabe destacar una idea central: se trataba de un proyecto en el que no se percibían beneficios personales a corto plazo. Esta característica desincentivó a aquellas personas que se acercaron al proceso por un interés exclusivamente económico: "*Luego ha habido alguno, en concreto, tampoco decimos nombre, que vas viendo que van a lo que van, ¿esto qué me deja? Si me deja me prendo, si no me deja no me prendo"* (P37).

Los requerimientos que el proyecto planteaba en cuanto a implicación personal hicieron abandonar a algunas personas. Consideraban que este trabajo podía suponerles una pérdida de tiempo y de esfuerzo, agravado por el planteamiento de unos resultados de medio plazo: "*están con el CAAE, le hacen la visita y fuera, no tienen más complicaciones ¿no? pero ahora, cuando les dices que tienen que perder el tiempo, ya no, que ha habido casos por eso, que no han seguido, que empezaron y no siguieron porque hay que ir a reuniones y no…"* (P28). En este sentido cabe destacar el poco hábito que había de trabajar procesos de solución colectivos a problemas detectados, a través de metodologías participativas.

En este sentido y en relación a las características del propio tema de la certificación, ha pesado la incertidumbre sobre los resultados finales del proyecto. La falta de un compromiso concreto y planificado de la administración, de reconocer legalmente el modelo construido, desincentivó la participación de algunas de estas personas.

La implicación que el proceso requería y la incertidumbre de que realmente se viera reconocido a nivel legal fueron grandes motivos para que este proyecto no se viera claro en los territorios. De hecho, hubo un número importante de personas que prefirieron esperar a ver el avance del proceso, antes que implicarse desde el principio: *"yo creo que hay gente que necesita mucha más seguridad. Cuando es algo en lo que tú crees, bueno, pero hay gente que necesita mucha más seguridad y cuando vea esto con más claridad que funciona... claro"* (P46)

Los discursos analizados hablan, en el *ámbito técnico - productivo*, de cuestiones como la biodiversidad y la recuperación de variedades locales, entre otros. En el *ámbito socioeconómico*, el imaginario colectivo predominante plantea establecer mercados locales y fomentar relaciones directas entre producción y consumo. En esta línea, creen en la organización de los/as pequeños/as productores/as como mecanismo para mantener la pequeña escala. Este es el tipo de agricultura que consideran óptima para dar vida e impulsar procesos de mejora en las zonas rurales de montaña donde se ha desarrollado el proyecto. A *nivel político*, la visión de las personas implicadas habla de vocación y de filosofía de vida, en la que el trabajo como productores/as agrarios se inserta en un modo de entender la sociedad, la naturaleza y la interacción entre ambas.

Estos diferentes elementos construyen una perspectiva integradora de la actividad agraria, que no solo contempla aspectos de manejo, sino también aspectos sociales y políticos: la justicia social, la equidad en las relaciones, etc. De hecho, plantean un objetivo económico de dignidad, no de enriquecimiento ni de dinero fácil. Un modo de

vida austero representa una actitud política que favorece los equilibrios sociales y la equidad.

De este modo, podemos concluir que el imaginario predominante analizado responde a una visión de la producción agraria integral y holística, lo cual está en consonancia con las propuestas teóricas de la Agroecología. Así, las personas implicadas en el proyecto responden a una visión más amplia de la producción ecológica que la que contempla el Reglamento europeo.

En este sentido, las personas que no se han implicado en el proceso o que empezaron y lo dejaron a medias se identifican con visiones no agroecológicas. Responden a actitudes individualistas, que persiguen el beneficio económico personal antes que el colectivo. Son perfiles que no están dispuestos a implicarse en tiempo y esfuerzo, por proyectos de medio plazo que inciden en el territorio, si no les reporta beneficios individuales directos.

5.4.3. Motivaciones para implicarse en el proyecto[138]

La visión agroecológica de los participantes en el proceso les lleva a sentir una cierta insatisfacción en torno al sistema de producción ecológica establecido a nivel oficial. El modelo institucionalizado establece un mecanismo de garantía que simplifica la credibilidad a un examen sobre el uso o no de productos prohibidos. Este mecanismo, además, se estructura en base a unas empresas que sienten lejanas y que les aportan pocas utilidades en relación a los niveles de costes y de burocracia que les requieren.

En este contexto, surge el interés de implicarse en la construcción de un sistema que genere garantía a la vez que procesos de cohesión endógena y grupal. Asimismo, que se adapte a sus realidades, a nivel de costes, procedimientos y de burocracia.

Los motivos por los que las personas entrevistadas se implicaron en el proyecto las hemos organizado en base a dos elementos aglutinadores: 1º la problemática que genera la certificación por tercera parte; 2º los objetivos y expectativas que esperaban de un sistema alternativo de garantía.

La problemática percibida de la certificación por tercera parte viene a sustentar el planteamiento del problema que dio origen a este proyecto. Se centra fundamentalmente en determinados mecanismos de este sistema que perjudican a los/as pequeños/as productores/as, que es la categoría con la que se identifican. Los mecanismos destacados se pueden resumir en las siguientes ideas: el sistema de costes y superficies mínimas establecido, la burocracia exigida, la insuficiencia de los servicios que garantiza y la lógica de tener que pagar para demostrar que se lleva a cabo un manejo ecológico.

[138] Las citas y alusiones a este aspecto, analizadas en las entrevistas realizadas, se pueden consultar en el anexo VII

La certificación por tercera parte instituye un sistema de precios mínimos y, para determinados cultivos como el olivar, de superficies mínimas. En el caso de los precios mínimos, hacen que para determinados volúmenes de producción no sea rentable certificarse; por su parte, la medida de las superficies mínimas impide la inscripción en ecológico de determinadas fincas: *"Sobre todo para la gente que menos tierra tiene, que no quiere inscribirse en el CAAE por la parte económica. (…) a lo mejor tienen un bancal con sus aceitunas, con frutales, su huerto… y quiere ser ecológico, pero el CAAE lo primero es que si es olivar, no te admite hasta que sea media hectárea, entonces ya está descartado por supuesto. Además, si son ciento setenta euros, para sembrar cincuenta matas de tomates de tal… pues, es muy complicado"* (P6).

El sistema de precios mínimos establecido penaliza además las producciones diversificadas, en las que se combinan distintos tipos de aprovechamientos en una misma finca. El sistema establecido cobra por cada tipo de producto que se quiere certificar y no por persona o finca. La consecuencia directa de que se certifiquen productos y no actitudes o personas de forma integral es un freno a los manejos diversificados: "*tú tienes aceitunas, pues necesitas certificado para las aceitunas, que si tienes también tomates, necesitas certificado para los tomates, si tienes… necesitas para lo otro… y nosotros pensamos, a ver, si yo mi explotación, más chica o más grande, más repartido o menos, es ecológica toda, para que necesitar otro certificado"* (P4).

Otro problema derivado del modo de operar de la certificación por tercera parte es la excesiva burocracia que exige. Este procedimiento complejiza y desincentiva la inscripción en ecológico de las producciones, especialmente para los pequeños productores que trabajan en base a mano de obra familiar: *"Él tenía una finquita que la tenía declarada como ecológica pero dice la he tenido que dejar porque era imposible el papeleo. Yo sigo haciendo mis cultivos como siempre pero sin sello, por eso, porque la burocracia te come"* (P38).

Según las personas entrevistadas, los elevados costes y el nivel de burocracia que supone el sistema de certificación oficial no se ve recompensado por un servicio que les reporte utilidades. Existe una insatisfacción generalizada con respeto a las entidades de certificación, concretada en dos ideas básicas. Por un lado, perciben que este servicio, en sí, no está funcionando con rigor y calidad: "*Hablaban de las certificadoras, criticaban las certificadoras y yo no sabía ni cómo trabajaban, ya luego me fui dando cuenta, digo ¡hay que ver!, es que todavía ni han venido"* (P47). Por otro lado, perciben que es un servicio que a ellos/as no les aporta nada, ya que va destinado a confirmar que producen de la manera que ellos/as ya saben que lo hacen. Además, es realizada por unas empresas con las que la comunicación es complicada. Esto complica la resolución de determinados problemas con la administración, relacionados con las ayudas[139] o los requerimientos de documentación, entre otros: "*el principal problema que tenemos es que está tan lejos. Si estuviera en Sorihuela seguro no tendríamos estos problemas.*

[139] La cuestión de las ayudas a la producción ecológica ha sido problemática en los últimos años, por no coincidir el catastro con los registros de parcelas de las entidades certificadoras, que son los documentos en los que se ha basado la administración regional para gestionarlas. Esto ha generado el atraso del pago de las ayudas en tres y hasta cuatro años, en el sector ecológico.

Porque estamos todo el día en Sorihuela, todo el día sentados, en vez de estar aquí haciendo cola" (P16).

El propio sistema de certificación oficial es cuestionado en algunos casos, porque para ellos representa la lógica de que "*el que no contamina, paga*". La obligatoriedad de la certificación para la producción ecológica está grabando a este tipo de manejo con un coste adicional, en relación a la producción convencional que utiliza productos químicos de síntesis. Por lo tanto, en términos de costes la producción ecológica está penalizada oficialmente: *"pedirle la certificación al CAAE supone esperarte por lo menos dos meses y en una serie de historias, (…) en vez de tener más libertad los ecológicos lo que tenemos es… o sea pagamos por no contaminar como decía uno en una reunión. Pues es esa sensación. Yo hace tres años que saqué el certificado y… este año ya soy agricultor ecológico con papeles, que yo agricultor ecológico soy desde hace quince años"* (P6).

En resumen, la certificación tal y como está establecida a nivel legal supone un agravio comparativo para la producción ecológica, ya que institucionaliza la lógica de que *"el que no contamina, paga"*. Además, los costes y las superficies mínimas penalizan a los/as pequeños productores/as y los manejos diversificados. Los elevados precios del servicio, junto con los altos niveles de burocracia, desincentivan la regularización de las producciones a través de su inscripción como ecológicas, especialmente para la pequeña escala.

Es importante destacar la sensación generalizada de que el servicio de certificación no funciona correctamente, en sus territorios. Según las personas implicadas, no se cumplen los mínimos establecidos para las visitas anuales y las que se hacen no son de calidad ni rigurosas. Además, este servicio está en manos de unas empresas con las que la comunicación y la resolución de incidencias o problemas en el día a día no son fluidas.

En base a estas críticas, las personas entrevistadas planteaban una serie de expectativas para el sistema participativo de garantía. Cumpliendo estos requisitos, sentían que el nuevo mecanismo satisfacería sus necesidades y demandas. Estas características las podemos resumir en cuatro ideas básicas:

1. El nuevo modelo debería facilitar la cuestión de la garantía a los pequeños productores, a nivel de costes y de burocracia: *"una de las ventajas, esperemos sea menos burocrático, que sea más real, que lo hagamos entre nosotros mismos ¿no? Más barato… relativamente, porque también nos va a ser más coñazo. Por un lado más barato, ahorrarnos las cuotas, también es lo que se pretendía ¿no?"* (P10).
2. Asimismo, debería superar la idea de examen y de fin. El nuevo sistema tendría que servir de instrumento o medio de movilización y dinamización de la agricultura ecológica en el territorio. Para ello, debería fomentar la unión y el impulso de los pequeños/as productores/as. De esta forma un proceso que es obligatorio (el de la garantía) pasaría a convertirse en algo positivo y constructivo para los/as productores/as: *"puede ser más casero ¿no? Más familiar. Puede haber más contacto entre agricultores y productores, mejor,*

entonces hay un control más natural de… no es yo pago mi cuota y tengo certificado, sino que puede haber una certificación más natural, más cercana a la gente ¿no? Que haya más contacto, la gente está más cerca de lo que es la AE, los consumidores ¿no?" (P8)

3. Un sistema de este tipo permitiría alcanzar ciertas cuotas de autonomía e independencia a los grupos de productores/as en lo territorios. Al asumir la responsabilidad del proceso, los servicios de los que dependen los productores se acercarían a sus propios contextos sociales: *"si estamos más cerca y somos nosotros, pues lo podremos montar mejor y no tener que ir a Sevilla a pedir cuentas allí. (…) Porque yo no tengo nada que ver con la gente de Sevilla. Yo paso por la puerta de los que estamos…de cualquiera todos los días pero a Sevilla no puedo ir nunca"* (P1)
4. La garantía así entendida fomentaría la salida a mercados de proximidad de las pequeñas producciones. De esta forma, se potenciaría lo endógeno y lo local de los territorios agrarios: *"¿Qué aporta? Pues cualquier sobrante, colocarlo en cualquier sitio"* (P2)

5.4.4. A modo de conclusión

Como conclusión al análisis de los resultados estructurales podemos plantear que el Reglamento oficial reduce la producción ecológica a un modo de manejo que evita el uso de productos químicos de síntesis. Las visiones de tipo agroecológico no tienen representación ni a nivel de reglamento ni, consecuentemente, en los mecanismos de garantía que este reglamento impone.

De hecho, el sistema de garantía por tercera parte no está pensado para pequeños/as productores/as, con manejos diversificados y con una visión agroecológica de su modo de producción. Es un mecanismo que los excluye a través de su sistema de precios y burocracia. Y además los ignora a través de su modo de operar mediante una lógica de examen técnico que tienen que aprobar y en el que se analizan aspectos reduccionistas de sus modos de producción. De este modo, el sistema de certificación por auditoría excluye o desincentiva a los pequeños productores, con manejos diversificados, así como a aquellas personas con una concepción agroecológica de la producción.

La necesidad de alternativas para estas realidades que existen en nuestros contextos se expresa de diversas formas. Por un lado, para ganar autonomía e independencia de los territorios, favoreciendo la organización interna y los servicios de proximidad. Por otro lado, para fomentar procesos de garantía y de comercialización enfocados hacia las relaciones de cercanía.

Partimos de la idea de que la Agroecología en la Unión Europea llega a través de procesos posmodernos de reflexión y búsqueda de alternativas, a una realidad que se percibe como perjudicial. Pero estos procesos y posicionamientos vienen desincentivados, excluidos e incluso penalizados por la política pública que regula la producción ecológica. Uno de los instrumentos de esta política es la certificación por tercera parte.

Considerando que las propuestas agroecológicas existen en nuestros contextos, como hemos mostrado, se plantea la necesidad de fomentar procesos que permitan defender académicamente estos discursos. De esta forma, podremos ir abriendo camino hacia su inclusión en el discurso y el sector ecológico oficial. La defensa de este posicionamiento es sencilla: existen políticas y planes dirigidos a fomentar el desarrollo rural en la región, en los que se defiende la importancia de las zonas rurales de montaña. En estas políticas, se propone incentivar procesos que vayan a consolidar población rural en los territorios, resolviendo los problemas propios de estas zonas[140]. Consideramos que no existe una coherencia entre estos objetivos en el ámbito del desarrollo rural y las políticas agrarias que se están desarrollando. Por lo tanto, es importante defender académicamente las alternativas de tipo agroecológico y evidenciar los mecanismos oficiales excluyentes.

En esta línea, los SPG representan una serie de características que les otorgan unos valores añadidos para el medio rural, con respecto a la certificación oficial:

a. Fomentan que sean las propias personas implicadas en el proceso productivo y de consumo quienes participen en los mecanismos de control y de sanción
b. Requieren de encuentros periódicos entre las personas implicadas: en las Comisiones o el grupo de Visita, en la Asamblea General o en las visitas de control, lo que permite un flujo continuo de información y de intercambio de experiencias
c. Facilitan el contacto directo y continuado entre los miembros de los grupos, lo que favorece procesos de confianza y de conocimiento mutuo. Esto fortalece las relaciones personales y el sentimiento de grupo
d. Evalúan los tipos de manejo de las personas implicadas, en todas sus fincas y actividades. Se avalan personas y no productos concretos aislados
e. Incorporan criterios de carácter social y laboral.

5.5. Resultados de carácter dialéctico del proyecto

El proceso de investigación – acción llevado a cabo se traduce en elementos de carácter estructural, ya explicados en el subapartado anterior; y también en resultados de tipo sociopráxico o dialéctico.

La capacidad de estos procesos participativos de generar cambios en la realidad donde se desarrollan, a través de la generación de espacios de reflexión y acción colectivas, es un elemento que planteamos para evaluar la incidencia y la capacidad resolutiva de estas metodologías frente a problemas en la actividad agraria. Los procesos de reflexión y acción conjuntas no sólo generan cambios en el entorno social en los que se desarrollan, sino también aprendizajes colectivos que modifican los imaginarios y, por lo tanto, las actitudes ante las realidades trabajadas.

[140] Estos elementos los hemos rescatado del Plan de Desarrollo Rural elaborado por la Junta de Andalucía, para el periodo 2007 – 2013, y presentado en el capítulo 3 dedicado al Contexto.

El análisis de todos estos elementos es lo que se presenta a continuación, a través de diferentes aspectos evaluados de las entrevistas realizadas, al principio del proceso y al final del mismo. Para ello, centraremos el análisis en la evolución de las personas implicadas, en cuanto a su concepto de la garantía y la generación de credibilidad; su confianza en establecer procesos colectivos de trabajo; las estructuras y el dinamismo en torno a la producción y el consumo ecológicos.

5.5.1. Evolución de la percepción de la garantía y la generación de credibilidad[141]

El proceso sociopráxico llevado a cabo a lo largo del año y medio que trascurrió entre las dos rondas de entrevistas se tradujo en otro resultado de tipo dialéctico: el aprendizaje y la reflexión en torno a la generación de credibilidad en los productos ecológicos y las alternativas a la certificación por tercera parte o auditoría.

La *visión inicial* expresada en torno al posible sistema alternativo de garantía se centraba en sus características concretas y en su lógica de funcionamiento interno. En general, se expresaba la idoneidad de construir un mecanismo en el que participasen, al mismo nivel de importancia y protagonismo, las personas implicadas, a través de un sistema de responsabilidad compartida: *"va a ser muy importante porque vamos a ser nosotros mismos, cualquiera lo mismo que otro, eso es muy importante. Porque aquí… tampoco me voy a meter, si otro le certifican tal, tampoco quiero llegar más contigo porque a mí me da igual, si te veo curar, echar herbicida o lo otro, tampoco… pero si veo que eso me está perjudicando a mí, o sea, a lo que nosotros tenemos, entonces sí puede haber detalles. Yo voy a mi organización y digo que aquel ha curado allí o está haciendo… ¿estamos? Entonces yo ese punto lo veo importante, porque en este tema, nosotros vamos a ser guardianes de nosotros"* (P4).

Esta responsabilidad compartida entre las personas implicadas permitiría construir un proceso de proximidad adaptado al entorno territorial donde lo estaban construyendo. A partir del mismo, se podría generar una interacción entre las personas implicadas: *"esta forma de certificación, es quizá lo que más se puede acercar a la AE. Porque sería una cosa local, que daría trabajo aquí, que nos tendríamos que entender entre nosotros… yo lo veo ideal en ese sentido ¿no? que haya que comprar fuera lo mínimo posible…"* (P8).

Al principio del proceso había voces que expresaban una idea de mecanismo de garantía alternativo alejado del imaginario general de las personas implicadas y de lo que se conoce como SPG. Algunas de ellas planteaban un sistema de garantía por tercera parte, en el que la entidad fuese local, próxima, resolviéndose de esta forma los problemas de lejanía y de dificultad a la hora de resolver los problemas cotidianos: *"que se haga una cosa sencilla que haya una oficina que vayas y te atiendan allí, mira que para cualquier duda aquí estamos nosotros, que pases por aquí cuando queramos, somos nosotros…"* (P1).

[141] Las citas y alusiones a este aspecto, analizadas en las entrevistas realizadas, se pueden consultar en el anexo VIII.

Otras personas expresaban soluciones que no pasaban por la construcción colectiva de un sistema alternativo, sino por la subvención de los costes a los/as pequeños/as productores/as, concibiendo que un proceso de este tipo iba a generar más trabajo y exclusión a los/as que más dificultades tenían: *"a la gente que (…) le supone un verdadero problema pagar los ciento ochenta euros al año, que se lo den, ciento ochenta euros gratis. (...) un sistema alternativo…alternativo va a ser desde el pobre, porque el que no puede asumir ciertos gastos se queda con el sistema alternativo y la filosofía del que no requiere de alternativa es "yo afronto mis gastos y sin que se me mueva un solo el pelo". (…) ese sistema alternativo va a ser el de los seis o siete entre comillas desgraciados que tienen poca producción, poca pasta, y que se lo tienen que currar a largo plazo encima"* (P21).

Tras cerca de 16 meses de trabajo colectivo y participativo, en el que se construyó una propuesta concreta para un posible SPG andaluz, las visiones habían evolucionado. Los discursos cambiaron de centrar la atención en las características y la lógica de funcionamiento interno del SPG, a valorar y evaluar los aspectos intrínsecos de este tipo de sistemas, derivados de su lógica.

Estos aspectos están relacionados, por un lado, con la idea de que la certificación se convierta en un proceso colectivo de intercambio, de conocimiento mutuo y de apoyo grupal entre productores/as. De esta forma, es un proceso que les permite ganar autonomía y protagonismo: *"el reglamento tiene que cumplirse, pero es un sistema de certificación más cercana, más participativa...que (…) se organiza en grupos, (…) da cabida a otras cosas que ya no se puede ocupar una certificadora privada, a mi modo de ver, como es formación, asesoramiento, jornadas participativas entre productores y consumidores...claro, eso es lo que te da más autonomía e independencia y mucho más apoyo también"* (P47)

Por otro lado, los imaginarios en torno al sistema construido expresaban la idea de que se estaba fomentando la confluencia de la producción y el consumo, e incluso de personas técnicas locales, al mismo nivel y en interacción continua, en el ámbito local: *"no es una certificación de productores solamente, sino que hay otras personas que están igual interesadas y que pueden participar del proceso como pueden ser los consumidores como consumidores, o las Autoridades Locales o los técnicos. Mientras que esto se dé dentro de una dinámica en el que todos sean iguales"* (P25).

En general, se compartía la visión de que el sistema construido respondía, después de mucho tiempo de exclusión, a las necesidades de los/as pequeños/as productores/as, que por fin habían tenido voz para expresar su realidad: *"si se da sería un precedente muy bueno...sería un poco de revolución social a nivel minoritario pero sería un poco de revolución, reconocer los derechos de los pequeños agricultores que estamos ahí, que existimos*" (P45).

Y también que era un sistema que respondía a visiones de la agricultura ecológica más profundas, más agroecológicas, que tampoco se veían contempladas en el reglamento y la legislación vigente: *"a un tío forrado en billetes que tú le digas que tiene que ir a otra finca igual que van a venir a la tuya, te va a decir vete "a tomar por culo" (…).*

Entonces veíamos muy interesante ese filtro ¿no? que le iba a interesar este sistema a la gente que va buscando que sea más verdad, más auténtico. Igual que va a echar para atrás al que no" (P37).

En cuanto a su propio funcionamiento interno, había una convicción generalizada de que el SPG construido era una garantía mayor para la producción ecológica que la certificación por tercera parte. Algunas de sus características específicas, como el control social continuo de las propias personas implicadas, vehiculado a través de mecanismos que funcionan en base a relaciones directas y al intercambio continuo, le va a conferir una mayor fiabilidad: *"si yo he echado abono y me viene un señor, ¿cómo sabe dónde he echado el abono? no lo sabe. Aleatoriamente se va a llevar una muestra, puede coincidir o no puede coincidir. Entonces los grupos pequeños, quieras o no quieras, nos vamos conociendo y nos conocemos algo mejor. (…) tiene más garantía porque es un grupo de personas comprometidas, un grupo pequeño o relativamente pequeño de personas comprometidas, ninguno va a estar jugando al gato o al ratón porque viene una inspección de x sitio"* (P38).

En este punto (cerca del final del proyecto), las dificultades que un sistema de este tipo entraña estaban analizadas y reflexionadas, así como las limitaciones del punto de construcción y puesta en práctica en el que se hallaban.

En este sentido, podemos destacar una cierta inquietud por la cuestión del reconocimiento legal y, estrechamente ligado a esto, por la aceptación que este nuevo mecanismo iba a tener en clientes alejados de la experiencia y el territorio: "*si es como dicen sí. Si ahora radicalmente del Comité, ahí y no pierdo ningún tipo de… hombre lo que veo hoy es que no tiene la misma entidad que el Comité, a la hora de vender y eso…"* (P41).

También se percibía una cierta inmadurez del sistema. Se detectaba la necesidad de avanzar en una asunción horizontal de tareas y de transmisión de la información, por parte de todas las personas implicadas, ya que se mantenía una importante delegación de tareas y responsabilidades en las personas dinamizadoras: *"no hay organización, no hay planificación en el tiempo, de cuándo ir y ver. Sí, eso ha fallado. Ha sido de vamos a ponernos dos a tal, pero tú sólo sabes cuándo te vienen a ti y cuando te llaman para ir a otra y si puedes o no puedes, pero la visión global de pues hoy están en la finca de Consuelo o ayer estuvieron en la finca de Joseph..."* (P47).

Esta debilidad detectada en cuanto a la dependencia respecto de una persona dinamizadora se observaba, por otro lado, como un elemento necesario en cuestiones de organización interna del sistema de garantía. Si bien se percibía que la persona dinamizadora debía ir cediendo espacios de decisión y de comunicación, se consideraba que debía mantener tareas de coordinación y de gestión: *"siempre hemos dicho además de la importancia de una figura como la de Juanjo. Como no se pague a alguien para que lleve los temas de la asociación, o llevar tal, que coordine todo… porque imagínate llamarnos todos por teléfono… no. (…) el papel de esa persona es imprescindible, si queremos que esto funcione…"* (P46).

A modo de conclusión, podemos plantear que el aprendizaje emanado del proceso participativo se ha traducido en el cambio de perspectivas y nociones en torno a los sistemas de garantía y al propio entorno social en el que se ha trabajado.

En un principio, los análisis expresados partían de una visión individual del proceso de garantía y de los cambios personales que podía suponer construir un sistema alternativo. Se expresaban características internas del futuro modelo que atañían a sus propias expectativas individuales: fundamentalmente la participación y la proximidad. Al final del proceso, sin embargo, las características que destacaban del modelo construido se salían de esa individualidad inicial, para valorizar aspectos relacionados con los procesos colectivos generados: intercambios de conocimiento y experiencia con otros/as productores/as; las relaciones personales directas; el fomento del conocimiento mutuo y del apoyo grupal. La construcción de grupo y de tejido social se valorizaba no sólo entre productores/as, sino también con los consumidores/as y con personas técnicas en el ámbito local. Valoraban la heterogeneidad de los grupos y los distintos papeles que jugaba cada actor en el sistema establecido.

Al inicio del proceso los imaginarios no eran homogéneos. Había voces divergentes en cuanto a su concepción de las posibles soluciones a la problemática de la certificación por tercera parte, que pasaban por cambios poco radicales. Planteaban mantener la garantía de tercera parte, bien acercando las entidades a los territorios, bien subvencionando los costes a los/as pequeños productores/as. Tras año y medio de proceso participativo, los imaginarios expresados habían ido confluyendo y se presentaban más homogéneos.

El proceso seguido, además de generar un tejido social entre personas relacionadas con la producción y el consumo de productos ecológicos a nivel local, ha permitido valorar un modelo que responde a un perfil y una visión excluidos por la legislación en el sector ecológico. Ha dado luz a un modelo adaptado a los/as pequeños/as productores/as ecológicos, con una visión agroecológica de la producción y la actividad agraria.

Por último, cabe señalar la evolución seguida en torno al propio concepto de credibilidad y garantía. Tras todo el proceso desarrollado, las personas entrevistadas empiezan a concebirlo como una consecuencia de las relaciones de confianza y de proximidad entre las personas implicadas y de un control social continuo. De este modo, han superado la idea de garantía como examen técnico externo, y la han trasformado en una legitimidad de las personas para pertenecer a un grupo que otorgue esa credibilidad. La garantía se basa, por tanto, en relaciones personales y de confianza estrechas. Esta proximidad presiona sobre las personas para cumplir las normas acordadas, ya que un engaño es penalizado socialmente pues se traduce no sólo en una retirada del sello, sino en una expulsión del entorno de confianza y de apoyo construido.

5.5.2. Evolución de la confianza para trabajar mediante procesos colectivos[142]

La evolución experimentada en el imaginario de las personas implicadas, en torno a su confianza para trabajar y resolver los problemas de su actividad agraria de forma grupal y colectiva, ha sido heterogénea en los grupos participantes en el proyecto.

La situación de partida del proyecto, en los tres territorios implicados, tenía una serie de características comunes que condicionaron su desarrollo. Ante todo, predominaba la percepción de que las demás personas en estos territorios eran individualistas y no había ninguna conciencia de grupo ni de trabajo conjunto. La actitud de las personas venía marcada por la desconfianza con respecto a sus vecinos/as. De esta forma, se expresaban dudas importantes en torno al éxito de una propuesta que planteaba solucionar la problemática detectada a través de un proceso participativo y grupal.

"*aquí es difícil asociar a la gente. Aquí somos muy independientes para todo"* (P6)
"Tengo mis dudas, porque lo de asociarnos no sé porqué pero lo llevamos muy mal... (…) creo que falla eso, somos muy individualistas, no queremos compartir, no sabemos trabajar en conjunto..." (P18)
"*Porque la gente se compromete muy poco, la gente no quiere ir ni a las reuniones, pues menos si le exiges ir cada tres meses a un sitio. O yo qué sé, controlar esto o lo otro, eso lo vería también muy complicado"* (P8).

En este sentido, se evidenciaba la ausencia absoluta de procesos sociales o políticas públicas orientadas a generar tejido social y a trabajar las relaciones interpersonales a nivel profesional.

El contexto de desconfianza viene justificado por la percepción de actitudes pasivas en torno a los problemas de la zona y la búsqueda de soluciones. De esta forma, había una sensación generalizada de que las personas siempre esperaban la actuación o el impulso de otras. No existía una actitud de asumir riesgos ni de promover procesos de innovación.

"lo veo complicado, porque la gente no controla mucho del tema. Yo les llevo los papeles a todos y de eso un poco se olvidan. (…) ellos se preocupan de ser agricultores, ya no se preocupan de más temas" (P24)
"en el momento que una cosa funcione la gente se va a agregar, porque nosotros estamos en la asociación y muchos nos dicen cuando lleve un tiempo que yo vea como va eso, me apunto" (P14)

La sensación de pasividad se complementa con la percepción de que sus vecinos y vecinas siempre esperaban las soluciones a los problemas desde fuera. Predominaba la idea de que la lógica de funcionamiento en la zona era la queja y la espera de soluciones desde fuera. La posibilidad de un proceso de implicación personal activa en la búsqueda de soluciones no estaba, por lo tanto, incorporada en el imaginario colectivo.

[142] Las citas y alusiones a este aspecto, analizadas en las entrevistas realizadas, se pueden consultar en el anexo IX.

"yo lo que temo es que marchéis y se disuelva o que…(…) cuando no haya un coordinador, alguien externo…que implica a las personas con el entorno, con el ambiente (…). La gente ve que no los llamas y dejan de asistir" (P5).
"*creemos que tenemos que tener un profesional que se dedicase un poco a eso, a organizar un poco la producción y el contacto con los compradores, con los productores y un poco eso…"* (P8).

Y en esta pasividad y visión asistencialista de la solución a los problemas del territorio, la administración ocupaba un lugar central. Se percibía que había pocas personas dispuestas a dedicar su tiempo (considerado escaso) en el proceso que se estaba poniendo en marcha, por voluntad propia. Planteaban la necesidad de que se estableciera una recompensa o una directriz desde la administración para impulsar el proceso. Esta lógica encajaba más con los procedimientos a los que estaban acostumbrados.

"porque somos unos pocos, la gente no va a meter la cabeza ahí, porque somos unos pocos. Pero ahí tenía que haber más gente y eso lo tiene que decidir la administración de arriba no nosotros" (P1).
"Porque la zona, y en general, pues funciona el modelo de "bueno si aquí, yo no sé hacer nada, yo no me muevo y que me lo den todo hecho" (…) es un tema muy complicado, es que yo lo veo muy complicado" (P22).

Este imaginario se puede relacionar con la lógica de la Política Agraria Común de la Unión europea, basada en las subvenciones. Esta política asistencialista y vertical ha podido influir decisivamente en la adopción de actitudes pasivas en los territorios rurales andaluces.

Con estos imaginarios de partida, las actitudes percibidas en las personas implicadas en el proceso incipiente era de expectación. No detectaban una intención real de implicarse, hasta que no se fuesen viendo los primeros resultados. El éxito del proyecto estaba muy cuestionado.

"hay gente que está, como hemos comentado antes, más a reta guardia, que va siempre un poquillo más a remolque ¿no? y tienes que ir tirando de ellos" (P2).
"*la cosa es muy dura aquí ¿eh?, (…) conozco a la gente de Santiago de la Espada (…) y hay gente que está súper quemada (…) Yo me temo que van a empezar los celos y el tema de que mis tomates son primero que los tuyos*" (P22).
"lo más problemático es la predisposición o disponibilidad de la gente. Que hace… hay reuniones que venimos dos… es súper abstracto… ahora mismo lo veo súper abstracto todavía, no le veo, soy capaz de imaginar pero no le veo nada concreto. Pero la pega de verdad que yo veo es que la gente, de verdad se predisponga…" (P10).

En algunos casos se expresaba el reconocimiento de que un proceso de este tipo requería un cambio de actitudes y de inercias. En este sentido, consideraban complicado el proceso planteado y cuestionaban el proyecto en cuanto a plazos y objetivos.

"si tú quieres organizar un grupo auto…entre comillas autogestionario y quieres que ese grupo funcione autónomamente y bien, eso no se da en un mes y medio" (P21)

En este contexto común a los tres territorios implicados en el proyecto, existen ciertas especificidades en el punto de partida que condicionaron de forma particular el desarrollo del proyecto en cada una de las zonas implicadas.

En Castril se valoraba de forma muy positiva el impulso externo de procesos endógenos. La iniciativa del proyecto, a pesar de las dudas, era bien acogida. Entendemos que la tradición de trabajo, a través de metodologías participativas, que la Universidad de Córdoba a través del ISEC venía desarrollando en este territorio tenía gran responsabilidad en estas percepciones.

En Segura, se percibía una dificultad añadida al cuestionado éxito del proyecto: las grandes distancias físicas, por la orografía de la comarca, que había entre los distintos municipios y por lo tanto entre las personas que estaban interesadas por este proyecto.

"A nivel comarcal, lo que pasa es que hay que buscar la solución, que no siempre es fácil de encontrar, de la superación de las distancias, que en esta sierra es muy importante" (P17)

La Serranía de Ronda fue el territorio donde el punto de partida del proyecto, a nivel de visión y percepciones, era más negativo. Se percibían fundamentalmente dos cuestiones peculiares de su realidad concreta que podían perjudicar el proceso planteado. Por un lado, las personas entrevistadas aludían a que la agricultura no es una actividad principal en la comarca, sino que en la mayoría de los casos se trata de una actividad *a tiempo parcial* (ATP). Esto se percibía como un handicap para procesos participativos como el propuesto, donde se requiere tiempo y esfuerzo. El argumento generalizado era que los productores ATP son menos dados a implicarse en los problemas de una actividad de la que no depende su sustento. Esta realidad no sólo genera una menor motivación en las personas para dedicar tiempo y esfuerzo a resolver problemas de este sector. También hace que estas personas productoras estén más implicadas en otros procesos y actividades, restándoles tiempo libre.

"el problema que tiene la gente también es el tiempo, porque gente que dedique así a la agricultura al 100% hay poca. Hay gente que tiene sus trabajos bien sea en cualquier otra cosa, en cualquier campo, y luego tiene su fin de semana, tiene sus ratos…porque eso ya no existe como antiguamente había tanto allí en el campo, y una tarde que llovía lo tenían libre para cualquier cosa" (P11).
"la primera vez que se planteó algo (…) no hubo nadie, nadie. (…) unos lo han argumentado diciendo, bueno yo no tengo tiempo, yo sí pero no… y al final…(…) porque nosotros estábamos como diciendo a ver… porque yo estoy sólo en el campo… no es que me escaquee pero si hay otra gente con más conocimiento y con más predisposición porque esté únicamente dedicado a lo que es la agricultura" (P10)

Como segunda dificultad específica de la Serranía de Ronda, percibimos una sensación de frustración y descontento con las administraciones locales y regionales. En este territorio expresaban el fracaso de un número importante de proyectos anteriores. E

identificaban el fracaso con una falta de apoyo real o de acompañamiento en el tiempo o por la generación de conflictos que no habían sido manejados, fundamentalmente. El CEDER, la administración que en un principio promovió el proyecto en la zona, era una de las administraciones más cuestionadas. Esto generó una importante desconfianza ante un proyecto gestionado por ésta.

"Entonces se crean estructuras en las cuales (…) no funcionan, en conjunto de reciprocidad y no se promueve a la sociedad, la verdad es que no, lo que se promueve es a los 4, ya, ya hemos pillado aquí un puesto, hagamos aquí nuestra vida y vivimos estupendamente, tanto de unos tanto de otros, la subvención de unos, la subvención del otro…y aquí estamos… Asociación…qué leche de asociación… asociación ¿de quién?, ¿asociación de qué?" (P15)

Con las percepciones iniciales analizadas el proyecto comenzó su andadura. Tras un año y medio de trabajo sobre un proceso colectivo y dialéctico, en el que se fomentó el diálogo y la reflexión conjunta, la realidad que se percibe en los territorios es distinta.

A grandes rasgos, se percibe que el nivel de maduración social en torno al proyecto es elevado en Castril, medio – alto en Segura, y bajo en Ronda. Los dos primeros territorios presentan similitudes interesantes, con grados distintos de madurez y la Serranía de Ronda se distancia de ellos, con una evolución distinta.

En los tres territorios, la principal dificultad detectada a lo largo del proceso es compartida y viene relacionada con el procedimiento innovador planteado. Se trata de problemas relacionados con un planteamiento de dinámicas e implicaciones nada habituales en estos contextos. En este sentido, en las tres zonas se considera un gran obstáculo las inercias y las actitudes pasivas arraigadas en el territorio. El proyecto ha supuesto un paso desde la actitud pasiva y de espera de soluciones externas hacia una actitud responsable y activa para proponer y trabajar colectivamente. Conciben que este proceso de cambio es lento, aunque valoran que a través del proyecto se han iniciado algunos cambios en este sentido.

"desde lejos sí, lo ven muy bien y lo apoyan, pero un poco desde fuera. Apoyan que eso se haga y ven muy bien todo eso. Pero luego, involucrarse le cuesta mucho. (…) de empujón, la gente sí, pero luego si hay que seguir un proceso y hay que…entonces ya la gente, se va animando pero…yo me quedo a este lado" (P29).
"romper inercias normalmente es difícil. Simplemente que no hay que tener prisa. Yo empiezo, siendo poquitos. Bueno, ya seremos más. (…) no es una cuestión que se vaya a resolver en unos cuantos meses. Puedes poner las primeras piedras, los primeros, pero… es un trabajo que tiene que durar mucho tiempo" (P44)
"Son muy pasivos, están esperando que les den, que les hagan. Se han planteado ya varios proyectos y lo primero es hazme algo… no. No, yo no voy a poner ni un duro… vamos a ver, si tú quieres un proyecto para tu finca, tu proyecto, tu dinero, tu negocio, te voy a venir yo, o voy a montar todo esto, a ponerte el proyecto en marcha, te lo voy a vender y tú te quedas sentado esperando el dinero… entonces ahí no…" (P36)

Sin embargo, en Castril / Castilléjar y la Sierra de Segura se percibe que ha habido un proceso de acercamiento y comunicación entre personas, a través del cual han

reconocido una similitud de problemas y de realidades cotidianas en el ejercicio de su profesión. Este reconocimiento mutuo sentó las bases sobre las que se trabajó, de forma satisfactoria, en torno a la problemática compartida. El efecto directo fue el aumento de la confianza en el grupo y en su capacidad de dialogar.

"nos vincula lo mismo, el tema de promoción y consumo de productos ecológicos, pero cada uno es de su padre y de su madre, además bastante diferentes" (P27).
"no hemos tenido muchas diferencias, hemos tenido el grupo todo muy claro, en general todos hemos estado muy de acuerdo en lo que se ha planteado, no ha habido a lo mejor una discusión por algo...no. (…) en ese aspecto muy bien, ha fluido todo muy bien" (P45)

En Castril esta confianza había madurado de tal forma, que se percibía una capacidad del grupo para construir colectivamente procesos endógenos.

"al principio íbamos casi todos por libre, luego ya hay cosas en común, ya por lo menos se hablan en los mismos términos, (…) casi que empezamos a hablar de lo mismo…es lo que más, que los grupos se van juntando ya" (P28)

En Segura, la confianza construida se había traducido en una mayor empatía e implicación, en cierta forma emocional, entre las personas participantes. Esto lo percibían como un elemento de solidez y motivación para el grupo.

"Y lo pensaba la otra noche, digo vamos a ver, ¿cuál es el hilo conductor que nos mantiene? Pues es muy difícil de explicar y muy variado, pero hay ahí algún poso, algo que no se ve para nada, nunca lo vemos entre nosotros pero sabemos que está ahí ¿no?" (P44)

En ambos territorios se concibe el estado del proceso como un germen sobre el que seguir trabajando para que siga dando los frutos que había empezado a reportar. El proceso lo valoran como elemento aglutinador de personas afines en los territorios. Ha servido de oportunidad para continuar trabajando en esta línea.

"hay gente que nos está observando, que les interesa, a pesar de que dijeran que era una tontería o lo que fuera, pero que está gustando porque es una cosa nueva y está en buen momento. Crecerá, pero lentamente" (P25)

De forma generalizada, en estos dos territorios se percibe la necesidad de seguir contando con un acompañamiento técnico, que continúe dinamizando el proceso. Este apoyo vendría orientado hacia la puesta en marcha de las acciones que han surgido a raíz de este proceso sociopráxico.

Entre estos dos territorios, se percibe un nivel de evolución más lento en Segura que en Castril. Lo argumentamos en base a las observaciones percibidas en las entrevistas. En Segura aparecen más incertidumbres y se plantean más dificultades con respecto al proyecto y al proceso. No obstante, no se trata de reticencias o de oposiciones, sino de aspectos más relacionados con el nivel de cohesión y de avance del proceso social, y de un desarrollo del proyecto a un menor ritmo.

En la Sierra de Segura, es destacable sin embargo que elementos que eran percibidos como problemas al inicio del proceso han desaparecido del imaginario de las personas participantes, tras el desarrollo del proceso participativo. Nos referimos, en concreto, al problema de la distancia entre las personas implicadas, que deja de serlo cuando las relaciones personales y afectivas se van desarrollando y la cohesión del grupo se va consiguiendo.

El grupo de la Serranía de Ronda presenta una evolución diferente. A grandes rasgos, se percibe que el proyecto había alcanzado un estado aún de gran inmadurez a nivel de consolidación del grupo. Esto ha sido una consecuencia de un avance dificultoso y muy lento del proceso.

La principal dificultad encontrada se puede entender como un impedimento real que este territorio plantea al desarrollo de este tipo de proyectos. La idea percibida con más fuerza como dificultad, en la segunda ronda de entrevistas, ha sido que la agricultura sea una actividad a tiempo parcial en la zona. La ausencia de profesionales dedicados a tiempo completo a la producción agraria se percibe como un problema. Las personas productoras a tiempo parcial están menos motivadas para implicarse, en tiempo y esfuerzo, en procesos relacionados con esta actividad. Además, son personas que se dedican a otras actividades, por lo que suelen estar más saturados con otras actividades, relacionadas con otros ámbitos de sus vidas. De esta forma, cualquier proyecto que requiera implicación del sector primario va a tener una respuesta pequeña en la zona.

"se ha visto, porque reuniones que ha habido, pues han ido apenas cuatro, de quince éramos cuatro, o sea… y Rocío era uno, Rocío, Anja y… o sea que… ahí se demuestra que sí, que estamos involucrados pero no es nuestro modo de vida, o que no somos profesionales. Quizá lo que nos falta es eso, que nos convirtamos en profesionales. Y cuando nos convirtamos en profesionales y le veamos las orejas ya verás como tiramos…" (P35)
"yo pienso que a casi todos los que están les pasa un poco lo que a mí y ese es el fallo, yo pienso que debería de haber gente que viviera de verdad del tema y ahí está el quid de la cuestión, eso es lo que está fallando" (P36).

Como agravante a esta realidad, las personas que sí se ven motivadas para implicarse en el sector primario y en sus problemas terminan frustrándose y cansándose. Esto genera un círculo vicioso de difícil solución.

"supone un esfuerzo grande el transporte, esperar allí, la vuelta y a veces te encuentras que éramos cuatro gatos ¿no? la verdad es que eso… que te desanima, que te desanima no ver un grupo que está cohesionado, un grupo que sabe lo que quiere, que quiere llegar a tal sitio y tal" (P34).

La característica de un sector primario como actividad a tiempo parcial nos podría indicar que impulsar un proceso sociopráxico de este tipo, en el ámbito agrario y en territorios de este tipo, puede obtener pocos resultados. Una posible opción, dadas las percepciones analizadas, podría ser plantear estos procesos con enfoques más integrales y relacionándolos con otros sectores económicos. De esta forma, se atenderían

problemáticas que podrían responder mejor a la realidad social y económica de estas zonas.

No se plantea que el proyecto haya sido un fracaso, que debería terminar, sino que se valoran ciertos avances, aunque a una velocidad muy lenta. Ante este análisis compartido, que supone una inmadurez del grupo, plantean que debe de seguir existiendo una persona dinamizadora que continúe construyendo el proceso.

"nos preocupa un poco cuando realmente salga la coordinadora, si realmente el grupo va a tener la energía, el tiempo y la motivación suficiente y el respaldo, el propio grupo se va a poder respaldar para salir para adelante. Porque ahora mismo tenemos como punto de contacto y de aunar, como la hacedora de encuentro a Rocío" (P33).

En este territorio, sólo en algún caso se percibe cierta motivación en torno al futuro del proceso y del grupo, bajo una visión optimista y positiva de los mismos.

"la gente es súper, súper, súper estupenda, súper abierta, súper afectiva, súper cooperativa, yo lo veo. Yo te digo una cosa, si a mí me invitan a una reunión y veo que tal, a la segunda que aaaahhh… voy y a la tercera no vuelvo. O sea yo a la gente la veo muy receptiva y muy para adelante" (P35).

Cabe destacar que el problema inicialmente detectado de la desconfianza en las administraciones no aparece en los discursos de las personas entrevistadas. Entendemos que esto puede deberse a una ejecución del proyecto establecida de forma seria y comprometida. El planteamiento conjunto de los objetivos y la planificación, así como un seguimiento continuado de las personas técnicas implicadas, han podido romper esta desconfianza inicial. No obstante, esta dificultad inicial ha podido ser una de las causas de una menor participación de otras personas en el proyecto. Planteamos, por lo tanto, la gravedad de impulsar procesos desde instancias públicas, sin un compromiso real de acompañamiento y de continuidad.

5.5.3. Cambios percibidos en el territorio y en el grupo[143]

Uno de los elementos seleccionados para evaluar la incidencia del proyecto en los territorios han sido las numerosas referencias que en las entrevistas se hace a los cambios percibidos en cada zona.

La evolución experimentada en cada experiencia, como se ha visto en algunos apartados, difiere de las demás, por un lado por sus características físicas diferentes, por otro lado por las singularidades de las personas que las componen y por último por el proceso de dinamización propio seguido.

Como primer elemento emanado de los encuentros periódicos entre los tres territorios, destacamos la participación conjunta de los tres territorios en las Bioferias. Esta

[143] Las citas y alusiones a este aspecto, analizadas en las entrevistas realizadas, se pueden consultar en el anexo X.

actividad respondió a un ofrecimiento de la entonces DGAE: propuso a los grupos implicados participar en estos mercados, a través de un puesto de venta compartido.

La participación real de cada uno de los territorios ha sido diferente y responde en gran medida al nivel de madurez y de cohesión del grupo alcanzado. La implicación del grupo de Castril y Castilléjar ha sido la más activa, participando en todas las Bioferias y asumiendo en la mayoría de ellas la logística y la organización del puesto. El grupo de Segura se ha implicado, a través de productos y de personas, en la mitad de las Bioferias organizadas, apoyando en estos casos la organización y la logística del puesto. El grupo de la Serranía de Ronda no participó en ninguna de ellas, ni con productos ni con personas.

A nivel de cada territorio, ha habido consecuencias directas del proceso de conocimiento mutuo e intercambio, generado a través del proyecto. El haber compartido experiencias y conocimientos y haber facilitado espacios de reflexión compartida ha permitido construir ideas y propuestas colectivamente. Esto ha permitido fortalecer la confianza entre las personas implicadas y establecer relaciones de apoyo mutuo. Las sinergias derivadas de este proceso es lo que tratamos de visibilizar en este apartado.

En los territorios donde el proceso ha funcionado positivamente, Castril y Castilléjar y la Sierra de Segura, se percibe la creación de un tejido social relacionado con el proyecto, que ha permitido la organización y la elaboración de propuestas concretas de acción. En este sentido, las personas implicadas destacan la interrelación generada entre personas productoras y entre ellas y personas consumidoras, a nivel territorial.

"lo que mejor le veo yo al programa este es la…la unión de los agricultores, no por el hecho de la certificación en sí, sino por abordar otros asuntos. Y es que los agricultores están muy,… por lo menos aquí en Castril, estábamos muy desperdigados, sí hacíamos AE pero claro no comercializábamos…entonces lo que mejor le veo yo a esto es eso, lo que está haciendo el proyecto es uniendo a los agricultores, que no es poco" (P38)
"*Me ha dado más la oportunidad de conocer más el campo y a los productores, que llevan otra filosofía de la vida y trabajan de sol a sol, atendiendo a las lunas para plantar y todo eso que me llama mucho la atención"* (P29)
"el avance más grande ha sido la cohesión como grupo. (…) ya no es el recurso del CAFAGE o de una subvención, algo tienes. (…) la coordinación es importantísima entre nosotros… eso es una de las cosas que veo que hay un movimiento diferente, el primer año o el segundo, de este. Yo creo que es importante, por eso, porque no es tanto la "parafernalia oficial" como que vas viendo que hay unión" (P40).

En Ronda, este proceso de intercambio se ha valorado en base a la oportunidad que ha brindado de conocerse y entrar en contacto personas con ciertas afinidades. Las sinergias generadas no pasan de esta percepción, si bien se plantea el potencial de esta interrelación generada.

"has conocido a otra gente, ves cómo piensan, cómo se lo montan y yo creo que aunque la cosa no ha salido tan fuertemente como a lo mejor se esperaba, pero que es una semillita que está sembrada y ya está. Yo creo que sí" (P36).

Por otro lado, se ha valorado especialmente que este proceso, fomentando el conocimiento mutuo, el intercambio y la reflexión conjunta, ha facilitado la adquisición de conocimientos. Esto les ha permitido adquirir ciertas capacidades relacionadas con cuestiones técnicas, organizativas y de autogestión. Asimismo, ha permitido una apertura de mentes y visiones y compartir otros puntos de vista y trabajar conjuntamente.

"No aquí hay quien se lo tomaba de coña y otros, que lo veíamos con un poco más de perspectiva y lo tomábamos más en serio. Y bueno ya casi cualquiera, el otro día cuando Mari, (…) pues fui le dije mira Mari, yo he estado y he controlado la finca y eso, me tienes que hacer y oye, se puso ahí...y antes y ¿tú qué? que tal...y ya vas viendo soltura" (P26).
"hay un grupo que los llaman para cualquier historia de AE y acuden y si levantan la mano y tienen que hacer una pregunta, saben hacerla. Y entonces, está guay, está guay" (P43).
"*vas abriéndote campos, vas abriéndote mentalmente a otras posibilidades. Que no se hace esto siempre como se ha hecho, que hay otras posibilidades de hacerlo (...) el hecho de conocer a la gente, charlar con la gente, relacionarme, captar ideas...poder expresar ideas, para mí es bueno, algo siempre captas, algo siempre escuchas, te da que pensar, te da para ver las cosas desde otro ángulo"* (P38).

Los cambios percibidos a raíz del proceso no sólo se relacionan con el planteamiento de unos espacios de reflexión y de análisis conjuntos. Estos cambios los plantean también como una consecuencia de un proyecto donde han tenido voz para construir soluciones a sus propios problemas. El haberse sentido protagonistas de su propia realidad, con voz y capacidad de propuestas y de acción, ha generado un cambio de actitud hacia posturas más activas. De este modo, se ha facilitado una ruptura en las inercias iniciales de queja y pasividad.

"Yo creo que el gran logro es que se sienten partícipes o se sienten constructores de su vida, en muchos casos lo dicen así, es decir, antes han tenido la posibilidad de ser constructores de...y ahora por lo menos aunque sea en pequeñito, sienten que van teniendo voz y pueden decidir en algunas cosas, pueden incidir en algunas otras" (P25).
"ha sido un ejercicio de puta madre para nosotros para saber que nos podemos organizar y no sólo protestar por lo que hagan mal quien lo haga mal, si lo hacen mal, no sé, sino que para proponer también, no sólo criticar sino también proponer una alternativa y llevarla a cabo. Lógicamente sobre la marcha se va aprendiendo de ir armando cosas que es lo que hemos ido haciendo un poquito ¿no?" (P37).
"ya no oigo tantas quejas, los veo más ilusionados de a ver cómo va a ir esto, más motivación. Más motivación, sí" (P47).

En la Serranía de Ronda se percibe, en coherencia con los discursos ya analizados, una cierta decepción por no haber alcanzado los objetivos planteados. En la mayoría de los casos, no obstante, el proceso incipiente se plantea como un punto de partida, de forma constructiva. En estos casos se valoran por encima de los resultados finales los avances logrados. Lo visualizan como una semilla o germen que se ha sembrado en el territorio.
"Yo creo que hay unión al fin y al cabo de todos los que estamos aquí…" (P33).

Sin embargo, y aunque se haya expresado de forma minoritaria, cabe rescatar el planteamiento de que la frustración que pueden generar unos resultados por debajo de los esperados puede llevar a un desánimo, a la hora de implicarse en nuevos proyectos o procesos. Esto viene a agravar la situación de partida de una cierta desconfianza y apatía por trabajar en proyectos colectivos.

"cuando las experiencias que hemos tenido en la mayoría de los casos no han sido tan positivas, entonces la motivación que te queda para seguir adelante, no es que sea mucha ¿no? por lo menos a corto plazo, es decir, si hemos terminado con una experiencia que no ha dado sus frutos, por los motivos que hayan sido, y ahora resulta que dentro de nada me proponen otra experiencia y la cosa tampoco está tan clara… entonces la gente, como que no se engancha ¿no?" (P34).

Los elementos emanados del proceso, según sus propios protagonistas y en los territorios donde los resultados han sido más positivos, han generado unas iniciativas de autogestión y autoorganización que sienten propios. Se ha producido el paso de la actitud de queja ante la administración, a la iniciativa y la construcción de propuestas propias.

En Castril y Castilléjar, la creación de un tejido social basado en relaciones de confianza, entre productores/as y con consumidores/as, unido a la adquisición de ciertas capacidades de organización y a sentirse protagonistas de sus propios procesos, se ha plasmado en ciertas iniciativas.

El aspecto más relevante ha sido la búsqueda y desarrollo de mercados locales, a través de la organización de los/as productores/as y el contacto directo con consumidores/as. El dinamizador del proceso en el territorio lo expresa de esta forma: *"Hay mucha gente por ejemplo, José María, que de ser un agricultor de exportación de tomate cherry, pasarse totalmente y dejar la exportación, y pasarse a todo lo que son mercados locales. Y luego decir que le va igual o mejor que con la exportación, pero que además se siente comprometido con su gente, con su tierra, con su organización, etc."* (P25).

A mediados del proceso, este grupo ya había tomado la decisión de formar una asociación de producción y consumo ecológico que diera identidad y respaldo al trabajo que se venía realizando. De esta forma, surgió la Asociación BioCastril, con el objetivo de promover y fomentar la producción y consumo de alimentos ecológicos y abordar la comercialización a través de canales cortos. Esta asociación dio origen, a los dos años de desarrollo del proyecto, a la Sociedad Cooperativa Andaluza EcoAltiplano, para incidir en los aspectos relacionados con la organización de la comercialización conjunta.

En verano de 2008, este grupo tenía establecidos tres biopuntos en mercadillos locales de Castril y pueblos cercanos; abastecía a 6 colegios de tres comarcas granadinas; participaba en las Bioferias organizadas por la DGAE, con un puesto propio aparte del puesto compartido por todos los grupos de SPG andaluces; y había llegado a un acuerdo con la cooperativa de producción y consumo ecológicos de Granada capital, El Encinar, para abastecerlos con un volumen predeterminado de productos ecológicos a precios negociados de forma transparente.

En la Sierra de Segura, la evolución de las acciones impulsadas por el grupo ha sido parecida a la del territorio de Castril, si bien empezaron más tarde y a un ritmo menor.

A finales de 2007, el grupo de personas implicadas en el proceso reactivaron una asociación existente en la zona, pero sin actividad desde hacía cerca de cinco años, llamada Ecosegura. El objetivo que se plantearon fue el de organizar la producción y abastecer diferentes puntos de los mercados locales de la comarca, así como el punto compartido con los otros territorios en las Bioferias.

En verano de 2008 (2 de agosto), la asociación convocó a una reunión en el corazón de la Sierra de Segura (Río Madera), a todos los productores ecológicos serranos (la mayoría de ellos sin certificación). El objetivo de esta reunión era activar las relaciones entre productores, promover la coordinación y organización de la producción y facilitar su salida a los mercados próximos de los pueblos de la comarca.

En esta reunión se planteó la idea, en proceso de puesta en marcha, de establecer un punto de acopio de productos en Puente de Génave, con el fin de abastecer a un grupo de consumo en proceso de formación, a través de un sistema de pedidos de cestas semanales por Internet.

A nivel de apertura hacia la población en general y su entorno, colaboraron con las jornadas *Biosegura,* celebradas en agosto de 2008 en Beas de Segura, a través de la organización de una parte de las actividades del programa.

La evolución de la Serranía de Ronda explica en parte la sensación de no haber alcanzado los objetivos esperados. El menor nivel de madurez y de cohesión grupal alcanzados en Ronda se traduce en que no ha habido ninguna iniciativa real y visible por parte de las personas implicadas en el grupo. Si bien había una cierta motivación para crear un grupo de consumo, en verano de 2008 no había terminado de cuajar.

5.5.4. A modo de conclusión

La visión inicial que las personas implicadas en el proyecto tenían sobre los sistemas de garantía de los productos ecológicos era estrecha, en el sentido de que no concebían otras posibilidades u opciones más allá de las auditorías por tercera parte. Entre otras causas, podemos identificar un reglamento oficial que cierra la posibilidad a cualquier otra opción y un desconocimiento absoluto sobre la existencia de otros posibles mecanismos.

Asimismo, se daban ciertas inercias en los territorios que imposibilitaban o limitaban el surgimiento de iniciativas grupales, encaminadas a resolver las problemáticas comunes que les afectaban a las personas implicadas. Como características de estas inercias hemos identificado dos percepciones de las personas entrevistadas con respecto a su entorno social: por un lado el individualismo, lo que generaba desconfianza ante los demás, sentimiento de soledad y una escasa iniciativa para implicarse en procesos

grupales; y por otro lado la pasividad, generada por la actitud generalizada en el territorio de esperar las soluciones a sus problemas desde la administración.

El imaginario predominante en las personas implicadas en el proceso, al año y medio de desarrollo del proyecto, era distinto. Se concebía la idea de que los sistemas de garantía en los productos ecológicos podían ser algo más que un simple examen técnico. Podían ser el fruto de todo un proceso y unos mecanismos de confianza y de relaciones de proximidad, a través de las cuales el propio contexto social avalaría de forma continuada lo que se estaba haciendo, sin necesidad de figuras técnicas ni exámenes anuales.

Además, se confiaba en el contexto social en el que se encontraban para construir procesos grupales. Concebían la posibilidad de impulsar acciones basadas en relaciones personales de confianza y de apoyo mutuo. Estos elementos podían configurar un sistema de garantía en las producciones ecológicas, así como resolver otros problemas comunes como el de la comercialización o el asesoramiento técnico y la formación, entre otros.

El paso del imaginario inicial al detectado tras año y medio de trabajo fue posible gracias a un proceso que promovió ciertas rupturas en nuestros territorios. Estos cambios se percibieron fundamentalmente en las inercias y las visiones arraigadas en base a, quizás demasiados, años de medio rural pasivo y políticas públicas asistencialistas. Y se centraron fundamentalmente en establecer un proceso en el que se generaron espacios de encuentro, de discusión y de reflexión conjunta entre las personas implicadas. Estos espacios facilitaron el intercambio de realidades y experiencias, generando varios efectos:

a. El reconocimiento mutuo, sintiendo que en realidad no estaban tan solos/as como creían. Esto permitió identificar que había otras personas en sus contextos sociales que tenían sus mismos problemas y sentían e identificaban causas, amenazas y posibilidades similares.
b. La construcción, a partir de este reconocimiento, de relaciones de confianza y de apoyo mutuo. Esto permitió tomar conciencia de la capacidad en grupo de enfrentar los problemas compartidos y plantear soluciones. De esta forma, no sólo se fortalecía su capacidad de incidencia ante la administración, sino también de llevarlas a cabo ellos/as mismos/as
c. El aumento de la seguridad y de la confianza en las capacidades del grupo, para iniciar procesos de autoorganización y autogestión. Esto les dio un cierto impulso para plantear sus propios procesos y acciones
d. La construcción colectiva de conocimientos en profundidad en torno a las cuestiones trabajadas, especialmente la credibilidad y los mecanismos de garantía.

A través de este proceso, no sólo se han transformado el imaginario y determinadas inercias en los territorios, así como conceptos y aprendizajes. También determinados problemas o dificultades expresados al inicio habían dejado de serlo tras el año y medio de encuentros, reflexiones y proceso sociopráxico.

Con estos resultados, planteamos que la realidad de pasividad e inercias individualistas detectada en los territorios implicados al inicio puede revertirse a través de procesos de tipo dialéctico. En nuestros contextos es poco probable que determinados proyectos, de carácter agroecológico, surjan de forma espontánea o endógena, por las inercias detectadas. Sin embargo y como muestran los resultados obtenidos en este proyecto, planteamos que procesos de tipo agroecológico pueden ser impulsados y trabajados en nuestros territorios, a través de metodologías participativas del tipo a la planteada en este proceso. El punto de partida deben ser problemáticas o "dolores" identificados por los territorios, como elemento intrínseco al concepto de participación trabajado en este proceso.

Partiendo de esta conclusión, hemos detectado determinadas limitaciones a este tipo de procesos inducidos. Planteamos estos condicionantes como elementos aprendidos a lo largo del proceso, que pueden dar luz sobre otras iniciativas a la hora de plantearlas y trabajarlas.

Por un lado, el perfil de las personas responsables de la dinamización de estos procesos en los territorios es clave. Determinados aspectos ayudarán a una mejor adaptación del proceso a la realidad social y otros la dificultarán. Como elementos positivos, destacaríamos el conocimiento y la experiencia previos en procesos participativos. De esta forma la persona que dinamice el proceso tendrá incorporada cierta reflexión en profundidad en torno a esta lógica de trabajo y concebirá de modo horizontal y equitativo la interacción entre personas de perfil técnico, productoras y consumidoras.

Asimismo, un conocimiento en profundidad de los procesos productivos, que permitan en determinados momentos asesorar y resolver problemas técnicos al grupo productor implicado. Esta capacidad facilitará: a) la interacción entre la persona técnica y el grupo productor; b) una mayor implicación de los productores, al sentir una posibilidad de apoyo en aspectos fundamentales de su actividad cotidiana; c) la confianza del grupo implicado hacia la persona dinamizadora.

El tercer aspecto valorado positivamente en la figura de dinamización de este tipo de procesos es la capacidad organizativa y planificadora. Establecer objetivos claros y alcanzables, en cada etapa, que sean evaluables, permitirá ir percibiendo los avances que se van consiguiendo. De este modo, la implicación requerida en el proceso se irá viendo recompensada y permitirá de este modo mantener la motivación del grupo. La sensación de pérdida de tiempo o de no alcanzar resultados u objetivos concretos restará motivación y, por lo tanto, implicación en estos procesos de tipo social.

Como segundo elemento a tener en cuenta como posibles limitantes para este tipo de procesos participativos en nuestros territorios es la importancia socioeconómica que ocupe la actividad agraria. En algunas de nuestras zonas rurales, la actividad agraria ha perdido peso pasando a ser una actividad secundaria o de dedicación a tiempo parcial. Si los procesos participativos se enmarcan en el ámbito agrario y su problemática, habrá que tener en cuenta que la implicación en este tipo de proyectos de las personas productoras a tiempo parcial será menor. Bien por falta de tiempo, bien por estar implicados en otras actividades relacionados con otros ámbitos de sus vidas, o bien por falta de interés ante una actividad de la que no depende su sustento económico. En estos

casos, puede resultar recomendable plantear estos procesos sociopráxicos de forma más integral, incluyendo otras actividades económicas de la zona y trabajando la reflexión y las discusiones grupales en torno a problemáticas más interrelacionadas y amplias.

Un tercer elemento que puede dificultar este tipo de iniciativas y procesos en los territorios lo rescatamos de zonas donde ha habido experiencias negativas de proyectos impulsados desde administraciones o entidades locales o regionales. Este fracaso de proyectos anteriores suele venir dado bien porque no han sido cerrados correctamente, bien porque no han cumplido con los compromisos adquiridos o bien porque han generado conflictos locales que no se han sabido resolver. Las sensaciones de frustración y de apatía que estas experiencias fracasadas generan frente a nuevas propuestas serán cuestiones que dificultarán el desarrollo de nuevos proyectos.

En este sentido, un conocimiento en profundidad de los analizadores históricos de la zona, en base a experiencias anteriores con determinadas administraciones o entidades, será muy útil para definir las alianzas y estrategias que se pueden desarrollar a nivel local, que facilitarán el proceso o lo dificultarán.

Como último elemento de conclusión planteamos que si bien este tipo de procesos, a través de metodologías participativas como la descrita, pueden servir de elemento catalizador de iniciativas y de cambio social, se detecta que las inercias de pasividad encontradas son difíciles de cambiar. En estos panoramas, creemos que se requiere de procesos de medio y largo plazo y que no deban plantearse este tipo de proyectos con limitaciones de tiempo a corto plazo. El acompañamiento técnico será una necesidad constante de estos procesos en el largo término y una retirada prematura puede generar sensación de abandono, frustración y desconfianza.

5.6. Evaluación participativa de la metodología y los procesos de dinamización seguidos

El último apartado de este capítulo, dedicado a los resultados obtenidos en el proceso andaluz de construcción y puesta en práctica de un SPG, lo queremos reservar para trabajar una cuestión que nos parece fundamental. Entendemos que cualquier proceso de investigación o cualquier política pública implantada deberían ser evaluados por las propias personas implicadas en ellos. En el caso del proyecto trabajado, serían las personas productoras, consumidoras, dinamizadoras y coordinadoras que han construido el proceso.

Si bien el enfoque metodológico ha permitido que la construcción del proceso recaiga en manos de las propias personas protagonistas, hay dos elementos que han estado impuestos desde el planteamiento de la investigación y la política pública diseñadas: la metodología de todo proceso y la dinamización llevada a cabo en cada uno los territorios.

La evaluación de la metodología nos servirá para contrastar con las propias personas implicadas la viabilidad y oportunidad de las propuestas de la IAP y de los enfoques

sociopráxicos analizados anteriormente[144]. La contrastación la haremos en base a la mayor o menor comodidad con que las personas implicadas han participado, en un proceso con un enfoque metodológico que les ha requerido esfuerzo y tiempo y que se aleja de las políticas públicas fomentadas a través de subvenciones.

La percepción de las personas implicadas en torno al proceso de dinamización llevado a cabo en cada territorio nos permitirá completar la discusión realizada en torno a la importancia que el perfil y las actitudes de la persona dinamizadora tiene en la evolución y los resultados de un proyecto de este tipo.

5.6.1. Sobre la metodología general del proceso[145]

La metodología de trabajo planteada en el proceso se basó en las propuestas de la IAP, con dos elementos específicos: por un lado, el objetivo del proceso se centraría en construir una alternativa a la certificación por auditoría, que solventase los problemas que esta planteaba a las personas implicadas; por otro lado, que la construcción de la alternativa se haría desde cero, sin ninguna referencia o modelo previo, de manera que fuese un modelo *sui generis* de los territorios implicados. En torno a esta propuesta de trabajo, podemos rescatar diferentes ideas y percepciones de las personas implicadas.

Se ha valorado de forma muy positiva la propuesta de que sean las propias personas que se enfrentan, en su día a día, a la problemática tratada, quienes construyan la alternativa. La oportunidad brindada de darles voz y capacidad propositiva y de trabajar de forma grupal, se valora especialmente: *"que se haya dado la oportunidad, que se pueda hacer por los que de verdad…que eso, no ir a la contra ni comparándolo sino que tenga su propia identidad ya desde el principio, una identidad mucho más real que la de cuatro, no voy a criticar ni hablar de técnicos, sino hablar de quien está ahí, esas propuestas o ideas de los que nos lo curramos en el campo ¿no?"* (P37).

No obstante, esta propuesta de trabajo ha sido una de las causas por las que algunas personas empezaron en el proyecto y lo dejaron a mitad de camino. La sensación de sentirse doblemente agraviados, por un lado por enfrentarse a los problemas que la certificación por auditoría les genera y por otro lado por tener que implicarse y trabajar en solucionar estos problemas que, en definitiva, no han creado ellos/as: *"si tú sigues pagando eso y encima haces el esfuerzo personal de montar lo otro, siempre cae el peso sobre el pequeño productor. Mientras que la Junta de Andalucía que tiene un peso inconmensurable, se lava las manos de mientras. (…) mientras estás tú tirando de la cuerda. Debería ser al revés"* (P21)

La propuesta de trabajar la alternativa a la certificación por tercera parte desde cero, sin modelos o referencias directas en torno a otras experiencias[146], ha sido también valorada

[144] Se trata de contrastar la evaluación realizada con las propias personas implicadas y la que hemos extraído en base al análisis de la evolución de los discursos

[145] Las citas y alusiones a este aspecto, analizadas en las entrevistas realizadas, se pueden consultar en el anexo XI.

en general de forma muy positiva. Se considera que de esta forma se ha facilitado la asunción, como algo propio, del modelo construido y una implicación más directa de las personas participantes: *"si ya copiamos un modelo de otro sitio, vosotros traéis el modelo y nosotros lo aceptamos, pues está bien pero no te enteras de tantas cosas ¿no? no participas tanto ni..."* (P32).

También en relación a esta decisión metodológica, ha habido voces disidentes, minoritarias en todo caso, que planteaban que este exceso de libertad generaba incertidumbre y sensación de desconcierto. Según estas percepciones, esto desmotivó a algunas personas a continuar en el proceso. Planteaban que hubiera sido más fácil trabajar en torno a alguna propuesta concreta, sobre la cual criticar, cambiar, completar, etc. Estas opiniones se basaban en la idea de que los/as productores/as no estaban acostumbrados/as a tener este poder y les faltaban conocimientos y capacidades para poder construir un modelo realmente creíble y fiable desde cero, sin referencias: *"lo mejor era (…) que él*[147] *diseñara un sistema de certificación social y que lo aprobaran oficialmente en una puesta en escena. (…) él ya conoce todos los parámetros también, pues cuál sería nuestro sistema, el más sencillo posible, con este tipo de registro, que la forma de evaluar sea esta y tal, lo más sencillo posible. Y (…) como un experimento y ponerlo a prueba, es decir, directamente. Yo creo que de esa forma los agricultores verían si es mucho follón, si no es mucho follón etc."* (P24).

Es interesante destacar que, en todos estos casos, las personas con esta percepción han sido bien dinamizadores, bien personas con un papel técnico en el territorio al que pertenecen. Ninguna persona productora ni consumidora ha expresado esta idea en las entrevistas realizadas.

En relación a los encuentros interterritoriales organizados, la percepción de las personas participantes ha sido muy positiva. Se ha valorado el trabajo realizado en ellos, las técnicas utilizadas y los resultados obtenidos. Expresan que, gracias a estos encuentros, se ha fortalecido el trabajo en los territorios, así como el intercambio de experiencias y de realidades entre los mismos: *"se insistió también mucho de reunirnos con otros grupos de otros lugares como se hizo en el hotel ese, pues porque era un campo de trabajo bueno, de hecho Tere vino muy, muy contenta de esa reunión porque dice que sí que siente que se avanzó mucho. Que el hecho de trabajar diferentes personas en diferentes grupos, con ese mismo fin… y que son muchas opiniones y siempre salen muchas más cosas interesantes ¿no?"* (P46).

En La Serranía de Ronda, donde los resultados a nivel de cohesión de grupo y de acciones emergentes a partir del proceso han sido escasos, se ha expresado la sensación de que los plazos planteados para el proyecto han sido excesivamente dilatados en el tiempo. Para estas personas, esta dilación ha desmotivado a algunas personas implicadas en un principio. Este sería uno de los motivos por los que no ha terminado de cuajar el grupo en este territorio: *"yo básicamente lo que encuentro en el proyecto es que lo hemos dilatado tanto que al final la gente se ha ido disolviendo"* (P38).

[146] El conocimiento profundo de otras experiencias por parte de la investigadora facilitó le planteamiento de la metodología, y de las guías de trabajo y las planificaciones intermedias, pero en ningún momento se facilitó a las personas implicadas los modelos ya construidos y trabajados en otros territorios.
[147] Se refiere al dinamizador del territorio

A modo de recapitulación, cabe destacar el grado de satisfacción generalizada en torno a las propuestas metodológicas planteadas. Se valora positivamente el proceso participativo en sí, a través del cual se ha dado voz a las personas afectadas por las problemáticas planteadas y han podido plantear sus propias soluciones. También se estiman las sinergias y aprendizajes generados a través de los procesos de encuentro y de reflexión conjunta llevados a cabo. Asimismo y de forma general, se valora positivamente el haber construido el modelo alternativo desde cero, sin referencias ni documentos previos que marcaran pautas o condicionaran el diseño. Se considera que de este modo el modelo resultante lo sienten propio en su totalidad.

Sin embargo, los procesos participativos de este tipo pueden no encajar con un determinado perfil de personas que perciben que estas metodologías suponen un esfuerzo extra en tiempo y esfuerzo que no están dispuestas asumir. De este modo, estas personas quedarán fuera, por autoexclusión, de los procesos grupales que se crean a través de estos procedimientos.

Asimismo, estos procesos son difíciles de trabajar para personas con formación y profesión técnica, ya que suelen mostrar, en general, una cierta desconfianza en las propias capacidades de las personas *no técnicas* y suelen plantear procesos más dirigidos y asistidos. Las percepciones percibidas trasmiten la convicción de que la formación técnica da mayores capacidades para entender y elegir las mejores opciones para los territorios. Sin embargo, las personas no técnicas no expresan sentimientos de desborde o incapacidad para abordar las etapas que el proceso iba planteando.

En este sentido, estas metodologías plantean varios retos para las personas de perfiles técnicos:

a. Deconstruir la percepción de superioridad de la formación técnica, a nivel de capacidades y de conocimientos, con respeto a productores/as
b. Entender el aprendizaje y la adquisición de conocimientos y capacidades que se facilitan a través de estos procesos, que cambian las lecciones unidireccionales por procesos de reflexión e intercambio grupales[148].
c. Asumir que el protagonismo de estos procesos debe concedérsele a las personas implicadas desde su convicción, no a través de un salario. Este protagonismo conllevará una cierta invisibilidad de las figuras técnicas, cuya función no es la de dirigir o marcar, sino la de dinamizar, acompañar y facilitar el entendimiento en el grupo.
d. Asumir estos elementos de las metodologías participativas supone incorporar que en muchos casos se puede no estar de acuerdo con los resultados o las propuestas obtenidas.

[148] Esto va en la línea de lo que Paulo Freire aportó bajo el nombre de "Pedagogía de la liberación" (Freire, 1977) y que es difícil de incorporar por técnicos que tienen sus imaginarios construidos en base a la convicción de la superioridad de su rol y su función de "iluminar" y "salvar" a los productores. Esta reflexión se ha presentado en el marco teórico de la presente tesis, cuando hemos profundizado en el concepto de participación en la construcción de conocimiento y de la Agroecología como enfoque científico.

La propuesta y el trabajo en los encuentros interterritoriales han sido valorados de forma positiva. Destacan que, a través de estos analizadores construidos, se ha fortalecido el trabajo propio de cada territorio, ya que permitieron percibir que sus realidades eran compartidas en otras zonas, es decir, que no estaban solos/as tampoco a nivel de territorio.

Por las percepciones captadas en la Serranía de Ronda, como territorio con ciertos problemas para enfrentar este proceso, podemos considerar que en zonas donde este tipo de propuestas metodológicas no funcionen de forma fluida, por las razones que sean (algunas de ellas ya las hemos analizado en este mismo capítulo), puede ser aconsejable plantearlas con plazos de tiempo más cortos y de forma más intensiva. Un mayor ritmo y unos resultados visibles a más corto plazo pueden evitar la desmotivación, aunque habrá que asumir una menor profundidad a nivel de reflexión y de cambio social en el proceso. En determinados territorios y en determinadas temáticas puede ser una forma de preparar el camino para posteriores procesos más profundos y de más largo plazo.

5.6.2. Sobre el trabajo de dinamización[149]

Las diferentes características de cada uno de los territorios, así como de las propias personas dinamizadoras de los mismos, hace que los elementos evaluados en torno a la dinamización llevada a cabo en cada zona sean diferentes.

Este análisis lo hemos realizado en base a la percepción de las personas implicadas sobre el proceso de dinamización seguido, profundizando en los aspectos que señalan tanto en positivo como en negativo. En base a esto, hemos destacado aquellos aspectos de la dinamización que han facilitado el desarrollo del proyecto en los territorios y aquellos que lo han dificultado. Con estos elementos podemos establecer aquellos perfiles aconsejables para este tipo de proyectos, complementando de este modo el análisis que hemos realizado en la discusión final de los resultados de tipo dialéctico[150]. Nos permite evaluar los efectos que determinadas fortalezas y debilidades en la dinamización pueden tener sobre los territorios y los procesos de tipo participativo.

Un elemento valorado es la capacidad de la persona dinamizadora para motivar la conformación y organización del grupo, trasmitiendo ilusión y facilitando la implicación de los/as demás.

"da mucha alegría que gente como vosotros vengáis porque sois los que más estáis trabajando y luchando con tantas ganas, los que más ilusión le ponéis a todo. Lleváis mucha carga, de los trámites, de la gente que llega tarde…esa conciencia no se le ocurre a nadie hacerlo, me parece muy importante y muy fuerte" (P5)

[149] Las citas y alusiones a este aspecto, analizadas en las entrevistas realizadas, se pueden consultar en el anexo XII.

[150] El perfil de las personas dinamizadoras contratadas se ha presentado en el subcapítulo 1.1.1.; un primer análisis de la influencia de este perfil en la evolución del proceso, a nivel de resultados sociopráxicos, se ha trabajado en el subapartado 2.4.

Esto falla cuando se utilizan determinados instrumentos o herramientas que lejos de motivar la implicación, la desincentivan por no estar adecuadas a los contextos donde se incide.
"Un poco como que Mariano nos explicó lo de la certificación social y nos dio el manual…que recuerdo que lo leímos tres personas… Estaba en brasileño…y allí no entendía nadie, nosotros nada más…" (P21) [151]

Por otro lado, se valora la capacidad de la persona dinamizadora para conducir grupos heterogéneos. En estos contextos, se aprecia la transmisión de confianza en el grupo y la mediación entre personas diversas, pues permite suavizar diferencias y evitar conflictos históricos que haya en la zona.

"*nosotros que nos tocó en suerte dinamizar...si le toca a otro lo mismo no sacáis nada...eso está claro...me imagino que en otras zonas habrá pasado lo mismo. Que aquí nos conocemos todos y nos las tenemos guardadas de una vez para otra y no...si no los juntas ni a su madre. Entonces, el agente externo dinamizador está muy bien..."* (P26).

"mi punto de vista es que Rocío ha intentado involucrar a demasiada gente (…). Yo veía que como se difuminaba un poco la línea de trabajo por querer involucrar a mucha gente que andaba muy perdida. Y estaba en charlas con amas de casa, que el marido tenía una huertecita en ecológico…mezclaban allí…hombre que estaban allí… horroroso" (P13).

Otro elemento destacado por las personas entrevistadas es el tema de las reuniones. En este aspecto es fundamental saber establecer etapas y actividades con objetivos claros y evaluables. Estos objetivos deben ir acompañados de técnicas de dinamización de la reunión o grupo que permitan su consecución. El resultado de reuniones donde esto no esté bien planteado generará sensaciones de pérdida de tiempo. Esto implica, directamente, desmotivación y una menor implicación.

"lo primero ha sido ir llevando un proceso paralelo, si se quiere, de montar una organización, de que tengan confianza en su organización, básicamente poniendo objetivos por etapas, objetivos alcanzables, porque eso ha ido haciendo que la gente sienta que la organización funciona. Eran pequeños objetivos, pequeños logros, pero mira, se han cumplido. Para una siguiente etapa, eso ha sido importante" (P25).

"hay muy poca solidez en el planteamiento. ¿Por qué hay muy poca solidez? Porque faltan elementos de construcción de esa idea. Yo puedo tener una idea pero ¿cómo construyo esa idea? Y no es difícil, venga yo quiero hacer esto, a ver qué necesito para hacer esto, necesito unos escalones que tienen cien pasos y no me puedo saltar ni uno…" (P22).

[151] Este modelo lo habíamos facilitado a los dinamizadores y coordinadora técnico – política en el proceso de formación interna llevado a cabo al inicio del proceso, pero se había explicitado claramente que como regla metodológica partiríamos de cero en la construcción de la alternativa andaluza. Habíamos establecido no utilizar ninguno de los modelos de otras experiencias con los que contábamos, excepto como referentes para la planificación metodológica

"a veces el tiempo y… ir allí para qué, digo bueno, y qué he sacado yo en claro de dos horas y media que he estado… la verdad, merece la pena, no merece la pena… a veces sacas cosas en claro (…) Tampoco da tiempo en reuniones a debatir sino a lo que… la información que nos traen de fuera y ya está ¿no? a ver eso… pero tampoco, se viene con un debate interno entre nosotros de que cómo está funcionando la cosa… tampoco se ha dado tanto…" (P34).

El cuarto elemento que podemos destacar como positivo en un proceso de dinamización de este tipo es saber captar todas las motivaciones o dolores que mueven al grupo a iniciar el proceso. A partir de ellos, saber conjugar intereses y combinar objetivos diferentes en una misma reunión y en la planificación por etapas del proceso. De esta forma, las personas participantes solucionan, con su implicación, diferentes problemas que están relacionados con distintos aspectos que les preocupan. El sentimiento de satisfacción y de recompensa, en estos casos, es mucho mayor. Es una forma de mantener la motivación del grupo y de sentir una efectividad en el esfuerzo en tiempo que requieren estos procesos.

"*inicialmente ellos plantean la parte económica, entonces los mercados locales, articularse y esas cosas. Pero también otras necesidades de vincularse con otros productores, con otras cosas o con ellos mismos, porque ellos tenían su parcela y no conocían la parcela del otro. Esta necesidad de vinculación, que aparentemente no era una necesidad, en todo caso se vuelve un valor después"* (P25)

El quinto elemento que destacamos como facilitador de este tipo de procesos es la capacidad de crear un ambiente afectivo y ameno de trabajo, lo que se facilita convocando las reuniones y proponiendo actividades en lugares propios o de interés para las personas implicadas: las fincas de algunas de ellas por ejemplo.

"lo hemos hecho de una manera muy amena,(…) hemos cogido un día, pues ha sido...pues el domingo que hemos estado de convivencia y hemos tenido todo el día para hablar, de transmitirnos cosas. (…) ha sido muy liviano, yo creía que iba a ser más complicado ¿no?" (P18).

En sexto lugar, es importante que las personas dinamizadoras muestren una elevada capacidad de trabajo y de implicación en el proyecto, ya que le dará legitimidad para movilizar e impulsar el proyecto en el contexto donde se desarrolla y motivará la participación. La percepción de una implicación por debajo de lo estimado como adecuado puede llevar a un desánimo de las personas implicadas. Esta sensación dificultará el proceso de creación de grupo y de relaciones de proximidad y confianza.

"la perseverancia que ha tenido Rocío ¿no? de estar muy encima, muy atenta a todo, siempre muy abierta si alguien no ha podido ir, cuando ha ido, o le ha echado la bulla pero luego le ha dado una sonrisa ¿no? que ha tenido mucha estrategia de a la vez de implicar a la gente que se cree un compromiso en el proyecto, pero a la misma vez, de abrirle la puerta (P33).

"(el dinamizador) *también tendrá muchas cosas y tampoco llega a comunicarnos, porque se le olvida enviarnos mail y tal y cual, llaman y no está ¿sabes? que siempre hay ahí un problema de comunicación que entorpece"* (P47).

Un aspecto negativo destacado en algún caso ha sido la percepción de una escasa difusión del proyecto. Se critican aquellas situaciones en las que la información sobre el proceso en marcha la han recibido de forma casual, cuando consideran que en estos territorios es relativamente fácil hacer una difusión amplia y llegar a más personas, por sus tamaños. Esta cuestión, sin embargo, es justificada desde alguno de los dinamizadores como una decisión consciente. Las motivaciones para optar por esta estrategia se basan en la preferencia por iniciar el trabajo con un grupo pequeño, que permita de forma más fácil construir y consolidar el proceso, frente a un grupo mayor que hace más difícil su conducción o donde puede darse una mayor divergencia de opiniones. Se parte de la idea de que a partir de una cierta madurez en el grupo inicial, entonces se puede ampliar a nuevas personas de una forma más sólida.

"Es preferible que se monte gente a una cosa que está caminando (…), a gente que se monte cuando la cosa recién empieza a funcionar. Entonces te la trastocan totalmente. Al menos, es lo que hemos conversado y es una estrategia de dinamización que se ha planteado, de primero un grupo consolidado y luego que empiece a irradiar" (P25).

Si bien este procedimiento puede facilitar el trabajo de dinamización, se pueden plantear algunas posibles debilidades. Si el grupo que protagoniza este proceso es pequeño, otras personas del territorio habrán perdido la oportunidad de participar en los espacios colectivos de reflexión y de intercambio generados. De esta forma, se habrá perdido la oportunidad de colectivizar el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, de transformación de imaginarios y de construcción de un proceso de cambio social en el territorio. La capacidad de influencia en el territorio del grupo y del proceso será menor o más lenta. Por otro lado, las personas que se quieran insertar en la iniciativa una vez consolidada, además de haberse perdido todo el proceso vivencial, es posible que tengan un sentimiento de participación y de implicación menor, al no haber sido partícipes de su construcción desde el principio. Esto puede generar diferencias de poder y de capacidades entre las personas veteranas y las nuevas incorporaciones y puede traducirse en estructuras reales menos horizontales.

En los diferentes procesos de dinamización llevados a cabo en cada territorio se percibe la experiencia y el conocimiento de la persona dinamizadora, en torno a procesos participativos y sociopráxicos con grupos productores y consumidores. Por un lado, será una condición fundamental que la persona responsable de esta tarea muestre una elevada capacidad de captar los "*dolores*" reales de las personas interesadas. De esta forma podrá orientar y adaptar los objetivos y estrategias del proceso hacia aspectos que motiven e impliquen mejor a las personas participantes.

Por otro lado, es importante la capacidad de dinamizar reuniones de la persona responsable, a través de: por un lado, técnicas que permitan cumplir objetivos claros y; por otro lado, el fomento de un entorno agradable y cómodo en estos encuentros, adaptado a las personas implicadas. Esta capacidad de la persona dinamizadora deberá ir acompañada de una dedicación a tiempo completo a esta actividad. De este modo se

garantizará una mejor respuesta a las demandas puntuales que vayan surgiendo a lo largo del proceso y se generará una mayor confianza de las personas participantes. Los efectos de una dedicación a tiempo completo se verán fortalecidos por la capacidad que la persona dinamizadora tenga de planificar detalladamente el proceso y la estrategia a seguir por etapas. Esto supone establecer objetivos y procedimientos claros en cada una de las fases que sean compartidos por el grupo. De esta forma, se podrá ir evaluando el grado de avance del proceso y se irá manteniendo e incluso aumentando la motivación de las personas participantes, al tomar conciencia de los avances y de las propias dificultades.

6. SISTEMATIZACIÓN COMPARATIVA DE OTRAS EXPERIENCIAS DE CERTIFICACIÓN ALTERNATIVA EN EL MUNDO

Las iniciativas de garantía participativa, si bien han funcionado desde hace décadas en algunos casos[152], han empezado a adquirir cierta fuerza y presencia a nivel internacional en los últimos años, fundamentalmente por dos razones (Lernoud y Fonseca, 2004: 6-7). Por un lado, la complejización burocrática que los procesos de certificación por tercera parte han alcanzado, a través de su regulación y normalización a nivel internacional y regional[153]. La exclusión que estas normativas generan ha llevado a una creciente necesidad de volver a las raíces del movimiento de producción ecológica y a procesos controlados y construidos desde las propias personas productoras, donde puedan expresar sus valores y su identidad. Por otro lado, el número creciente de grupos productores que están dirigiendo sus producciones hacia mercados locales y de proximidad. En estos contextos, otros modos de generación de credibilidad son factibles, lejos de la complejidad y los elevados costes de la certificación por tercera parte.

El punto de inicio del proceso de fortalecimiento de estas iniciativas, a nivel internacional, lo podemos ubicar en el Seminario de Torres, celebrado en Brasil en abril de 2004[154]. Fue el primer evento donde iniciativas de SPG de todo el mundo (excepto de Europa) se encontraron para analizar sus realidades y sus propuestas de forma conjunta. En este encuentro se dieron cita cerca de 20 experiencias de América, Asia y África. Los objetivos se centraron en identificar y sintetizar: 1º elementos clave y característicos que identificaban estas experiencias frente a la certificación por tercera parte; 2º debilidades y fortalezas de estas iniciativas y el potencial para su desarrollo.

Algunos de los principales resultados de este encuentro fue la creación de un grupo de trabajo, a quien se le asignó la tarea de elaborar una propuesta de definición de Sistemas Participativos de Garantía. Este grupo se integró en la estructura de IFOAM, Federación que se comprometió a facilitar su trabajo, acoger la discusión en torno a los sistemas de garantía y a divulgar la información que se fuese construyendo en torno a los SPG. Desde entonces, IFOAM tiene reservada en su página Web una sección dedicada exclusivamente a estos sistemas participativos[155].

Los avances del grupo de trabajo sobre SPG en IFOAM han ido en la línea de ir aportando documentos y reflexiones, sobre los que discutir en diferentes foros y eventos que se han ido organizando desde su creación (en el Congreso Mundial de IFOAM,

[152] La Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa, uno de los estudios de caso que presentamos en este capítulo, es un ejemplo de ello.

[153] La ISO/IEC 65 es la norma internacional sobre la que se han basado las legislaciones regionales (en el caso de la UE, la UNE 45011) o estatales, en torno a la certificación por tercera parte. Sus características se han descrito en el Capítulo II.

[154] La información relativa a este encuentro se ha extraído de la relatoría realizada por Pipo Lernoud y Fernanda Fonseca, en el mismo año de su celebración.

[155] http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs.html (fecha de consulta: 7 de octubre de 2008).

celebrado en septiembre de 2005 y junio de 2008, los SPG formaron parte del programa, a través de mesas redondas y talleres de trabajo específicos sobre esta temática). Estos documentos giraban, en un principio, en torno a la filosofía subyacente en este tipo de iniciativas. Asimismo, trataban de recabar información en torno a las iniciativas de SPG en funcionamiento en el mundo.

El inicio del trabajo coordinado de definición y caracterización de los SPG que supuso el seminario de Torres se ha visto reforzado por distintos apoyos. La FAO[156], en mayo de 2004, impulsó un proyecto, en 5 países latinoamericanos (Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay), de dos años de duración, llamado "*Apoyo al desarrollo de la agricultura orgánica y fortalecimiento institucional de la certificación orgánica*". Uno de los elementos de este proyecto eran los SPG[157].

En primavera de 2006, esta misma organización internacional junto con el Ministerio de Agricultura del Gobierno hindú, y en colaboración con productores/as, ONG y oficinas gubernamentales, pusieron en marcha un proyecto a través del cual se planteaba construir un programa específico de Sistemas Participativos de Garantía para la India (Khosla, R., 2006). Este proyecto surgió tras un programa exitoso de la *Autoridad para el Desarrollo de las Exportación de Productos Agrícolas y Alimentos Procesados (APEDA)*, en el que se desarrolló un sistema de certificación por tercera parte reconocido a nivel internacional para sus exportaciones. A partir de este éxito, el propio Gobierno reconoció la necesidad de apoyar y fortalecer el consumo interior de productos ecológicos, teniendo presentes a los cientos de millones de pequeños/as productores/as diversificados/as con los que cuenta este país y para los/as que la certificación de tercera parte *no era práctica* (Khosla, R. 2006: 7).

En África oriental, en el año 2007, los movimientos ecológicos nacionales de Kenia (KOAN), Uganda (NOGAMU) y Tanzania (TOAM), apoyados por IFOAM, impulsaron un programa de garantía local de calidad, basado en los esquemas de los Sistemas Participativos de Garantía (Rundgren, G., 2007). Estos movimientos venían impulsando desde hacía años mercados ecológicos locales organizados a través de organizaciones productoras. En estos mercados, había surgido la necesidad de generar algún tipo de garantía o de confianza de que los productos que se ofertaban eran realmente ecológicos. Esto había llevado a los grupos productores, apoyados por ONG, a desarrollar sus propios esquemas de garantía de tipo participativo, ya que la certificación por tercera parte se veía como un mecanismo inadaptado a sus realidades. En abril de 2007 organizaron un taller – encuentro, en Tanzania, en el que se trabajó en profundidad el documento elaborado como primera etapa de este programa. Los objetivos centrales del encuentro fueron avanzar en la comprensión de los SPG y el rol que estos mecanismos podían jugar en el desarrollo del sector ecológico en el este de África.

Como último evento a nivel internacional a destacar, se organizó el Taller – encuentro celebrado en Antonio Prado (Brasil), en octubre de 2007, como continuación del celebrado en Torres, en el año 2004, también coorganizado por MAELA e IFOAM. A

[156] Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
[157] http://www.fao.org/Ag/AGS/subjects/es/agribusiness/organic.html (fecha de consulta: 7 de octubre de 2008)

este encuentro asistieron iniciativas de 16 países de Latinoamérica, incluyendo Brasil, así como la experiencia andaluza incipiente. Los objetivos marcados en este encuentro fueron: 1) el intercambio de experiencias y; 2) la identificación de estrategias y acciones para expandir la adopción y aceptación de los SPG. Tres fueron los principales ejes de trabajo establecidos:

- El reconocimiento internacional de los SPG
- Los marcos legales de los SPG
- Los SPG y el desarrollo de mercados

El encuentro concluyó con la redacción de la "declaración de Antonio Prado"[158], en la que, entre otras ideas, se concluye que los "*SPG son mecanismos válidos para generar credibilidad en productos ecológicos, y son una herramienta necesaria para facilitar el acceso al mercado a todos los actores implicados en la producción y consumo de productos ecológicos, así como una herramienta eficiente para construir redes de confianza y conocimiento*".

A finales del año 2007, existían experiencias de SPG en todo el mundo, algunas de ellas consolidadas, entre las que podemos destacar las que se detallan en el cuadro siguiente.

Cuadro 22.- Experiencias destacadas de Sistemas Participativos de Garantía en el mundo

Continente	**Experiencias de SPG**	
América	Brasil	Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa
		Asociación de Certificación Socioparticipativa de Acre
	Costa Rica	Oroverde
	Ecuador	Red Agroecológica del Austro
	Bolivia	Reconocidos en su legislación nacional 023/06-07
	Perú	Tiene establecido un Consejo Nacional de SPG, que ha trabajado un esquema general de este tipo de sistemas para el país
	Uruguay	Red de Agroecología
	EEUU	Certificado Producto Natural
Oceanía	Experiencia apoyada por el gobierno en Nueva Zelanda	
África	Bryanston Organic Market en Sudáfrica y las experiencias impulsadas en los países del Este	
Asia	Experiencia en la India	
Europa	Federación Naturaleza y Progreso en Francia	

De toda la riqueza de experiencias expuesta, para la presente investigación se seleccionaron dos con el fin de realizar un trabajo de campo, que permitiera un conocimiento en profundidad de las iniciativas. Las iniciativas seleccionadas son la Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa, en Brasil y la Federación Naturaleza y Progreso, en Francia. En ambos casos se eligieron por su larga trayectoria

[158] http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/CartaAntnioPradoespaol_smallsize.pdf (fecha de consulta: 7 de octubre de 2008)

de funcionamiento y su consolidación como experiencias; la segunda de ellas, además, se seleccionó por el interés que suscita una experiencia desarrollada en contexto legal y socioeconómico similar que la trabajada en Andalucía.

Si bien las iniciativas de SPG se caracterizan por su especificidad, íntimamente ligada al contexto social, político y cultural donde se desarrollan, planteamos un análisis de las características, los imaginarios y los condicionantes comunes a las experiencias extranjeras, que nos ayudará a establecer, en el próximo capítulo, una sistematización en torno a las tres experiencias de SPG presentadas. Pretendemos, con esta sistematización, aportar reflexiones y conclusiones en torno a los sistemas de garantía y concretamente a los SPG, y contribuir de esta forma a la escasa bibliografía y producción científica existente en torno a esta temática.

Como eje central del presente capítulo, exponemos el análisis realizado, tras varias estancias de investigación (dos en Brasil y una en Francia), de las dos experiencias extranjeras seleccionadas. El análisis se ha estructurado en torno a los siguientes elementos:

1. El origen de la iniciativa y las motivaciones de las personas implicadas para su construcción y puesta en marcha.
2. Los objetivos y la estructura de la experiencia.
3. El Sistema Participativo de Garantía construido.
4. La visión de las personas implicadas en la experiencia en torno a: los sistemas de garantía y las características de su modo de manejo ecológico.
5. Las dificultades y los retos percibidos por las personas implicadas en cada experiencia.

6.1. La Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa[159]

La Red Ecovida de Agroecología y Certificación Participativa surge como resultado de un proceso de articulación de redes que se había ido gestando en torno a la Agroecología, entre ONG, movimientos de productores/as y movimientos sociales (PE). Como resultado de este proceso de convergencia entre actores, la red se conforma como figura jurídica en el año 1998.

"(La Red Ecovida surge) *como una necesidad por el trabajo que se venía cociendo en todas las organizaciones de la región sur, y tienen allí el embrión de otras discusiones sobre articularse como la red TASul, que era una red de ONG del medio rural que trabajaban con Agroecología, y otras redes y otros debates, estatales también. Entonces, se puede decir que se convirtió en un fruto, no sé si previsto o no, pero un*

[159] El análisis de esta experiencia se ha realizado en base a material bibliográfico consultado, así como a las entrevistas llevadas a cabo durante las dos estancias en el territorio. Las entrevistas trascritas se pueden consultar en el Anexo II. Para la trayectoria de conformación de la experiencia nos hemos basado en las tablas presentadas en el Anexo XIV.

fruto deseado y un fruto interesante porque articula todo lo que ocurre en Agroecología en este espacio geográfico de la región sur, sea de movimiento social, sea de ONG, sea de agricultores". Técnico miembro de la red del Núcleo Alto Uruguay (citado en Pauli, 2006, p. 103).

El elemento que dio el impulso inicial a este proceso de apertura y de encuentro fue una decisión del gobierno estatal de Santa Catarina. Quería poner en marcha un proyecto de apoyo a la producción ecológica certificada a través del sistema de tercera parte. Las redes incipientes de Agroecología del estado se opusieron, pues querían ver reconocidas otras alternativas a este modo de certificación, que ya se estaban trabajando en los territorios y que se basaban en mecanismos de proximidad, en la línea de los SPG:

"*(…) a través de los seminarios que se organizaron a nivel regional sobre producción orgánica y certificación (…). Y a partir de aquí promovieron un primer seminario, al que llamaron a personas del sur y Paraná, para discutir sobre certificación, ya que tenían trayectoria en ese tema: auditorías con auditores locales y no extranjeros etc.,… Iban en la lógica de generar credibilidad por proximidad*" (PE 10).

De esta forma las ONG de Santa Catarina organizaron un primer seminario al que invitaron a otras organizaciones de Rio Grande do Sul y Paraná, para discutir el tema de la certificación e intercambiar las experiencias que se estaban llevando a cabo en cada uno de los estados de sistemas de garantía alternativos. Las conclusiones que se extrajeron de este primer seminario fueron diversas (PE10):

a. Era preciso articular a los productores agroecológicos de los tres estados del sur representados en el seminario.
b. Era necesario construir un proceso de credibilidad alternativo, participativo y no convencional por auditoría.
c. Para iniciar un proceso nuevo era interesante crear una marca o sello que identificase a las personas implicadas, en forma de una red.

Fue en este seminario donde surge la idea de la Red Ecovida, como una propuesta alternativa de trabajar la generación de credibilidad. La red inició su actividad, no sólo para establecer un sistema alternativo de garantía sino, y ante todo, para promover la Agroecología (PE3 y PE10): "*En el primer encuentro general de la red, en el año 2000, se trataron temáticas como: la certificación, intercambio de experiencias, informaciones dentro de la red…"* (PE10).

6.1.1. Motivaciones para la puesta en marcha de la iniciativa

La cuestión de la garantía de las producciones ecológicas venía siendo una discusión histórica al interno de las organizaciones de productores y de asesoría. Un productor entrevistado por Pauli lo expresa de este modo (Pauli, 2006, p. 103):

"Mira, la cuestión de la Red Ecovida surgió en un debate aquí en la región, que siempre la gente tenía aquel debate que se hacía, bueno, quién certifica, cómo va a ser verificado un producto que la gente considera agroecológico".

El impulso que dio fuerza y consolidó la red incipiente a nivel de los tres estados vino dado por la instrucción normativa 99, en la que se posibilitaba el reconocimiento de diversos sistemas de garantía. Esta instrucción reveló que los sistemas de garantía alternativos no estaban institucionalizados, es decir, no estaban sistematizados y para poder considerarlos era necesaria una cierta regulación de los mismos. Ante esto, las ONG que trabajaban en el sur de Brasil en estos temas promovieron la organización de lo que se venía haciendo, con el fin de que esos grupos de productores no quedaran fuera del reconocimiento legal.

"Nuestra ley posibilita el reconocimiento de diversos sistemas de certificación. La instrucción normativa 99 también los reconocía, solo que esos procesos no estaban institucionalizados, entonces las ONG sintieron la necesidad de institucionalizar el proceso para que esos agricultores no quedaran fuera" (PE17).

Hubo otros aspectos de tipo social e histórico que generaron un contexto favorable al surgimiento de un movimiento en red de este tipo en el sur de Brasil. La mayoría de las personas productoras que se venían organizando en grupos eran de origen europeo, llegados a Brasil huyendo de la II Guerra Mundial. El perfil de estas personas, en general, respondía a una conciencia política fuerte y una alta capacidad de iniciativa y de organización colectivas. Junto a ellos, existía un trabajo importante de numerosas ONG de asesoría, que venían reforzando y fomentando la agricultura familiar con el apoyo de agencias internacionales. Asimismo, había tradición de organización comunal en base a la iglesia como agente aglutinador. Los curas de estas zonas ejercieron un importante papel estimulador del tejido y la organización sociales a nivel local (PE 17).

Como hemos comentado, uno de los objetivos centrales de la red formal era responder a la necesidad de sistematizar los mecanismos alternativos de garantía que se practicaban de manera informal en estas zonas, al margen de la certificación por tercera parte. Estas propuestas alternativas venían de la idea de que el sistema de certificación por auditorías suponía una amenaza para la agricultura familiar agroecológica. Esta amenaza se plasmaba en una serie de elementos destacados por las personas miembro de la Red entrevistadas[160].

En primer lugar, plantean que la certificación por tercera parte les generaba desconfianza en cuanto a su capacidad de dar credibilidad. Se consideraba que no era suficiente un mecanismo que basaba la garantía en una visita anual de una persona técnica externa al territorio, que desconoce las prácticas habituales de las personas a las que inspecciona: *"cuando tú pagas a una certificadora es diferente, ellos llegan a tu propiedad, preguntan lo que has hecho en el último año, en los tres últimos años, pero ellos no están allí acompañando y mirando, para comprobar que la persona hizo realmente lo que dice, ¿comprendes?"* (PE14)[161].

En segundo lugar, consideran que los elevados costes de este servicio, junto con los

[160] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XIII.

[161] Traducción propia: "*quanto tu paga uma certificadora é diferente, eles chegam na tua propriedade, perguntam o que tu fez de um ano pra cá, de três, mas ai eles não estão ali acompanhando e olhando, ver se realmente a pessoa fez aquilo que disse, compreende?"*

complejos procesos burocráticos que requiere, penalizan a la agricultura familiar agroecológica, dificultando su desarrollo y mantenimiento en los territorios (PE 15).

En tercer lugar, plantean la incompatibilidad de la certificación por tercera parte con los procesos y visiones agroecológicas. En este sentido, creen que el modelo de auditoría supone: a) una forma de institucionalizar la superioridad del saber técnico sobre el saber campesino y local. Por esta convicción, se revelan contra un procedimiento que otorga la capacidad de dar garantía sólo a agentes técnicos externos, desconsiderando las capacidades de las personas implicadas en el proceso de producción y consumo de estos productos: *"En la certificación normal lo que importa es que quien venga me garantice, no la opinión del consumidor, de otros productores,..."* (PE7) y; b) una simplificación de la producción ecológica, ya que estos mecanismos de garantía no contemplan procesos, actitudes o criterios sociales, sino únicamente productos y resultados, suponiendo una desconsideración a las prácticas agroecológicas: *"Agroecología es sinónimo de agricultura familiar. La AE certificada (IBD) no tiene ningún criterio desde el punto de vista social (monocultivos,...). No se incluyen parámetros de sustentabilidad social, no se incluyen cuestiones de medios de producción, de propiedad de la tierra,... Una certificadora orgánica forestal certifica 23 propiedades que llegan a las 600000 ha: no se puede certificar esta concentración de poder"* (PE6).

Santos (2002) resume estas ideas, destacando que la certificación participativa de Ecovida surge como oposición al modelo "convencional" de certificación, caracterizado por su verticalidad y por concentrar el poder en empresas certificadoras. En contraposición, Ecovida comienza a trabajar un modelo en el que las relaciones son horizontales entre agricultores/as, técnicos/as de asesoría y consumidores/as.

En coherencia con estas críticas, el sello que construye la red no es concebido como un mero certificado, sino como *"el reflejo de un proceso al que el grupo está ligado: es una herramienta de perfeccionamiento técnico y asociacionismo de un productor"* (PE 10). Supone un mecanismo de valorización de lo propio, evitando la idea de la certificación como un servicio externo, pasando de ser un fin en sí mismo a una contribución *"a la organización de base, a la organización del proceso productivo, al perfeccionamiento de la producción agroecológica"* (PE 10). Para los consumidores de la red y en palabras de Moacir (PE8), presidente de una de las asociaciones (ACOPA), su motivación principal es consolidar el apoyo a los productores, promoviendo relaciones directas con ellos y estimulando la producción ecológica a través del consumo.

Según un documento interno de la Red (Red Ecovida, 2001), se pretende generar un espacio donde se favorezca la articulación entre productores familiares y sus organizaciones, ONG de asesoría y otros actores implicados en la producción, transformación, comercialización y consumo de productos ecológicos, desde una perspectiva agroecológica[162] de los procesos, incluidos los relacionados con la

[162] Para Ecovida la *Agroecología es todo proceso de producción de alimentos y productos en equilibrio con la naturaleza, donde los agricultores y agricultoras desarrollan sus actividades protegiendo el Medio Ambiente y sin depender de "paquetes tecnológicos" basados en insumos industriales caros y contaminantes. La Agroecología, según la Red, busca la calidad de vida y no solamente las ganancias financieras. Es la base para el desarrollo sustentable que incluye aspectos sociales, ambientales y*

generación de confianza. Con esta base, la Red Ecovida puede caracterizarse por cuatro elementos fundamentales (Santos, L.C.R., 2002)[163]:

- Necesidad y posibilidad de reconocimiento y apoyo mutuos entre los grupos y asociaciones de producción agroecológica y las organizaciones de asesoría en Agroecología
- Las organizaciones participantes (grupos, asociaciones, ONG,...) forman una red, sin jerarquías, y orientada y dirigida a promover la Agroecología
- La certificación debe ser participativa, es decir, la responsabilidad de garantizar la calidad del producto es compartida por agricultores/as, técnicos/as y consumidores/as
- Necesidad de crear una marca o sello para el mercado, que represente a la red. La marca será utilizada para caracterizar el proceso.

6.1.2. Estructura y funcionamiento de la Red[164]

La estructura de la Red ha ido evolucionando desde su creación en el año 1998. Al inicio se estructuró en torno a una coordinación centralizada de los tres estados miembros, asumida por una persona. En el primer encuentro de la Red formal, celebrado en el año 2000, se analizó que esta centralización resultaba contradictoria con la idea original de articulación en red. Dificultaba su ampliación, el flujo de la información o la asunción de responsabilidades de forma horizontal. Por estos motivos se pasó a una coordinación colegiada, conformada por 3 personas de cada uno de los tres estados donde se encontraban las iniciativas y grupos pertenecientes a la red (PE10).

El segundo elemento de reflexión, en los primeros años de rodaje de la red, vino de la falta de puntos de referencia para las tres personas miembro de la coordinación colegiada de cada Estado. Esto planteó la necesidad de contar con estructuras de apoyo que facilitaran la coordinación. De estas reflexiones surgieron los Núcleos, como nivel de estructuración inferior al Estado, que eran nodos de coordinación a nivel territorial. Cada núcleo se organizó en torno a alguna ONG de asesoría y aglutinaba a los grupos productores de la zona, algún grupo de consumo en aquellos territorios donde los hubiera, pequeñas agroindustrias y puntos de comercialización local[165]. En el año 2007, la red estaba compuesta por 28 núcleos, unos 300 grupos y unas 3000 familias.

---

económicos, así como las dimensiones políticas, técnicas y culturales en procesos educativos adecuados, donde los trabajadores y trabajadoras asumen el papel principal y aumentan su poder de intervención en la sociedad, de forma organizada (Pauli, J. 2006: 95).

[163] Miembro de la coordinación ampliada de la Red y autor de varios trabajos y publicaciones de sistematización de la experiencia de Ecovida.

[164] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XIV.

[165] "(La necesidad de coordinación) *llevó a la creación de los núcleos regionales, uno en cada punto de una región geográfica definida, en torno a alguna ONG de asesoría con historia, y compuestos por grupos de agricultores, organizaciones de consumidores, pequeñas agroindustrias y puntos de comercialización. En un principio se conformaron 18 núcleos regionales, compuestos por unas 1300 familias y unos 120 grupos* (PE10).

Con esta estructura de grupos y ONG, coordinados a través de los núcleos, el sistema de organización establecido en Ecovida ha sido de abajo hacia arriba. Como base de la red están las familias productoras, que se asocian con otras familias formando grupos productores. Cada grupo puede estar formado por entre 3 y 15 familias (PE 4): "*La base de la organización es la familia agricultora, que trabaja en red con los otros miembros del grupo y del núcleo"* (PE5).

Los grupos productores, conformados a través de asociaciones, nombran cada dos años a una persona coordinadora y una tesorera. Asimismo, cada cierto tiempo se eligen dos personas para que representen al grupo en el Núcleo y la Red. Ellas son las que asisten a las reuniones y encuentros (PE 14). La idea es que esta responsabilidad vaya rotando, para que todas las personas del grupo se impliquen y aprendan de forma equilibrada: "*para que todo el mundo aprenda y no sea siempre sólo uno, ya que este aprende mucho y los otros no* (PE14).

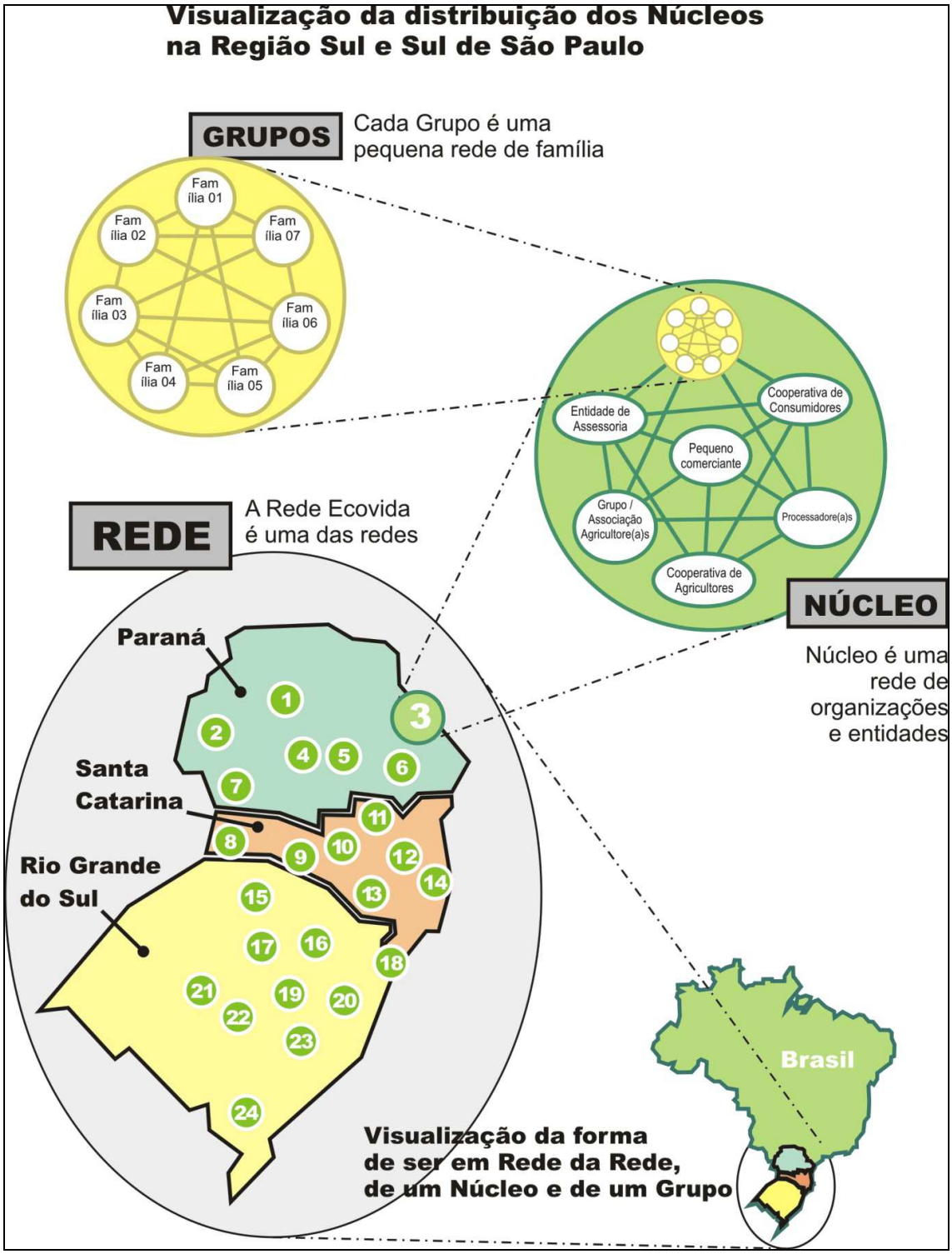
Las principales funciones de los Núcleos, por su parte, se pueden resumir en las siguientes ideas (Rede Ecovida de Agroecología, 2000): a) agilizar el trabajo, adaptándolo a la dinámica y actividades propias de los grupos; b) mantener y hacer circular la información necesaria dentro de la red; c) actualizar los registros de miembros; d) aprobar la adhesión de nuevos miembros; e) trabajar y analizar los registros relacionados con la certificación de sus miembros y; f) gestionar las cuotas.

El *funcionamiento* de la red tiene establecidos una serie de elementos comunes, si bien se establece en base a las decisiones y las dinámicas de cada grupo, en primera instancia y de cada Núcleo, en segunda. De esta forma, cada grupo productor funciona con sus propias mecánicas de reuniones y con sus propios objetivos como grupo. El elemento común a todos es la cuestión de la garantía participativa.

Como recomendación general en la Red, se aconseja que haya una entidad o persona que asuma la coordinación de cada Núcleo, con el fin de facilitar el flujo de información y el acceso a la misma. En los núcleos donde existe esta coordinación, la persona u organización responsable es elegida por todas las organizaciones miembro, por un periodo preestablecido (PE5).

Para facilitar la comprensión de los distintos niveles organizativos de la Red Ecovida, así como la relación entre ellos, presentamos la figura siguiente.

Figura 9.- Esquema de funcionamiento de la Red Ecovida



Fuente: Red Ecovida (2007)

La coordinación a nivel de la Red está organizada a través de lo que se conoce como *Coordinación Ampliada o Plenaria*, en cuya composición siempre se respeta una paridad de representatividad entre los tres Estados que componen la Red, así como la

presencia de todos los núcleos a través de 2 ó 3 personas cada uno. Se estructura a través de distintas figuras: la coordinación general; la coordinación del proceso de garantía participativa; la coordinación de los aspectos técnicos y formativos; la coordinación de la información y la comercialización; y la coordinación de la tesorería. *"Cada dos años, hay un encuentro, y se cambian los 2/3 de la coordinación"* (PE10).

El eslabón máximo de la Red es la Asamblea General, que se reúne bianualmente a través de los llamados *encuentros ampliados* (PE16). En estas asambleas se toman las decisiones referentes a: a) documentos en torno al funcionamiento de la Red y al proceso de certificación; b) creación, subdivisión o disolución de un núcleo regional y; c) definición de las líneas estratégicas de la Red para el año siguiente.

6.1.3. El Sistema Participativo de Garantía de la Red Ecovida[166]

El esquema seguido para la descripción del SPG propuesto por la Red Ecovida se ha adaptado al establecido para exponer el sistema construido en el proceso andaluz. De esta forma pretendemos facilitar el análisis comparativo propuesto para el capítulo siguiente.

Procedimientos de control

La Red Ecovida establece tres niveles de evaluación y de generación de confiabilidad (PE3):

a. La *autodeclaración* por parte de la familia productora, que constituye la base sobre la que se construye el proceso. En este procedimiento la propia familia debe rellenar unos formularios donde analizan sus manejos en base a las normas establecidas.
b. Las *visitas cruzadas* de otras familias productoras del mismo grupo y entre diferentes grupos de un mismo núcleo.
c. La implicación de consumidores y entidades de asesoría u ONG a través de visitas periódicas a los grupos productores.

En estos mecanismos de auto-revisión y de visitas de control – intercambio, caben destacar dos elementos importantes de confiabilidad. Por un lado, la *participación del consumo*, basada en visitas a las fincas, organizadas bien por la asociación de consumo miembro del núcleo (cuando la hay), bien por los propios grupos productores, ofertándolas en los mercados y puntos de venta, en días señalados. De esta forma, se establece un mecanismo que genera confianza en las personas consumidoras próximas, al establecerse una relación directa e *in situ* con las productoras. La garantía no es solamente un sello mostrado en los mercados, sino días y momentos en los que se comparten realidades y experiencias, entre consumo y producción (PE15)[167]. Por otro

[166] Las citas en las que hemos basado la elaboración de esta información se pueden consultar en el Anexo XIV.

[167] *"Eso también forma parte de la organización de Ecovida, porque el consumidor, viniendo a la propiedad, adquiere confianza, ve lo que haces, no es sólo mostrar un sello, es que tú veas, sientas,*

lado, el *control social* que se establece, de forma continua y natural, a cada familia productora. Las reuniones periódicas al interno del grupo productor y entre grupos productores de un mismo núcleo, las visitas cruzadas, la comunicación entre personas y grupos, y la convivencia en espacios territoriales reducidos hacen que nada pase desapercibido (PE5).

Procedimiento de entrada

Las etapas que se establecen para entrar en el proceso de garantía participativa de la Red Ecovida se pueden resumir en los siguientes puntos (Meirelles, L., 2004):

1. Demanda del sello por parte de un agricultor/a o grupo de agricultores pertenecientes a la red. Esta solicitud debe dirigirse al consejo de ética del núcleo del que forman parte.
2. Visita a las propiedades del agricultor o grupo por parte de una comisión compuesta por: una persona de la *comisión de ética* del grupo (sólo en caso de ser un productor individual el que solicita el sello), una persona del *consejo de ética* del núcleo y otra persona de la entidad de asesoría que forma parte del núcleo.
3. Uno de los integrantes de esta comisión, que se constituye para la visita, se encarga de elaborar un informe donde consten aspectos de las propiedades visitadas, ligados a su grado de trabajo ecológico y a otros aspectos que constan en las normas internas de la Red.
4. Reunión entre el grupo, integrantes del *consejo de ética del núcleo regional* y de la entidad de asesoría. En esta reunión se discute el informe de la visita, el grado de ecologización de las fincas y se plantean acciones para lograr superar límites identificados.
5. Comunicación, por parte del *consejo de ética del núcleo*, sobre su conformidad o no del uso del sello para esta familia agricultora o grupo al Comité o coordinación de la Certificación de la Red Ecovida (compuesto por tres personas).
6. El comité de Certificación autoriza o no el uso del sello, siguiendo las recomendaciones del consejo de ética del Núcleo y tras hacer las verificaciones que estimen oportunas.
7. En el caso de obtener la autorización, el grupo debe informar a la coordinación del Núcleo Regional sobre qué productos y en qué cantidad el sello será utilizado.

La demanda del sello puede provenir, bien de una familia productora, bien de un grupo de familias productoras. Esto dependerá de cada núcleo y de cada caso. Cuando se trata de grupos de familias relativamente consolidados, el proceso de garantía y el sello se trabaja a nivel de grupo, dentro del Núcleo. En el caso de que se trate de grupos incipientes, poco estructurados, el Núcleo trabajará el proceso de garantía de forma

experimentes, arranques una zanahoria de la tierra y la pruebes y sepas que es sana. Todo eso forma parte de la Red, no es sólo un papel, no es sólo una reunión" (PE15).

individual con cada familia que lo solicite[168], mientras se va consolidando el propio grupo y sus estructuras internas, tales como la comisión de ética.

De forma esquemática, el proceso de obtención del sello en la Red Ecovida se presenta en el cuadro siguiente.

Cuadro 23.- Proceso de obtención del Sello Ecovida

PASOS	INFORMACIONES
Integrarse en la red Ecovida	La adhesión a la red ocurre a través del Núcleo Regional
Solicitar la certificación al Núcleo Regional	Para hacer viable la certificación, el núcleo regional debe contar con un Consejo de ética en funcionamiento
Rellenar el Formulario de "requerimiento de la certificación"	Para cada unidad productiva se debe rellenar un formulario. El núcleo regional o la red podrán solicitar otros documentos si lo estiman oportuno
Entrega de la documentación en el consejo de Ética del Núcleo	
Análisis de los formularios por parte del Consejo de Ética del Núcleo	Estos análisis pueden dar lugar a la solicitud de nuevos documentos que se estimen oportunos
Visita a la propiedad o a la agroindustria	El número de propiedades a visitar dentro del grupo que solicita el sello (en el caso de que lo solicite un grupo entero) queda a criterio del núcleo, debiendo ser representativo de la realidad del grupo en cuestión. Se escogerán las propiedades de acuerdo con las necesidades observadas por el Consejo de Ética del Núcleo, al analizar los formularios, o por sorteo.
Opinión del consejo de ética	La opinión podrá ser de aprobación o de rechazo. En ambos casos, el Consejo deberá señalar las mejoras necesarias recomendables a la propiedad o agroindustria
Aprobación de la certificación por el Núcleo Regional	En base al trabajo realizado por el consejo de Ética, el Núcleo aprobará la certificación y tramitará la petición al Comité de Certificación de la Red
Autorización, por parte del Comité de Certificación de la Red, del uso del sello	El Comité de Certificación de la Red, en base a la documentación e informes presentados por el Núcleo, autorizará el uso del sello

Fuente: Adaptado de Santos, C.R. y Oliveira, D. (coord.), 2004 completada con PE2

El paso previo a la demanda del sello es pertenecer a la Red, lo que debe ser tramitado a través del Núcleo regional. La familia productora que ha solicitado la entrada es entrevistada, con el fin de evaluar su motivación en torno a temas relacionados con la

[168] "(Hay) *núcleos que certifican el grupo entero, en general son grupos que llevan muchos años organizados* (… y) *núcleos que certifican las unidades familiares, cuando el grupo no es tan homogéneo, donde hay familias listas para certificar y otras que no, o unas que quieren y otras que no"* (PE10).

salud, la idea colectiva de la agricultura o la concepción agroecológica de la producción, entre otros. Tras la entrevista, si es evaluada positivamente, la familia participa a modo de prueba durante un periodo de tiempo, esto significa que se implica en la estructura y aporta las cuotas. La duración de este periodo de prueba puede oscilar entre 5 – 6 meses (PE1) y dos años (PE14). Si la propiedad viene de un manejo convencional, se establece además un periodo de conversión, durante el cual no podrá vender en las ferias. La duración de este periodo depende del historial de la finca (PE1). La entrada también puede solicitarse desde un grupo, en cuyo caso el consejo de ética del Núcleo en cuestión realiza la visita y el correspondiente informe sobre el grupo y se discute en la coordinación (PE2).

Estructuras y funciones

Para operativizar el proceso de garantía, los grupos productores establecen lo que se conoce como "*comisión de ética*", que es un equipo formado por tres miembros de la asociación o grupo elegidos en asamblea cada dos años. Sus funciones son (Red Ecovida, 2000): a) hacer cumplir las normas técnicas de producción ecológica establecidas a nivel de Red; b) acompañar a los miembros del grupo en sus sistemas de producción agroecológicos; c) aprobar o no los sistemas de manejo de los miembros del grupo y; d) definir los criterios de calidad de los productos que se van a comercializar conjuntamente. La "*comisión de ética*" es la encargada de realizar las visitas de campo a las personas miembro del grupo, para verificar el cumplimiento de las normas establecidas, plantear recomendaciones e intercambiar experiencias y conocimientos.

Como segundo nivel del proceso de garantía está el Núcleo, foro en el que se reúnen periódicamente los grupos de un mismo territorio, para tratar los temas de gestión y organización ordinarios a ese nivel. Cada núcleo es autónomo para establecer sus propias dinámicas de intercambio, visitas, revisiones y reuniones, entre otros. Para la cuestión de la garantía y el sello, cada Núcleo establece una estructura denominada "*consejo de ética*", conformada por personas del ámbito de la producción, el consumo (en aquellos núcleos en los que haya alguna organización de este tipo) y el asesoramiento técnico (personal de la ONG de asesoría que forme parte del núcleo). En total, el número de integrantes de este consejo suele oscilar entre 12 y 18 personas (PE5): una persona por cada grupo de los que conforman el núcleo (PE4).

Infracciones y sanciones

La Red Ecovida establece la evaluación de posibles infracciones en base a cada caso particular. Se cuenta con las estructuras de la comisión de ética y del consejo de ética, que cuentan con una gran autonomía y confianza para tomar las decisiones que estimen oportunas.

En cualquier caso, cuando se produce una infracción por un mal manejo intencionado por parte de la familia productora, la sanción establecida es la expulsión de la familia de la Red, y por lo tanto, del Núcleo y del grupo productor al que pertenecen. Se trata, por lo tanto, de una penalización que va más allá de la retirada del sello, ya que se pierden las relaciones sociales donde se desarrolla la actividad productiva. En la mayoría de los casos, si la comisión o el consejo de ética lo estiman oportuno, se establece un proceso

de acompañamiento a la familia expulsada para ayudarles a recuperar el manejo ecológico de la finca.

Costes

A principios del año 2005, el coste que asumían las familias productoras por implicarse en la Red Ecovida y ostentar el sello era de 12 reales anuales (unos 3.53 euros anuales[169]).

Procedimiento de renovación del sello

El proceso de revisión del sello se hace anualmente, empezando a través de la autodeclaración de las familias, es decir, la entrega de los registros establecidos. A partir de estos informes, el *comité de ética* realiza una visita a cada miembro del grupo. En esta visita se evalúa la autodeclaración, el estado y el manejo de la finca así como la evolución de la misma con respecto al año anterior (PE15).

El informe de la comisión de ética es elevado al consejo de ética, donde se discute y se analiza en profundidad. En el caso de detectar irregularidades, se puede pedir alguna documentación adicional e incluso establecer una visita adicional de campo. En base a toda esta documentación, el consejo de ética eleva una propuesta a la coordinación de la certificación a nivel de Red. Es esta coordinación el que tiene la última palabra, para autorizar o denegar el uso del sello a cada familia o grupo miembro de la Red. Generalmente basan su decisión en base a los informes de la comisión de ética y el consejo de ética correspondientes.

6.1.4. Discursos en torno a la garantía y la producción ecológica

La estructura y el funcionamiento descritos, basados en la implicación activa de las personas miembro, responden a una visión determinada en torno a la garantía y los mecanismos de generación de credibilidad[170]. La estrategia de la garantía de la Red Ecovida pasa por deconstruir los conceptos habituales asociados a la certificación. Se tata de elaborar otros nuevos que se adapten a las visiones y a las realidades locales de los territorios y las personas: "l*a única salida es cambiar los conceptos,* (hablar de) *generación de credibilidad. Cambiar el de certificación: no es certificación. Se precisa un término más amplio que sea reconocido: credibilidad - evaluación de conformidad. Estás conforme con una norma"* (PE4). La reconstrucción persigue pasar de unos conceptos establecidos que consideran limitados y restrictivos a nociones amplias e incluyentes. De esta forma, se podrán incorporar en la idea de *sistema de garantía:* el análisis de procesos y actitudes y; el rescate y la revalorización de los conocimientos locales (PE 4); así como superar la noción de examen técnico.

La propuesta de garantía de los miembros de la Red se plantea como un modo de agroecologización de los mecanismos relacionados con la producción ecológica. La

[169] Según tasa de cambio de finales de enero de 2005: 1 euro = 3.40 reales.
[170] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XVI.

construcción de un modelo de garantía de este tipo es para ellos una vía para cuestionar el modo de entender la agricultura ecológica y generar procesos de agroecologización en sus territorios[171].

En concreto, el elemento que permite este cambio descansa en el control mutuo entre grupos productores, consumidores y técnicos. Bajo este procedimiento, el sistema de garantía se transforma en un mecanismo de fortalecimiento de las relaciones de proximidad, el conocimiento mutuo y la confianza[172]. El objetivo es fomentar la autonomía y la independencia de los distintos grupos en los territorios respecto a entidades y procesos externos a su realidad.

"La certificación participativa es una manera de los productores de organizarse, y no depender de terceros (empresas, instituciones,...). No tiene que venir nadie a decirme cómo produzco, y una vez al año sólo. Pago para que cierren los ojos" (PE7).

De esta forma, el sistema de garantía no es simplemente un mecanismo para generar confianza en los productos en el ámbito productivo, sino que se transforma en un proceso que: 1º genera un intercambio continuo de experiencia y conocimiento, favoreciendo un perfeccionamiento técnico continuado a sus integrantes; 2º favorece procesos de asociacionismo y organización de base de las familias productoras y, por último; 3º revaloriza y reconoce las capacidades locales para generar credibilidad y confianza[173]. Por lo tanto los sellos de garantía deben ser consecuencia de procesos de debate, reflexión e intercambio y no un punto de inicio para considerar una agricultura como ecológica (PE3).

En el ámbito del consumo, este sistema fortalece y fomenta las relaciones directas con la producción, convirtiendo la certificación en un mecanismo de acercamiento y de empatía entre producción y consumo. Así, en este ámbito del consumo, el sistema genera (PE 9): 1º concienciación en torno a las prácticas agroecológicas; 2º cambio de actitudes y asunción de responsabilidad en torno a la alimentación y los canales de adquisición e intercambio de alimentos; 3º valorización y respeto por el trabajo agrario y; 4º corresponsabilidad con la producción. De esta forma, en mercados locales relativamente consolidados los sellos dejan de ser necesarios. Las relaciones directas establecidas en el tiempo, entre producción y consumo, son garantía suficiente para generar la confianza requerida. La necesidad del sello viene dada, en primer lugar, por una legislación que lo exige en determinados mercados, además de que es necesaria para poder utilizar la nomenclatura protegida por ley para productos certificados; en segundo lugar, es necesario cuando se quiere acceder a mercados más lejanos, donde las relaciones directas en el tiempo no son factibles (PE5). Las personas implicadas en la

[171] *"Cuestionar el modo de certificar es la manera de cambiar las cosas. Crear un caldo político, hacer pensar de forma diferente... cambia las cosas"* (PE5)

[172] *"El objetivo es generar confianza, participación, articulación, discusión... y con esto, llegar a la certificación para alcanzar credibilidad social y reconocimiento legal. Es un instrumento para generar redes de conocimiento, tejido social..."* (PE2).

[173] **"***(*La certificación es*) el reflejo de un proceso al que el grupo está ligado: es una herramienta de perfeccionamiento técnico y asociacionismo de un productor. (…) Es una certificación nuestra: no es un servicio externo. Nosotros valorizamos lo que nosotros hacemos - valorización de lo propio. (…) Contribuye a la organización de base, a la organización del proceso productivo, perfeccionamiento de la producción agroecológica*" (PE10).

Red Ecovida han construido el sistema alternativo de garantía[174] para responder a esta necesidad de sello.

Con todo lo expuesto, podemos concluir que el mecanismo de generación de credibilidad establecido por la Red Ecovida viene siendo trabajado desde una perspectiva pedagógico, donde grupos productores, técnicos y consumidores se integran para intentar buscar una expresión pública de la calidad del trabajo que desarrollan. De esta forma se avalan modos de trabajar y actitudes, y no productos concretos[175].

"La lógica de la Certificación Participativa es distinta. No tenemos que esperar a que alguien de fuera nos diga si nuestro producto es bueno, no tenemos que pagar por eso. (...)Los agricultores son rígidos con otro agricultor que no hace bien las cosas" (PE5).

La visión que se desprende del sistema de garantía trabajado por Ecovida tiene implicaciones para las personas miembro de la Red, que hace que sea un modelo que no sirve para cualquier persona o cualquier situación (PE 17). Por ejemplo, consideran que este tipo de mecanismos se adapta a escalas de producción pequeñas, con actitudes y modos de manejo agroecológicos, en su globalidad[176]. Otro aspecto limitante está relacionado con los requerimientos que este sistema de garantía plantea en términos de trabajo, por ejemplo, en tiempo de reuniones o de acción colectiva. Son elementos que seleccionan, indirectamente, el tipo de personas que se implican en esta iniciativa (PE 17). Como expresa textualmente una de las personas entrevistadas: "*es necesaria una mayor conciencia de agricultura para que entren en estas asociaciones"* (PE1). Algunas de las personas entrevistadas de Ecovida planteaban que este tipo de procesos deben ser fruto de un contexto y un momento determinados y que no pueden ser impulsados desde la administración (PE 2)[177].

La iniciativa Ecovida se rige por una serie de reglas generales para toda la Red, si bien los Núcleos tienen una cierta autonomía para definir elementos específicos que consideren oportunos de acuerdo con su realidad. Los principios generales que rigen el modo de producción de la red Ecovida son, como establecen Santos, C.R. y Oliveira, D. (coord. 2004: 16): el fomento de la Agroecología en el modo de manejo de los recursos naturales, contemplando criterios que van más allá de una mera salida de los productos a mercados diferenciados; el fomento de la soberanía alimentaria a través de las acciones y formas de producción que se llevan a cabo; el respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras y el establecimiento de precios justos tanto para el consumo como para los proveedores; el establecimiento de la participación equitativa de hombres, mujeres, jóvenes y personas adultas y de relaciones de cooperación en todos los procesos y la toma de decisiones y, por último; la preocupación constante por

[174] "(…) *sí, ni siquiera en aquella* (feria, mercado) *en la que estamos ahora, no es tan necesario, pero si queremos llevar nuestro producto fuera y decir que es ecológico, tenemos que tener un sello, si vamos sin sello muchos no se lo van a creer"* (PE16).

[175] *"El sello pertenece a la familia. Todos los productos de la propiedad son considerados agroecológicos"* (PE7).

[176] *"(…) a un gran productor no le interesa lo ecológico o lo convencional porque sí. Mira el mercado* (PE 7); *"No se certifica el producto, sino la propiedad. La CP debe certificar la propiedad: eso es agroecología"* (PE7).

[177] Las citas donde los miembros de la experiencia reflejan su visión de los procesos colectivos se pueden consultar en el anexo XX.

ampliar las contrapartes en la Red, con el objeto de integrar un número creciente de personas asociadas.

Los estándares generales contemplados en el cuaderno de normas de la Red Ecovida para la obtención del sello vienen a concretar los principios generales señalados. Podemos agruparlos en distintos ámbitos relacionados con la producción agraria (extraído de Santos, C.R. y Oliveira, D. Coord. 2004: 16 - 19). En primer lugar, hay un grupo de normas que regulan el tipo de relaciones laborales que se establecen con la mano de obra contratada. A este respecto se prioriza la mano de obra familiar y se regulan las relaciones con eventuales personas trabajadoras contratadas. En todos los casos se supedita la participación en el trabajo agrario de jóvenes y menores al rendimiento escolar y la permanencia en la escuela. En segundo lugar, se regula la cuestión de la comercialización, priorizando las relaciones directas con el consumo y la orientación hacia el mercado interno, a través de circuitos que reduzcan intermediarios. Asimismo establecen criterios para fijar precios justos, que favorezcan el acceso a estos productos a la población en general.

En tercer lugar, establecen una serie de criterios relacionados con el modo de manejo a nivel técnico productivo. En este ámbito se fomenta la recuperación y conservación de los recursos naturales de las fincas, para lo que se establecen ciertas normas, tales como: que haya un 20% como mínimo de superficie forestal, nativa o reforestada en las fincas; que se adopten medidas de protección de riveras, cauces y fuentes de agua; o que se proteja y recupere la biodiversidad. Asimismo, se prioriza el uso de recursos naturales renovables y la minimización del uso de recursos externos a la zona. De esta forma, plantean unos manejos que se adaptan al entorno. En relación al manejo técnico productivo, existen una serie de normas encaminadas a fomentar procesos de ecologización continua, entre las que podemos destacar: el manejo adecuado de los residuos orgánicos; el manejo ecológico de los pastos; el control y la contención de la erosión y el incremento de la materia orgánica en los suelos; la integración de la producción agrícola y la animal y; la rotación de cultivos y su combinación, entre otros.

En base a los estándares descritos y comparándolos con las propuestas teóricas planteadas desde la Agroecología, podemos decir que existe una elevada correspondencia entre ambos. Los miembros de Ecovida plantean una visión de la producción ecológica integral y ampliada, que incluye aspectos tanto técnico – productivos, como socioeconómicos y políticos. En todas estas dimensiones, las propuestas van en la línea agroecológica analizada en el capítulo de la aproximación teórica. Estas propuestas agroecológicas planteadas en la Red Ecovida se observan en los documentos escritos de la iniciativa analizados y también en los discursos de las personas entrevistadas[178].

Para los miembros entrevistados de la Red Ecovida, uno de los elementos fundamentales que les lleva a establecer un modo determinado de producción agraria es la salud de las familias productoras. La salud entendida tanto como la eliminación de sustancias tóxicas en el manejo cotidiano, como un conocimiento de lo que se está

[178] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XV.

comiendo y una confianza en su inocuidad y calidad[179]. Asimismo, buscan un modo de manejo ecológico que respete el entorno natural y que permita producir alimentos en equilibrio con el Medio Ambiente (PE 12).

Aparte de las preocupaciones relacionadas con las cuestiones de la salud y de la ecología, hemos percibido en los discursos inquietudes de tipo político. En este sentido, podemos adelantar que se evidencian los imaginarios de tipo agroecológico de las personas implicadas en Ecovida. Estas inquietudes son de diversa índole.

Por un lado, plantean que la decisión de llevar a cabo una producción de tipo ecológico debe estar vinculada a motivaciones de satisfacción personal, por encima de las posibles ventajas económicas que se deriven de este tipo de productos. Para ellos y ellas, es también una decisión ideológica, en la que se valoran retornos como el trabajo en colectividad para afrontar problemas o una mejor alimentación, por encima de unos mejores precios en el mercado. Por estas consideraciones, las personas entrevistadas consideran que una producción de tipo ecológico debe hacerse por convencimiento, ya que de esta forma se garantiza realmente la sustentabilidad a largo plazo de estas prácticas (PE1; PE2; PE12).

Los miembros de la Red Ecovida incorporan a los aspectos técnicos de la producción ecológica elementos relacionados con el respeto a la identidad cultural local y el compromiso con su entorno. Este compromiso les lleva a plantear la importancia de impulsar procesos de cambio social, dirigidos a ganar autonomía y soberanía en lo que concierne a la producción y al consumo de alimentos[180]. En el marco agroecológico en el que construyen sus discursos, centran sus procesos de construcción colectiva en la defensa de la agricultura familiar y el campesinado. Plantean la necesidad de reivindicar sus modos de funcionamiento y de defenderse frente al entramado de grandes empresas de negocios agroalimentarios, organizados a través de relaciones impersonales, donde lo que prima es el beneficio económico: *"Cuando se adquirió la experiencia y el saber hacer llegaron las grandes empresas de agrobusiness que copiaron esa Agricultura Ecológica. Quienes sufrieron y construyeron la Agricultura Ecológica son pequeños productores y ahora no pueden competir con los grandes que copiaron. (…) El gran capital nunca va a conseguir aplastar la agricultura familiar. La lógica funcional de la agricultura familiar no será apoderada por el gran capital"* (PE4).

El sistema alternativo de certificación que proponen va en coherencia con la visión agroecológica de la producción agraria. Lo valoran por su capacidad de fomentar procesos colectivos y acciones grupales[181]. La base del SPG construido son los grupos, donde las familias productoras se encuentran, intercambian conocimientos, toman decisiones conjuntamente y fortalecen su trabajo a través de la implicación mutua: *"son varias cosas, no sólo participar en el mercado, financiamiento de esas cosas, de ahí*

[179] *"(…) la salud mejoró (...), por eso ¿no? de ahí la salud es mejor, porque él siempre estaba con alguna cosa, dolor de cabeza, estómago, alguna cosa, ¿no?, después de que paráramos de echar venenos nunca más se puso enfermo. Él estaba sintiendo que se estaba haciendo daño a sí mismo. (...) hoy por lo menos es una comida que usted está comiendo que usted sabe lo que está comiendo"* (PE16).

[180] *"El modelo Ecovida es más confiable, honesto y más amplio en su concepto de orgánico, agroecológico, político, social, ambiental, cultural. Para nosotros la cuestión cultural es fundamental, y que incluya soberanía alimentaria, producción sostenible"* (PE4)

[181] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XX

proyectos, quien está en el grupo es mejor, ¿no?" (P16).

El resultado de estos encuentros e intercambios continuos es el impulso de acciones conjuntas que facilitan el trabajo de cada familia y establece vínculos de apoyo mutuo. Uno de los elementos que surgen de forma evidente, en este sentido, es la comercialización conjunta a través de los grupos: *"la red potencia la comercialización directa a través de ferias, como espacios socioculturales"* (PE10). En estos espacios de encuentro, se generan dos tipos de relaciones complementarios: por un lado, se consolidan redes de comercialización entre grupos de territorios diferentes que coinciden en determinadas ferias. Estas redes se basan en el intercambio de productos en las ferias, que luego son vendidos por los grupos en sus respectivas zonas[182]. Por otro lado, la comercialización a través de mercados y ferias facilita el establecimiento de relaciones directas con el consumo y consolida vínculos de fidelidad y confianza.

Otros elementos que surge como fruto de estos encuentros e intercambios continuos entre las familias productoras son el intercambio de semillas (PE15) o las compras conjuntas de insumos (PE1).

6.1.5. Dificultades y desafíos percibidos

Las dificultades que entraña el proceso de garantía participativa trabajado por Ecovida están profundamente analizadas por los propios miembros de la Red***[183]***. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan en el día a día de esta experiencia es la implicación en tiempo que requiere la participación en todas las asambleas y reuniones que se establecen[184]. Algunos núcleos han resuelto esta cuestión remunerando a las personas por el tiempo que le dedican a las tareas del SPG (PE15). Los requerimientos en tiempo dificultan el mantenimiento de los grupos unidos, trabajando activamente de forma coordinada (PE16) por lo que, en muchos casos, es la ONG de asesoría del Núcleo quien asume el peso de la coordinación y la organización, aliviando el trabajo de las familias productoras y consumidoras[185].

En el proceso de encuentro entre familias productoras y ONG de asesoría surgen conflictos de tipo ideológico. Sobretodo en torno a la definición de la Agroecología, así como a la decisión sobre una mayor o menor flexibilización de los principios de tipo político: ***"****existen conflictos entre técnicos y agricultores, por toda esa cuestión de los técnicos mismos, la cuestión ideológica"* (PE17, PE5). Estas diferencias requieren de

[182] *"la gente que vive en la sierra, en el noroeste de Rio Grande do Sul, trae esos productos (…) nosotros del litoral, aquellos productos que no conseguimos producir, los llevamos de aquí, tenemos un autobús allí, cada núcleo tiene un autobús (…) llevamos los productos a una cooperativa en nuestra región, y la gente de la región compra los productos puros que vienen de aquí porque están seguros de que participan en la Red Ecovida (…) y nosotros aquí también mandamos productos para allá a la Sierra, que no producen allí; de esta forma es una red, trae aquí y manda para allá"* (PE14).

[183] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XVII.

[184] *"Quien está implicado en la cuestión de la Red va a tener semanas que van a perder 3 días e incluso más porque, tienes reuniones, las reuniones están siendo hoy en Chapecó, Santa Catarina, y allí en Curitiba, ¿no?, entonces quien sale tiene que hacerlo para dos días…"* (P16).

[185] *"Hoy se puede decir que el CETAP hace lo que nosotros no conseguimos hacer... poco a poco, ¿no, por ejemplo los informes los hicieron por nosotros"* (PE15).

elevadas dosis de energía, así como de capacidades de diálogo y de construcción colectiva para poder superarlos.

En lo referente al propio sistema de garantía establecido, una de las principales dificultades de su funcionamiento es el ser capaces de denunciar o verbalizar los errores que cometen otras familias compañeras (PE15) en el trascurso de las visitas de campo. Por otro lado, el no reconocimiento legal de estos sistemas (si bien está en proceso a nivel de legislación brasileña) dificulta el acceso de los productos a otros mercados, más allá de los locales o estatales (PE5). Esta dificultad es importante pues es en estos mercados donde se precisa la garantía, ya que en los de proximidad destacan que las relaciones de confianza y el conocimiento mutuo son aval más que suficiente.

Uno de los agricultores entrevistados resume todas las dificultades descritas de forma muy sintética (PE5), señalando que el SPG no funcionaría en cualquier lugar y con cualquier tipo de personas, ya que requiere más esfuerzo y más trabajo que las auditorías, al exigir: a) tiempo para las reuniones; b) formación, contactos y salir de las propias fincas para ir a otras. Es un sistema en el que si las personas no participan se excluyen.

Las dificultades que encuentran en el sistema de garantía establecido les llevan a considerar que este tipo de modelos son poco viables en zonas donde la cohesión y la estructuración social son débiles o inexistentes. En estos contextos, trabajar mecanismos basados en relaciones de confianza y de proximidad les parece complicado. Incluso plantean la imposibilidad de que este tipo de procesos se puedan iniciar o fomentar desde la administración (PE3). Por otro lado, la cuestión del reconocimiento legal está en proceso de construcción a nivel federal. En las discusiones de la ley que regulará estos temas están participando activamente personas vinculadas a Ecovida[186].

Según las personas entrevistadas, esta iniciativa se enfrenta a dos grandes desafíos[187]. Por un lado, consolidar la iniciativa: internamente, a través del fortalecimiento de la organización de los grupos y la participación de los consumidores/as (PE15) y; externamente, a través de la expansión hacia fuera a nivel de nuevos territorios y de nuevas familias productoras y consumidoras (PE10). Por otro lado, resolver la cuestión del reconocimiento legal a nivel de legislación federal brasileña e internacional, de manera que puedan trabajar al mismo nivel de oficialidad que las certificadoras acreditadas que trabajan la auditoría por tercera parte (PE17).

[186] De este tema se habló ampliamente en el encuentro de experiencias de SPG de Latinoamérica y Brasil, celebrado en Antonio Prado (Rio Grande do Sul, Brasil), en octubre de 2007.
[187] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XVIII.

6.2. Federación Internacional de Agricultura y de Ecobiología Naturaleza y Progreso (Nature & Progrès)[188]

Las experiencias en torno a Sistemas Participativos de Garantía no sólo se dan en Latinoamérica o países donde la legislación en torno a la producción ecológica está en proceso de implantación. En la Unión Europea, donde el sector de la producción ecológica está regulado desde el año 1992, existe una experiencia que también plantea la generación de credibilidad desde un Sistema Participativo de Garantía: la Federación Internacional de Agricultura y de Ecobiología Naturaleza y Progreso (N&P).

N&P fue creada por un grupo de agrónomos y médicos en el año 1964. Tenían la inquietud de reaccionar frente a los daños que la agricultura productivista estaba generando en la salud y el Medio Ambiente (PE20). Su objetivo era plantear un modo productivo diferente que eliminara estos daños y a la que denominaron agricultura ecológica.

Tras varios años de andadura, en N&P empezaron a surgir conflictos a causa de algunos productores/as que reclamaban ser miembros de la asociación, pero que no tenían asumido, en su modo de manejo, los criterios descritos por N&P. Ante esta realidad, el cuaderno de normas, que hasta ese momento describía el modo de trabajar aconsejado, pasó a ser redactado en términos de lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido, haciendo más fácil verificar el cumplimiento del mismo. Como consecuencia directa de este proceso, se creó la Asociación de Consejeros de Agricultura Ecológica (ACAB), compuesta en su mayor parte por personas técnicas y algunas productoras. La ACAB se desplazaba de finca en finca para dar consejos y asesorar. Poco a poco, esta labor de asesoría fue complementándose con una labor de control, ya que se les empezó a demandar desde la asociación que informasen, tras estas visitas, de si las fincas respetaban el cuaderno de normas o no.

Cuando en 1981 el estado francés regula la Agricultura Ecológica, comienza un proceso de homologación de los cuadernos de normas de las distintas iniciativas que estaban en marcha en ese momento en Francia. El de N&P fue el primero en obtener este reconocimiento, en el año 1986, pues iba asociado a un sistema de control. El sistema de control se basaba en las visitas de campo de la ACAB, a partir de las cuales se realizaba una descripción de la finca y se daba parte a la Comisión mixta de conformidad y control (COMAC). Las COMAC eran comisiones departamentales, compuestas por personas del ámbito de la producción y el consumo. Esta comisión era la que decidía sobre la autorización del uso de la mención N&P, en base a los informes de las visitas realizados por la ACAB. La composición de las Comisiones departamentales era un reflejo de la visión de N&P en torno a la Producción Ecológica, ya que trataba de huir de un sistema corporativo o de defender por encima de todo los intereses de la producción. Su idea era, más bien, luchar por la agricultura ecológica en general, donde debía entrar también el consumo que buscaba productos sanos (PE18).

[188] La trayectoria histórica seguida por la Federación, descrita en este apartado, ha sido extraída casi en su totalidad de la entrevista realizada a uno de los técnicos de la Federación (entrevista PE20).

El sistema de las COMAC descrito funcionó entre 1986 y 1991, en paralelo con otras asociaciones de producción que decidieron poner en marcha sus propios cuadernos de normas y que se articulaban a través de estas comisiones departamentales. Esto provocó un cambio importante para N&P, ya que pasó paulatinamente de ser una asociación nacional, a convertirse en una federación de asociaciones departamentales, en las que las personas se conocían directamente y se establecía una gestión colectiva de la marca[189].

El año 1992 fue decisivo para todos los procesos de autoorganización que se venían desarrollando en el sector de la producción ecológica. En este año, la UE estableció un Reglamento comunitario, homogéneo para este sector y todas sus asociaciones, en todos los países miembro. La regulación obligó a la ACAB a convertirse en una empresa privada (se la llamó Ecocert). Por su parte, el funcionamiento de los controles y de las COMAC siguió siendo el mismo hasta el año 1995, en el que se publica la norma EN 45011. Con esta norma, las Comisiones Departamentales y las asociaciones de este tipo tienen que abandonar la labor que desempeñaban, quedando excluidas del sistema de certificación oficial establecido, que fue el de tercera parte o auditoría.

La exclusión de otros modos de garantía que no estuviesen basados en las auditorías técnicas de tercera parte generó diversas reacciones. Algunas asociaciones departamentales acataron la reglamentación, asumiendo que el sentido de su existencia había terminado con el reconocimiento legal del cuaderno de normas por el que velaban y disolviendo sus Comisiones departamentales: *« algunas asociaciones se plantearon que, efectivamente, ya no tenían cabida puesto que el cuaderno de normas había sido reconocido por el estado"* (PE18). Sin embargo, otras asociaciones departamentales decidieron seguir adelante articuladas a través de la federación nacional. Querían pelear para mantener las Comisiones departamentales, ya que lo consideraban un sistema realmente democrático y transparente, frente al sistema impuesto a nivel legal de las auditorías por tercera parte: *"tratamos de mantener nuestras COMAC, porque siempre pensamos que estas asambleas locales, incluso si no eran muy formales o profesionales, todo lo que quieras,… Son una verdadera democracia y evita los compadreos, la opacidad de los despachos... Es transparente, podemos decir las cosas y lo sabemos"* (PE18).

Para los miembros de N&P que se mantuvieron en la federación, el sistema impuesto de auditorías técnicas realizadas por empresas externas acreditadas suponía un agravio comparativo para los productores/as, que manejaban sus producciones sin contaminar y preservando el Medio Ambiente. En el año de la publicación de la Norma que lo regulaba, 1995, el sindicato de productores de la asociación lanza un movimiento de rechazo a la lógica de "*el que no contamina paga*", a través de una campaña de "*boicot a la certificación de la Agricultura Ecológica*" (Nature et Progrès, 2007). En esta campaña reivindicaban que el Ministerio de Agricultura reconociese su sistema de COMAC (PE20).

[189] *"La asociación puramente nacional se transformó en federación de asociaciones departamentales, De repente, con las asociaciones departamentales, las personas se conocían, se dio una gestión colectiva seria de la marca y su uso, y de repente esto se ha hecho de forma colectiva"* (PE18).

Sin embargo, el boicot no fue respaldado por los grupos productores de forma masiva (PE20). Aquellos grupos productores que no querían que el consumo estuviese presente en su asociación se pusieron del lado de la legalidad (PE18), dejando solos en la lucha a aquellos grupos que peleaban por mantener estas estructuras, que fueron en concreto 10 asociaciones. Estos grupos continuaron trabajando a través de sus Comisiones departamentales, rompieron los lazos con Ecocert (la antigua ACAB) y establecieron sus propias figuras técnicas (asalariadas o voluntarias), que hacían las visitas de control y los informes que remitían a la comisión.

En el departamento de la Lozère, el problema surgió por cuestiones económicas, ya que entre la docena de productores y productoras que conformaban la asociación suponía un esfuerzo excesivo pagar una figura técnica asalariada para una semana de trabajo (PE20). Por otro lado, nadie quería asumir la responsabilidad de los controles en el propio grupo (PE18). De esta forma, comenzó el sistema participativo de garantía puro de N&P: decidieron que mantendrían el sistema de COMAC y que el control lo harían entre todas las personas miembro del grupo[190].

El sistema alternativo de garantía defendido por N&P, a través de Comisiones departamentales y controles realizados bien por figuras técnicas propias bien por las personas miembro de la asociación, supuso una crisis en la Federación (PE20). Resintieron un descenso drástico en el número de personas socias. Este descenso se ha ido recuperando y en el año 2007 la Federación contaba con unas 900 familias consumidoras y unas 450 familias productoras. Si bien existen familias asociadas a nivel nacional, el funcionamiento base de la Federación se organiza a través de los departamentos. Los más organizados están ubicados en las regiones mediterráneas: Languedoc Rousillon y altos Pirineos (PE20).

6.2.1. Motivaciones para la defensa de la iniciativa[191]

El coste del posicionamiento de N&P en defensa de su propio sistema de garantía establecido fue importante, en términos de número de personas asociadas. Sin embargo, respondió a unos principios y visiones sólidos, percibidos a través de las entrevistas realizadas. Para estos grupos productores y consumidores, la garantía por auditoría o tercera parte convertía el proceso de generación de confianza en un examen, orientado a unos mecanismos de comercialización impersonales, donde lo que se evalúan son productos, no relaciones humanas y sistemas vivos (PE 24)[192]. Dentro de la lógica del examen, la certificación por auditoría ofrece pocos servicios a los grupos productores, los deja solos ante los resultados obtenidos, para que busquen sus propias soluciones; todo esto a cambio de unos costes elevados (PE20).

[190] *"Entonces, sin reflexionar desde un punto de vista filosófico, yo propuse que si nadie estaba dispuesto a hacerlo, que entonces todo el mundo debería asumirlo. Así la responsabilidad de ese control colectivo recae sobre todo el mundo, y no sólo sobre una persona"* (PE18).

[191] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XIII

[192] *"Para mí Ecocert no bastaba, vaya. Veíamos llegar a los tipos de Ecocert con su maletín… Para mí no es eso, tenemos realmente la impresión de pagar algo para el mercado, ¿no? Y viendo que es algo dirigido por el Estado, yo no puedo entenderlo…"* (PE18)

Los miembros de N&P de COMAC activas cuestionan la capacidad real de generar confianza de un sistema, que basa la garantía en la inspección, por parte de una única persona técnica externa al lugar, a través de una visita anual de unas dos horas de duración de media. Plantean casos en los que este sistema no ha sido capaz de identificar fraudes, los cuales, sin embargo, eran conocidos sobradamente por el entorno social de la persona en cuestión (PE18 y PE 23).

Además, piensan que las auditorías están basadas en unas normas y criterios simples, que representan mínimos a cumplir en torno a productos prohibidos y autorizados. No fomentan procesos de mejora continuada o una evolución hacia manejos integrales y agroecológicos, ya que no incorpora recomendaciones ni procesos de intercambio de conocimientos (PE18 y PE27).

El resultado de este sistema es un procedimiento para ellos poco fiable y nada constructivo, que penaliza a las pequeñas producciones diversificadas, por el sistema de costes establecido en el que se establecen: por un lado, unos mínimos independientemente de la superficie y; por otro lado, una escala de incrementos en función de la diversificación de aprovechamientos en la finca: *"que seas un pequeño productor o una gran empresa, el coste es relativamente el mismo ya que el control dura aproximadamente medio día, independientemente de la finca inspeccionada (…). Con la única diferencia que vas a pagar más en función de lo diversificada que tengas la producción, ya que requerirá un control más largo. Esto penaliza a los pequeños productores que tienen una producción muy diversificada, quienes además quieran transformar en la finca... Ellos se encuentran muy penalizados con respecto a una gran corporación lechera que sólo produzca leche"* (PE20).

Por los elementos destacados las personas implicadas en N&P plantearon la necesidad de mantener un modelo de garantía que se adaptara a su visión y de defenderlo a nivel legal. Sus objetivos se han centrado, desde sus orígenes, en trabajar aspectos de tipo técnico y de asesoría en torno a la investigación y la difusión de técnicas de manejo ecológicas. Asimismo, se plantean fomentar relaciones diferentes entre productores, transformadores y consumidores, a través del desarrollo de mecanismos de comercialización cercanos, como son los circuitos cortos. Esta defensa les ha hecho padecer, a lo largo de su trayectoria, momentos de desacreditación y de injurias, por parte de contextos sociales y técnicos que veían la alternativa ecológica como una falacia o una mentira[193].

6.2.2. Estructura y funcionamiento de la Federación[194]

N&P es una federación de asociaciones departamentales, compuesta por 22 grupos activos. Aparte de ellas, existe toda una zona llamada PACA, que se extiende desde la Alsacia a las Ardenas, en las que no hay grupos activos, sino personas asociadas de

[193] *« Era una iniciativa aún más alternativa que hoy, no nos creían, había que apañárselas solo, ya que estaba claro que no íbamos a recibir ningún apoyo externo. Era la guerra a nivel de ideas, sobre la naturaleza misma de la agricultura ecológica, de la posibilidad de practicarla, nos trataban de mentirosos, de idealistas, de soñadores… No estaba bien visto en aquella época »* (PE18)

[194] Las citas con las que hemos completado esta descripción se pueden consultar en el Anexo XV

forma aislada (PE20).

Cada asociación departamental se estructura a través de una asamblea general de todos sus miembros, entre los que hay tanto productores como consumidores. Algunas de ellas establecen su propia COMAC, compuesta por un subgrupo de personas socias, generalmente elegidas o validadas por la asamblea general. Las figuras jurídicas que regulan las Comisiones departamentales son muy variables en N&P, dándose desde departamentos donde cuentan con estatutos formalizados, hasta otros donde funcionan de modo informal (PE18). Cada Comisión cuenta con una persona secretaria y una presidenta o dinamizadora, que tendrá la responsabilidad de gestionar las visitas de garantía e intercambio (PE20). En total, en el año 2007, de los 22 grupos activos sólo 10 tenían COMAC activas (PE20). Las funciones de las COMAC son (PE18 y PE20):

a. Organizar las visitas de garantía y asegurar la formación correcta de las personas que realizan las visitas.
b. Estudiar los informes de las visitas y dar su visión sobre la atribución o denegación de la mención, junto con las observaciones pertinentes en torno a fortalezas y debilidades, puntos a mejorar, etc. La revisión de los informes se hace también con la finalidad de asegurar que las visitas han sido realizadas correctamente.
c. Dar consejos a las personas socias. Esta función de asesoría técnica, a través de la cual tratan los problemas o dificultades técnicas que sus socios/as tienen, dando consejos o asesoramiento técnico constituye una herramienta de intercambio de experiencia y de conocimientos técnicos necesaria y útil para los productores/as[195].
d. Recoger informaciones técnicas para ir modificando el cuaderno de normas.

Las personas socias que se encuentran en el territorio denominado PACA no participan en grupos organizados, sino de forma aislada. Todos estos socios se organizan en torno a lo que se llama el **Colegio**. Todas las personas miembro de la Federación, ya pertenezcan a grupos departamentales, ya sean del territorio PACA, se reúnen anualmente en la Asamblea General.

La Federación cuenta con diferentes estructuras que facilitan su funcionamiento y organización. Por un lado, encontramos el *Consejo Federal*, compuesto por representantes de las asociaciones departamentales, del Colegio y por miembros del Consejo de Administración. Sus funciones son: 1º elegir a los 6 miembros del Consejo de Administración; 2º decidir sobre las orientaciones a seguir y la definición de prioridades, 3º plantear propuestas de acciones para operativizar las orientaciones y; d) revisar los presupuestos e informes contables que presente el Consejo de Administración. A los representantes de las asociaciones departamentales miembros del Consejo Federal los eligen los respectivos Consejos de Administración de cada asociación. Los que representan a las personas asociadas a través del Colegio son elegidas en la asamblea anual de esta estructura.

[195] *"La COMAC también tiene la función de dar consejos a los agricultores, y esto es un punto importante que N&P reivindica, y que no está en absoluto incorporado en el sistema de certificación oficial"* (PE20)

El *Consejo de Administración* es órgano ejecutivo de la Federación. Está compuesto por 6 personas elegidas por el Consejo Federal. Es el encargado del funcionamiento cotidiano de la Federación, respetando y aplicando las orientaciones y prioridades establecidas por el Consejo Federal. Además, hace propuestas de orientaciones y acciones y es quien elabora el presupuesto anual. Es el encargado de hacer fluir la información entre los miembros de la Federación y de las relaciones externas.

Existe una última estructura, importante en el funcionamiento del sistema de garantía de N&P, que es el CCAM: el Comité de Certificación y de Autorización del uso del Sello. Este comité está compuesto por dos personas nombradas por el Consejo de Administración y 6 miembros elegidos por el Consejo Federal. De estos 6 miembros, 2 son personas productoras, 2 consumidoras y dos dedicadas a la transformación. Se valora en su elección a aquellas personas que están implicadas en alguna COMAC local. Estas personas son elegidas cada 4 años. El CCAM, aparte de tener la última palabra en cuanto a las autorizaciones de uso del sello, en base a los informes que recibe de las COMAC, es también el que:

a. define los procedimientos de garantía y verifica su cumplimiento.
b. decide acerca de las sanciones a aplicar a aquellas personas socias autorizadas para el uso del sello que incumplen alguna norma.
c. propone modificaciones al cuaderno de normas.
d. Suple el trabajo de las Comisiones departamentales, en cuanto a la organización de las visitas y la revisión de los informes, en caso de inoperancia de alguna de ellas.

6.2.3. El Sistema Participativo de Garantía de Naturaleza y Progreso[196]

De todos los grupos departamentales organizados que componen N&P (22 en total), diez trabajan a través del sistema de las COMAC. De estos grupos que han desarrollado procedimientos colectivos y participativos de evaluación de conformidad, sólo dos de ellos han establecido las visitas dentro de esta lógica, llevándolas a cabo personas productoras y consumidoras miembro de los grupos: La Lozère y el Tarn.

El resto de grupos con Comisiones departamentales activas funcionan a través de un sistema de inspecciones por auditoría, para lo cual la federación cuenta con unos veinte técnicos auditores especializados en diferentes sectores productivos (hortícolas, fruticultura, apicultura, ganadería, etc.). En algunos casos estos técnicos/as realizan las visitas solos y en otros casos, como el modelo que se viene construyendo en la Bretaña, los técnicos acompañan a un productor/a o consumidor/a del grupo[197].

[196] Las citas con las que hemos completado esta descripción se pueden consultar en el Anexo XV

[197] En el caso de empresas más complejas, tales como fabricantes de cosméticos, cooperativas o fabricantes de insumos, el sistema establecido por N&P va en la línea de la certificación por tercera parte externa, siendo la empresa responsable de las auditorías Certipac. La decisión de la autorización del uso del sello se toma a nivel nacional, en base a los informes realizados por esta empresa (PE20).

La lógica que subyace detrás de esta libertad de cada grupo para establecer el sistema que mejor le parezca se basa en la idea de que los procesos deben adaptarse a las personas, los contextos y las realidades concretas de cada territorio y no al revés (PE18). Consideran que estas diferencias son las que pueden permitir a cada grupo evolucionar a su manera, y construir procesos endógenos y sólidos.

Ante esta diversidad, nos centraremos en los mecanismos de garantía que han establecido los grupos que manejan un Sistema Participativo de Garantía en todas las etapas del proceso: La Lozère y el Tarn.

Procedimientos de control

El procedimiento de control en el que se basa el Sistema Participativo de Garantía de N&P son las visitas cruzadas entre productores que se realizan anualmente. En estas visitas, se evalúan dos aspectos: por un lado la estructura de la finca, en la que se observan modificaciones con respecto a las visitas de otros años; por otro lado, los aprovechamientos y los cultivos concretos que se estén llevando a cabo.

Aparte de las visitas, existe un mecanismo de control social continuo[198], que si bien se operativiza a través de las visitas anuales, en realidad se hace a lo largo de todo el año. Este control viene realizado por parte del contexto social de la persona productora, lo que representa para los miembros de estos grupos una fortaleza a su sistema de garantía (PE18).

Como elemento fundamental del sistema de garantía destacan la implicación del consumo en todas las etapas. Estos actores son denominados, cada vez con más asiduidad, no como consumidores sino como *no-profesionales* o *militantes*, ya que no se hacen socias de N&P para consumir, sino más bien por convicción ideológica y apoyo (PE20).

Procedimiento de entrada

El procedimiento de entrada establecidos por N&P para nuevos miembros sólo les exige, a priori, comprometerse en su actividad con el cumplimiento del cuaderno de normas de la Federación y recibir una primera visita de personas enviadas por la COMAC (PE20). Esta primera visita es la más compleja, pues en ella se deben recoger todos los aspectos relacionados con la estructura de la finca, así como con los manejos y el historial de la misma.

Una vez dentro de la Federación, los nuevos miembros pueden participar desde el principio en las estructuras establecidas de las Comisiones departamentales o la CCAM, así como en las visitas al resto de miembros de su grupo, en el caso en el que se entre en una asociación departamental que funcione con el Sistema Participativo de Garantía de N&P. El número de personas que anualmente solicitan la entrada a las distintas

[198] *"No es el día de la visita cuando hacemos el control. Si yo veo pasar un camión de heno delante de mi casa, sé dónde va y lo que transporta, de dónde viene. No pueden engañarme. El SPG son las relaciones personales en el día a día. Es imposible disimular, como puede pasar en los controles de Ecocert, porque nosotros funcionamos juntos"* (PE24)

asociaciones departamentales no es excesivamente grande como para sentir la necesidad de poner algún tipo de condición o proceso más complejos[199].

Estructuras y funciones

Las estructuras que operativizan el Sistema Participativo de Garantía de N&P son tres fundamentalmente. En primer lugar, los grupos de visita, cuya composición varía de unas asociaciones a otras. Suelen estar compuestos por dos personas, una productora y otra consumidora. En el caso de La Lozère, todas las personas productoras visitan la finca de otra familia productora. En el año 2007, el grupo contaba con 20 productores y cerca de 200 consumidores y cada año, los 20 productores y 20 consumidores son llamados a realizar una visita de evaluación de conformidad. Los grupos de visita los establece la persona responsable de la burocracia de la asociación, junto con el o la presidenta. Cada persona productora, y las 20 consumidoras, reciben una carta en la que le comunican a quién deben visitar y con quién (PE18). En el grupo del Tarn, los grupos de visita son también binomios, pero los componen personas miembro de la COMAC (no es cualquier miembro productor que participa anualmente). Las personas miembro de la Comisión departamental son elegidas cada tres años por la asamblea de la asociación (PE22).

El segundo nivel de garantía lo establece la propia Comisión departamental. Esta comisión es la encargada de revisar y discutir todos los informes de las visitas. A partir de este procedimiento, aconseja o no la autorización del uso del sello. El último nivel de garantía lo representa la CCAM. Esta es la estructura que toma la decisión sobre la autorización o no del uso del sello a las personas productoras socias. Se basa en los informes de las visitas y de las COMAC.

Los conflictos, en cada nivel, se van resolviendo en las estructuras correspondientes. En caso de que llegue a la CCAM un conflicto que no pueda o sepa solucionar, será el Consejo de Administración de la Federación quien tendrá la última palabra.

Infracciones y sanciones

Las sanciones contempladas en la Federación para aquellas infracciones voluntarias del cuaderno de normas es la expulsión. De este modo, no sólo se deniega la autorización del uso de la mención, sino que también se excluye a la persona en cuestión del grupo y de todas las acciones y proyectos colectivos que tengan en marcha.

Costes

La cuota anual que cada socio/a tiene que pagar a la federación depende de los servicios que recibe de esta y de la producción que se lleva a cabo. Por ejemplo, para hortícolas, en el año 2007, los precios que se pagaban se reflejan en el cuadro siguiente.

[199] *"Éramos doce al principio, y ahora somos una veintena, así que no hemos crecido mucho (…). Si tuviésemos todos los años 20 o 30 productores que demandaran el uso del sello, entonces quizás habría que hacer alguna cosa"* (PE18)

Cuadro 24- Cuotas establecidas para los socios/as de N&P

Sin uso de la mención	Con uso de la mención a través de auditoría técnica de la federación	Con uso de la mención a través del sistema participativo de garantía
300 euros	450 euros	150 euros

Fuente: Datos de PE20

La cuota anual establecida en N&P depende del uso o no del sello y del sistema de garantía que se practica. Los grupos que trabajan a través del Sistema Participativo tienen un descuento en la cuota, al ser ellos mismos quienes se implican en la realización de las evaluaciones de conformidad y la elaboración de los informes, en un sistema de trabajo completamente voluntario. El uso de la mención N&P a través de un mecanismo de garantía convencional conlleva un coste mayor (450 euros), al asumir los gastos de la persona técnica que realiza los controles.

Procedimiento de renovación del sello

La visita de campo es la primera etapa para renovar el sello anualmente. Sea quien sea quien realiza esta visita, el informe de la misma es enviado a la COMAC correspondiente para su discusión. A esta reunión asisten todas las personas que han participado en las visitas: cada grupo de visita presenta el informe realizado donde se hace una descripción de la finca y se explican las observaciones realizadas. Tras la exposición, se inicia una discusión para decidir si se recomienda la autorización del uso del sello o no, y se hacen las observaciones y recomendaciones que se estiman oportunas (PE20). De esta forma, se trata cada expediente en profundidad, se evalúa el nivel de ecologización de las fincas, se dan recomendaciones y consejos técnicos en aquellos casos en los que se crea necesario y se decide si se aconseja la autorización del uso del sello o no.

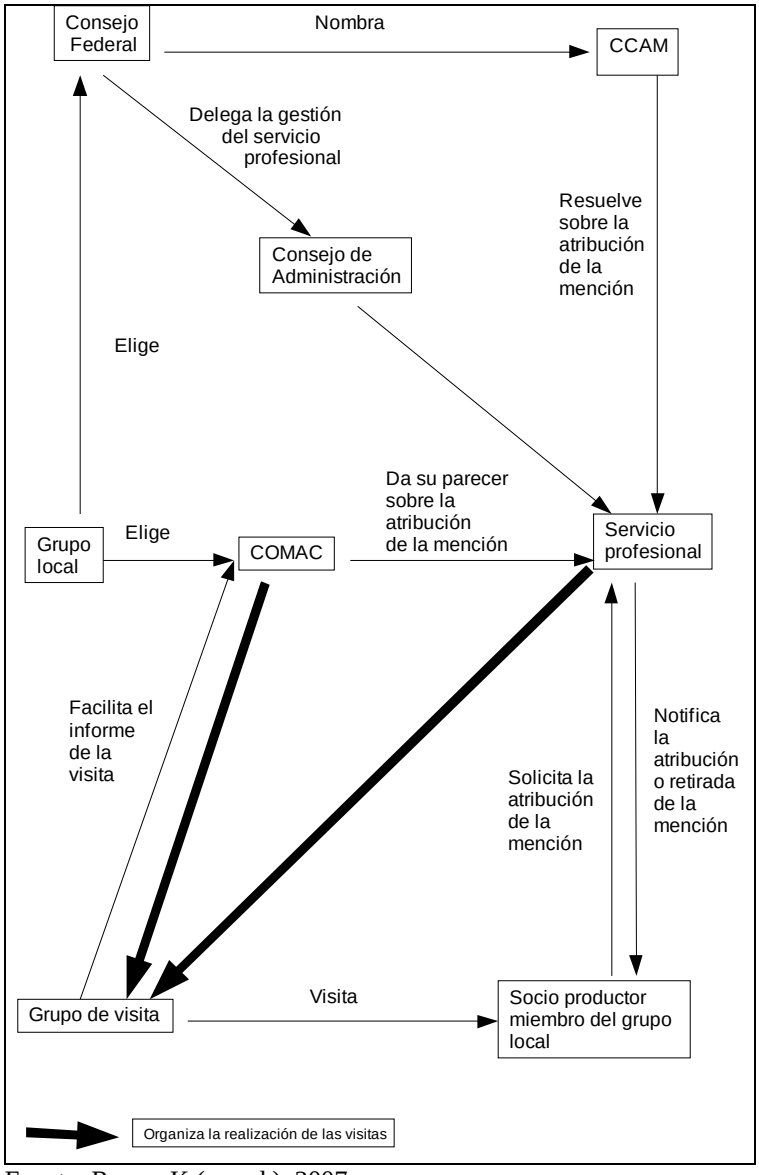
En la mayoría de los casos y si la persona visitada lo solicita, se permite su presencia para poder explicar aspectos de la visita, responder a las cuestiones que puedan suscitarse, etc. Esta persona no estará presente en el momento de la toma de decisión sobre la recomendación o no de la autorización del uso del sello.

En la toma de decisiones, el procedimiento varía según las COMAC. En la Lozère, por ejemplo, se trabaja por consenso, por lo que los procesos suelen ser más largos. En este departamento, es una estructura horizontal, donde la presidencia no es una figura relevante a nivel de toma de decisiones. En el Tarn se funciona por voto, por lo que en caso de empate, es la presidencia quien decide (PE20).

El informe que elabora la Comisión departamental es enviado al CCAM quien, en base a éste y verificando que se han cumplido todos los requisitos exigidos a las visitas y al procedimiento, es quien concede o deniega la autorización del uso del sello a las personas socias y lo comunica. En última instancia y en el caso de conflictos que la CCAM no puede solucionar, se recurre al Consejo de Administración de la Federación.

Todo este proceso es largo, demorando de 2 a 6 meses desde que se decide quién visita a quién, hasta que la CCAM emite una resolución sobre el uso del sello. Actualmente, cada productor que no tiene el sello oficial francés recibe una visita anual; sin embargo, aquellos que son certificados por una entidad acreditada oficialmente son visitados cada 2 años. En este último caso y en el año en el que no se recibe visita de N&P, el productor o productora debe hacer llegar a la COMAC el informe de la certificadora acreditada. El proceso de autorización del uso del sello en Naturaleza y Progreso lo presentamos de forma esquemática en el gráfico siguiente.

Figura 10.- Estructura de funcionamiento del Sistema Participativo de Garantía de Naturaleza y Progreso



Fuente: Roure, K (coord.), 2007

6.2.4. Visión en torno a la garantía y la producción ecológica[200]

El mantenimiento y la defensa de un sistema alternativo de certificación, en un contexto de regulación pública excluyente, responden a una determinada visión de la generación de credibilidad y los mecanismos de garantía[201]. Para las personas protagonistas del Sistema Participativo de Garantía de N&P, este es un medio a través del cual se fomentan procesos de intercambio y de conocimiento mutuo con otras personas de sus mismos contextos[202]. Valoran, ante todo, la riqueza del plano humano sobre el que se construye la experiencia (PE18). Todos estos elementos favorecen la creación de grupos activos y vivos, que asumen responsabilidades y compromisos en colectividad (PE21 y PE18). La garantía así entendida supera la idea de examen (PE21) y se plantea como una corresponsabilidad entre las personas implicadas (PE18). En este sentido, se sienten orgullosos de trabajar un mecanismo democrático, donde todos los miembros ocupan el mismo nivel de importancia (PE23).

Basar todo el sistema de garantía en la transparencia y no en la confidencialidad supone para sus miembros una forma directa de ganar imparcialidad en la toma de decisiones, asumir colectivamente competencias y responsabilidades y construir grupalmente conocimientos (PE23).

El consumo, en esta iniciativa, se implica desde una convicción ideológica. Aportan la parte más utópica del proceso puesto que están desvinculados de un interés comercial por el sello (PE27). Para ellos y ellas, es satisfactorio implicarse en un mecanismo que les permite garantizar lo que consumen y conocer productores y productoras cercanos con los que establecen relaciones directas de compra – venta de alimentos (PE23 y PE24).

La visión de la garantía que las personas entrevistadas de N&P expresan viene relacionada con su carta de principios y su cuaderno de normas[203]. En estos, se establece una visión de la producción ecológica más amplia e integral que un simple modo de producción donde se sustituyen insumos dañinos para el Medio Ambiente y la salud humana por otros inocuos. En la carta de principios, N&P recoge los aspectos que deben ser respetados y conservados en los modos de producción de sus socios/as. Algunos de estos aspectos son:

a. En la dimensión ambiental: preservación del agua, la energía, la biodiversidad o la fertilidad de los suelos, entre otros
b. En la dimensión social: fomentar las relaciones humanas, la militancia o los circuitos cortos de comercialización, entre otros

[200] Las citas con las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XVI
[201] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XVII
[202] *"lo importante es el intercambio, el sentir a las otras personas"* (Brun, presidente de la asociación N&P Lozère, PE21)
[203] *La carta de principios, así como los diferentes cuadernos de normas según el tipo de producción se pueden encontrar en su totalidad en* www.natureetprogres.org/producteurs/professionnels_nature_progres.php *(fecha de consulta: 2 de agosto de 2007)*

c. En la dimensión económica: tender hacia el comercio justo, la autonomía o la soberanía alimentaria, entre otros

Todos los aspectos recogidos en la carta de principios se concretan en el cuaderno de normas, en base al cual se realizan las visitas de campo y se otorga la mención N&P. Cuentan con un cuaderno de normas para cada tipo de producción. A grandes rasgos, en la producción vegetal incluyen los siguientes criterios básicos a respetar: la fertilidad y la estructura de los suelos; la limitación e incluso prohibición de determinados fertilizantes, aunque sean de origen natural, por riesgo de contaminación de aguas; la prohibición total de utilización de radiaciones de cualquier tipo, incluso las microondas, para los productos y; la exigencia de unos mínimos de variedad de cultivos y de variedades en los campos, para proteger la biodiversidad.

En la producción animal, incluyen aspectos relacionados con su bienestar, tales como la lejanía a grandes vías de comunicación, por los ruidos y la calidad del aire; las horas máximas de transporte por carretera; la promoción de razas autóctonas, etc. Para cualquier tipo de manejo, N&P prohíbe terminantemente la presencia de cualquier traza de organismos genéticamente modificados. Un documento interno de la propia Federación refleja que la producción ecológica que pretenden defender va más allá de la que se describe en los reglamentos públicos, es decir, de la producción ecológica entendida como sustitución de insumos: "(La existencia de N&P) *permite siempre defender eficazmente los principios de base de la agricultura ecológica frente a determinadas derivas comerciales*"[204].

A nivel de prácticas y de fincas, se prioriza la visión global del manejo de los recursos naturales en términos de ciclos de nutrientes y energía, frente a detalles de prácticas concretas. En estas prácticas concretas anteponen las que estén adaptadas a un lugar determinado, por encima de los reglamentos genéricos que ignoran las especificidades de cada zona. Phillippe nos habla de un caso concreto a este respecto: *«Por ejemplo, aquí hay poca hierba, así que para disponer de heno, los productores deben comprar y antes que comprar heno N&P, que en transporte cuesta una barbaridad, tiene un vecino que no utiliza insumos químicos, que no está sellado pero que, de todas formas, es aceptado, ¡eso nos parece evidente, vaya! Tenemos, desde hace tiempo, esa concepción global. Así que desde siempre, incluso antes de la Carta, para nosotros lo importante no era el reglamento sino la práctica por encima de todo»* (PE18).

Para los miembros del Sistema Participativo de Garantía de N&P, la producción ecológica no es sólo un manejo técnico diferente, sino un deseo de cambio en la sociedad y en las relaciones sociales del medio rural. Es una cuestión, pues, profunda y política (PE20). De este modo, la producción ecológica no es un fin en sí mismo, para acceder a determinados mercados o niveles económicos de vida, sino que se considera como un vector de cambio y de coherencia personal[205].

Esta transformación que pretenden a nivel social y de relaciones no va a depender únicamente del manejo más o menos ecológico que se haga de los recursos naturales,

[204] Documento interno de trabajo « Systèmes de Contrôle Interne Participatif – Fédération Nature & Progrès – mars 2006

205 Ídem

sino también del respeto a cuestiones relacionadas con la equidad y la justicia sociales (PE24). En la carta de principios de N&P, se explicita que sus miembros "*se comprometen a un proceso continuo hacia la ecología (energía, transporte, gestión de desechos, paisaje…) y de equidad social"* [206].

El medio para alcanzar la equidad y la justicia sociales es el fomento de relaciones directas entre productores y consumidores en la producción, el intercambio y el consumo éticos de productos ecológicos (PE18). De esta manera, el consumo tiene una responsabilidad clara al respecto: tanto para preocuparse por el origen del producto (PE20) y las condiciones en las que se ha producido; como para implicarse en procesos que fomentan una producción ecológica que va más allá de un cuaderno de normas técnicas. Estos procesos, entre los que se inserta el Sistema Participativo de Garantía, incorporan un modo ético de entender las relaciones dentro de la sociedad y con la naturaleza (PE24 y PE25).

Las personas entrevistadas denuncian, en algunos casos, la exclusión de sus visiones y propuestas en las normas públicas. Consideran que, en lo que les concierne, estas normas favorecen las dependencias externas de la agricultura y la gran escala frente a procesos de autonomía y soberanía, perjudicando a las pequeñas y medianas producciones diversificadas. Una consumidora miembro de la asamblea de la Asociación N&P Lozère lo expresaba de esta forma: "*es increíble escuchar y comprobar que las normas generan exclusión, cuando lo primero que te enseñan es que toda ley debe ser incluyente y no excluir a nadie. Me ha cambiado mi visión de muchos años del Estado y la regulación. Es muy fuerte*" (PE21).

El resultado concreto de los procesos impulsados por estas asociaciones es la movilización local que generan y que señalan como uno de sus puntos fuertes (PE24). La movilización se traduce en una gran capacidad de iniciativa para poner en marcha proyectos[207]. De esta forma se han ido creando cooperativas, ferias de productos ecológicos desde hace 20 años o mercados de productores, entre otros (PE22). La organización interna de todo este engranaje se facilita a través de una serie de mecanismos que inciden en la comunicación interna y externa y en el sentimiento de grupo, tales como boletines informativos donde puede participar cualquier miembro en la redacción de anuncios, noticias, artículos, etc.. De este modo, se fomenta el funcionamiento de grupos de consumo y las relaciones directas entre ellos y con los grupos productores (PE26).

6.2.5. Dificultades y desafíos percibidos

Una de las grandes dificultades[208] a las que se enfrentan los miembros de N&P es el no reconocimiento legal de su sistema de garantía participativo. Las personas productoras que requieren de un sello reconocido oficialmente se ven obligadas a pagar por un lado la cuota de N&P y, por otro lado, el servicio de certificación de una entidad de control acreditada. La necesidad de un sello reconocido legalmente viene expresada en relación

[206] Ídem.
[207] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XIX.
[208] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XVII.

a dos situaciones: a) cuando se quiere acceder a redes de distribución, ferias o exposiciones de productos ecológicos (PE19) y; cuando se quiere optar al sistema de ayudas públicas establecido para este tipo de producción (PE19). En ambos casos, la ley exige al productor o productora ostentar un sello ecológico, otorgado por alguna entidad de control acreditada para ello.

Según las personas implicadas en el Sistema Participativo de Garantía de N&P, la cuestión de la venta de los productos puede solventarse, en parte, a través del fomento de los circuitos cortos, la venta directa o el establecimiento de relaciones de confianza. La dificultad en este sentido es doble: por un lado, que a través de estos canales se pueda vender todo el producto de una finca y; por otro lado, que los productos destinados a transformación no podrán ser vendidos a transformadores ecológicos, ya que todos los proveedores de sus materias primas deben tener el sello correspondiente (PE18).

Las principales dificultades de este sistema no radican sólo en unas normas públicas excluyentes. Existen ciertos problemas asociados al propio procedimiento en sí del SPG establecido. La cuestión del tiempo que requiere el correcto funcionamiento de este sistema es una dificultad importante. La implicación que necesita este modelo para crear tejido y grupo, para el trabajo colectivo, fuera de las tareas propias de producción y comercialización supone una sobrecarga para las personas participantes[209].

Asimismo, el tema de las visitas genera dos dificultades añadidas. Por un lado, una cierta inseguridad en las personas participantes, ya que en muchas ocasiones sienten que no saben cómo llevarlas a cabo o si el modo de ejecutarlas es riguroso o por el contrario criticable. Esta sensación genera frustración y malestar en las personas implicadas, especialmente en las consumidoras, que no tienen amplios conocimientos agronómicos y no saben exactamente qué es lo que se espera de ellas en estas sesiones. La constatación de esta realidad ha llevado a plantear, en alguna ocasión, la necesidad de realizar jornadas formativas a este respecto[210]. Por otro lado, la necesidad de separar los aspectos personales de la cuestión de la garantía y ser capaces de poner sobre la mesa malas prácticas o inconformidades de la persona visitada, por encima de la empatía o el afecto que se pueda sentir por ella (PE25), es otra dificultad relacionada con las visitas en sí.

A nivel de procedimientos, las personas implicadas ven como una debilidad el hecho de que adolecen de registros informatizados que dejen constancia de su modo de trabajar y del historial de cada finca, desde que se adhieren a la iniciativa. Esta sistematización facilitaría el trabajo actual y daría consistencia a la experiencia. Consideran que una excesiva transmisión oral de los procedimientos y los resultados de las visitas anuales puede debilitar el sistema, o hacerlo excesivamente dependiente de pocas personas (PE21).

[209] *"¿quién está dispuesto a asumir el secretariado? Es necesario implicarse, no va a ser siempre mi vecino quien lo haga..."*, pregunta lanzada por la secretaria de la Asociación N&P Lozère en su asamblea anual de 2007 (PE21)

[210] *"Las personas están descontentas con las visitas, sobretodo los consumidores. (…) Sería necesario organizar una jornada de capacitación en torno a las visitas y el control. Taller colectivo con reflexión. Plantear una visita de formación donde todos asuman el papel de visitador"* (PE21)

Por último, una de las dificultades más importantes y más difíciles de solucionar es la incredulidad con la que el entorno social de estas experiencias las observan. Se quejan de la dificultad que supone hacer creer a la gente que los propios agricultores y agricultoras, junto con consumidores y consumidoras, son capaces de ofrecer la misma garantía e incluso una mayor[211], que empresas técnicas acreditadas para ello. Romper el imaginario generalizado basado en el modelo del técnico especialista, la competencia y la objetividad de la certificación externa es muy complicado, incluso en personas que ya están participando en la iniciativa (PE20).

El gran reto[212] planteado por las personas entrevistadas de N&P está relacionada con una de sus dificultades: la cuestión del reconocimiento legal. Se trata de un reto a nivel político, que requiere salir de sus propios grupos para buscar alianzas y estrategias con otras organizaciones[213]. Conseguir este reconocimiento supondría un fortalecimiento de la experiencia y de la Federación, así como un éxito ideológico en un contexto reglamentario que sienten alejado de los pequeños productores y los procesos de autoorganización y autonomía.

Los demás desafíos planteados también van en la línea de las dificultades que se detectan. Se trata de superarlas, con el fin de consolidar la experiencia y su funcionamiento. En este sentido plantean la necesidad de:

a. Sistematizar todo el trabajo que se ha venido realizando, a través de la organización e informatización de todos los registros (PE21); Esto permitirá: tener una información organizada de la evolución de cada miembro y por lo tanto un conocimiento más profundo de la realidad que conforma la iniciativa y; facilitar la lucha por el reconocimiento legal de la experiencia, ya que una iniciativa basada en la transmisión oral difícilmente podrá aportar elementos prácticos a una posible regulación (PE18).
b. Mejorar algunos aspectos relacionados con el propio sistema: hacer jornadas de formación que faciliten la ejecución de las visitas, tanto a las personas productoras como, y en especial, a las consumidoras (PE26 y PE21) y; centrar las visitas, cada año, en aspectos concretos de las fincas, de manera que se pueda fomentar una mejora continuada de las mismas a través de un proceso guiado (PE21).
c. Profundizar en los momentos de intercambio de experiencias y conocimientos, para fomentar aún más el enriquecimiento mutuo que estos intercambios suponen (PE23) a través, por ejemplo, de días de trabajo compartido.

[211] La idea de que el SPG es un sistema más creíble que la auditoría técnica se basa en los argumentos analizados en el apartado 2.1.
[212] Las citas en las que hemos basado este análisis se pueden consultar en el Anexo XIX
[213] *"La búsqueda de un reconocimiento legal es mucho más importante para nosotros a nivel político; pero la reflexión no está tanto a nivel del grupo de la Lozère, sino a nivel de la Federación. Es importante porque si se nos reconoce, haremos evolucionar el sistema. De este modo habremos abierto una brecha en un sistema que es cada vez más cerrado"* (PE18)

7. ANÁLISIS COMPARADO DE LAS TRES EXPERIENCIAS DE SISTEMAS PARTICIPATIVOS DE GARANTÍA ESTUDIADAS

A lo largo del presente documento, hemos presentado los resultados que se han obtenido del proceso de investigación llevado a cabo. Los hemos presentado en torno, por un lado al proceso llevado a cabo en Andalucía, en los tres territorios piloto implicados en el proyecto de construcción de una alternativa a la certificación oficial y; por otro lado, al estudio en profundidad de las dos experiencias consolidadas de SPG elegidas, una brasileña y otra francesa. Estas tres experiencias de SPG analizadas parten de unos procesos de conformación y unas trayectorias diferentes. Sin embargo, existen entre ellas importantes similitudes y convergencias. En este capítulo pretendemos, una vez analizada cada experiencia por separado, realizar un análisis comparativo entre las mismas. Esto nos permitirá aportar nuestra particular contribución a la temática de los Sistemas Participativos de Garantía para las producciones ecológicas, como alternativas a la certificación por auditoría, así como las implicaciones que sus procesos de construcción conllevan para las personas participantes. Consideramos un aporte que puede resultar de interés, dada la escasa bibliografía encontrada al respecto y el interés creciente que hemos percibido, en el ámbito de la producción ecológica tanto a nivel regional como internacional[214].

En este análisis comparado, partimos de dos experiencias consolidadas en el tiempo, con un nivel de madurez importante (las iniciativas extranjeras), frente a una experiencia en proceso de conformación (el caso andaluz). En este sentido, la comparación realizada la hemos adaptado a aquellos aspectos que se pueden considerar en las tres experiencias al mismo nivel. No obstante, en aquellos aspectos comparados en los que se han podido dar ciertas diferencias, por los diferentes niveles de madurez de las experiencias, se han explicitado y analizado.

Los aspectos sobre los que hemos basado el análisis comparado se centran, en primer lugar, en las críticas e insatisfacciones que el modelo de certificación por tercera parte genera en los grupos productores, consumidores y técnicos con los que se ha desarrollado la investigación. De esta forma podremos realizar una pequeña contribución al análisis de la certificación oficial y sus implicaciones. Asimismo, plantearemos la visión de las personas implicadas en procesos de garantía alternativa en torno a la generación de credibilidad en los productos ecológicos. Los atributos y características que le asignan a los sistemas de garantía para resultar satisfactorios en estos grupos serán elementos que aportaremos a la construcción, desde la Agroecología, de propuestas en torno a los sistemas de garantía.

[214] La revisión bibliográfica en torno a la temática, así como el interés que se ha suscitado en los últimos años por los SPG se han descrito y detallado en capítulos anteriores

En segundo lugar, analizaremos de forma comparada la visión de las personas implicadas en los procesos estudiados en torno a la producción ecológica. Este análisis nos permitirá evaluar el grado de agroecologización de sus discursos, en entornos sociopolíticos diferentes como son el de la Unión Europea y el de Brasil, profundizando en las similitudes y diferencias. En este sentido, trataremos de relacionar estas visiones con sus discursos en torno a los procesos colectivos y la implicación individual en grupos. De esta forma pretendemos comparar las tendencias hacia la unión de personas para resolver problemas o plantear alternativas, en dos contextos alejados geográficamente. El anclaje de estas visiones y propuestas en la realidad lo analizaremos en base al estudio comparado de los procesos colectivos reales impulsados en los territorios, sobre la base del SPG. De esta forma podremos analizar la capacidad de este tipo de mecanismos de garantía para generar procesos endógenos que generan algún tipo de cambio social agroecológico en los territorios.

En tercer lugar, analizaremos comparativamente el modelo de Sistema Participativo de Garantía propuesto en cada una de las experiencias así como las estructuras sobre las que se sustenta este sistema. Esta sistematización de elementos comunes y divergentes nos permitirá aportar características generales y aquellas variables que pueden definir los Sistemas Participativos de Garantía. A partir de estos elementos, planteamos una comparativa con el sistema de certificación oficial o de tercera parte. Esto nos permitirá evaluar las diferencias entre ambos sistemas así como sus implicaciones. Asimismo, nos permitirá analizar el nivel de concordancia de cada una de ellas con la visión de las personas implicadas en los SPG estudiados, en relación a la garantía y la producción ecológica.

En cuarto lugar, planteamos el análisis comparado de los procesos de conformación de las tres experiencias estudiadas y los motores iniciales que las impulsaron a establecerse y organizarse. De esta forma, podremos profundizar en la viabilidad de este tipo de procesos en los contextos donde se ubican las experiencias, así como en aquellos elementos facilitadores y obstaculizadores que influyen en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.

Por último, pretendemos analizar aquellas características intrínsecas de los propios SPG y los condicionantes externos que nos llevan a plantear las dificultades de este tipo de mecanismos. En lo que respecta a las dificultades intrínsecas de estos mecanismos, pretendemos explicar los elementos que hemos comprendido que hacen que este tipo de sistemas de garantía no sea extrapolable a cualquier perfil de persona productora. En cuanto a las dificultades externas, el análisis nos permitirá plantear aquellos contextos sociopolíticos en los que estos mecanismos tendrán serias dificultades para ser reconocidos. En este sentido expondremos aquellas opciones que, en nuestro contexto europeo, hemos estudiado como posibles soluciones.

7.1. Las críticas a la certificación por tercera parte desde otros modos de entender la garantía

Las motivaciones que han llevado a personas, de tan diferentes contextos, a implicarse en sistemas de garantía alternativo son en cierta forma, similares. La base de esta

motivación es una concepción diferente en torno a los procesos de garantía, que se alejan de la subyacente en el sistema de certificación por tercera parte institucionalizado[215]. El modelo oficial de garantía no genera confianza. Su capacidad de dar garantía en el modo de manejo de las fincas a través de una visita anual, de unas horas, por parte de una persona técnica ajena al territorio es muy cuestionable. En el caso andaluz este cuestionamiento viene apoyado por una constatación real de que el sistema no está funcionando correctamente en estos territorios, a nivel de visitas anuales y de empeño de las personas inspectoras. Las entidades certificadoras privadas recortan gastos a través del no cumplimiento reiterado de las visitas anuales a todos los operadores y a todas sus fincas. Además, el exceso de carga de visitas a las personas inspectoras y el elevado nivel de burocracia a verificar en las mismas lleva a los inspectores: a dedicar poco tiempo a cada finca y; a centrarse en la verificación de los informes, por encima de un control serio y profundo de los manejos.

Como segundo elemento de crítica señalamos que este tipo de mecanismos penaliza y excluye a la agricultura familiar diversificada, por el sistema de costes y los niveles de burocracia que exige. Los costes se basan en unos mínimos, establecidos independientemente de la superficie y del cultivo, y en una escala creciente en función, entre otras cosas, del número de aprovechamientos que se quieran certificar en una misma finca. La burocracia, por su parte, está basada en una serie de documentos y manuales elaborados por las entidades certificadoras, que requieren una dedicación en tiempo importante y utilizan unas nomenclaturas y unos procedimientos poco adaptados a personas menos letradas o con ciertas dificultades léxicas.

En relación a la penalización que supone para la agricultura familiar diversificada, este mecanismo no favorece el desarrollo de propuestas agroecológicas en los territorios por otros dos motivos fundamentalmente. Por un lado, las normas en las que se basan las auditorías técnicas simplifican la producción ecológica. La convierten en un modo de manejo de sustitución de insumos prohibidos por otros permitidos, pues es esto lo que básicamente se verifica y; por otro lado, la garantía se convierte en un examen, que se aprueba o se suspende. No se fomentan procesos de aprendizaje o de mejora continuados, ya que no se valoran, sino que lo único que cuenta es este examen. Es un fin en sí mismo.

Por último, la lógica de la certificación por tercera parte impone la lógica de que sea la producción con características ecológicas la que deba estar sellada y examinada, frente a una producción contaminante e insalubre que no recibe ningún tipo de control. De esta forma, bajo la lógica de que "*el que no contamina, paga*", se está penalizando a la producción ecológica, ya que la graba con un coste adicional que la producción convencional no tiene. Esto penaliza a la pequeña agricultura diversificada y a las personas consumidoras de menor renta.

Podemos señalar un último argumento de crítica a la certificación por auditoría, que aparece sólo en el contexto brasileño y no en los europeos: el sistema oficializado es una herramienta que consolida la superioridad de los conocimientos y las capacidades técnicas, por encima de las campesinas y locales. Este mecanismo no ayuda a

[215] Esta comparativa se ha trabajado sobre los análisis presentados en los subcapítulos 1.5. (proceso andaluz); y 3.1. (experiencias extranjeras)

revalorizar el conocimiento y las capacidades campesinos y locales sino que, en línea con la lógica de la ciencia moderna, los desconsidera. En las experiencias europeas esta crítica a la superioridad técnica no ha aparecido en ninguna de las entrevistas. De hecho, una de las dificultades aparecidas en estos procesos (se analizarán en profundidad más adelante), es la inseguridad que a las personas productoras implicadas les generaba la idea de no saber realizar correctamente las visitas de campo. Esta inseguridad ante una capacidad intrínseca al ejercicio de su profesión en el día a día demuestra un calado mayor en nuestros contextos de la lógica de la superioridad científica y técnica frente a los conocimientos empíricos.

La crítica a las implicaciones del sistema de certificación por tercera parte viene realizada desde una visión de la garantía determinada[216] y de unas iniciativas alternativas concretas que se enmarcan en los Sistemas Participativos de Garantía. Independientemente de los contextos, como características generales se propone reducir la burocracia y los costes del mecanismo de la garantía, a través del trabajo colectivo y la implicación de la producción y el consumo en el proceso.

En este sentido, la garantía sobre la producción ecológica puede basarse en un proceso educacional que genera acercamiento entre producción y consumo a través de la participación horizontal de todas las personas implicadas. El modo de generar la confianza puede basarse en el control social continuo que se da de forma espontánea en cualquier territorio y que se puede operativizar a través de diversos mecanismos. La confidencialidad no tiene sentido en esta visión de la garantía. Por el contrario, la transparencia es una consecuencia directa de la participación activa y un fundamento importante de la garantía, la confianza y la objetividad.

La garantía puede superar la idea de examen y erigirse como un proceso que, en sí mismo, reporte ventajas a la producción. En este sentido, se plantea la garantía como una oportunidad para fortalecer relaciones de proximidad, de conocimiento mutuo y de confianza, entre personas productoras y con consumidoras. Se facilita así la articulación real de grupos productores, fundamental para facilitar que las familias productoras se sientan apoyadas y que se organicen para relacionarse con el consumo de una forma directa.

Los elementos señalados facilitan la construcción de grupos activos, que asumen colectivamente responsabilidades y donde se construyen relaciones de apoyo mutuo. El fortalecimiento del tejido social local, a través de la garantía así entendida, puede tener dos efectos: por un lado, generar procesos de agroecologización en los territorios, revalorizando los conocimientos y capacidades endógenos y aumentando la autonomía y la independencia de los grupos implicados. Por otro lado, favorecer la construcción de procesos democráticos reales, donde todas las personas implicadas ocupan el mismo nivel de importancia y manejan el mismo tipo de información.

El papel del consumo puede ser diverso en estas propuestas alternativas de garantía. Si las propuestas surgen desde la producción, el acercamiento al consumo se considera un mecanismo que permite generar sensibilización, un cambio de actitudes hacia un

[216] Esta comparativa se ha trabajado sobre los análisis presentados en los subcapítulos 2.1. (proceso andaluz); y 3.3. (experiencias extranjeras)

consumo responsable, un acercamiento hacia el trabajo agrario y, en consecuencia, una revalorización del mismo. Si las propuestas surgen de grupos mixtos entre producción y consumo, la implicación de este último facilitará las relaciones directas entre ambos y favorecerá el conocimiento de nuevos y nuevas productoras con los que ampliar la cesta de productos comprados directamente. En el primer caso, se facilita el acceso a nuevos consumidores y consumidoras, para generar procesos de concienciación y cambio de actitudes; en el segundo caso, se fortalece la soberanía alimentaria de los grupos ya concienciados, a través del fortalecimiento del tipo de relaciones que desean entre consumo y producción de alimentos. De esta forma, estos mecanismos permiten invitar a asociaciones de consumo menos implicadas a acercarse, así como fortalecer grupos mixtos de productores y consumidores concienciados.

Sea cual sea la estructura o los procedimientos establecidos, la garantía se entiende como un aval de todo un modo de manejo y actitud frente a la producción agraria. No tiene sentido garantizar productos aislados y descontextualizados, sino que debe premiar procesos y personas, asegurando actitudes y compromisos integrales. En este sentido, se debe incorporar a la noción de producto ecológico normas y criterios más amplios y profundos que una mera prohibición de uso de determinados productos. La ecología de un producto deberá incorporar aspectos sociales de justicia y equidad, así como elementos técnico productivos de tipo agroecológico, que fomenten la autonomía, la independencia y la soberanía alimentaria (reducción de insumos externos, cierre de ciclos, reproducción natural de los recursos, etc).

Estas características que se pueden asignar a un sistema de garantía permiten fortalecer y apoyar a la pequeña agricultura diversificada y su mantenimiento en los territorios, ya que responde a una serie de necesidades específicas de esta realidad: facilitan la construcción de redes de apoyo mutuo, fomentan el intercambio de experiencias y conocimientos técnicos y potencian relaciones de comercialización directas.

Como conclusión, podemos decir que los SPG, por sus características, son una solución a las críticas planteadas a la certificación por tercera parte. Algunos de estos elementos son:

a. Solucionan la falta de confianza a través de la sistematización del control social, que se da de forma natural y continua en los territorios.
b. Fomentan la producción familiar diversificada: al evaluar los modos de manejo y la actitud y no productos concretos y; al basarse en la implicación de las personas para generar la garantía y no en el pago de una cuota anual
c. Reconocen la producción ecológica en toda su diversidad, amplitud y complejidad, huyendo de simplificaciones que la reducen a una sustitución de insumos. Valorizan aspectos ecológicos integrales en las fincas e incluyen aspectos de equidad y justicia social.
d. Transforman la lógica del examen del aprobado y el suspenso en la idea de visita de intercambio de conocimientos, de aprendizaje mutuo y de recomendaciones a través de las cuales generar un proceso de mejora continuada en los modos de manejo
e. Convierten un procedimiento que, en los países donde está regulado, es una obligación (la certificación), en un proceso social que reporta ventajas

importantes a las personas productoras y a la sociedad en general: crea tejido social, fomenta relaciones de confianza y apoyo mutuo; asienta la producción ecológica de pequeña escala en los territorios; genera procesos de autoorganización y autogestión, entre otros.

f. Sustituyen la superioridad de las capacidades técnicas por la revalorización de las capacidades locales, de las personas productoras y consumidoras. Recuperan, a nivel social y local, la cuestión de la garantía, rescatándola de la externalización generada a partir de su institucionalización o privatización.

7.2. La garantía participativa como mecanismo de aval coherente con la producción de tipo agroecológico

Las personas que participan en las experiencias de SPG estudiadas responden a un imaginario agroecológico de la producción agraria y el medio rural. Esta conclusión viene sustentada en las expresiones captadas a través de las entrevistas. En todos los casos, la producción agraria ecológica[217] es concebida como un modo de manejo que va más allá de una sustitución de insumos químicos y de síntesis por otros naturales respetuosos con el Medio ambiente y la salud. Si bien el respeto a la salud de la sociedad y al Medio Ambiente aparece como motivaciones importantes para practicar este tipo de agricultura, existen otras motivaciones que, por las características que plantean, podemos decir que son discursos agroecológicos, tanto en el sur de Brasil, como en Francia y en Andalucía. En todos los casos tratan de defender ciertos principios básicos frente a las derivas comerciales percibidas en el sector.

Los principios que defienden son de tipo político, tales como la soberanía alimentaria y la autonomía en las decisiones y el manejo agronómico. De este modo, practicar una agricultura de tipo ecológico es una cuestión ideológica, de coherencia y satisfacción personal, por encima de motivaciones de tipo económico: nichos de mercado menos saturados o mayores precios. Responde a una visión concreta de la sociedad, la naturaleza y la relación entre ambas. En este sentido, la producción agraria puede ser un motor de procesos de cambio social en los territorios, en torno a la búsqueda de mayores cuotas de autonomía, de soberanía y de equidad social.

En este contexto ideológico, la dimensión socioeconómica la contempla desde diferentes propuestas. Por un lado, defienden el establecimiento de relaciones comerciales directas y justas, fomentando los mercados locales y la proximidad entre producción y consumo. El objetivo prioritario es construir mecanismos que defiendan y apoyen la producción de pequeña escala, llámese agricultura familiar, agricultura campesina o pequeña agricultura diversificada. Este tipo de agricultura es considerada la protagonista de cualquier proceso de tipo agroecológico que quiera impulsarse, ya que es la verdadera motora de un medio rural sustentable.

El mecanismo óptimo para defender y apoyar este tipo de agricultura es el fomento de la organización de grupos de productores y productoras, en conjunto con consumidores y

[217] Esta comparativa se ha trabajado sobre los análisis presentados en los subcapítulos 1.4. (proceso andaluz); y 3.4. (experiencias extranjeras)

consumidoras. La organización y articulación sociales en el ámbito local da fuerza a un modelo productivo que, en caso contrario, se ve seriamente amenazado por los contextos donde desarrollan su actividad, controlados por elementos cuya lógica la perciben como enemiga: las grandes empresas agroalimentarias que monopolizan los recursos fitogenéticos, los insumos o los mercados; y las regulaciones públicas que favorecen la gran escala y la concentración de poder.

La dimensión técnico productiva la contemplan en sus modos de manejo, donde no se limitan a sustituir insumos de síntesis química por otros naturales, sino que incorporan prácticas que velan por la biodiversidad, la recuperación de variedades locales, el manejo de los suelos, etc. como elementos que permiten un equilibrio entre la actividad agraria y el medio natural.

Todo esto se traduce en unos cuadernos de normas más amplios y exigentes que los reglamentos establecidos a nivel regional o internacional, ya que incluyen criterios ecológicos más ambiciosos e integrales, así como aspectos de justicia y equidad social. De esta forma, podemos concluir que las personas que se implican en procesos de garantía participativa de este tipo, independientemente del contexto socioeconómico en el que se desarrollan, responden a una visión agroecológica de la actividad agraria y la producción de alimentos, con elementos compartidos en cuanto a aspectos técnico – productivos; socioeconómicos y políticos.

No obstante y dadas las características de estas iniciativas, la diversidad de discursos dentro de una misma visión puede ser mayor o menor. En base a las estudiadas, detectamos que en la experiencia brasileña hay una mayor diversidad de discursos que en las dos europeas. Esto puede identificarse con varias causas posibles. Por un lado, cuando una experiencia tiene en sus objetivos la ampliación continuada, su estrategia irá en la línea de incorporar a un número cada vez mayor de familias. Esto, que conlleva un mayor impacto directo en su entorno social, supone la convivencia en una misma iniciativa de personas con un nivel de reflexión y de madurez del proceso elevado con otras que están empezando a plantearse ciertas cuestiones y a implicarse en procesos de este tipo. Esto puede suponer un aumento en la dificultad de funcionamiento interno, al tener que gestionar una mayor diversidad de realidades. Esta estrategia requerirá, por lo tanto, un esfuerzo continuado de acogida y de intercambio de visiones y objetivos entre los grupos ya consolidados y las nuevas incorporaciones. Por otro lado, las iniciativas de este tipo que cuentan con contextos sociopolíticos favorables a nivel de opciones de reconocimiento público, pueden atraer a un abanico más amplio de personas e imaginarios. Por último, cuando este tipo de iniciativas estén fuertemente respaldadas por equipos técnicos, ya sean ONG, ya sea administración pública, gran parte del trabajo de organización interna y de comunicación puede ser derivados a los mismos, por lo que las necesidades de implicación serán menores y, por lo tanto, personas con discursos menos militantes pueden tener cabida.

A modo de conclusión y en base al proceso seguido en Andalucía, podemos decir que unos discursos agroecológicos en torno a la producción, comercialización y consumo de productos ecológicos no tienen por qué ir de la mano de una visión de la garantía como la descrita. En el caso andaluz, si bien había malestar por la certificación oficial y se planteaban una serie de críticas y de deficiencias, los discursos no se salían de la lógica

de la garantía por tercera parte. Ha sido a raíz del trabajo colectivo impulsado cuando se ha facilitado un proceso de creatividad social, a través del cual se han ido planteando posibilidades que no entraban en los discursos iniciales.

Destacamos por lo tanto que la lógica de la garantía participativa si bien responde a la visión agroecológica de la producción y de las relaciones entre ésta y el consumo, puede no surgir de forma espontánea en territorios donde la obligatoriedad de la certificación por tercera parte ya está establecida. Sin embargo, si existe este caldo de cultivo previo es posible fomentar procesos donde se potencie la creatividad y la construcción de este tipo de alternativas, desde la realidad local concreta y como solución a una insatisfacción con respecto a la certificación por auditoría externa. Esta construcción deberá permitir recuperar la legitimidad de las personas de entornos sociales compartidos para establecer mecanismos de garantía propios, a través de procesos grupales, de relaciones personales y de confianza mutua.

7.3. Sobre la garantía como gestión colectiva de la confianza

En lo que respecta a la visión de los procesos colectivos[218], esto es, de la articulación entre pequeños productores y productoras y con el consumo, también existen una serie de reflexiones compartidas en las tres experiencias de las que podemos extraer algunas conclusiones. En líneas generales, destacamos que los Sistemas Participativos de Garantía son vistos por sus protagonistas como iniciativas que favorecen y fomentan la generación de tejido social, así como las relaciones de proximidad y de confianza, tanto entre productores y productoras como con el consumo. De hecho, en todos los casos el SPG ha ido asociado al establecimiento de canales cortos de comercialización, bien a través de la organización de la producción para acudir a ferias o mercados, bien a través de la organización con el consumo, estableciendo sistemas de pedidos semanales, entre otros mecanismos.

La diferencia fundamental en los procesos colectivos que se generan en paralelo a iniciativas de SPG podemos señalar que viene dada por la estructura del mismo. Según estén más centrados en los grupos productores o se organice en base a estructuras mixtas entre producción y consumo, las iniciativas colectivas que se fomentarán se enfocarán de forma más intensa, bien hacia relaciones de apoyo mutuo entre familias productoras o bien hacia vínculos directos entre la producción y el consumo. De esta forma, las estructuras del SPG responderán a un mayor énfasis en las familias productoras y la organización entre ellas; o bien en las sinergias y la corresponsabilidad entre la familia productora y la consumidora.

La visión que acompaña a los Sistemas Participativos de Garantía en torno a los procesos sociales se ancla en las experiencias estudiadas en iniciativas reales, fundamentalmente de comercialización. Las fórmulas son diversas: ferias y mercados periódicos de productos ecológicos organizados por los grupos productores organizados; sistemas de pedidos semanales y reparto de cajas, a través de la relación

[218] Esta comparativa se ha trabajado sobre los análisis presentados en los subcapítulos 2.2. (proceso andaluz); y 3.4. (experiencias extranjeras)

directa entre los y las productoras y las familias consumidoras; organización de puntos de acopio y venta directa de productos de los grupos organizados, entre otros.

La articulación entre familias productoras favorece su organización no sólo para comercializar sus productos de forma conjunta. Existen otras iniciativas que surgen como fruto de esta interrelación: por un lado, las redes de comercialización entre grupos productores relativamente lejanos, inmersos en la misma estructura del Sistema Participativo de Garantía, que intercambian productos a través de las ferias en las que coinciden. De este modo, se establecen redes de intercambio de productos entre grupos productores. Por otro lado, intercambios de semillas o la compra de insumos de forma conjunta.

La organización del tejido productivo y de consumo de los territorios en torno a la alimentación ecológica es fruto de los mecanismos en los que se basan los SPG, que favorecen la interacción, el conocimiento mutuo y la implicación personal. De esta forma, los Sistemas Participativos de Garantía son motores de procesos de cambio social agroecológico, ya que promueven la organización del tejido social local y la puesta en marcha de acciones conjuntas que posibilitan ingresos estables a las familias productoras y relaciones de corresponsabilidad con el consumo local. Todo esto se hace desde las propias personas protagonistas quienes, al encontrarse y trabajar de forma colectiva, van encontrando soluciones a las problemáticas comunes de forma endógena.

7.4. Sobre la estructura y el funcionamiento de los SPG estudiados

La estructura sobre la que descansan los Sistemas Participativos de Garantía estudiados viene muy determinada por el origen y la orientación inicial de las iniciativas.

Cuadro 25.- Alcance geográfico de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados

Ecovida	N&P	SPG Andaluz
Tres estados del sur de Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. En proceso de expansión hacia el estado de San Pablo	Tres departamentos de Francia, dos en el centro - sur (La Lozère y el Tarn) y otro en el noroeste (La Bretaña)	Tres zonas de montaña de una Comunidad Autónoma: una compuesta por dos municipios (Castril y Castilléjar), otra por una comarca de 13 (Sierra de Segura), y otra por una comarca de 23 municipios (Serranía de Ronda)

Cuanto mayor es el ámbito geográfico abarcado, se tiende a complejizar más la articulación de todos los grupos en un mayor número de niveles de organización. Cuanto menor es la amplitud, la tendencia es hacia un menor número de niveles de articulación pero una mayor cantidad de estructuras paralelas con funciones diferenciadas. La mayor o menor amplitud de las experiencias podemos relacionarla con las opciones de reconocimiento público existentes. Si el panorama es más positivo,

habrá una tendencia a la expansión importante. En los casos donde el panorama legal es excluyente y difícil de cambiar, las experiencias tenderán a un crecimiento más ralentizado.

El segundo elemento que influye en la estructura de las experiencias es el origen y la orientación inicial de las mismas, ya que determinarán la importancia de unos y otros actores y los modos de articulación entre ellos.

Cuadro 26.- Origen y orientación de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados

Ecovida	**N&P**	**SPG Andaluz**
Impulsada desde una red de ONG de asesoría técnica en Agroecología, con el fin de sistematizar los mecanismos de garantía y confianza directa que venían trabajando. Pretendían: Poder incluir las propuestas de los grupos productores en la Reglamentación Federal.	Impulsada por ingenieros agrónomos y médicos. Pretendían: Difundir métodos de producción ecológicos y fomentar relaciones directas con el consumo.	Impulsada por el gobierno de la región. Pretendían: Atender las demandas de solución que la problemática de la certificación por tercera parte estaba generando en determinados territorios.

El origen de las experiencias influye decisivamente en el tipo de estructura y organización que se establece. En los casos en los que la motivación principal es apoyar a las familias productoras a través del fomento de la interrelación entre ellas, la estructura definida girará en torno a estos actores y sus problemáticas. En estos casos, el papel del consumo, si bien tiene una importancia decisiva, es secundario. En los casos en los que la motivación inicial es impulsar procesos de producción y consumo de productos garantizados como ecológicos, la estructura responderá a una implicación equilibrada de estos dos perfiles. Así, los actores que componen cada experiencia y sus roles determinan la estructura que establecen.

Cuando el motor de impulso son estructuras técnicas de apoyo a los grupos productores, la articulación de la experiencia se establece en torno a estas figuras, ocupando un papel central en el acompañamiento, la coordinación y la dinamización. Las asociaciones de consumo son un apoyo, en aquellos núcleos donde existen. Cuando el motor son las propias asociaciones de productores y consumidores, el funcionamiento de la estructura depende más del trabajo voluntario de ciertas personas líderes o de la contratación de personal técnico para asumir determinadas tareas de coordinación. En estos casos se establece como mecanismo de equiparación de responsabilidades la rotación periódica de las tareas.

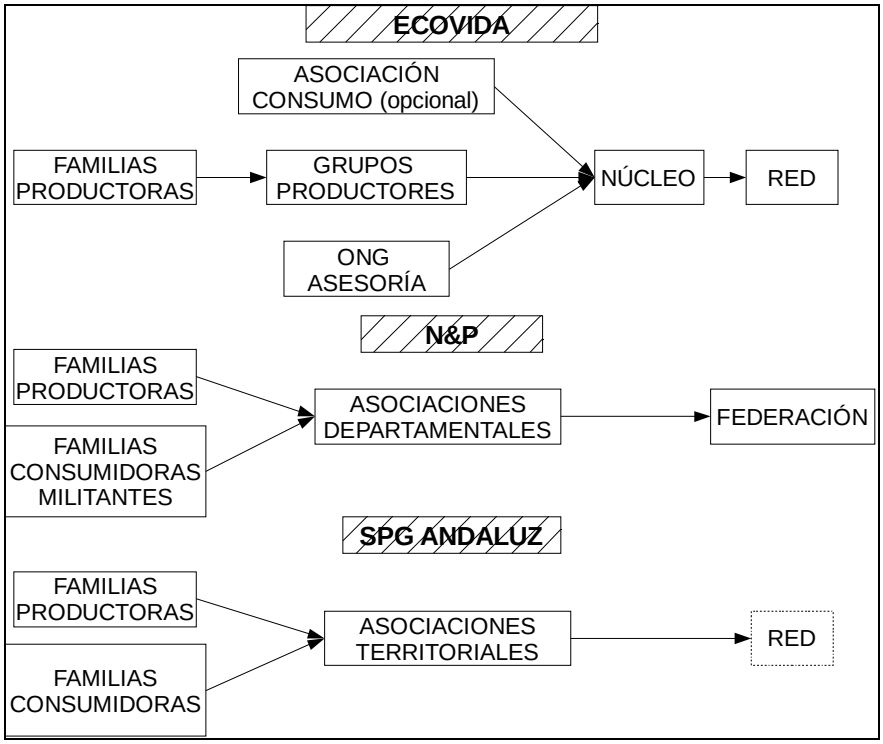
Otra diferencia fundamental derivada del origen y la orientación inicial de la iniciativa se centra en que los distintos perfiles participen desde asociaciones diferentes, articulados en red, o bien que se impliquen a través de asociaciones mixtas donde participan todos juntos.

Cuadro 27.- Actores implicados en las tres experiencias de Sistemas Participativos de Garantía estudiadas

	Ecovida	**N&P**	**SPG andaluz**
Actores que las componen	1. Grupos de productores/as 2. Asociaciones de consumidores 3. ONG	a. Asociaciones mixtas de productores y consumidores b. Equipo técnico contratado por la propia Federación	a. Asociaciones mixtas de productores y consumidores

En el caso de asociaciones de perfiles diferenciados que se articulan, se requiere un mayor número de niveles organizativos en vertical. Por otro lado, cuando se trata de asociaciones mixtas, se necesita establecer un mayor número de estructuras, entre las que repartir las responsabilidades y tareas que el sistema requiere.

Figura 11.- Estudio comparativo de las estructuras de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados



El origen de cada iniciativa es fundamental en este sentido, ya que en función de lo que se decida en un inicio, en cuanto a actores implicados y estructura de interrelación, así se conformará un tipo de organización u otro. En el caso de sistemas que partan de familias productoras como base de la estructura, se establecerá un modelo más relacionado con una articulación en vertical de organizaciones. Si se parte de asociaciones donde se mezclan los distintos perfiles de actores implicados, la estructura

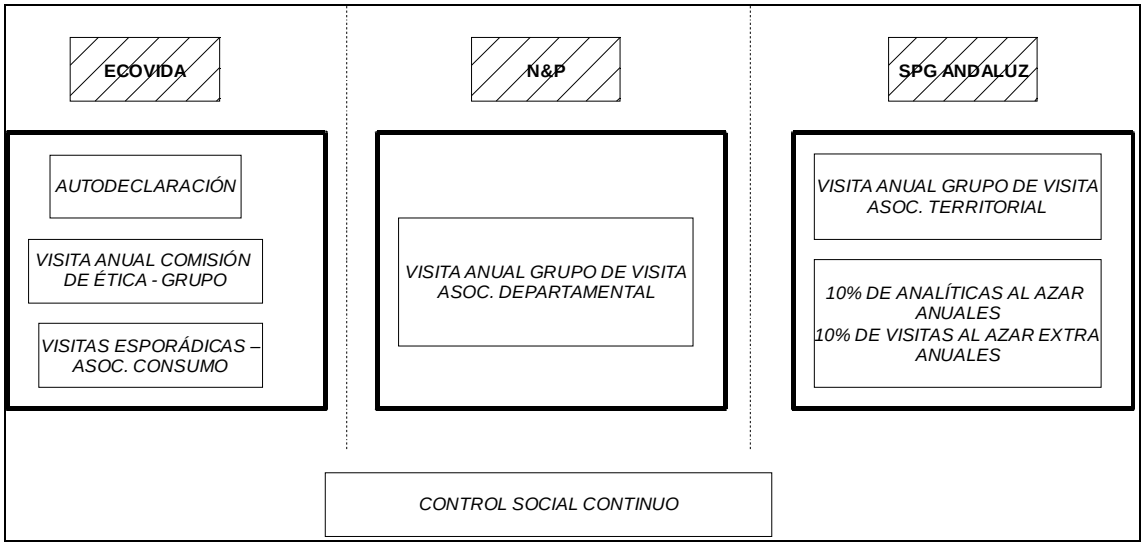
estará más relacionada con unidades en las que se establecen diferentes estructuras operativas al mismo nivel. En todos los casos estudiados, las estructuras más directamente relacionadas con los grupos productores y consumidores tienen un amplio margen de libertad para definir sus propios procedimientos, modos de funcionamiento, etc.

En las experiencias estudiadas, las tareas de coordinación y articulación del sistema las pueden asumir: personal técnico de apoyo; personal contratado por la asociación para estas tareas; o personas voluntarias. En general, la opinión generalizada es que estas funciones requieren un nivel de implicación que hace complicado la asunción voluntaria de las mismas. En el caso de que la coordinación la lleven a cabo personas que cobran por ello, esto se puede organizar a través de entidades de apoyo técnico o bien a través de la contratación de personas concretas al interno de las asociaciones.

Procedimientos de control establecidos

La base del procedimiento de control común a las experiencias estudiadas es el control social continuo que se establece en contextos de proximidad y relaciones personales, en los que todo lo que se hace y los manejos que se practican se conocen. La cuestión se centra en transformar ese control social continuo en un sistema de garantía que genere confiabilidad al grupo. Para ello, el elemento básico de todo mecanismo participativo de esta índole son las visita anuales de control a las personas miembros.

Figura 12.- Comparativa de los procedimientos de control habituales establecidos en los Sistemas Participativos de Garantía estudiados



El control social continuado se operativiza a través de otros mecanismos, que se ponen en marcha cuando hay algún tipo de sospecha o denuncia de manejos no apropiados que venga de cualquier persona miembro del grupo o externa a él. Estos mecanismos pueden ser visitas adicionales a la finca en cuestión, analíticas de suelo, planta o fruto, entre otras.

Existen otros mecanismos que pueden utilizarse como elementos de control, pero que no aparecen en todos los sistemas estudiados, sino en alguno de ellos. Por un lado, los procedimientos de autoevaluación de las familias productoras, a través de los cuales examinan ellas mismas sus propios modos de manejo. Supone un mecanismo de autorreflexión y autoanálisis. Por otro lado, las analíticas anuales de muestras de suelo, planta o producto que se suelen utilizar, en este caso, para avalar los resultados de las visitas a través del análisis de un número determinado de fincas. El problema de este mecanismo es su elevado coste. Si las organizaciones o iniciativas no tienen un apoyo público para hacer frente a los mismos, en general será difícil establecerlo como un procedimiento de control habitual.

Procedimiento de entrada

El procedimiento de entrada que establecen estas iniciativas se centra, fundamentalmente, en una visita inicial en la que se evalúa el estado de la finca, su historial así como el tipo de manejo que se lleva a cabo.

Cuadro 28.- Procedimiento de entrada establecido por los Sistemas Participativos de Garantía estudiados

	Ecovida	**N&P**	**SPG andaluz**
Procedimiento de entrada de nuevas familias/personas productoras	1. Solicitud de entrada a un grupo (familia individual) o al Núcleo (grupo de familias) 2. Visita inicial para ver el punto de partida de las fincas 3. Entrevista para evaluar la motivación al solicitar la entrada	1. Solicitud de entrada a la asociación departamental correspondiente 2. Compromiso personal de asumir las normas establecidas 3. Visita inicial para ver el punto de partida de las fincas	1. Solicitud de entrada a la comisión de admisión del grupo territorial correspondiente, con el aval de alguna persona miembro 2. Visita inicial para ver el punto de partida de las fincas 3. Entrevista para evaluar la motivación al solicitar la entrada

En la visita inicial, no sólo se observa si la finca está apta para entrar en la iniciativa, sino que en todos los casos se establecen las recomendaciones que se consideran oportunas para una mejora del manejo. Si la visita se evalúa positivamente, se permite la entrada de la nueva familia productora o grupo productor, que entrará a formar parte de la estructura inferior más próxima.

Aparte de la visita inicial, se pueden establecer otros mecanismos adicionales. En este sentido encontramos diferentes propuestas. En los casos en los que la motivación de la nueva familia productora para solicitar la entrada interesa, se establece una evaluación a

través de una entrevista inicial. Esta entrevista tendrá un importante valor, a la hora de autorizar o no la entrada, casi al mismo nivel que la visita inicial de campo. Otro mecanismo que encontramos en alguna de las iniciativas estudiadas es el establecer un periodo de prueba, cuya duración puede ser fija para cualquier nueva entrada o variable, en función de la situación de partida, durante el cual se evalúa la actitud y la implicación de la nueva persona socia. En algunos casos, se establece como práctica recomendada en el proceso de entrada contar con el aval o el acompañamiento de alguna de las personas socias de la iniciativa. La mayor o menor simplicidad de los procedimientos de entrada son relacionados por las personas entrevistadas con el ritmo de solicitudes de entrada que tenga la iniciativa. Si este ritmo es lento, se percibe la posibilidad de simplificar el procedimiento, ya que el acompañamiento individualizado de las nuevas personas socias es fácil. En caso de que el ritmo de solicitudes sea alto, se percibe la necesidad de establecer ciertas garantías extra antes de autorizar la entrada de las nuevas personas. En todos los casos el informe de la visita inicial y los de los demás mecanismos establecidos son evaluados por una instancia distinta al grupo de visita.

Estructuras y funciones en el proceso de garantía

A nivel de estructuras operativas para el funcionamiento del SPG, existen similitudes importantes entre las iniciativas estudiadas, si bien los nombres y su composición son diferentes.

Cuadro 29.- Análisis comparativo de las principales estructuras operativas de los Sistemas Participativos de Garantía estudiados

Ecovida	**N&P**	**SPG Andaluz**
1. Grupo de productores, conformados por entre 5 y 8 familias: -*Comisión de ética*, conformada por unas tres personas, elegidas cada dos años 2. Núcleo, conformado por grupos productores, ONG de asesoría y asociación de consumo (en algunos casos): -Consejo de ética, conformado por una persona de cada grupo o asociación que compone el núcleo (entre 12 y 18) 3. Red, conformada por todos los núcleos: -Coordinación ampliada -Asamblea general de la Red cada dos años	1. Asociaciones de productores/as y consumidores/as a nivel departamental: -COMAC, conformada por personas elegidas anualmente por la asamblea, de entre sus miembros -Grupos de visita, conformados por dos personas 2. Federación de asociaciones: -Consejo Federal, compuesto por representantes de las asociaciones departamentales, y otros órganos de la federación. Elegidos anualmente -Consejo de administración, compuesto por 6 personas elegidas por el Consejo Federal -CCAM, compuesta por dos miembros del Consejo de Administración, y 6 miembros elegidos por el Consejo Federal, de las cuales: dos son productores, 2 consumidores y 2 transformadores. Son elegidas cada 4 años -Asamblea general de la Federación	1. Asociaciones de productores/as y consumidores/as a nivel de territorio: -Comisión de admisión: compuesta por dos personas de la asociación, y nombradas anualmente -Comisión de Calidad, compuesta por tres personas de la asociación y nombradas anualmente -Grupo de visita: compuesto por dos personas de la asociación, por una duración de seis meses -Asamblea general de la asociación 2. Red de asociaciones: incipiente

En todos los casos las organizaciones se basan en estructuras donde la toma de decisiones es horizontal. Las decisiones de tipo estratégico se establecen en foros donde participan todas las personas implicadas, generalmente asambleas. Las funciones de tipo operativo son distribuidas entre diferentes estructuras. Las personas que componen estas estructuras son elegidas periódicamente por el colectivo, con la idea de ir rotando las tareas entre sus miembros. De esta forma se evita la concentración de información y, por lo tanto, de poder, en pocas personas. Sólo en algunas ocasiones las responsabilidades operativas son asumidas de forma voluntaria.

La composición de las diferentes estructuras varía en función del número de personas y del perfil de las mismas. Concretamente, la principal diferencia radica en el papel que las personas consumidoras desempeñan en las estructuras operativas. Pueden integrarse como parte de la propia organización, asumiendo responsabilidades y participando al mismo nivel que las personas productoras, o bien pueden ser figuras de apoyo puntual en todo el proceso de organización y garantía. Las estructuras de cada una de las

experiencias responden a su origen, siendo este uno de los puntos fuertes de este tipo de mecanismos: se adaptan a los contextos históricos y sociales de los territorios donde se implantan y no son recetas externas que se aplican.

En base a la diferente madurez de las experiencias estudiadas y sus resultados, podemos considerar que la construcción de la articulación entre grupos es un proceso posterior a la organización de las familias productoras y consumidoras en un territorio. El paso a la visión de red o de articulación entre territorios a nivel formal es un proceso lento, que requiere de la consolidación de los grupos locales y de un trabajo continuado de encuentros entre ellos. La necesidad y las ventajas de una coordinación superior deben ser sentidas para que los grupos se impliquen en esta responsabilidad adicional.

Infracciones y sanciones

Las sanciones que se establecen como consecuencia de infracciones cometidas en relación al cuaderno de normas son muy similares en las experiencias estudiadas.

Cuadro 30.- Sanciones establecidas en los Sistemas Participativos de Garantía estudiados

Ecovida	**N&P**	**SPG Andaluz**
1. Expulsión de la Red 2. Existen mecanismos de asesoramiento y acompañamiento, para una posible reincorporación	1. Expulsión de la Federación. 2. Existen mecanismos de asesoramiento y acompañamiento, para una posible reincorporación	1. Expulsión de la Asociación. 2. Existen mecanismos de asesoramiento y acompañamiento, para una posible reincorporación. 3. Incorporan faltas por incumplimiento de recomendaciones, cuyas sanciones son de tipo económico

La principal consecuencia de un incumplimiento voluntario del cuaderno de normas es la retirada de la autorización de uso del sello y la expulsión de la persona en cuestión del grupo. En este tipo de mecanismos la importancia de la sanción no es tanto la retirada del sello, sino la salida del contexto socioeconómico establecido entre grupos productores: de las relaciones de apoyo mutuo, de los mecanismos de comercialización conjunta, de los intercambios de experiencia y el asesoramiento, etc. Asimismo, las informaciones son públicas, todas las personas implicadas conocen los resultados de los informes y las discusiones en torno a las diferentes fincas. Existe, por lo tanto, una aprobación o crítica social en torno al tipo de manejo que se lleva a cabo.

En todos los casos, se prevé el acompañamiento de las familias en caso de faltas leves o graves (utilizando la nomenclatura del caso andaluz, pero válido conceptualmente para las otras dos experiencias), con el fin de ayudarlas a mejorar sus manejos o a recuperar

la autorización del uso del sello, en los casos correspondientes. En algunos casos y en relación a las contaminaciones por deriva que alguna de las personas socias pueda sufrir, se operativizan las relaciones de apoyo mutuo a través del grupo de visita, quien acude al foco contaminante para tratar de explicar la situación y evitar nuevos perjuicios.

Costes

Los costes de estos procedimientos se reducen al mínimo. Las cuotas y los gastos a asumir por las personas socias se calculan de manera que se cubran los costes de: a) los traslados para la realización de las visitas; b) los gastos corrientes del procedimiento y las estructuras y; c) otros procedimientos extra establecidos (analíticas, por ejemplo). Asimismo, según las iniciativas, pueden establecerse a otros servicios que se incorporan al procedimiento (personal técnico de asesoría, cursos formativos, etc.). La cuota puede contemplar todos estos costes y ser asumida por las personas socias, o pueden buscar apoyos externos de financiación, a través de ONG que reciben fondos de la Cooperación Internacional, de subvenciones públicas destinadas a asociaciones de productores y/o consumidores, etc.

Procedimiento de renovación del sello

El proceso de garantía para las familias miembro de las experiencias de SPG estudiadas se basa en una visita anual, de un grupo compuesto por personas de la asociación o grupo. Su composición es variable, como ya hemos descrito. En esta visita se revisa el estado de la finca, los manejos practicados, y la evolución de los mismos con respecto a años anteriores. Todo esto está reflejado en un manual que es el que se utiliza de referencia durante la visita.

Las visitas de campo pueden ir apoyadas por otros procedimientos. Si en el grupo de visita no participan los/as consumidores/as, se fomentan las visitas de los mismos a través de *jornadas de puertas abiertas*, que son días de convivencia que se organizan para invitar a las fincas a estos actores. También en algunos casos se establece una etapa previa a la visita que es la llamada autodeclaración, en la que la familia productora debe realizar un trabajo de autoanálisis y autorreflexión sobre su finca y su manejo. Otro mecanismo que puede apoyar el proceso son las analíticas al azar a un porcentaje determinado de fincas.

La garantía pasa por un segundo nivel de evaluación. El informe de la visita, junto con los informes de todos aquellos mecanismos que se establezcan en la iniciativa es trasladado a otra instancia compuesta por personas diferentes. Este equipo verifica que todos los mecanismos se han llevado a cabo correctamente y evalúan los informe, junto con las informaciones de la persona evaluada de años anteriores. Según los casos, en este proceso de reflexión y análisis profundo de cada persona socia se permite o no la presencia de las personas implicadas, las visitadoras y la visitada, con el fin de explicar o aclarar aspectos concretos de la visita y participar en la reflexión colectiva.

En aquellos casos donde hay una articulación superior de territorios, existe un tercer filtro de evaluación: la instancia de articulación correspondiente. De este modo se

vuelven a revisar los informes correspondientes y, en base a ellos y al informe elaborado por el segundo filtro de la garantía, emitirán la decisión final sobre la autorización o no del uso del sello. En estos casos, la decisión en cuanto a la autorización del sello pasa por varios filtros que se van alejando del grupo productor en cuestión. La decisión final se toma en una instancia mayor, con el fin de dar mayor garantía de imparcialidad.

En estos procedimientos los niveles de burocracia no se simplifican mucho con respecto a la certificación por tercera parte. Lo que los hace más asequibles es: a) que los llevan a cabo varias personas en los diferentes niveles, aliviando la carga individual de este trabajo y facilitando el acceso a la misma a personas menos letradas o con dificultades de entendimiento y; b) que, en todos los casos, los manuales que se trabajan han sido elaborados por sus propios miembros, por lo que están adaptados a su lenguaje y entendimiento.

Análisis comparado con la certificación por tercera parte

A grandes rasgos, las diferencias fundamentales entre los Sistemas Participativos de Garantía y la certificación por tercera parte son un reflejo de la noción de garantía que subyace tras ellos.

Cuadro 31.- Elementos comunes a los tres modelos de Sistemas Participativos de Garantía estudiados

Aspecto	Sistemas Participativos de Garantía estudiados	Certificación por tercera parte en el Estado español, basada en la normativa europea
Estructuras en las que se sustenta	1. Adaptadas al contexto histórico social de la experiencia 2. Parten de niveles próximos a la familia productora y/o consumidora y van generando espacios de articulación superior 3. El proceso de toma de decisiones es de abajo hacia arriba: desde las estructuras más próximas a la familia productora y/o consumidora, a las estructuras de articulación	1. Entidades técnicas de certificación que deben cumplir las normas establecidas por la Norma EN45011, homogénea para toda la Unión Europea 2. Autoridades Públicas de Control
Qué se avala	El modo de manejo de la familia o persona productora, en toda/s su/s finca/s. La convicción ecológica. Se incluyen estándares técnicos de tipo agroecológico (ecológicos y sociales)	Productos concretos. La única limitación es no poder tener el mismo producto en otras fincas del mismo término municipal sin certificar
Quién verifica el cumplimiento de las normas	Otras personas del entorno social de la familia productora: siempre otras productoras y según experiencias y realidades, consumidoras y/o técnicos	Una persona técnica contratada por la entidad de certificación
Cómo se realiza la evaluación de conformidad	A través de una visita anual, por parte de un grupo de visita conformado por personas del entorno	A través de una visita anual de la persona técnica
Cómo se obtiene el sello	El informe de la visita se discute en la instancia más próxima a la familia productora, de donde salen recomendaciones. Generalmente, la decisión de autorización de uso del sello es tomada en una instancia superior, en base a la evaluación de todos los informes emanados del proceso	El informe de la visita es evaluado por personal técnico de la entidad certificadora contratado para ello
Qué mecanismos de confiabilidad se llevan a cabo	1. Visitas anuales 2. Control social continuo 3. Visitas por sospecha o denuncia de mal manejo	1. Visita anual 2. Analíticas en caso de sospecha de la persona técnica
Qué penalización existe si no se cumplen las normas	1. Retirada de la autorización del uso del sello – penalización económica 2. Expulsión de la iniciativa colectiva (procesos, proyectos, intercambios, etc…) – penalización social 3. Existen mecanismos de asesoramiento y acompañamiento, para una posible reincorporación	1. Retirada del sello

¿Las informaciones son públicas? ¿Es un proceso transparente?	Sí, los informes de evaluación, en los distintos niveles, son públicos	Están obligados a mantener una confidencialidad absoluta en cuanto a sus operadores/as
Costes	1. Traslados del grupo de visita 2. Funcionamiento ordinario de las estructuras 3. Analíticas cuando se establecen	1. Traslado, dietas y salario de la persona técnica inspectora 2. Salario de las personas de la entidad de certificación que verifican los informes 3. Funcionamiento ordinario de las estructuras de la entidad 4. Analíticas
Qué burocracia lleva asociada y quién la asume	1. Informe/manual de la visita con observaciones y recomendaciones (grupo) 2. Evaluación del informe de la visita y autorización de uso del sello (grupo) 3. Autoevaluación cuando se establece (persona) 4. Toda la documentación que se trabaja ha sido elaborada por las propias personas miembro de la experiencia – están adaptadas a su lenguaje y capacidad de entendimiento	1. Cumplimentar el manual de campo (persona) 2. Cumplimentar el registro de entradas y salidas elaborado (persona) 3. Informe de la visita de campo (inspector/a) 4. Informe de evaluación de la visita de campo (técnico/a) 5. Toda la documentación que se trabaja es elaborada por las entidades técnicas de certificación
Cómo es el procedimiento de entrada de nuevas familias/personas productoras	1. Variable: desde la simple solicitud, hasta pasar por una entrevista de motivación, o requerir el aval de alguna persona miembro. 2. En todos los casos se establece una primera visita para evaluar el punto en el que se inicia la adhesión del nuevo miembro 3. Periodo de conversión 4. El pago de la cuota se realiza cuando la persona es aceptada en la estructura	1. Solicitud a la entidad certificadora 2. Pago de la cuota correspondiente 3. Visita inicial 4. Periodo de conversión

La objetividad que se establece asignando la responsabilidad de las visitas a una persona externa al territorio puede ser garantizada en base a una revisión grupal de los manejos. De esta forma, se establece una objetividad por la implicación de varias personas que intercambian subjetividades y llegan a decisiones consensuadas. Los sistemas participativos refuerzan esta imparcialidad, además, por el establecimiento de diversos filtros grupales para en el proceso.

La garantía participativa no depende de unos clientes que pagan un servicio y que dejan de serlo si no cumplen las normas establecidos; por el contrario, depende de grupos de personas que quieren garantizar que lo que producen y/o consumen responde a unos principios determinados. Este interés personal compartido genera unos procesos de

control social continuos, ya que cada individuo debe responder por la colectividad en la que está implicado. La desconfianza o la constatación de fraudes impiden un correcto funcionamiento de este mecanismo, por lo que serán importantes los mecanismos de expulsión y exclusión social.

Los sistemas participativos rompen con la lógica de la certificación de producto. La implicación personal que requieren les hace valorar y avalar procesos y actitudes, en todas sus dimensiones. La producción ecológica en estos contextos no es un mercado diferenciado, sino un modo agroecológico de entender los agroecosistemas. De este modo se fomenta la diversificación de aprovechamientos y la pequeña escala. Y, por lo tanto, en sus procedimientos en cuanto a costes y burocracia, se vela porque se adapten a estos perfiles: precios que no dependen de los aprovechamientos que se lleven a cabo, sino de los gastos reales de funcionamiento del grupo y el sistema; y registros y burocracia que son útiles para el grupo y adaptados a su lenguaje y entendimiento. Estos elementos no sólo no están incorporados en la certificación por tercera parte sino que, además y por su estructura de precios y burocracia, quedan perjudicados y en muchos casos excluidos.

Los Sistemas Participativos de Garantía fomentan procesos de agroecologización continua, a través de mecanismos de recomendaciones, intercambio de experiencias y conocimiento, etc. Frente a una certificación por auditoría que se concibe como un examen, que se aprueba o se suspende, en base al uso de productos permitidos o prohibidos durante el manejo.

La certificación oficial instaura una producción y un consumo pasivos, en el proceso de generación de confianza entre ambos. Los sistemas participativos favorecen mecanismos de intercambio, conocimiento y apoyo mutuo entre productores/as y con consumidores/as, que generan acción y cambio social de tipo agroecológico. Exigen una implicación y una participación de estos actores que se traducen en tejido social y en construcción de procesos endógenos.

La garantía participativa convierte un mecanismo necesario (obligatorio cuando está regulado, como en la Unión Europea) en un proceso que reporta ventajas sociales (organización, relaciones de apoyo mutuo, proximidad entre producción y consumo, etc.) económicas (grupos de comercialización y compra de insumos conjunta, reducción de costes, etc.) y políticas (autonomía, autogestión) a los grupos productores y consumidores. De esta forma es un medio para alcanzar otros fines. La garantía por auditoría convierte esta obligación en una penalización para los grupos productores. No reporta ningún otro servicio, sino únicamente unos costes y una burocracia excesivos.

A modo de conclusión, podemos establecer que los Sistemas Participativos de Garantía son defendidos por sus protagonistas como iniciativas que favorecen y fomentan la generación de tejido social local, así como las relaciones de proximidad y de confianza tanto entre productores y productoras como con el consumo. De hecho, en todos los casos, el SPG ha ido asociado al establecimiento de canales cortos de comercialización, bien a través de la organización de la producción para acudir a ferias o mercados, bien a través de la organización con el consumo, estableciendo sistemas de pedidos semanales, entre otros mecanismos. De esta forma, los Sistemas Participativos de Garantía no son

solamente unos mecanismos de generación de confianza en las producciones ecológicas, sino que transforman la garantía en procesos endógenos de autoorganización y autogestión, que generan cambios sociales. Estas transformaciones se traducen en acciones que consolidan la actividad agraria local y su mantenimiento en el tiempo. Son, por lo tanto, motores de cambio social agroecológico.

7.5. Sobre el impulso inicial de las experiencias

El origen de estas iniciativas es diverso, si bien en todos los casos se parte de una visión de la producción ecológica y de la garantía que se ven frustrados ante mecanismos de garantía como la de tercera parte o auditoría. Desde que se plantea la insatisfacción por este procedimiento hasta que se establece un Sistema Participativo de Garantía formal suele haber un motor que fomenta el proceso. Según las iniciativas estudiadas, este motor pueden ser grupos productores y consumidores muy concienciados y militantes; ONG o entidades técnicas de asesoría que asisten y apoyan a grupos productores cercanos con estas visiones; o la administración pública atendiendo a las demandas de estos grupos productores insatisfechos.

En aquellos contextos donde la regulación pública de la producción ecológica esté en proceso de elaboración, establecer de manera formal un Sistema Participativo de Garantía puede venir motivado por el deseo y la necesidad de ver incluida la iniciativa en la legislación incipiente. La situación es otra en aquellas zonas donde exista una regulación del sector ecológico excluyente de estos sistemas alternativos de garantía. En estos casos, el establecimiento formal de un Sistema Participativo de Garantía puede venir motivado como una respuesta a los problemas que el sistema de certificación por tercera parte obligatorio conlleva. En estos casos, será necesario construir sinergias y articulaciones con otras organizaciones del sector ecológico para tratar de modificar la legislación vigente.

La cuestión polémica en este sentido se centra en la siguiente idea: las dos experiencias consolidadas estudiadas parten de una realidad donde los propios grupos productores empezaron a establecer mecanismos de confianza mutua y de garantía. Lo que las ONG en un caso y los propios grupos en otro hicieron fue tratar de sistematizar estos mecanismos que, en la práctica, se venían desarrollando. La opinión vertida por algunos miembros de Ecovida a lo largo de la investigación planteaba que este tipo de procesos no podían generarse externamente, sino que debía partir de los propios contextos sociales. En caso de que no surgiese de forma espontánea, indicaría una realidad poco cohesionada y organizada, en la que no era posible establecer estos mecanismos.

Sin embargo y en base a los resultados obtenidos en el proceso andaluz, donde se detectó una demanda pero no surgió de forma espontánea un mecanismo participativo como el construido, podemos considerar que este punto de partida no tiene por qué ser un impedimento para el desarrollo de Sistemas Participativos de Garantía. La cuestión, en base a la investigación desarrollada, estaría en cómo se pueden impulsar para que pertenezcan a los territorios y se adapten a ellos, en aquellos contextos donde de forma espontánea y endógena no surgen. En torno a la espontaneidad de estos sistemas y en base a los casos estudiados, planteamos la idea de que en contextos de no regulación del

sector ecológico, la unión entre personas que plantean alternativas a las tendencias imperantes es una motivación para tener más capacidad de influencia en una posible legislación del sector. Sin embargo, en contextos regulados de forma excluyente como es la Unión Europea, la capacidad de defensa y de lucha por opciones alternativas se siente más difícil y alejada de los contextos locales. Esto desanima procesos de este tipo cuando existen (recordemos la crisis que sufrió N&P cuando surge la regulación de la producción ecológica y del sistema de garantía) e incluso lleva a ni siquiera planteárselos. De esta forma, proponer alternativas que se salen del marco de la legalidad, en sectores regulados y apoyados por políticas públicas a través de subvenciones, resulta más complicado que en contextos donde la regulación está por hacer.

En los contextos donde estas iniciativas no surgen de forma espontánea por los motivos analizados, el punto de partida de un proceso que pretenda impulsar mecanismos de garantía participativa deberá basarse en fomentar el acercamiento y la comunicación entre personas que perciban la certificación por auditoría como un problema. El impulso de espacios de encuentro y de reflexión conjunta es la base sobre la que construir procesos de confianza mutua en los que se desarrolle la capacidad de las propias personas implicadas de dialogar y proponer colectivamente procesos endógenos. De este modo, utilizar metodologías inspiradas en las propuestas de la Investigación Acción Participativa, para resolver la problemática de la certificación oficial en aquellos contextos donde surja, permite establecer las bases colectivas y relacionales sobre las que desarrollar mecanismos participativos de garantía. Así, en aquellos territorios donde las inercias individualistas y pasivas sean fuertes, es posible fomentar procesos de garantía participativa a través de mecanismos participativos de reflexión y acción. Estas metodologías permiten impulsar actitudes activas, propositivas y colectivas en aquellos territorios inicialmente adormecidos, especialmente en zonas donde las políticas públicas hayan estado basadas en procedimientos asistencialistas. De este modo, los procesos de construcción de Sistemas Participativos de Garantía a través de metodologías participativas pueden ser considerados como mecanismos que fomentan y favorecen procesos de cambio social agroecológico.

Los impedimentos al desarrollo de este tipo de propuestas no vienen, por lo tanto, de un punto de partida de poca cohesión social. Sin embargo, podemos describir otro tipo de factores que, a lo largo de nuestra investigación, han dificultado el impulso externo de estos procesos. Podemos destacar, por un lado, el hecho de que la agricultura sea una actividad a tiempo parcial, lo que puede plantear una menor disposición de los/as productores/as a implicarse en procesos orientados a resolver problemas en el ámbito productivo y; por otro lado, que haya habido experiencias previas de otros impulsos externos en la zona, que no obtuvieran resultados satisfactorios en las personas implicadas. En estos casos, se plantean algunas sugerencias para tratar de solventar estos impedimentos. En relación al primero, la estrategia de abordaje de la problemática deberá contemplar objetivos más amplios que la problemática productiva, que integren la de otros sectores productivos o económicos del territorio. En relación a experiencias previas insatisfactorias, será importante conocer en profundidad los analizadores históricos que intervienen en estos imaginarios, así como el papel y la legitimidad de las diferentes administraciones o entidades locales.
De esta manera, la estrategia a seguir podrá evitar aspectos tabú y entidades poco

legitimadas en sus decisiones operativas.

Por último y en base al estudio realizado de tres experiencias de SPG, cabe destacar que existe un punto de partida común: en todos los casos se inician a partir de familias productoras y consumidoras que tienen una visión de tipo agroecológico en torno a la actividad agraria y la producción de alimentos. En todos los contextos trabajados, las personas implicadas expresan percepciones y posicionamientos muy similares en torno a la producción de alimentos, independientemente de que sean del sur de Brasil, de Francia o de Andalucía. En todos los casos contemplan aspectos de las tres dimensiones propuestas desde la Agroecología. En el ámbito técnico productivo, mantienen una visión global del agroecosistema y de los flujos de materia y energía en sus modos de manejo; en el ámbito socioeconómico, plantean aspectos relacionados con la equidad y la justicia sociales, así como procedimientos económicos que fomenten relaciones de proximidad y sean controlados por las personas protagonistas; en el ámbito político cultural, defienden la idea de ganar autonomía y soberanía en sus procesos, así como respetar las particularidades y especificidades de cada territorio y cada grupo humano. Esta visión inicial puede resultar básica para poder impulsar procesos colectivos donde se requiere implicación y participación individual.

7.6. Sobre las dificultades y los retos percibidos

Una vez establecido un Sistema Participativo de Garantía, existen una serie de dificultades en su funcionamiento que nos llevan a afirmar que no son mecanismos adaptables a cualquier contexto y en cualquier circunstancia. Se trata de asumir, pues, que no representan una propuesta que trata de eliminar la certificación por tercera parte. Por el contrario, la planteamos como una opción que, en determinados contextos, responde y refleja de forma más coherente la visión sobre la producción ecológica y el trabajo colectivo de las personas que los habitan. En estos ámbitos, los SPG deben ser defendidos ya que potencian procesos de cambio social agroecológico que permiten alcanzar gran parte de los objetivos planteados en las diversas políticas de Desarrollo Rural establecidas a nivel regional, estatal y comunitario en la Unión Europea. Las dificultades percibidas por las propias personas implicadas en las experiencias estudiadas son de dos tipos: externas al propio mecanismo e intrínsecas a él.

La máxima dificultad externa con la que estas experiencias se encuentran es su no reconocimiento legal. Los matices de esta problemática difieren según el contexto. En territorios donde no existe una regulación oficial del sector ecológico, estos sistemas pueden operar en el contexto nacional, ya que no están excluidos legalmente. El problema surge cuando se necesita acceder a mercados convencionales nacionales lejanos o mercados internacionales. En estos canales de comercialización las referencias que se utilizan son los reglamentos de la Unión Europea y Estados Unidos, en los que el único sistema avalado es el de la certificación por tercera parte a través de entidades acreditadas para ello. En estos contextos nacionales, las iniciativas tienen la opción de negociar con los distintos actores, con el fin de establecer acuerdos bilaterales para que los productos sellados a través de un SPG sean reconocidos. Este trabajo implica una ardua tarea.

En territorios donde existe una regulación pública del sector ecológico, la dificultad surge cuando esta legislación no reconoce los Sistemas Participativos de Garantía. En estos contextos, los productos garantizados a través de estos sistemas no tienen opción alguna a entrar en redes de comercialización donde se exija el sello y no pueden calificar sus productos como ecológicos, por ser una nomenclatura protegida por ley para productos certificados oficialmente. La exclusión reglamentaria conlleva una segunda dificultad añadida: no poder acceder a las ayudas públicas establecidas para este tipo de producción.

Una segunda dificultad externa al propio procedimiento es la incredulidad que se genera en torno a un sistema de garantía que rompe con la figura técnica objetiva y externa y se basa en relaciones entre productores y consumidores. En estos contextos, la labor de difusión de las experiencias para convencer de su confiabilidad se hace ardua.

Las dificultades intrínsecas a los propios mecanismos de la garantía participativa señaladas por las personas implicadas en las experiencias estudiadas son fundamentalmente de cuatro tipos. En primer lugar, los requerimientos de tiempo que estos mecanismos exigen a las familias implicadas, más allá de sus propias tareas cotidianas. Las experiencias estudiadas proponen algunas soluciones a esta dificultad: a) remunerar a las personas que realizan tareas concretas, por el tiempo dedicado a ellas; b) apoyar los procedimientos y ciertas tareas en el trabajo de personas técnicas, a través de la alianza con entidades técnicas de apoyo y asesoría.

La segunda dificultad intrínseca a estos sistemas señalada es la capacidad de verbalizar los errores o inconformidades que otras personas miembro del grupo pueden estar cometiendo en sus manejos. El anonimato en estos procedimientos facilita las denuncias, ya que no es fácil separar los aspectos personales del procedimiento de garantía. Consideran que el trabajo en colectividad ayuda a superar en parte esta dificultad y que supone un aprendizaje que requiere tiempo.

Una tercera dificultad intrínseca señalada son los conflictos que se generan en torno a los conceptos en los que se basa la experiencia. Llegar a consensos sobre el nivel de profundidad de los requerimientos y criterios es una tarea difícil en continua revisión. En este sentido, la convivencia en una misma experiencia de visiones más políticas y militantes frente a otras más pragmáticas genera conflictos que deben ser trabajados diariamente.

Por último, la lógica de la superioridad técnica por encima de las capacidades y los conocimientos locales pesa de forma importante en las propias personas implicadas en Sistemas Participativos de Garantía. Esto las lleva a sentir inseguridad sobre su capacidad para realizar visitas de control y frustración por no poder contrastar si lo están haciendo de forma suficientemente rigurosa. Una solución planteada a esta dificultad ha sido la organización de jornadas formativas donde se trabaja el procedimiento de las visitas y el manejo de los cuadernos de campo.

En relación a las dificultades detectadas, el gran reto al que se enfrentan este tipo de iniciativas es, según sus propios protagonistas, el reconocimiento legal. En algunos contextos se ha conseguido su introducción en las legislaciones en proceso de

elaboración; en otros contextos, como el europeo, su reconocimiento está muy lejos de ser una realidad. En estos casos surge como un reto de estos sistemas establecer alianzas y sinergias con otras organizaciones afines a estos sistemas para ir ganando peso y capacidad de influencia.

A nivel interno, los principales retos se plantean en la línea de consolidar el funcionamiento interno, fortaleciendo la articulación de los distintos grupos y la participación activa de todos sus miembros. En este sentido, surge como una constante la necesidad de perfeccionar el funcionamiento interno del sistema, a través de la mejora de las visitas y de las capacidades para llevarlas a cabo. En los casos en los que el consumo tiene un papel secundario, se observa la necesidad de implicarlo a un nivel mayor. Asimismo, se plantea el desafío de ser capaces de difundir las ventajas de este tipo de experiencias para implicar a un número mayor de grupos y familias productoras. Como último reto a destacar, surge la idea de sistematizar de forma seria las experiencias, a través de la informatización de los registros, con el fin de apoyar la lucha por el reconocimiento legal.

7.6.1. Las opciones para la regulación de los Sistemas Participativos de Garantía en Andalucía

En relación a la cuestión del reconocimiento oficial (principal reto que se plantean las experiencias de garantía participativa estudiadas), existen algunos elementos que pueden dar cierta luz sobre las opciones que empiezan a vislumbrarse para estos sistemas.

A nivel internacional, existe un Grupo de Trabajo Internacional (Internacional Task Force – ITF) en torno a la Armonización y Equivalencia en el ámbito de la Agricultura Ecológica. Este grupo está liderado por la IFOAM, la FAO y la UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y está compuesto por 40 participantes entre gobiernos, organismos intergubernamentales y entidades privadas. Su función se centra en elaborar soluciones para la equivalencia entre estándares y regulaciones de la producción ecológica entre países. En el seno de este grupo y desde el año 2006, se viene hablando de los Sistemas Participativos de Garantía y de los posibles mecanismos que se podrían poner en marcha para trabajar su reconocimiento y equivalencia entre países[219]. La propia IFOAM, a nivel internacional y tras su conferencia sobre certificación ecológica celebrada en Roma, en octubre de 2006, asumió los Sistemas Participativos de Garantía como una alternativa reconocible para la confiabilidad del sector ecológico.

A nivel de legislación, son varios los países que ya tienen reconocida esta opción como sistemas de garantía válidos o están en proceso de redacción de los reglamentos estatales en cuyos borradores los están incluyendo. Algunos de estos países son[220]:

[219] Información extraída de la presentación realizada por IFOAM en noviembre de 2007, en el encuentro sobre SPG celebrado Brasil (Antonio Prado, RS), extraída del CD recopilatorio del mismo, así como de la entrevista realizada a Fernanda Fonseca (PE 17), miembro de este Grupo de Trabajo.

[220] Información extraída de la presentación realizada por IFOAM en octubre de 2007, en un encuentro celebrado en India sobre SPG (facilitado por un miembro de la plantilla de IFOAM)

Costa Rica, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, México y Colombia, todos ellos en Centro y Sudamérica.

Las opciones para el Sistema Participativo de Garantía andaluz

La legislación vigente en Andalucía, en relación a los sistemas de garantía, la conforman como ya hemos comentado dos normas: el Reglamento RE 2092/91, de 24 de junio de 1991, *sobre la producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios;* así como la norma DIN EN 45011. En estas regulaciones, no se contempla otro sistema de garantía para la producción ecológica más allá de la certificación por auditoría o tercera parte. En base a esta reglamentación, los dos puntos fundamentales que todo/a operador/a debe seguir para optar a la certificación oficial son[221]:

a. Notificar su actividad a la autoridad competente (con un modelo de información a suministrar establecido)
b. Someter su explotación – empresa a un régimen de control también establecido

La única excepción que contempla el reglamento para el no cumplimiento de estos dos requisitos básicos se establece cuando el/la productor/a vende directamente al consumo final, y todo el proceso de preparación y almacenamiento del producto lo hace en conexión con el punto de venta. Si la venta de la producción no cumple este requisito, el régimen de control al que se deben someter será el establecido por alguna de las entidades de control acreditadas para tal fin en Andalucía. En el contexto de esta realidad legislativa, podríamos plantear dos vías posibles de funcionamiento para el Sistema Participativo de Garantía andaluz:

1º VIA Establecer una *marca o distintivo* diferente al establecido para la producción ecológica, en el que no podrían aparecer ninguna de las menciones protegidas por la legislación: ecológico, orgánico, biológico y derivados. Esta opción ha sido la adoptada por algunas iniciativas de este tipo surgidas en contextos con regulaciones excluyentes como la Unión Europea. Es el caso de Estados Unidos y la iniciativa de garantía participativa conocida como "Certified Naturally Grown" (*certificado producido naturalmente*). Esta opción requiere buscar algún tipo de apelativo que dé una idea del tipo de manejo ecológico que subyace detrás, sin usar las palabras contempladas en la legislación. La opción de *natural* es una posibilidad.

En estos casos, la producción orientada a mercados locales y de proximidad puede funcionar bien, con un trabajo importante de difusión de la marca y de la experiencia. El principal problema surge para llegar a otros mercados, donde esta marca no será reconocida ni relacionada con la producción ecológica. En nuestra región, esta vía supondría no poder entrar a vender en tiendas especializadas, acreditadas como ecológicas, ya que por ley tienen la obligación de que todos los productos que vendan estén legalmente certificados. Asimismo, esta opción llevaría a las personas productoras

[221] Extraído del RE 2092/91 así como de la UNE 45011

implicadas en el sistema a perder el derecho a optar a las subvenciones que la Unión Europea concede a la producción ecológica.

2º VIA Implicar a alguna entidad de certificación en el proceso, lo que permitiría mantener en parte el sistema construido y contar con un *sello legal*. La manera de adaptar la entrada de una entidad de certificación en el Sistema Participativo de Garantía construido es lo que se trabajó, en la última fase del proyecto desarrollado. Esta fase culminó con la redacción de una orden a través de la cual se regulaba el Sistema Participativo de Garantía andaluz de forma legal[222].

De forma resumida, el mecanismo que se encontró para realizar esta adaptación fue establecer un convenio entre una de las entidades certificadoras y la Autoridad Competente (la actual Dirección General de Producción Ecológica). Este convenio regulaba la contratación de una figura técnica que acompañaba a los grupos de visita de las tres asociaciones y traducía los registros y mecanismos propios del SPG a la burocracia y registros exigidos por la entidad certificadora. Para el Sistema Participativo de Garantía construido, la figura técnica sería la tercera persona externa contemplada en el grupo de visita, con la diferencia de que: en vez de ser opcional sería obligatoria y; en vez de ser personas elegidas por los grupos, por su interés estratégico local a nivel de credibilidad, sería una persona contratada para tal función.

Esta opción necesita el apoyo y el reconocimiento explícito de la Autoridad Competente andaluza, ya que requiere: a) que traduzca su apoyo explícito en aspectos concretos: establecer el convenio necesario con algún organismo de control para que asuma el papel de aval de la experiencia; asumir los costes de los trámites burocráticos asociados al mismo y; asumir los costes derivados de la contratación de la figura técnica que haría de intermediaria entre el SPG andaluz y el organismo de control; b) que participe en el proceso de presión política y búsqueda de alianzas para que la regulación europea incluya estas opciones de garantía.

[222] La tramitación de esta orden quedó paralizada con el cambio de gobierno, en abril de 2008.

8. CONCLUSIONES

El cierre de este documento no implica el final del proceso social sobre el que se ha construido. Los territorios con los que se ha planteado la investigación siguen enfrentando día a día las dificultades, retos y ventajas que la garantía de tipo participativo conlleva. Sin embargo, como analizador intermedio de todo el proceso finalizaremos el documento presentando una serie de conclusiones. Para facilitar la elaboración y la comprensión de las mismas, tratando de respetar una cierta coherencia con el resto del documento, las vamos a exponer adaptándolas a los seis objetivos específicos planteados para la investigación.

Sobre el Objetivo específico 1.- ¿Cuáles son las bases sobre las que construir un marco conceptual en torno a los Sistemas de Garantía desde la Agroecología?

La garantía es un mecanismo que interviene entre la producción y el consumo de productos ecológicos. La base de la misma son las relaciones de confianza cuyo desarrollo es de ámbito local (relaciones de proximidad, mecanismos de comunicación continuos, etc.). Para extrapolar la garantía así establecida a relaciones menos directas entre producción y consumo, es preciso establecer los denominados sistemas de garantía. De esta forma, se trata de un elemento importante de la dimensión socioeconómica y del marco político cultural en el que se desarrollan los procesos de producción agraria de los que se ocupa la Agroecología.

Desde esta perspectiva, consideramos oportuno plantear aquellas características que hacen que la garantía de tipo participativo pueda ser concebida como un sistema de garantía de tipo agroecológico. La visión de garantía que subyace detrás de este concepto es la de una gestión colectiva de la confianza al interno de grupos de productores y consumidores ecológicos determinados, recuperando esta capacidad intrínseca que fue rebatida a nivel oficial imponiendo la garantía como una gestión institucional y/o privada – particular de la confianza. De esta forma, la garantía participativa construye la confianza en los productos ecológicos desde el fomento de las redes de relaciones solidarias, así como desde el control social comunitario que se da de forma natural en grupos organizados en torno a la producción ecológica. La garantía, así entendida, retoma la tradición de gestiones colectivistas que, en torno a bienes comunales y otros, se ha dado en nuestros contextos a lo largo de la historia (p.e. las Comunidades de Regantes). Evidentemente, esto no excluye la existencia y, en muchos casos, la necesidad de conservar la certificación por tercera parte como mecanismo válido de garantía. En efecto, en aquellos contextos donde los intereses individuales se mantengan por encima de los colectivos y no sea posible establecer una gestión colectiva de la confianza basada en relaciones de solidaridad, una mediación externa

para el proceso de garantía será necesaria.

En caso contrario, la garantía participativa es un mecanismo que presenta una serie de características que lo hacen coherente y potenciador de procesos agroecológicos. En este sentido, cabe destacar que se fundamenta en procesos endógenos, propios de cada territorio, fortaleciendo las relaciones solidarias y la confianza al interno de los grupos implicados. Asimismo, fomenta procesos sustentables al ayudarse de relaciones locales de apoyo mutuo para su funcionamiento. El fomento de lo endógeno y de la sustentabilidad en los territorios donde se construye viene dado, además, por las siguientes características: son sistemas que funcionan desde la realidad propia de un territorio, fomentando procedimientos y estructuras que se adaptan y respetan sus especificidades; fortalece los factores sociales internos del agroecosistema, reduciendo la dependencia de factores y actores externos; construye autonomía y capacidades de decisión en los grupos; fomenta la redistribución del poder, generando dinámicas de equidad y justicia y; potencia la articulación social. En este último caso, para que el consumo entre de forma solidaria en los procesos colectivos, será necesario fomentar relaciones de proximidad entre la producción y el consumo locales de productos ecológicos, lo cual establecerá interesantes sinergias con los canales cortos de comercialización existentes o incipientes.

De esta forma y por sus características, podemos concluir que los Sistemas Participativos de Garantía generan en los territorios procesos de cambio social agroecológico. Esto es, son mecanismos que facilitan la agroecologización de grupos, tanto de productores como de consumidores, en todas las dimensiones: la ecológico – productiva, fomentando procesos de mejora productiva continuados; y la socioeconómica, a través del impulso de canales cortos de comercialización y de relaciones solidarias y de apoyo mutuo. En el marco político cultural, fomentan las características endógenas del grupo o territorio, así como procesos estables en el tiempo al construir articulación social.

La garantía participativa es un medio para defender a la pequeña agricultura diversificada frente al proceso de mercantilización y de desaparición al que se ve abocada (las cifras del sector oficial de la producción agraria ecológica lo muestran). En consecuencia, es un mecanismo que permite defender las estructuras productivas y sociales de zonas denominadas por el sector público como “desfavorecidas”, que son en realidad zonas excluidas de las tendencias economicistas del sistema económico e institucional actual. Esta defensa de la pequeña agricultura se establece en base a un mecanismo que transforma costes y pago de servicios por implicación personal y construcción de redes; que concibe la producción ecológica como una actitud, evaluando la forma de producción en su conjunto y no productos aislados de sus contextos y; que se sustenta en procedimientos burocráticos diseñados por las propias personas implicadas y gestionados de forma colectiva.

De esta forma, un procedimiento que resulta necesario en nuestros contextos se transforma en un proceso que reporta ventajas a los territorios donde se construye, ya que supone: un sistema de educación informal; un acercamiento entre la producción y con el consumo; la participación horizontal de todas las personas implicadas; la transparencia de los procesos y; la unión inseparable entre un modo ecológico de

manejo de los recursos naturales (en continua revisión y mejora) con un respeto ético a la equidad social y la justicia laboral.

Sobre el Objetivo específico 2.- ¿Cuáles son los problemas que la certificación por tercera parte plantea al sector de la producción agraria ecológica?

Los datos que arrojan las cifras oficiales del sector ecológico europeo, español y andaluz son muy elocuentes: las superficies medias son más del doble que en la actividad agraria convencional, con una tendencia al aumento y; existen producciones relativamente importantes en el sector convencional que en ecológico apenas son representativas. Se trata de subsectores productivos, en general, que se sustentan en pequeños y medianos tamaños de fincas y que suelen tender a la diversificación de manejos.

Las causas de esta deriva del sector ecológico hacia grandes superficies y monocultivos pueden ser muchas pero, analizando el modo de operar de la certificación por tercera parte, que es el mecanismo oficial para reconocer como ecológica una producción, podemos encontrar algunas de ellas. Fundamentalmente podemos identificar dos, derivadas de la compleja estructura de funcionamiento de las entidades técnicas de intermediación en la garantía: los elevados precios del servicio y los elevados niveles de burocracia. Ambos son similares para cualquier operador, independientemente de la superficie o la producción que maneje y del número de empleados/trabajadores con los que se maneje el predio. Además, tanto los costes como el nivel de burocracia aumentan en función del número de aprovechamientos que se lleven a cabo, esto es, de la diversificación productiva. De esta forma, la certificación por tercera parte penaliza e, indirectamente, excluye a la agricultura familiar diversificada.

En este sentido y en base a los propios datos oficiales, la crítica que se puede plantear a la certificación por tercera parte es la incoherencia que este mecanismo, impuesto por la Regulación pública, presenta con las numerosas políticas y planes de *desarrollo rural* elaborados en nuestros contextos, en los que se plantean como zonas prioritarias aquellas donde predominan las fincas agrarias de tipo familiar y pequeña escala (zonas desfavorecidas, zonas de montaña, etc.). Sin embargo, el apoyo público a estas zonas no va dirigido a cambiar aquellas estructuras y procedimientos que las excluyen. La lógica de las políticas públicas agrarias y rurales va en la línea de las subvenciones públicas para mitigar determinados efectos y fomentar otro tipo de actividades.

Desde una perspectiva agroecológica, la crítica es mucho más profunda, dando contenido a ese posible cambio de estructuras que apoyaría de forma sistémica y profunda a la agricultura familiar diversificada. Desde las visiones agroecológicas, el problema de la certificación por tercera parte es fundamentalmente político, ya que representa un mecanismo de garantía nada transformador y profundo a nivel socioeconómico y ecológico. La principal causa es su propia lógica de funcionamiento: en la generación de confianza entre producción y consumo, ambos grupos de actores son relegados a un papel pasivo, instaurando la lógica de la delegación de

responsabilidades en una figura y un procedimiento de intermediación de carácter técnico. En este sentido, no potencia ni valora procesos de organización y articulación social, sino que simplemente los ignora. La garantía se transforma en el pago de un servicio de auditoría, excluyendo otros modos de confianza basados en la sistematización de relaciones de apoyo mutuo y de solidaridad, o en un control social comunitario. Las dimensiones de la problemática que genera la certificación por tercera parte están relacionadas con: la figura técnica de intermediación y su modo de funcionamiento y; el concepto de producción ecológica que subyace detrás de estos mecanismos, en base a las dimensiones que contempla y sus contenidos.

La responsabilidad asumida por la figura técnica de intermediación es dar garantía de que lo que se intercambia cumple unas determinadas normas establecidas. Para ello, establece un procedimiento de control que es considerado insuficiente, ya que se centra en una visita anual, de unas horas, por parte de una persona técnica ajena al territorio. Esta debilidad se ve agravada en aquellos contextos donde se privatiza la generación de credibilidad: cuando son empresas privadas las que gestionan la cuestión de la garantía en las producciones ecológicas. Son varios los riesgos en estos contextos: a) las entidades certificadoras privadas pueden necesitar recortar gastos, lo que sólo puede hacerse a través de un número menor de visitas anuales para un mismo número de operadores/a, o bien a través de un mayor número de visitas anuales por técnico/a inspector. En ambos casos la calidad del mecanismo de inspección (base de este procedimiento de garantía) disminuye considerablemente.

Aparte de sus debilidades intrínsecas, la certificación por tercera parte impone una dependencia absoluta de los territorios y las personas de entidades externas. De esta forma se imponen en la garantía unas relaciones de poder verticales, en las que las personas productoras y consumidoras ocupan el último eslabón. Además, es un procedimiento no transparente, donde prima la confidencialidad, impidiendo procesos de valoración o de rechazo sociales que representan mecanismos básicos de articulación social.

En lo que respecta al concepto de producción ecológica que subyace en estos mecanismos, concluimos que son procedimientos que no dan garantía de un sector ecológico sustentable. Los estándares en los que se basan sus evaluaciones y su *modus operandi* frenan y desincentivan el desarrollo de propuestas agroecológicas en los territorios, por dos características fundamentalmente: a) están basados en unos indicadores simplistas, para facilitar su evaluación en las cortas visitas de inspección; establecen la garantía como un examen, que se aprueba o se suspende, sin establecer recomendaciones ni fomentar procesos de mejora. En este sentido, premian unos modos de manejo de los recursos naturales que con cumplir unos mínimos (poco agroecológicos ya que se centran en la sustitución de insumos) podrán utilizar el distintivo y, además, no valoran procesos de mejora continuada hacia formas más ecológicas de manejo de los recursos naturales. En este sentido, cabe destacar que la producción ecológica que se evalúa oficialmente no contempla criterios de tipo social y laboral. Se conciben como ámbitos diferenciados la ecología natural (con una acepción muy limitada, a su vez) y la equidad – justicia social.

Por último, cabe destacar que lo que representa una obligación a nivel legal y una

necesidad en muchos de nuestros contextos se convierte en un perjuicio para la producción y el consumo. Para la primera, porque asume unos costes y un nivel de burocracia elevados por un servicio que no les aporta ninguna ventaja, más allá del uso de un identificativo cuyo sentido en ocasiones les resulta insuficiente; para la segunda, porque incrementa el precio de estos productos.

Sobre el Objetivo específico 3.- ¿Se pueden impulsar Sistemas Participativos de Garantía en contextos donde no surgen de forma espontánea?

Cuando los Sistemas de Garantía Participativa no surjan de forma espontánea en un territorio pero se detecte una insatisfacción en torno a la certificación instaurada a nivel legal, no sólo es posible impulsarlos sino que además suponen una oportunidad de generar ciertos procesos de cambio social de tipo agroecológico. La base para que esto suceda es la utilización de metodologías participativas en el planteamiento del proceso.

Los Sistemas Participativos de Garantía, por sus características, son mecanismos que deberán ser construidos desde cada realidad local y grupo, adaptados a su problemática, a su contexto socioeconómico y a sus relaciones grupales. No se concibe, por lo tanto, aplicar este tipo de procedimientos a modo de recetas, por su lógica de funcionamiento, sus requerimientos de implicación personal y la visión que en torno a la producción ecológica y las relaciones personales subyace.

Asimismo, la construcción de un Sistema Participativo de Garantía a través del impulso de un proceso participativo requiere de una concepción de la participación profunda. No entrarían aquellos modos que la conciben como una consulta a la población *beneficiaria*, de forma pasiva o por incentivos materiales. La participación que este tipo de procesos requiere supone una convicción y una asunción de responsabilidades y de protagonismo por parte de las personas que detectaron el problema a solucionar. El rol del equipo técnico – investigador es de acompañamiento, de facilitación y de defensa de la iniciativa.

No obstante, para poder promover una construcción participativa de mecanismos de garantía participativa, existe una serie de condicionantes que debemos considerar. En lo referente a las causas que pueden generar esta no espontaneidad de alternativas a la certificación por tercera parte, podemos contemplar dos casos en los que un impulso externo será posible e incluso necesario. Por un lado, en contextos donde no se conciba la garantía de otro modo que no sea a través de una intermediación técnica, fundamentalmente por la existencia de reglamentos oficiales excluyentes que han eliminado cualquier otra posibilidad para la garantía en los imaginarios de las personas implicadas en procesos de producción y consumo ecológicos. Por otro lado, en contextos sociales donde existan fuertes inercias individualistas y de pasividad que imposibiliten o limiten la visión de iniciativas grupales como respuestas a problemáticas compartidas. Las inercias individualistas pueden venir dadas por una desconfianza ante el entorno cercano y sentimientos de soledad e incomprensión; la pasividad, por su

parte, puede venir generada por la costumbre de esperar las soluciones a los problemas desde la administración, a través de políticas públicas asistencialistas.

En estos contextos, un planteamiento inspirado a través de la Investigación Acción Participativa puede suponer: un proceso de aprendizaje colectivo y apertura a nuevos conceptos y posibilidades; un mecanismo de acercamiento y conocimiento mutuo entre personas de contextos sociales cercanos, que facilite el intercambio de realidades y el reconocimiento de problemáticas comunes. Las propuestas de la IAP que trabajan a partir de espacios de reflexión colectiva y creatividad pueden ir sentando las bases para establecer relaciones personales de confianza y de apoyo mutuo. De este modo y en estos contextos, la resolución de problemas detectados a través de estas propuestas metodológicas pueden ser motores de cambio social agroecológico.

No obstante, el proceso de aprendizaje y de creatividad social suele ser más fácil que el cambio de inercias de tipo individualista y pasivo. La percepción del entorno social y la confianza en el mismo, así como el paso de una actitud pasiva a una implicación activa en la propia realidad son cambios que requieren de procesos de medio y largo plazo que no deben plantearse con limitaciones de tiempo a corto plazo. En estos contextos, el acompañamiento técnico será una necesidad constante en el largo término. Una retirada prematura puede generar sensación de abandono, frustración y una mayor desconfianza. Los pasos que un proceso metodológico participativo deberá contemplar para superar las limitaciones iniciales deben incluir, por lo menos, los siguientes puntos:

a) Facilitar el reconocimiento mutuo de las personas con problemáticas comunes.
b) Abrir la puerta a la construcción, a partir de este reconocimiento, de relaciones de confianza y de apoyo mutuo.
c) Aumentar la seguridad y la confianza en las capacidades del grupo, para iniciar procesos de autoorganización y autogestión.
d) Desarrollar la capacidad colectiva de construir conocimientos en torno a la problemática enfrentada.
e) Incidir en la capacidad colectiva para plantear soluciones a su propia problemática, reales y adaptadas a su realidad.
f) Ampliar los marcos de referencia a través del intercambio de experiencias y procesos con otros grupos próximos en planteamientos (fomentar el desarrollo de analizadores construidos).

El mayor o menor éxito de un proceso de este tipo vendrá muy determinado por las capacidades del equipo de dinamización. A modo de catálogo de buenas prácticas para impulsar procesos de garantía participativa, la dinamización deberá tener habilidades para: a) motivar y trasmitir ilusión por el proceso; b) facilitar un ambiente ameno y afectivo en las reuniones y actividades del proceso; c) conducir grupos heterogéneos y mediar en las diferencias; d) establecer etapas y reuniones con objetivos y técnicas claros y evaluables; e) captar las motivaciones y dolores reales que mueven al grupo a verle sentido al proceso y responder a ellos de forma holística; f) mostrar una elevada capacidad de trabajo y de compromiso personal y; g) contar con ciertos conocimientos técnicos de manejo ecológico que genere confianza y mayores niveles de interacción con el grupo.

En el proceso de dinamización de este tipo de propuestas existen dos estrategias posibles: iniciarlo con grupos pequeños y muy convencidos, o bien comenzarlo con grupos más amplios con una mayor heterogeneidad de realidades e implicaciones. Las fortalezas de una estrategia responden a las debilidades de la otra y viceversa. Optar por la estrategia de empezar con un grupo pequeño facilita la construcción y la consolidación del proceso en un menor espacio de tiempo. A partir de una cierta madurez en este grupo inicial, se puede plantear la ampliación a nuevas personas, de una forma más sólida. Los riesgos de este procedimiento son diversos: a) se pierde la oportunidad de implicar a más personas en los espacios colectivos de reflexión y de intercambio generados, por lo que se reduce el impacto del proceso de aprendizaje, de transformación de imaginarios y de cambio social agroecológico en el territorio; b) la entrada de nuevas personas al grupo una vez consolidado puede generar sentimientos de implicación menores, al no haber sido partícipes de su construcción desde el principio, lo que puede generar estructuras participativas menos horizontales. En el caso de empezar los procesos con grupos más amplios y heterogéneos, encontramos la ventaja de implicar a un mayor número de personas en la reflexión colectiva y los elementos de creatividad social, generando un cambio en los imaginarios y un proceso de aprendizaje más amplio en el territorio. Esto permite que un mayor número de personas se sienta parte de la iniciativa y esto puede desembocar en unos procesos de cambio social agroecológico más amplios. Sin embargo, la conformación del grupo y la consolidación de las relaciones de solidaridad y apoyo mutuo al interno del mismo serán más lentas, requiriendo de plazos de tiempo y de esfuerzo de dinamización mayores. Esto plantea importantes dificultades para el mantenimiento de la motivación de las personas implicadas. La falta de resultados evidentes en el corto y medio plazo puede desincentivar la continuación del grupo, por cansancio o aburrimiento.

También en este apartado de conclusiones podemos establecer aquellos contextos en los que el impulso de procesos de garantía participativa puede no tener una respuesta óptima, a pesar de percibirse un malestar en relación a la certificación por tercera parte. En concreto planteamos cuatro aspectos que consideramos limitaciones importantes al desarrollo de este tipo de construcciones colectivas.

En primer lugar, la importancia socioeconómica que ocupe la actividad agraria en el territorio. Si la agricultura y la ganadería son actividades secundarias, a tiempo parcial, la implicación en procesos participativos de este tipo que se enmarcan en el ámbito agrario y su problemática será menor. En segundo lugar, experiencias previas negativas de proyectos impulsados desde administraciones o entidades locales o regionales: las sensaciones de fracaso que hayan podido quedar de proyectos anteriores suelen generar frustración y apatía frente a nuevas propuestas. En tercer lugar, una predisposición negativa generalizada a implicarse a través de tiempo y esfuerzo en procesos colectivos: si predomina la percepción de que estos procesos son esfuerzos extra que no se está dispuesto a asumir, difícilmente podremos sentar las bases necesarias para iniciar procesos de cambio social agroecológico de este tipo. En cuarto lugar, estas iniciativas serán difíciles de impulsar con personas de formación y profesión técnica que muestren desconfianza en las capacidades de las personas *no técnicas* y estén acostumbrados a procesos más dirigidos y asistidos. En este sentido, estas metodologías plantean varios retos para las personas de perfiles técnicos: a) deconstruir la percepción de superioridad de la formación técnica con respeto a personas *no técnicas*; b) valorar el aprendizaje y la

adquisición de capacidades que se facilitan a través de estos procesos, que cambian las lecciones unidireccionales por procesos de reflexión e intercambio grupales; c) asumir que el protagonismo de estos procesos debe concedérsele a las personas implicadas desde su convicción y que padecen diariamente la problemática planteada, lo que puede conllevar una cierta invisibilidad de las figuras técnicas reducidas a meras dinamizadoras y facilitadoras; d) asumir democráticamente los consensos y los acuerdos a los que se llega colectivamente.

Sobre el Objetivo específico 4.- ¿Cuáles son las características generales de los Sistemas Participativos de Garantía y las dificultades que impiden su mayor expansión o su funcionamiento óptimo?

Los Sistemas Participativos de Garantía se sustentan en estructuras sociales que varían según los contextos. Cuando mayor es el territorio abarcado por la iniciativa o cuando las personas que se implican lo hacen a través de sus estructuras propias (asociaciones de productores, asociaciones de consumidores y entidades de asesoría técnica, fundamentalmente), esto es, la experiencia es una articulación de estructuras ya existentes, el número necesario de niveles de organización de estos grupos homogéneos entre sí será mayor. Cuando los territorios son más pequeños o los diferentes perfiles implicados (productor, consumidor y técnico) se implican a través de estructuras mixtas, los niveles de articulación serán menores pero el número de estructuras paralelas con funciones diferenciadas será mayor. De cualquier manera, la complejidad en el proceso de articulación de los distintos grupos es una muestra de madurez y de consolidación de la experiencia, ya que supone una proyección hacia fuera de las estructuras de base que componen la iniciativa. En todas las experiencias, la libertad para definir los procedimientos de los niveles organizativos más próximos a las personas y sus realidades es muy amplia. De esta forma, se garantiza que la experiencia responda de forma fiel a las situaciones, problemáticas y capacidades locales. Asimismo, la toma de decisiones en los distintos niveles organizativos se basa en mecanismos horizontales y participativos.

El origen de cada una de las experiencias también define la orientación de las mismas. En este sentido, cuando surgen desde grupos productores, con apoyos técnicos, suelen enfocar la garantía como mecanismo de apoyo y articulación de los grupos. El consumo, en estas iniciativas, representa un elemento adicional pero no una condición indispensable. Por otro lado, cuando las iniciativas surgen de la articulación entre producción y consumo, con el fin de fomentar la garantía como mecanismo de interrelación entre ambos, la implicación de todos los actores es imprescindible. Sea cual sea la orientación de las experiencias, las tareas más complejas del proceso son las de coordinación y articulación de todas las estructuras. La forma de asumirlas puede venir establecida en base a: personal técnico externo de apoyo; personal contratado por la asociación para tal fin o; personas del grupo de forma voluntaria. La asunción de estas tareas a través de esta última fórmula, dados los elevados requerimientos en términos de tiempo y esfuerzo, se suelen basar en una rotación periódica de las personas responsables (esto, en las experiencias donde se da, es valorado positivamente ya que

permite una formación continuada de todos los miembros y se evita la concentración de información en pocas personas).

La base de la garantía en estos sistemas es el control social comunitario, operativizado a través de visitas anuales realizadas por las propias personas implicadas, así como de vías de expresión de denuncia y sospecha en caso de detección de prácticas, en alguno de los miembros, no acordes con las normas establecidas. Los Sistemas Participativos de Garantía basan su confiabilidad no sólo en esta operativización del control social grupal, que se realiza de forma natural y continuado en estos contextos. También se establecen diferentes filtros de garantía, a través de las diversas estructuras de articulación, que garantiza una objetividad colectiva. De esta forma, la evaluación del modo de manejo de una persona miembro la hacen las personas del grupo de visita; las personas de la estructura que el grupo establece para revisar los informes de las visitas, que son diferentes a las que los cumplimentaron; y un último nivel de articulación de los diferentes grupos, que hace de filtro final y toma la decisión definitiva.

Las sanciones asociadas a incumplimientos voluntarios de las normas establecidas implican, por supuesto, la retirada de la autorización del uso del identificativo. Sin embargo, existe otra penalización aún mayor si cabe: es la penalización de tipo social que implica la salida de la iniciativa; de esta forma, la persona que quebranta la confianza del grupo es expulsada de todos los procesos y proyectos colectivos impulsados colectivamente. En todos los casos se concibe esta acción como un nuevo punto de inicio, a partir del cual acompañar a la persona expulsada para una mejora del manejo que pueda llevar a una posible reincorporación y la recuperación de la confianza del grupo en ella. En este sentido se establecen mecanismos de apoyo y de respaldo cuando existen incumplimientos de las normas por contaminación externa, es decir, cuando no se hace de forma voluntaria. Las relaciones de solidaridad se concretan, en este caso, en la búsqueda del foco contaminante y el apoyo grupal para que no vuelva a suceder.

En la garantía participativa la burocracia no se simplifica en exceso con respecto a la certificación por tercera parte. Sin embargo es más asequible ya que: a) la llevan a cabo varias personas en los diferentes niveles, aliviando la carga individual de este trabajo y facilitando el acceso a la misma a personas menos letradas o con dificultades de entendimiento y; b) los manuales que se utilizan son elaborados por sus propios miembros, por lo que están adaptados a su lenguaje y necesidades.

Los Sistemas Participativos de Garantía, con todas sus ventajas y efectos en los territorios donde se construyen, no son una solución mágica a la certificación por tercera parte, ni pueden ser considerados como sustitutos de la misma en cualquier contexto. Esta afirmación viene sustentada por una serie de dificultades intrínsecas a ellos que ralentizan su expansión y pueden poner en peligro su funcionamiento óptimo.

La principal dificultad de estos mecanismos de garantía es que no están reconocidos a nivel legal en la mayoría de los contextos regulados, como es el de la Unión Europea. Esto hace que estas iniciativas no puedan utilizar en sus símbolos o logos las denominaciones protegidas por la ley: ecológico, biológico, orgánico y sus derivados. Por lo tanto, las personas implicadas en estas experiencias no serán reconocidas a nivel

legal como productoras ecológicas y, por lo tanto, no podrán vender en determinados circuitos ni acceder a las ayudas públicas destinadas a este sector.

Asimismo, la ampliamente extendida lógica de la superioridad técnica por encima de las capacidades y los conocimientos locales genera diferentes efectos que dificultan el funcionamiento de la garantía participativa: a) la garantía establecida en base al control social local, que prescinde de la figura intermediaria técnica, genera desconfianza en contextos muy impregnados de esta lógica tecnicista y; b) las propias personas implicadas en este tipo de procedimientos, fundamentalmente al inicio de las experiencias o de su participación en ellas, sienten inseguridad y falta de confianza en sus propias capacidades para llevar a cabo las visitas de campo y valorizar el control social continuo.

Existen otras tres dificultades, en este caso intrínsecas a los procedimientos e implicaciones en los que se basa la garantía participativa. Por un lado, los requerimientos en tiempo que exigen, que hace que no se adapte a cualquier perfil de persona, ya que requieren una fuerte convicción ideológica de trabajo colectivo; por otro lado, la dificultad de verbalizar los errores o inconformidades que otras personas miembro del grupo pueden estar cometiendo en sus manejos, lo cual requiere de valor y convencimiento en lo que se está haciendo y; c) los conflictos que se generan en torno a los conceptos en los que se basa la experiencia y la continua necesidad de consensos, procedimientos que requieren un continuo aprendizaje y esfuerzo colectivo.

Sobre el Objetivo específico 5.- ¿Qué convicciones y actitudes previas requieren los Sistemas Participativos de Garantía en las personas que se implican en ellos?

La puesta en marcha de este tipo de procedimientos es posible en contextos donde no surgen de forma espontánea, a través de metodologías que fomenten procesos sociopráxicos de reflexión y aprendizaje colectivos. De esta forma, se pueden construir nuevos imaginarios que contemplen otros procesos de garantía más allá del de tercera parte; y se pueden fomentar dinámicas que faciliten el paso de actitudes pasivas a la asunción, por parte de productores y consumidores ecológicos, de su responsabilidad y su potencial protagonismo en aquellos procesos que les atañen. Todo esto configura las transformaciones que nos hacen trasmitir la convicción de que, a través de procesos participativos y de mecanismos colectivos de garantía ecológica se pueden generar cambios sociales de tipo agroecológico.

Sin embargo, la búsqueda colectiva de soluciones a problemas comunes en torno a la producción ecológica presenta una limitación fundamental, esto es, existe un elemento que es condición *sine qua non* para que este tipo de mecanismos se puedan impulsar externamente en nuestros contextos: debe haber personas en el territorio con un imaginario agroecológico de la producción agraria y el medio rural. En efecto, la implicación de productores y consumidores ecológicos en este tipo de procesos participativos, como antesala a la participación que requiere un modelo de garantía participativa, sólo será posible en entornos donde se conciba la producción agraria

ecológica como un modo de manejo de los recursos naturales más profundo, integral y transformador que una simple sustitución de insumos de síntesis por otros naturales. Esta precondición la hemos encontrado en todos los contextos estudiados, tanto el brasileño como los europeos.

Los discursos agroecológicos en torno a la producción, comercialización y consumo de productos ecológicos no tienen por qué ir de la mano de una visión de la garantía como la subyacente en los Sistemas Participativos. Sin embargo, estos imaginarios de la producción agraria, a nivel político, socioeconómico y productivo serán el caldo de cultivo necesario para construir mecanismos de garantía de este tipo. Para ello, se debe valorar de forma endógena la legitimidad que las personas de entornos sociales compartidos tienen para establecer mecanismos de garantía propios, a través de procesos grupales, de relaciones personales y de confianza mutua. Sobre esta base será posible fomentar iniciativas donde se potencia la creatividad y la construcción de alternativas colectivas desde la realidad local concreta. Esto implica a personas (productoras, consumidoras, técnicas) que valoren su capacidad para impulsar el tejido social local, así como las relaciones solidarias y de apoyo mutuo entre producción y con el consumo; y lo establezcan por encima de las exigencias intrínsecas a los mecanismos de la garantía participativa, en términos de implicación en tiempo y esfuerzo, o de construcción colectiva de conceptos y consensos, entre otros.

Asimismo, requiere de personas convencidas de que la garantía en los productos ecológicos está estrechamente relacionada con la generación de confianza entre producción y consumo y, por lo tanto, con las relaciones de intercambio que se establecen entre ellos. Eliminar intermediarios o asumir implicaciones personales en el proceso de circulación de los productos son apuestas que se necesitan tanto para la garantía como para la comercialización. De esta forma, la garantía participativa va de la mano de una corresponsabilidad entre la familia productora y la consumidora y de mecanismos de intercambio directos y, por lo tanto, requerirá de personas convencidas y dispuestas a construir alternativas de este tipo.

En contextos con visiones agroecológicas del manejo de los recursos naturales, los Sistemas Participativos de Garantía serán motores de impulso de cambio social, en aspectos fundamentalmente socioeconómicos y políticos, ya que: promueven la organización del tejido social local; posibilitan ingresos estables a las familias productoras; favorecen relaciones de corresponsabilidad con el consumo local; potencia procesos endógenos de organización y; fomenta la autonomía y la autogestión en el medio rural agrario. Sin embargo, en contextos donde no haya esta visión de la producción ecológica de base, difícilmente se podrán impulsar procesos de garantía participativa, ni tan siquiera a través de metodologías profundamente participativas y transformadoras.

Sobre el Objetivo específico 6.- ¿Qué opciones de reconocimiento tienen los Sistemas Participativos de Garantía en la Unión Europea?

Los Sistemas Participativos de Garantía están completamente excluidos como mecanismos de confiabilidad en el contexto de la Unión Europea. En el nuevo Reglamento, que entrará en vigor en enero de 2009, no se han recogido las numerosas demandas de una certificación alternativa que responda a la problemática específica de las pequeñas producciones. La tendencia marcada por este nuevo Reglamento incide aún más en la lógica del examen técnico por auditoría, profundizando en la concepción de la agricultura ecológica como una rama de la industria. De esta forma, interpreta la confianza en los productos ecológicos en base al control de los riesgos de contaminaciones. Cada vez queda más lejos del Reglamento oficial las visiones agroecológicas, integrales y profundas, en las que la producción ecológica es un modo de concebir las relaciones entre la actividad humana y el ecosistema.

En este contexto, los procesos de tipo agroecológico suponen en numerosas ocasiones una ruptura con el marco de legalidad establecido, al encontrarse con regulaciones totalmente excluyentes de visiones o propuestas que no se adapten al proceso industrializador de la agricultura. Un caso evidente es la garantía a través de mecanismos participativos. Las opciones que se presentan dentro de esta legalidad son dos: salirse del marco institucionalmente establecido y actuar de forma alegal, es decir, evitando incumplir la legislación vigente pero construyendo aquellas alternativas que generan procesos de cambio social agroecológico o, bien; tratar de influir en la política pública para que incorpore en sus lógicas y, por lo tanto, en sus legislaciones, otras alternativas excluidas hasta el momento. Es evidente que ambas estrategias no son opuestas sino, muy al contrario, de una complementariedad muy interesante.

En el caso de la garantía, los grupos que plantean Sistemas Participativos de Garantía en la Unión Europea tienen dos opciones para mantenerse dentro de la legalidad: a) establecer una *marca o distintivo* diferente al establecido para la producción ecológica, sin utilizar ninguna de las menciones protegidas por la legislación (ecológico, biológico, orgánico y derivados); b) adaptar su funcionamiento al requisito indispensable de que en todas las visitas de *inspección* esté presente una figura técnica contratada por una entidad de certificación acreditada para ello y obtener de este modo un sello legalmente reconocido.

La primera opción, la de una marca propia, supone renunciar a los apoyos públicos destinados a la producción ecológica y a determinados canales de comercialización especializados y; centrarse en mercados cercanos donde la difusión de la marca sea posible. La segunda opción, la de tratar de adaptarse a los requerimientos básicos de la legislación vigente, implica adaptar el mecanismo de garantía establecido de manera que cada control de los grupos de visita vaya acompañado por un técnico acreditado para ello.

Para que la segunda opción no suponga un grave perjuicio a los grupos productores, los costes de esta adaptación no deberían recaer sobre ellos, sino contar con el apoyo de las administraciones públicas regionales que quieran apoyar estas iniciativas. Es decir, requiere de un compromiso y una convicción política en apoyar la pequeña agricultura familiar y los procesos de cambio social de tipo agroecológico. La traducción directa de estos compromisos supondría que la administración en cuestión asumiera los costes derivados de la presencia de esta figura técnica en la visita y; que el papel asignado a esta figura fuese el de responsable de adaptar los procedimientos del Sistema Participativo de Garantía a la legislación vigente. De esta manera, los grupos no tendrían que asumir ni los costes ni la burocracia derivada de esta adaptación como premio, podríamos considerar, a su capacidad de implicación y de participación en un mecanismo colectivo de ventajas sociales importantes como las descritas.

9. BIBLIOGRAFÍA

ACAAE (2005): **Documento de reflexión: En defensa de la agricultura ecológica**. Andalucía. www.caae.es (fecha de consulta: 10 de junio de 2005)

Aguilera Klink, F. (1990): "El fin de la tragedia de los comunes". En **Ecología Política, cuadernos de debate internacional**, nº 3; pp. 137 – 146.

Aguilera Klink, F. (ed.) (1995): **Economía de los Recursos Naturales: un enfoque institucional. Textos de S.V. Ciriacy-Wantrup y K.W. Kapp.** Madrid: Fund. Argentaria/Visor distribuciones. Madrid.

Aguilera Klink, F. (2001): "La economía ecológica como ejemplo de la perspectiva institucional de la economía de los recursos naturales". En Labrador Moreno, J. y Altieri, M.A. (coords) (2001): pp. 449 – 466.

Aguilera Klink, F. (2003): "Gestión autoritaria vs gestión democrática del agua". En **Archipiélago**, nº 57; pp. 34 – 42.

Aguilera Klink, F. y Alcántara, V. (1994): **De la Economía ambiental a la Economía ecológica**. Ed. Icaria – Fuhem. Barcelona.

Aguilera Klink, F. y Sánchez Padrón, M. (2002): **Los mercados de agua en Tenerife.** Ed. Bakeaz. Bilbao

Almeida Aguiar, M.V. (2007): **El aporte del conocimiento local para el desarrollo rural: un estudio de caso sobre el uso de la biodiversidad en dos comunidades campesinas tradicionales del estado de mato grosso – Brasil**. Tesis doctoral del Programa de Doctorado en Agroecología, Sociología y Desarrollo Rural Sostenible, del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos. Universidad de Córdoba. España

Alonso Mielgo y Sevilla Guzmán, E. (1995): "El discurso ecotecnocrático de la sostenibilidad". En: Cárdenas Marín, A. (ed.) (1995): pp. 91 – 119.

Altieri, M.A (1987): **Agroecología. Bases científicas de la Agricultura Alternativa**. CETAL, Valparaíso.

Altieri, M.A. (1992): "Agroecology and rural development in Latin America". En Altieri, M.A. y Hecht, S. (1992).

Altieri, M.A. (1999): **Agroecología, bases científicas para una agricultura sustentable**. Ed. Nordam Comunidad. Montevideo.

Altieri, M.A. y Hecht, S. (1992): **Agroecology and small farm development**. CRC Press.

Altieri, M.A. y Nichols, C.I. (2002): "Agroecología: principios y estrategias para diseñar sistemas agrarios sustentables". En Varios (2002): pp. 25 – 32.

Altieri, M.A. y Nichols, C.I. (2007): **Biodiversidad y manejo de plagas en agroecosistemas**. Editorial Icaria. Barcelona.

Bachelard, G. (1987): **La formación del espíritu científico. Contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo**. Siglo XXI, Buenos Aires.

Balcázar Fabricio E. (2003): "Investigación acción participativa (IAP): aspectos conceptuales y dificultades de implementación". En: **Fundamentos en humanidades.** Año IV - N° I/II Nº. 7-8, pags. 59-77.

Basagoiti, M., Bru, P. y Lorenzana, C. (2001): **IAP de bolsillo**. http://www.acsur.org/acsur/destacamos/tomamos/documentos/IAP%20Bolsillo.pdf (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2008).

Beck, U. (1992): **La sociedad del riesgo**. Editorial Paidos. Estado español.

Beck, U. (1998): **¿Qué es la globalización?** Ed. Paidós. Barcelona

Beltrán Villalva, M. (2003): "Funcionalismo, estructuralismo, teoría de sistemas". En Giner, S. (ed) (2003): pp. 75 – 93.

Bermejo Asensio, L.A., Lobillo Eguíbar, J. y Molina Afonso, C. (2003): "Aportes del D.R.P. (Diagnóstico Rural Participativo) a las metodologías participativas y aplicación a la gestión de los recursos naturales en la Gomera". En Encina, J., Ávila, M.A., Fernández, M. y Rosa, M. (coords.) (2003): pp. 71 – 88.

Berthoud, G. (1995): "Market". En Sachs, W. (ed.) (1995) : pp. 70 – 87.

Boada, M. y Toledo, V. (2003): **El planeta, nuestro cuerpo. La ecología, el ambientalismo y la crisis de la modernidad**. Colección La Ciencia para todos, 194. Ed. Fondo de Cultura Económica. México.

Boltanski, L. y Thévenot, L. (1987) : **Lés economies de la grandeur**. Cahiers du Centre d'Études de l'emploi, Paris, PUF, n. 31.

Bové, J. (2003): « En finir avec l'idéologie du progrès ». En Pérez Vitoria, S. (coord.) (2003) : pp. 19 – 24.

Brandao, C. R. (org.) (1988): **Pesquisa Participante**. São Paulo: Ed. Brasiliense.

Briz, J., de Felipe, I., Grande, I., Al-Hajj, M. Y Briz, T. (2004): "La cadena de valor de los productos ecológicos". En Briz, J. (coord.) (2004): pp. 73 – 163.

Briz, J. (coord.) (2004): **Agricultura ecológica y alimentación. Análisis y funcionamiento de la cadena comercial de productos ecológicos**. Fundación Alfonso Martín Escudero. Ed. Mundi Prensa, Madrid.

Brudtland, G.H. (1987): **Nuestro Futuro Común**. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD). Alianza Editorial.

Buttel, F. H. (1990) "Social Relations and Growth of Modern Agriculture". En Carroll, R.; Vandermeer, J. y Rosset, P. (eds) (1990): pp.113-145.

CAAE (2005): **Proceso de Certificación. Anexo I: Grupos**. Manual de campo.

CAAE (2006): **Documento de reflexión: En defensa de la agricultura ecológica**. Andalucía. www.caae.es (fecha de consulta: junio 2006)

Cadenas Marín, A. (ed.) (1995): **Agricultura y Desarrollo Sostenible**. MAPA, Serie Estudios, Madrid.

Calle, A. (2005): **Nuevos movimientos globales. Hacia la radicalidad democrática.** Editorial Popular. Madrid

Cantó, M.T. (2002): "La seguridad en los alimentos ecológicos y mecanismos de control". En Varios (2002): pp. 1457 – 1466.

Canuto, J.C. (1998): **Agricultura Ecológica en Brasil. Perspectivas Socioecológicas.** Tesis de Doctorado del Programa de Agroecología, Campesinado e Historia, del Instituto de Sociología y estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba. España.

Caporal, F. (1998): **La extensión agraria del sector público ante los desafíos del desarrollo sostenible: el caso de Rio Grande do Sul, Brasil.** Tesis de Doctorado del Programa de Agroecología, Campesinado e Historia, del Instituto de Sociología y estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba. España.

Caporal, F. R. y Costabeber, J. A. (2002): **Agroecologia: Enfoque científico e estratégico para apoiar o desenvolvimento rural sustentável**. Porto Alegre. EMATER/RS-ASCAR.

Capra, F. (1998): **La trama de la vida**. Anagrama, Barcelona.

Carroll, R.; Vandermeer, J.H. y Rosset P. (eds) (1990): **Agroecology.** McGraw-Hill. Nueva York.

Carson, R. (2001): **La primavera silenciosa**. Ed. Crítica. Barcelona. (1ª edición 1960).

Castells, M. (1997): **La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Volumen I - La Sociedad Red.** Alianza Editorial. Madrid (versión original en inglés, del año 1996).

Clive A. Edwards et J. (eds.) (1990): **Sustainable Agricultural Systems. Soil and Water Conservation Society**. Ankey, Iowa.

COAG, Greenpeace y Amigos de la Tierra (2005): **Propuesta de Bases para Producción y Alimentación Ecológicas en España**. Documento inédito.

Coase, R.H. (1994): "El problema del coste social". En Aguilera Klink, F. y Alcántara, V. (1994): 65 – 124 (este texto fue originalmente publicado en The Journal of Law and economics, nº 3, en octubre de 1960; y posteriormente en Hacienda Pública Española, nº 68, en 1981).

Coase, R. (1998): "The new institutional Economics". En **American Economic Review**. Papers and Proceedings; mayo; pp. 72 – 74.

Comisión Europea (2005): **Organic Farming in the European Union. Facts and Figures.** Dirección General de análisis económicos y evaluación; Dirección general de Agricultura y Desarrollo Rural. http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/facts_en.pdf (fecha de consulta: 27 marzo 2006).

Commins, K. (2004): **Overview of current status of standards and conformity assessment systems**. UNCTAD/FAO/IFOAM, Génova, Suiza.

Coraggio, J.L. (2007): "Necesidad y posibilidades de otra Economía". En **América Latina en Movimiento: La Economía Social y Solidaria**, n. 430 (marzo). Coeditada por RILESS. http://alainet.org/publica/430.html (fecha de consulta: 1 de abril de 2008).

Cornu, L. (2002): "Responsabilidad, experiencia, confianza". En Frigerio, G. (coord.) (2002): pp. 43 – 83.

Cornelia Butler, F. (1992): "The social and cultural Dynamics of traditional Agricultural Communities". En Altieri, M.A. y Hecht, S. (1992).

Costa, J. (1898): **Colectivismo agrario en España**. Madrid.

Costabeber, J.A. (1998): **Acción colectiva y procesos de transición agroecológica en Rio Grande do Sul, Brasil**. Tesis doctoral Programa de Doctorado "Agroecología, Campesinado e Historia" del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC). Universidad de Córdoba, España.

de Maillard, J. (2003): « La mondialisation criminelle ». En Pérez Vitoria, S. (coord.) (2003) : pp. 83 - 89

Defourny, J. (1993): "Vers une économie politique des associations". Working paper de CIRIEC-International, nº 1. Lieja. Bélgica.

Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (coords) (1999): **Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias Sociales**. Editorial Síntesis. Madrid.

Dent, J.B. y McGregor, M.J. (eds) (1994): Rural and Farming Systems Analysis. European Perspectives. CAB International. Wallingford.

Dirección General de Agricultura Ecológica (2005a): **Estudio de diagnóstico del sector de piensos ecológicos en Andalucía**. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/com/bin/portal/DGAEcologica/piensos99/introduccion.pdf (fecha de consulta: 14 de septiembre de 2008)

Dirección General de Agricultura Ecológica (2005b): Borrador: **Documento de conclusiones de la Jornada de Reflexión sobre la Modificación del Reglamento Europeo de la Agricultura Ecológica**. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía (documento inédito facilitado por la DGAE).

Dirección General de análisis económicos y evaluación (2005): **Organic Farming in the European Union. Facts and Figures**. Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural. Comisión Europea. http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/facts_en.pdf (fecha de consulta: 27 marzo 2006)

Encina, J., Ávila, M.A., Fernández, M. y Rosa, M. (coords.) (2003): **Praxis participativas desde el medio rural**. Colección Contruyendo ciudadanía/6. IEPALA Editorial, CIMAS. Madrid, 2003.

Escobar, A. (1992): "Planning". En Sachs (ed.) (1992): pp. 132 – 145.

Escobar, A. (1996): **La invención del tercer mundo. Construcción y reconstrucción del desarrollo**. Colección Vitral, grupo editorial Norma, Colombia.

Esteva, G. (1992): "Development". En Sachs, W. (ed.) (1992): pp. 6 – 25.

Facciano, L.A. (ed.) (2001): **III Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas de Derecho Agrario**. Colegio de Abogados de Rosario, Instituto de Derecho Agrario. Rosario.

Faeth, P. (1993): "An economic framework for evalkuating agricultural policy and the sustainability of production systems". En **Agriculture, Ecosystems and Environment**, n. 46; pp. 161-174.

Fals Borda, O. (1988): "Aspectos Teóricos da Pesquisa Participante: considerações sobre o significado e o papel da ciência na participação popular". En Brandao, C. R. (org.) (1988): pp. 42-62. El mismo texto, revisado, fue publicado en Salazar, M. C. (ed.) (1992): pp. 65-84.

Fals Borda, O. (1993): "Investigación - Acción Participativa". En **Documentación Social** nº 92. Madrid.

FAO (2003): **Normes environnementales et sociales, certification et labellisation des cultures commerciales**. Naciones Unidas. ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5136f/y5136f00.pdf (mayo 2005).

FAO / WHO (2000): **Codex Alimentarius. Food import and export inspection and certification systems combined texts**. Roma.

Farnworth, C.R. (2004): **Creating Quality Relationships in the Organic Producers to Consumer Chain: From Madagascar to Germany**. Doctoral dissertation, Swedish University of Agricultural Sciences, Suecia.

Fédération Nature & Progrès (2006) : **Systèmes de Contrôle Interne Participatif .** Documento interno de trabajo.

Fernández, J. (1999): **El ecologismo español**. Ecología, Alianza Editorial.

Fischer-Kowalski, M. (1997): "Society's metabolism: on the childhood and adolescence of a rising conceptual star". En Redclift, M. Y Woodgate, G. (1997): pp. 119 – 137. Versión en castellano: pp. 119 – 142.

Fraisse, L., Ortiz, H.; Boulianne, Manon (coords.) (2002): "Economía Solidaria". En **Cuadernos de Propuestas para el s. XXI**, octubre. Ed. Alianza 21.

Freire, P. (1977): **Educação como prática de liberdade.** Paz e Terra. Rio de Janeiro. Brasil.

Friedland, W. et al. (eds) (1991): **Towards a New Political Economy of Agriculture**. Westview Press; Bolder, Colorado, pp. 3-18.

Friedmann, H. (1982): "The Political Economy of Food: The Rise and Fall of the Postwar International Food Order". En **American Journal of Sociology** v.88 (suppl.) p. 348-286.

Friedmann, H. (1991): "Changes in the International Division of Labor: Agri-food complexes and Export Agriculture". En Friedland, W. et al. (eds) (1991): pp. 3-18.

Friedmann, H. y McMichael, P. (1989): "Agriculture and the State System. The rise and decline of national agricultures, 1870 to the present". En **Sociologia Ruralis,** vol. 29-2; pp. 93-117.

Frigerio, G. (coord.) (2002): **Educar: rasgos filosóficos para una identidad**. Ed. Santillana. Buenos Aires.

Fonseca, M.F. (2005): **A Institucionalização do Mercado de Orgânicos no Mundo e no Brasil: uma interpretação**. Tesis de Doctorado en Sociología, Área de Concentración en Desarrollo y Agricultura. Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro, Brasil.

Font, X. y Harris, C. (2004): “Rethinking standards from green to sustainable”. En **Annals of tourism research**. V. 31; nº 4, octubre: pp. 986-1007.

Funtowicz, S. y Ravetz, J. (1993): **La ciencia posnormal. Ciencia con la gente**. Centro editor de América Latina. Buenos Aires. Edición en el Estado español: Funtowicz, S. y Ravetz, J. (2000): **La ciencia posnormal. Ciencia con la gente**. Ed. Icaria. Barcelona.

Gaiger, L.I. (2005): “La solidaridad como una alternativa económica para los pobres”. En **CIRIEC** – España, nº 31; pp 187 – 205. Junio, 2005; pp. 187-205.

Galante Feliconio, A.E. (2002): **Certificaçao de sistemas de produçao nao convencionais: da Agricultura Orgánica à Agroecologia**. Tesis de Maestría en Desarrollo, Agricultura y Sociedad. CPDA, UFRRJ. Rio de Janeiro.

Galeski, B. (1977): **Sociología del campesinado**. Ed. Península, Barcelona.

Gambetta, D. (ed.) (2000): **Trust: Making and breaking cooperative relations.** Department of Sociology, University of Oxford.

García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.) (1998): **El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación.** Ed. Alianza Universidad. Madrid.

García Ferrando, M. y Sanmartín, R. (1998): “La observación científica y la obtención de datos sociológicos”. En García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.) (1998): pp. 115 – 146.

Garrido Peña, F. (comp.) (1993): **Introducción a la Ecología Política**. Colección Ecorama; editorial Comares. Granada.

Garrido Peña, F. (1996): **La Ecología Política como política del tiempo**. Comares, Granada. 1996.

Garrido Peña, F.; González de Molina, M.; Serrano, J.L. y Solana, J.L. (eds) (2007): **El paradigma ecológico en las ciencias sociales**. Ed. Icaria. Barcelona.

Giner, S. (coord.) (1993): **Teoría sociológica moderna**. Editorial Ariel. Barcelona.

Glaser, B.G. y Strauss, A.L. (1967): **The discovery of grounded theory**. Aldine. Chicago.

Gliessman, S.R. (ed.) (1978): **Seminarios regionales sobre Agroecosistemas con énfasis en el estudio de tecnología agrícola tradicional**. Ed. C.S.A.T. H. Cárdenas. Tabasco; México.

Gliessman, S.R. (1990a): **Agroecology, Researching the Ecological Basis for Sustainable Agriculture**. Springer-Verlag, Londres.

Gliessman, S.R. (1990b): “Understanding the basis of Sustainability for Agriculture in the Tropics: experiences in Latin America”. En: Clive A. Edwards et J. (eds.) (1990).

Gliessman, S. (2001): **Agroecosystem sustainability. Developing practical strategies**. CRC Press. Londres.

Gliessman, S. (2002): **Agroecología. Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible**. C.R. CATIE; Turrialba, Costa Rica.

Gómez Benito, C. y Ortí Benlloch, A. (1996): **Estudio crítico, reconstrucción y sistematización del corpus agrario de Joaquín Costa**. Ediciones La Val de Onsera. Huesca.

González Alcantud, J.A. y González de Molina, M. (eds.) (1991): **La tierra. Mitos, ritos y realidades**. Ed. Anthropodos, Barcelona y Diputación Provincial de Granada.

González de Molina, M. (1991): “Agrocología. Bases teóricas para una historia agraria alternativa”. En: **Historia Agraria**, nº 2. 1991.

González de Molina, M. (1993a): “La funcionalidad de los poderes locales en una economía orgánica”. En: **Noticiario de Historia Agraria**, nº 6.

González de Molina, M. (1993b): **Historia y medio ambiente**. Eudema, Madrid.

González de Molina, M. y Glez. Alcantud, J.A. (1991): “La pervivencia de los bienes comunales: representación mental y realidad social. Algunas aportaciones al debate sobre la *tragedia de los comunales*”. En Glez. Alcantud, J.A. y Glez. de Molina, M. (eds.) (1991): pp. 251 – 294.

González de Molina, M. y Guzmán Casado, G. (2006): **Tras los pasos de la insustentabilidad. Agricultura y medio ambiente en perspectiva histórica (s. XVIII – XX)**. Ed. Icaria. Barcelona.

Gonzálvez Pérez, V. (2002): “La revisión de la normativa básica en IFOAM: Un ejemplo de integración del sector. Referencia a la última revisión de Victoria (Canadá)”. En Varios (2002): pp. 1439 – 1446.

Good, D. (2000): “Individuals, interpersonal relations, and trust”. En Gambetta, D., (ed.) (2000): pp. 31–48.

Goodman, D. y Redclift, M. (1991): **Refashioning Nature.** Routledge. Londres.

Granovetter, M. (1985): “Economic Action and Social Structure: The problem of embeddedness”. En **American Journal of Sociology**. Volume 91, número 3, pp. 481-510.

Gronemeyer, M. (1992): “Helping”. En Sachs, W. (ed.) (1992): pp. 53 – 69.

Guerra, P. (coord.) (2007): "¿Cómo denominar a las experiencias económicas solidarias basadas en el trabajo? Diálogo entre académicos latinoamericanos acerca de la polémica conceptual". En **Otra Economía, Revista Latinoamericana de Economía Social y Solidaria**, Vol 1, Nº 1, 2007. http://www.riless.org/otraeconomia (fecha de consulta: 1 de abril de 2008).

Guha, R. y Martínez Alier, J. (1997): **Varieties of environmentalism : essays North and South.** Earthscan Publications. Londres.

Guzmán Casado, G.; Alonso Mielgo, A.; Pouliquen, X. y Sevilla Guzmán, E. (1996): "Las metodologías paricipativas de investigación: un aporte al desarrollo local endógeno". En Varios (1996).

Guzmán Casado, G., González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E. (2000): **Introducción a la Agroecología como desarrollo rural sostenible**. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.

Haan, H. de y Ploeg, J.D. van der (eds) (1991): **Endogenous regionl development in europe. Theory, method and practice**. Proceedings of a seminar held in Vila Real (Portugal), noviembre. Dirección General VI de la Comisión Europea. Bruselas.

Hardin, G. (1968): "The Tragedy of the Commons". En **Science**, v. 162; pp. 1243 – 1248.

Hayek, F.A. (1992): **Obras completas de F.A. Hayek. Volumen IV. Las visicitudes del liberalismo**. Unión editorial. Madrid.

Hecht, S. (1999): "La evolución del pensamiento agroecológico". En Altieri, M.A. (1999): pp. 1 – 14.

Henderson, E. (1999): **Sharing the Harvest: A Guide to Community Supported Agriculture.** Chelsea Green Publishing Company, White River Junction, VT. http://www.biodynamics.com/csa.html (fecha de consulta: 27 de octubre de 2008).

Hicks, J. (1979): **Causality in Economics**. Basil Blackwell. Oxford.

Ibáñez, Jesús (1985a): "Análisis Sociológico de Textos y Discursos". **Revista Internacional de Sociología**. Madrid

--- (1985b): **Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigación social**. Madrid Siglo XXI.

--- (1998): "Perspectivas de la investigación social: el diseño en las tres perspectivas". En García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.) (1998). Pp. 51 – 86.

IFOAM (2003): **IFOAM's position on small holder group certification for organic production and processing**.

www.ifoam.org/press/positions/pdfs/Small_holder_group_certification.pdf (fecha de consulta: noviembre 2005).

IFOAM (2004): **Posición sobre la diversidad completa de la agricultura orgánica. Lo que llamamos orgánico.** http://www.ifoam.org/press/positions/pdfs/full_diverstiy_organic_agriculture_spanish.pdf (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2008)

IFOAM (2007): **Sistemas de Garantía Participativos. Visión compartida, ideales compartidos.** http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/IFOAM_PGS_Spanish_web.pdf (fecha de consulta: 15 de enero de 2008)

Illich, I. (2003): « Le développement ou la corruption de l'harmonie en valeur ». En Pérez Vitoria, S. (coord.) (2003) : pp. 9 – 15

Junta de Andalucía (2005): **La agricultura ecológica en Andalucía, Balance 2005.** Consejería de Agricultura y Pesca. Dirección General de Agricultura Ecológica. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/PDF_Directos/balance_agricultura_ecologica_2005.pdf (fecha de consulta: 27 marzo 2006)

Junta de Andalucía (2007a): **Plan de Fomento de la Agricultura Ecológica, para el periodo 2007 – 2013**. Consejería de Agricultura y Pesca. Dirección General de Agricultura Ecológica. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/PDF_Directos/libro_plan_ae.pdf (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2008)

--- (2007b): **Programa de Desarrollo Rural para Andalucía. Periodo 2007 – 2013**. Consejería de Agricultura y Pesca. Dirección General de Desarrollo Rural. http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/com/bin/portal/DGDesRural/programa_20072013/PDRAndalucia_actualiz_19febrero.pdf?entrada=tematica&tematica=192 (fecha de consulta: 14 de septiembre de 2008)

Khosla, R. (2006): **A Participatory Organic Guarantee System for India. Final Report.** FAO – IFOAM. http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/PGS%20for%20India%20_Final%20Report.pdf (fecha de consulta: 7 de octubre de 2008)

Kuhn, T. (1971): **La estructura de las revoluciones científicas**. Fondo de Cultura Económica, Méjico – Madrid – Buenos Aires. Edición de 1982.

Labrador Moreno, J. y Altieri, M.A. (coords) (2001): **Agroecología y Desarrollo. Aproximación a los fundamentos agroecológicos para la gestión sustentable de agrosistemas mediterráneos**. Universidad de Extremadura. Ed. Mundi Prensa. Cáceres – Madrid.

Labrador, J. y Sarandón, S. (2001): "Aproximación a las bases del pensamiento Agroecológico" en Labrador, J. y Altieri, M.A. (coords) (2001): pp. 21 – 48.

Laraña, I. (1996): "Economía alternativa en el sistema capitalista". En **Revista de Fomento Social**, nº 51; pp 319 – 340.

Leff, E. (coord.) (2000): **Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo**. Siglo XXI editores, México. Segunda edición revisada (primera edición de 1986).

Leff, E. (2002a): **Epistemología ambiental**. Cortez Editora, San Pablo. Brasil.

Leff, E. (2002b): **Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder**. Siglo XXI, PNUMA, México.

Leff E. (2004): **Racionalidad ambiental: la reapropiación social de la naturaleza**. 1ª edición. Siglo XXI. México.

Lemkow, L. Y Buttel, F. (1983): **Los movimientos ecologistas**. Editorial Mezquita. Madrid.

Lernoud, A.P. y Fonseca, F. (2004): **Taller de Certificación Alternativa para la Producción Orgánica**. Informe Final. Torres-RS-Brasil: IFOAM/MAELA.

Lisboa, A.M. (2001): "Os desafios da Economia Solidaria". Mimeo; traducción castellana en http://tacuru.ourproject.org/documentos/desafios.pdf (fecha de consulta: 24 de noviembre de 2008).

Lowe, P.; Marsden, T.; Whatmore, S. (coords) (1993): **Cambio tecnológico y medio ambiente rural (procesos y reestructuraciones rurales)**. Madrid, MAPA.

MAPyA (2002): **Estadísticas 2001. Agricultura Ecológica. España**. Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2001.pdf (fecha de consulta: 29 marzo 2006).

--- (2005a): **Estadísticas 2004. Agricultura Ecológica. España**. Ministerio Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2004.pdf (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008).

MAPyA (2005b): **Jornadas de Reflexión y Debate sobre la Agricultura Ecológica en España. Conclusiones finales**. Madrid, 2005. http://www.mapya.es/alimentacion/pags/encuesta/jornadas_2005.pdf (fecha de consulta: noviembre 2005).

--- (2006): **Estadísticas 2005. Agricultura Ecológica. España.** Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2005.pdf. (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008).

Marsal, J.F. (1977): **La crisis de la sociología norteamericana**. Ediciones Península. Barcelona.

Martínez Alier, J. (1987): **Ecological Economics. Energy, Environment and Society.** Basil Blackwell. Reino Unido.

Martínez Alier, J. (1998): **La economía ecológica como ecología humana.** Fundación César Manrique. Madrid.

Martínez Alier, J. (2005): **El ecologismo de los pobres.** Ed. Icaria. Barcelona.

Martínez Alier, J. y Roca Jusmet, J. (2000): **Economía ecológica y Política ambiental.** Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Fondo de Cultura Económica. México.

Masera, O.; Astier, M. y López-Ridaura, S. (2000): "El marco de evaluación MESMIS". En Masera, O. y López-Ridaura, S. (eds) (2000): pp. 13 – 44.

Masera, O. y López-Ridaura, S. (eds) (2000): **Sustentabilidad y sistemas campesinos**. Ed. Mundi – Prensa. México.

Medaets, J.P. (2003): **A construção da qualidade na produção agrícola familiar: sistemas de certificação de produtos orgânicos.** Tesis de Doctorado del Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília Brasília; programa de Doctorado de Desenvolvimento Sustentável, área de concentração Política e Gestão Ambiental.

Meirelles, L. (1997): Produçao e comercializaçao de Hortalizas Orgânicas. En **Horticultura Brasileira**. V. 15; pp. 210 – 215. Brasilia

Meirelles, L. (2002): "Certificación horizontal". En: Valdez, H. (Coord.) (2002): pp. 109.

Meirelles, L. (2004): "La Certificación de Productos Orgánicos, caminos y descaminos". En **Semillas en la Economía Campesina**, nº 21, Abril. http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=e-b-30353-30353&x=20154625 (fecha de consulta: 15 de noviembre de 2008).

Mol, A. (1997): "Ecological modernization: insdustrial transformations and environmental reform". En Redclift, M. y Woodgate, G. (1997): pp. 138 - 149. Versión en castellano: Mol, A. (2002): "Modernización ecológica: transformaciones industriales y reforma medioambiental". En Redclift, M. y Woodgate, G. (2002): pp. 143 – 156.

Molina Casino, M.A. y Pérez Sarmentero, J. (2004): "La agricultura ecológica en España". En Briz, J. (coord.) (2004): pp- 7 – 71.

Naredo, J. M. (1987): **La Economía en Evolución: Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento económico.** Siglo XXI. Madrid.

Naredo, J. M. (1994): "Fundamentos de la Economía Ecológica". En Aguilera Klink, F. y Alcántara, V. (1994): pp. 373 – 404.

Naredo, J. M. (2006): **Raíces económicas del deterioro ecológico y social: más allá de los dogmas**. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid.

Naredo, J. M. y Campos, P. (1980): "Los balances energéticos de la agricultura española". En **Agricultura y Sociedad**, nº 15. Ministerio de Agricultura. Madrid.

Nelson P. (1970): "Information and Consumer Behaviour". En Journal of Political Economy, nº 78 (2): pp. 311-329.

Noorgard, R.B. (1994): **Developent detrayed. The end of development and a coevolutionary revisionary of the future**. Routlegd. Londres.

Noorgard, R.B. (2002): "Una sociología del medio ambiente coevolucionista". En Redclift, M. y Woodgate, G. (eds) (2002): pp. 167 – 178. Versión en inglés: Redclift, M. y Woodgate, G. (coord) (1997): pp. 158 – 168.

Noorgard, R.B. y Sikor, T. (1999): "Metodología y práctica de la Agroecología". En Altieri, M.A. (1999).

Odum, E.P. (1969): "The strategy of ecosystems development". En **Science**, nº 164; pp. 262 – 270.

Oltra, B.; Garrigós, J.I.; Mantecón, A. y Oltra Algado, C. (2004): **Sociedad, vida y teoría. La Teoría Sociológica desde una perspectiva de Sociología narrativa**. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid.

Ortí, A. (1998): "La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista abierta semidirectiva y la discusión de grupo". En García Ferrando, M., Ibáñez, J. y Alvira, F. (comp.) (1998): pp. 189 – 222.

Ortí, A. (1999): "La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia de la investigación social". En Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (coords) (1999): pp. 87 – 99.

Ottmann, G. (2005): **Agroecología y Sociología histórica desde Latinoamérica: elementos para el análisis y potenciación del movimiento agroecológico: el caso de la provincia argentina de santa Fe**. Servicio de publicaciones. Universidad de Córdoba.

Ottmann G. y Sevilla, E. (2004): "Las dimensiones de la Agroecología". En Varios: **Manual de Olivicultura Ecológica**. Instituto de Sociología y Agricultura Ecológica. Universidad de Córdoba. 2004

Palerm, A. (1976): **Historia de la etnología: los evolucionistas**. Centro de Investigaciones Superiores, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México.

Park, P. (1992): "Qué es la IAP. Perspectivas teóricas y metodológicas". En Salazar, M.C. (1992): pp. 134 – 174.

Partant, F. (2007): **La ligne d'horizon**. **Essai sur l'après-développement**. Ed. La Découverte. Paris (primera edición: 1988).

Pauli, J. (2006): **O Poder nas Redes de Economia Solidária**. Tesis de Maestría del Programa de Posgrado en Sociología. Instituto de Filosofia y Ciencias Humanas, Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

Paulus, G. (1998): **Do padrao moderno a agricultura alternativa. Possibilidades de transiçao**. Tesis de Maestría, Universidad Federal de Santa Catarina. Florianópolis.

Pérez Agote, A. (1979): **Medio ambiente e ideología en el capitalismo avanzado**. Encuentro ediciones.

Pérez Neira, D. y Vázquez Meréns, D. (2008): **Alternativas ao Sistema Agroalimentario (capitalista) dende a produción-consumo: experiencias en Andalucía.** Comunicación presentada al II Congreso de Agroecoloxía e Agricultura Ecolóxica, celebrado del 2 al 4 de mayo de 2008. Monforte de Lemos, Galicia.

Pérez Rubio, J.A. (1995): **Yunteros, braceros y colonos en Extremadura (1940-1975).** Ministerio de Agricultura. Madrid.

Pérez-Vitoria, S. (coord.) (2003): **Défaire le développement, refaire le monde** . Ed. Parangon. Francia

Pérez-Vitoria, S. (2005) **Les paysans sont de retour.** Actes Sud. Francia.

Perry, J. (1998): "Small farms in the US". En **Agricultural Outlook**.

Picazos, J. (2002): "Comercialización de productos biológicos. Iniciativas sobre una normativa del Sur para un consumo local y regional". En Varios (2002): 73 – 77.

Pimentel, D. Y Pimentel, M. (1979): **Food, Energy and Society**. Ed. Edwar Arnold, Londres.

Ploeg, J. D. van der (1993): "El proceso de trabajo agrícola y la mercantilización". En Sevilla Guzmán, E. y González de Molina, M. (1993). **Ecología, campesinado e historia.** Madrid: La Piqueta. pp. 153-196.

Ploeg, J. D. van der (1994). "Styles of farming: an introductory note on concepts and Methodology". En Ploeg, J. D. van der y Long, A. (eds.). (1994). Pp. 7-30.

Ploeg, J. D. van der (2008). **The new peasantries. Struggles for autonomy and sustainability in an era of empire and globalization.** Earthscan, Reino Unido.

Ploeg, J. D. van der y Long, A. (eds.). (1994). **Born from within. Practice and Perspectives of Endogenous Rural Development.** Van Gorcum, Assem.

Ploeg, J.D., Long, N. y Banks, J. (2002): **Living Countrysides. Rural development processes in Europe: the state of art**. Elsevier bedrejsinformatie bv. Doetinchem, Holanda.

Pons, J. C. y Sivardière, P. (2002): **Manual de capacitación. Certificación de calidad de los alimentos orientada a sellos de atributos de valor en países de América Latina.** ECOCERT y FAO, Francia y Chile. 2002.

Pretty, J.N. (1995): "Participatory learning for sustainable agriculture". En **World development**, v. 23; n. 8; pp. 1247 – 1263.

Raynolds, L.T. (2004): "The globalization of organic agro-food networks". En **World Development**, v.32, n.5.

Redclift, M. (1987): **Sustainable development: exploring the contradictions**. London: Routledge.

Redclift, M. (1993): "La función de la tecnología agraria en el desarrollo sostenible". En Lowe, P.; Marsden, T.; Whatmore, S. (coords) (1993): pp. 143 - 178

Redclift, M. y Woodgate, G. (eds) (1997): **The International Handbook of Environmental Sociology.** Edward Elgar. Cheltenham, Reino Unido – Northampton, MA – Estados Unidos. Versión en castellano: Redclift, M. y Woodgate, G. (coord) (2002): **Sociología del medio ambiente. Una perspectiva internacional**. Editorial Mc Graw Hill. Madrid.

Rede Ecovida de Agroecologia (2002): **A Legalização da Agricultura Orgânica e da Certificação de Produtos Orgânicos no Brasil: o posicionamento da Rede Ecovida de Agroecologia**. Mimeo, p. 4.

Rede Ecovida de Agroecologia (2004): **Caderno de Formação: certificação participativa de produtos ecológicos**. Florianópolis.

Rede Ecovida de Agroecologia (2007): **Uma identidade que se constrói em rede. Cuaderno de formación 01**. Paraná, julio.

Reijntjes, C.; Havercort, B. y Waters-Bayer, A. (1995): **Cultivando para el futuro. Introducción a la Agricultura Sustentable de Bajos Insumos Externos**. Ed. Nordan – Comunidad. Montevideo.

Remmers, G.G.A. (1993): "Agricultura tradicional y agricultura ecológica: vecinos distantes". En **Agricultura y Sociedad**, nº 66; pp. 201 – 220.

Remmers, G.G.A. (1998): **Con cojones y maestría. Un estudio sociológico-agronómico acerca del desarrollo rural endógeno y procesos de localización en la Sierra de la Contraviesa (España).** Tesis doctoral de la Agricultural University Wageningen. Amsterdan: Thela Publishers.

Riechmann, J. y Fernández Buey, F. (1994): **Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales**. Serie Estado y Sociedad. Editorial Paidós. Barcelona – Buenos Aires – México.

Roberts, R.M. (1991): **Serendipia. Descubrimientos accidentales en la ciencia**. Alianza Editorial, Madrid.

Rosa, M. y Encina, J. (2003): "Haciendo metodología al andar". En Encina, J., Ávila, M.A., Fernández, M. y Rosa, M. (coords.) (2003): pp. 89 – 116.

Rostow, W. (1966): **Etapas del desarrollo económico**. Zahar Editores. Rio de Janeiro, Brasil.

Roure, K. (coord.) (2007): **Les Systèmes de Garantie Participatifs, pour l'agriculture biologique associative et solidaire**. Nature & Progrès Editions. Uzès, Francia.

Rundgren, G. (2007): **Systèmes de Garantie Participatifs en Afrique de l'Est**. Estudio realizado en colaboración con NOGAMU, KOAN y TOAM. http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/PGS_East_Africa_Report_FRENCH.pdf (fecha de consulta: 7 de octubre de 2008)

Ruesga Navarro, A. (2002): "Caracterización de la agricultura sostenible" en Varios (2002): **La práctica de la Agricultura y ganadería ecológicas**. CAAE.

Sachs, W. (ed.) (1995): **The Development Dictionary**. Witwatersrand University Press, Johannesburg.

Salazar, M. C. (ed.) (1992): **La investigación-acción participativa. Inicios y desarrollos**. Madrid: Editorial Popular.

Sampeu, D. (2001): "El papel de la Agricultura Ecológica en la sociedad actual". En Labrador, J. y Altieri, M.A. (coords) (2001): pp. 521 – 540.

Santos, B. de S. (2000): **A Crítica da Razão Indolente: contra o desperdício da experiência**. Editora Cortez. San Pablo. Brasil.

Santos, L.C.R. (2002): **Rede Ecovida de Agroecologia e Certificaçao Participativa em rede: Una Experiencia de Organizaçao e Certificaçao Alternativa junto à Agricultura Ecológica Familiar no Sul do Brasil**. Mimeo.

Santos, L.C.R. y Oliveira, D. (coords) (2004): **Caderno de Normas para Certificação Participativa de Produtos Ecológicos**. Rede Ecovida de Agroecologia y Certificación Participativa. Florianópolis.

Sarria Icaza, A.M. (2002): "Economia SOLIDÁRIA, prácticas cooperativas y desarrollo local em el sur de Brasil". En **CIRIEC** – España, nº 43, pp 41 – 59. Noviembre.

Schumacher, R. (1973): **Small is beautiful**. Ed. Abacus, Londres.

Selener, D. (1997): **Participatory action research and social change**. Cornell University Participatory Action Research Network. Nueva York.

Sevilla Guzmán, E. (1995) "Teoría Social y Sociología de la Agricultura". En Pérez Rubio, J.A. (1995): prólogo.

Sevilla Guzmán, E. (2006a): "Agroecología y agricultura ecológica: hacia una "re" construcción de la soberanía alimentaria". En **Revista Agroecología**, nº 1. Universidad de Murcia; pp. 7-18.

Sevilla, E. (2006b): **De la Sociología Rural a la Agroecología**. Colección Perspectivas Agroecológicas, 1. Ed. Icaria. Barcelona, España.

Sevilla Guzmán, E. y Ramos Vadillo, M. (eds) (1991): "Designing methods for endogenous local development in Andalusia. Some theoretical and methodological considerations from an agroecological perspective". En Haan, H. de y Ploeg, J.D. van der (eds) (1991): 65 – 74.

Sevilla Guzmán, E. y González de Molina, M. (eds) (1993): **Ecología, campesinado e historia**. Ed. La Piqueta; Madrid. 1993.

Sevilla Guzmán, E. y equipo del ISEC (1994): "The role of Farming Systems Research/Extension in guiding low inputs systems towards susteainability". En Dent, J.B. y McGregor, M.J. (eds) (1994): pp. 305 – 319.

Sevilla Guzmán, E. y Woodate, G. (1997): "Sustainable rural development: from industrial agriculture to agroecology". En Redclift, M. Y Woodgate, G. (1997): pp- 83 - 100. Versión en castellano: Sevilla Guzmán, E. y Woodate, G. (2002): "Desarrollo rural sostenible: de la agricultura industrial a la agroecología". En Redclift, M. Y Woodgate, G. (2002): pp. 77 – 96.

Sevilla Guzmán, E. y Ottmann, G. (2001): "Ecoagricultura, Agroecología y desarrollo rural sustentable: pensando en el caso argentino". En Facciano, L.A. (ed.) (2001).

Shiva, V. (1992): "Resources". En Sachs, W. (ed.) (1992): pp. 206 – 218.

Simón Fernández, X. et al. (1997): "Novas formas de medir a eficiencia. Balances enerxéticos e tempos de reproducción". En **VVAA.**

Sorokin Pitirim, A. (1966): **Sociedad, cultura y personalidad**. Ed. Aguilar. Madrid.

Stern, P. (1997): "Toward a Working Definition of Consumption for Environmental Research and Policy". En Stern, P., Dietz, T., Ruttan, V., Socolow, R. y Sweeney, J. (1997): pp. 12 – 25.

Stern, P., Dietz, T., Ruttan, V., Socolow, R. y Sweeney, J. (1997): **Enviromentally significant Consumption. Research directions**. National Academy Press, Washington D.C. (http://books.nap.edu/openbook.php?record_id=5430&page=R1)

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2002): **Estadísticas 2001. Agricultura Ecológica. España**. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2001.pdf (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008)

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2003): **Estadísticas 2002. Agricultura Ecológica. España**. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2002.pdf (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008)

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2004): **Estadísticas 2003. Agricultura Ecológica. España**. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2003.pdf (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008)

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2005): **Estadísticas 2004. Agricultura Ecológica. España**. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2004.pdf (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008)

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria (2006): **Estadísticas 2005. Agricultura Ecológica. España**. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
http://www.mapa.es/alimentacion/pags/ecologica/pdf/2005.pdf (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008)

Sylvander, B. (1997): « Le rôle de la certification dans les changements de régimes de coordination : l'Agriculture Biologique, du réseau à l'industrie ». En **Revue d'Économie Industrielle**, nº 80 ; pp 47 – 66.

Sylvander, B. (2004): **Crédibilité et flexibilité de la certification dans un contexte de globalisation et de crises alimentaires**: **le cas de l`agriculture biologique**. INRA, Lê Mans.

Tamames, R. (1995): **Ecología y desarrollo sostenible: la polémica sobre los límites del crecimiento**. Madrid: Alianza editorial.

Toledo, V.M. (1992): "The ecological rationality of peasant production". En Altieri, M.A. y Hecht, S. (1992).

Toledo, V.M. (1993): "Modernidad y ecología, la nueva crisis planetaria". En: **Ecología Política**, nº 3.

Toledo, V.M. (2000): **La paz en Chiapas**. Ediciones Quito Sol. Mexico.

Toledo, V.M. y González de Molina, M. (2007): "El metabolismo social. Las relaciones entre la sociedad y la naturaleza". En Garrido Peña, F.; González de Molina, M.; Serrano, J.L. y Solana, J.L. (eds) (2007): pp. 85 - 112.

Toledo, V.M. y Barreda-Bassols, N. (2008): **La memoria biocultural. La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales**. Editorial Icaria, Colección Perspectivas Agroecológicas, 3. Barcelona, España.

Trujillo Ferrari, A. (1983): **Fundamentos de Sociologia**. Sao Paulo: MacGraw-Hill do Brasil.

Valdez, H. (Coord.) (2002): **Buscando la equivalencia entre comercio justo y orgánico.** Memoria del encuentro realizado en marzo de 2002; MAELA, Cedeco, AUNA, ACTAF, ANAP; Cuba.

Varios (1996): **Actas del II Congreso de la SEAE**. Pamplona, Universidad Pública de Navarra;

Varios (2002): **La agricultura y ganadería ecológicas en un marco de diversificación y desarrollo solidario.** Tomo I y II. Actas del V congreso de la SEAE. I Congreso Iberoamericano de Agroecología. Gijón, 16 – 21 septiembre.

Varios (2005a): **Diagnóstico Ambiental. Agenda 21 Serranía de Ronda**. CEDER Serranía de Ronda. Málaga.

Villasante, T.R. (1986): "Redes comunitarias y nuevas cosmologías". En **Alfoz**, nº 29. Madrid.

Villasante, T.R. (1999): "De los movimientos sociales a las metodologías participativas". En Delgado, J.M. y Gutiérrez, J. (1999): pp. 399 – 426.

Villasante, T.R. (2001): "Procesos de creatividad social". En Rodríguez Villasante, T. et al. (coord.) (2001).

Villasante, T.R. (2002): **Sujetos en movimiento. Redes y procesos creativos en la complejidad social**. Ed. Nordan Comunidad, Montevideo. 2002

Villasante, T.R. (2006): **Desbordes creativos. Estilos y estrategias para la transformación social**. Los libros de la Catarata. Madrid.

Villasante, T.R., Montañés, M. y Martín, P. (Coords.) (2000a): **La investigación social participativa**. Construyendo ciudadanía I. El Viejo Topo. Madrid.

Villasante, T.R., Montañés, M. y Martín, P. (Coords.) (2000b): **Prácticas locales de creatividad social**. Construyendo ciudadanía II. El Viejo Topo. Segunda edición. Madrid.

VVAA (1997): **Primeiras Xornadas de Agroecoloxía**. Edicions Fouce. Lugo.

Weber, Max (1964): **The Theory of social and economic organization.** New York, Free Press.

Wilkinson, J. (1997): "A new paradigm for economic analysis". En **Economy and Society**, v.26, n.3, p. 305-339.

Xolocotzi, E. H. (1985): **Xolocotzia, obras de Efraím Hernández Xolocotzi. Tomo I y II.** Universidad autónoma de Chapingo. México.

Yapa, L. (2003): Déconstruire le développement. En Pérez-Vitoria, S. (coord.) (2003) : pp.111 – 124.

Zamocs, L. (1992): "Campesinos y sociólogos: reflexiones sobre dos experiencias de investigación activa en Colombia". En Salazar, M.C. (1992): pp. 85 – 134.

Zolin, R. y Hinds, P.J. (2002): **Trust in context: The Development of Interpersonal Trust in Geographically Distributed Work Teams**. Stanford University, Center for Integrated Facility Engineering. Working Paper nº 66.

Recursos electrónicos

- Sobre la International Standards Organisation: http://www.consumersinternational.org/shared_asp_files/GFSR.asp?NodeID=96545 (fecha de consulta: 5 de enero 2008)

- Estadísticas sobre el sector ecológico en la Unión Europea: http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/qual/organic/facts_en.pdf (fecha de consulta: 27 marzo 2006)

- Estadísticas sobre el sector ecológico en Andalucía: http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/PDF_Directos/balance_agricultura_ecologica_2005.pdf (fecha de consulta: 27 marzo 2006)

- Seminario sobre experiencias de Garantía Participativa en el mundo, celebrado en Torres (Brasil) en 2004:

http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/InternationalWorkshopOnAlternativeCertification_Torres_es.pdf (fecha de consulta: 16 de septiembre de 2008)

- Toda la documentación sobre Sistemas Participativos de Garantía en IFOAM: http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs.html (fecha de consulta: 7 de octubre de 2008)

- Proyecto de la FAO de 2004: "*Apoyo al desarrollo de la agricultura orgánica y fortalecimiento institucional de la certificación orgánica*": http://www.fao.org/Ag/AGS/subjects/es/agribusiness/organic.html (fecha de consulta: 7 de octubre de 2008)